**¿EL MÉTODO APAC COMO ALTERNATIVA DE RESOCIALIZACIÓN DE LA
PERSONA CONDENADA ES EFICAZ? ESTUDIO DE CASO: COMPLEJO
PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL**

CARLOS ARTURO RUIZ

Tesis doctoral para optar al título de Doctor en Derecho

Asesor

ALEJANDRO GÓMEZ JARAMILLO

Doctor en Sociología

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE DERECHO

MEDELLÍN

2016

**¿EL MÉTODO APAC COMO ALTERNATIVA DE RESOCIALIZACIÓN DE LA
PERSONA CONDENADA ES EFICAZ? ESTUDIO DE CASO: COMPLEJO
PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL**

CARLOS ARTURO RUIZ

Tesis doctoral para optar al título de Doctor en Derecho

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE DERECHO

MEDELLÍN

2016

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO	9
INTRODUCCIÓN	10
METODOLOGÍA	30
1. Acopio y ordenamiento de la información.....	31
1.Estrategias de recolección de la información.....	39
2.Análisis de la información.....	50
3.Hallazgos y resultados	55
4. Presupuestos éticos.....	60
 PRIMERA PARTE	 61
EL ACTUARIALISMO Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA PENITENCIARIO.....	61
1.Introducción	63
2.Antecedentes del actuarialismo	65
3.Contexto social y político del actuarialismo:.....	74
4.Actuarialismo y su dependencia con el modelo económico neoliberal.	83
4.1. Etapa del Estado bienestar o fordismo	85
4.2. Estado posfordista.....	87
5. Características político criminales del actuarialismo.....	97
6. Impacto del actuarialismo en el enfoque de la pena y en el derecho penitenciario. ...	112
 SEGUNDA PARTE.....	 147
TRATAMIENTO PENITENCIARIO. GENEALOGÍA DE LA RESOCIALIZACIÓN...	147
1. Introducción	149
2. Origen de la resocialización.....	152

2.1. Descripción sociológico funcional.....	152
2.2. Tipos de socialización	153
a. Socialización primaria	154
b. Socialización secundaria.....	155
c. Socialización terciaria.....	156
2.3. La descripción del materialismo hegeliano.....	157
2.4. La descripción de Michel Foucault.....	162
2.5. Correlacionismo	165
3. Naturaleza jurídica de la resocialización.....	171
3.1. Las teorías absolutas de la pena.....	172
a. Bases ideológicas.....	173
b. Fundamentos de la retribución penal.....	176
3.2. Teorías relativas de la pena	148
4. Lugar de realización del tratamiento penitenciario: la prisión como institución totalitaria	194
5. Tratamiento penitenciario	198
5.1. Concepto.....	200
5.2. Elementos del tratamiento penitenciario	206
6. Tratamiento penitenciario: fundamento.	213
6.1. Concepto de peligrosidad	213
6.2. Legitimación del orden social constituido.....	223
 TERCERA PARTE.....	 229
SISTEMA PROGRESIVO PENITENCIARIO COLOMBIANO EN ALIANZA CON EL MÉTODO APAC.....	229
1. Introducción	231
2. Bases sociológicas del hecho religioso y su influencia en las normas penitenciarias.	231
a. Elementos básicos que conforman el fenómeno religioso.....	233

b. Concepto y características.	238
3. Referencias históricas del sistema progresivo penitenciario.....	245
a. Sistema penitenciario celular	245
b. Sistema penitenciario auburniano (sistema mixto o del silencio)	252
4. Sistema progresivo penitenciario colombiano.....	261
a. Antecedentes	261
b. Características.....	262
c. Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET).....	265
d. Beneficios administrativos	267
e. La Red Social de Apoyo	271
5. Caracterización de la alianza entre la Dirección Operativa Regional Noroeste del INPEC y la Confraternidad Carcelaria de Colombia para la implementación del método APAC en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Pedregal (COPED)	273
a. COPED	275
b. Confraternidad Carcelaria de Colombia	278
c. APAC.....	283
CUARTA PARTE	300
¿EL MÉTODO APAC COMO ALTERNATIVA DE RESOCIALIZACIÓN DE LA PERSONA CONDENADA ES EFICAZ? ESTUDIO DE CASO: COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL (COPED)	300
1. Introducción	302
2. Programa Asociación y Protección de Asistencia al Condenado (APAC)	312
a. APAC.....	312
3. Resocialización.....	346
a. Sentido	347
b. Tratamiento penitenciario en APAC.....	350
4. Autoidentidad	359
a. Construcción de la identidad.....	359

CONCLUSIONES	364
a. A nivel institucional	366
b. A nivel del método Asociación y Protección de Asistencia al Condenado (APAC)..	368
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	377

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

Tabla 1. Diario de campo realizado por el investigador	38-39
Tabla 2. Diario de campo realizado por las recuperandas	40
Tabla 3. Formato de entrevista estructurada	41-44
Tabla 4. Cuestionarios, talleres, diagnósticos rápidos de participación y grupo focal	44-45
Tabla 5. Evaluación. Tema: libertad religiosa	45
Tabla 6. Evaluación. Tema: derecho al libre desarrollo de la personalidad	45
Tabla 7. Actividad. Tema: resocialización	45
Tabla 8. Actividad. Tema: el trabajo	46
Tabla 9. Tabla de códigos ATLAS TI	48-51
Tabla 10. Ítems de la PCL-R. Solís y Ruiz Ortega, 2008	116
Tabla 11. Factores de la escala Riscanvi-C Grupo de Estudios Avanzados Sobre Violencia de la Universidad de Barcelona, Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat catalana y la empresa Better Consultants, 2007	118
Tabla 12. Madres con hijos mayores-menores de edad. 2012	284
Tabla 13. 19 mujeres entre 20-40 años de edad suman 28 hijos	284
Tabla 14. Nivel de educación	285
Tabla 15. Oficio o labor desempeñada	285
Tabla 16. Tipología de delito	286
Figura 1. Código APAC	53
Figura 2. Código de resocialización	54
Figura 3. Código de autoidentidad	54
Figura 4. Código de institucionalidad	54

Figura 5. Código de espiritualidad	55
Figura 6. Código de educación	55
Figura 7. Código de trabajo	57
Figura 8. Teoría de la actividad rutinaria y el triángulo básico del delito. 1998 por Felson	98
Figura 9. Logo de la Confraternidad Carcelaria de Colombia	241
Figura 10. Logo de la Confraternidad Carcelaria de Colombia	242
Figura 11. Componentes del APAC. La Confraternidad Carcelaria de Colombia utilizó esta presentación en todas las capacitaciones relacionadas sobre el método APAC	247
Figura 12. Dibujo realizado por recuperanda Claudia Reina. 2012	259
Figura 13. Relato de recuperandas. 2013	273
Figura 14. Relato de recuperandas. 2012	274
Figura 15. Relato de recuperandas. 2012	296
Fotografía 1. Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín - Pedregal (Antioquia). En INPEC (s.f).	235
Fotografía 2 Patio de APAC.2012	264
Fotografía 3 Recuperandas y voluntarios. 2012	264
Fotografía 4. Recuperanda.2012	267
Fotografía 5. Muestra de manualidades. 2013	277
Fotografía 6. Estructura mínima de mujeres COPED. 2012	282
Fotografía 7. Laborterapia. 2013	303
Fotografía 8. Artes y oficios.	304

AGRADECIMIENTO

- A mi esposa e hijas, cuya presencia alienta mi ser. Sin ellas nada de esto sería posible.
- A mi director de tesis, Alejandro Gómez Jaramillo, por haberme acompañado genuinamente durante el proceso.
- A Lacides Hernández, presidente de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, por haber permitido la realización del trabajo investigativo en APAC.
- Al Complejo Penitenciario y Carcelario el Pedregal por darme la oportunidad de realizar el proyecto.
- A todas las recuperandas, voluntarios y coordinadoras de APAC sin cuya colaboración no hubiera sido posible realizar el trabajo de campo.
- A las personas que me facilitaron material, contactos y asesorías para el desarrollo del marco teórico y de campo. Entre ellas, a Juan David Posada, Carlos Eduardo Gil, Adriana María Ruiz, Cesar Osorio y a Alejandro Forero.
- A mis estudiantes, por confiarme sus procesos de formación. De forma especial a Linda Alexandra Ruiz.

INTRODUCCIÓN

El sistema penal opera en tres momentos: creación de la norma, persecución y cumplimiento de la ejecución penal. En esta última fase, puede ocurrir que la persona condenada haya sido recluida en una penitenciaría, puesto que ha sido objeto de procesamiento y el poder judicial ha decidido que es responsable de la conducta punible que le atribuye el ente acusador. La privación de la libertad tiene el propósito de resocializar a esta persona condenada, sin deshumanizarla y empoderándola como sujeto político. Sin embargo, en Colombia las prisiones o cárceles se han convertido en un problema de orden público. La Corte Constitucional colombiana en reiterada jurisprudencia las ha declarado como lugares en estado permanente de inconstitucionalidad, tal y como lo expresó de forma contundente en varias de sentencias, por ejemplo, la T-153/98 cuyo magistrado ponente fue Eduardo Cifuentes Muñoz:

... Las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional (Corte Constitucional de la República de Colombia, 1998). Subrayado de cita.

Los establecimientos penitenciarios y carcelarios son sitios donde se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los y las privadas de libertad, y continúa el texto de la sentencia:

... y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia, etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes.

En las penitenciarías y cárceles se encuentra una prolongada y permanente carencia de servicios, a tal punto ha llegado esta problemática, que los jueces por vía de tutela interpuesta por los privados de libertad, lo han entendido como una vulneración sistemática de los derechos humanos y han ordenado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no recibir más personas en la Cárcel Nacional Bellavista de Medellín y en el Complejo Penitenciario y Carcelario Pedregal (COPED) mientras se crean nuevas prisiones o se adecuan instalaciones físicas ya existentes, buscando de esta manera mitigar los efectos negativos en la personalidad del recluso (a) evidenciada en la falta de acceso en los servicios básicos de salud de condenados y personas imputadas con las implicaciones que ello genera en el personal de Vigilancia y Custodia. Así lo expresó, por ejemplo, la Sala Sexta del Tribunal Superior de Medellín en el radicado 050012205000- 201300130:

A juicio de esta Sala de decisión, las razones que en su momento esgrimió la Corte para declarar el estado de cosas inconstitucional ... para la población reclusa no solo subsisten 14 años después, sino que incluso se han agravado: i) La inmensa mayoría de quienes ocupan las cárceles son personas de muy escasos recursos, que carecen de toda fuente de ingresos; ii) Por las condiciones de hacinamiento y por las deficiencias en la prestación de los servicios de higiene

dentro de las cárceles, los reclusos están propensos a adquirir y transmitir enfermedades de muy distinto origen y de diversa gravedad (Tribunal Superior de Medellín, 2013).

Sobre estos hechos, la Confraternidad Carcelaria de Colombia a partir del apoyo que realiza semanalmente al programa de inducción y de asistencia espiritual que se adelanta en los patios de la estructura de mujeres del COPED, ha identificado que estas personas necesitan fortalecer y reafirmar la identidad consigo mismas, con el prójimo y con el sistema; construir o replantear su proyecto de vida; tener la opción de ser actores en su contexto sociopolítico; ingresar al sistema de educación formal e informal; adquirir competencias, habilidades, destrezas y labores productivas; salir de un entorno criminal propicio para llevar a cabo el delito; reconocer las normas sociales y jurídicas que permiten mantener la convivencia; y romper con la cultura transgresora que se vive al interior de los patios.

... las circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario representa no solo un delicado asunto de orden público como se percibe actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida. Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos del INPEC o del Ministerio de Justicia. Por eso, la Corte tiene que pasar a requerir a distintas ramas y órganos del Poder público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución de este problema (Confraternidad Carcelaria de Colombia, 2011)

De igual forma, en este contexto de hacinamiento se tiene deficiencia cuando se prestan los servicios asistenciales como salud, alimento, actividades educativas, recreación y deporte. Aun

más, por problemas presupuestales no se cuenta en las penitenciarías y cárceles con los profesionales suficientes encargados del tratamiento del privado (a) de libertad en condición de condena.

En relación con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T- 388/13 cuya magistrada ponente fue María Victoria Calle Correa recordó que la crisis de las penitenciarías y cárceles es de naturaleza estructural, por ende, los planes de mejoramiento estipulados en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para dar fin, entre otros, al hacinamiento han sido infructuosos. Debido a ello, el alto tribunal propone a los entes gubernamentales atender esta problemática adecuando la política criminal y en concreto la penitenciaria y carcelaria a la normativa de los derechos humanos de los reclusos e impedir que se mantenga al interior de la prisión hechos permanentes de inconstitucionalidad, así lo expresó:

El sistema penitenciario y carcelario es tan solo la tercera fase de la política de criminalización (la ejecución de las penas impuestas judicialmente o el control de los sindicados que van a ser enjuiciados), que depende en buena medida de sus fases de criminalización previa (fases primaria y secundaria; esto es, la definición de la política criminal y su implementación judicial y procesal). El problema que la Sala constata es el uso excesivo y sobredimensionado de la política criminal, que impone costos sociales y económicos irrazonables y desproporcionados sobre las personas, sin que con ello se llegue a alcanzar los logros y cometidos propuestos (Corte Constitucional de la República de Colombia, 2013).

Por ende, el uso del Estado de la privación de la libertad debe ser, de una parte, el último recurso que se emplee en contra de una persona imputada y solo emplearlo en los casos

estrictamente necesarios. De otra parte, en la fase de ejecución de la pena debe ser existente el proceso de resocialización, en esta línea continúa el contenido de la sentencia:

La política criminal del estado penitenciario debe asegurar que en su tercera fase (la penitenciaria y carcelaria) la resocialización sea una realidad. Tomar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el goce efectivo de toda persona privada de la libertad, su derecho a poder realizar actividades que aseguren su proceso de resocialización y le den la posibilidad real de vivir en una sociedad libre y democrática. Se deben asegurar el acceso a programas de (i) educación, (ii) trabajo y (iii) recreación, no como estrategias para mantener ocupadas a las personas privadas de la libertad, sino como mecanismos integrales de un plan de resocialización, debidamente estructurado. Los planes y programas que se diseñe (sic), desarrolle (sic) e implemente (sic) para asegurar los derechos a la educación, al trabajo y a la recreación de las personas privadas de la libertad, debe cumplir con las exigencias mínimas que el orden constitucional vigente demanda de toda política pública de la cual dependa el goce efectivo de derechos fundamentales. (Ibíd).

Como resultado de lo anterior, se puede concluir que las situaciones de vida en los centros penitenciarios y carcelarios no permiten a la entidad cumplir con la tarea de tratamiento en las condiciones ideales u óptimas tal y como está consagrada en la normatividad vigente; se están reforzando los factores de riesgo para la desocialización del privado de libertad puesto que no es posible ofrecerle los medios para la resocialización y reinserción social.

Con respecto a este hecho la Corte Constitucional nuevamente se va a pronunciar en sentencia T-762/15, cuya magistrada ponente fue Gloria Stella Ortiz Delgado, sobre la continuidad del estado de cosas inconstitucionales, sin embargo, hay que hacer notar en esta providencia el

reconocimiento hecho por las instituciones públicas involucradas de la imposibilidad de adoptar una respuesta gubernamental que ofrezca cese de la violación de los derechos humanos de los prisioneros. Afirman que es imposible solucionar los problemas estructurales del sistema penitenciario y carcelario colombiano. Sobre este punto, la Corte señala que ello obedece a la falta de coherencia en el manejo de la política criminal en donde las situaciones que se presentan en la fase de ejecución de la pena y el cumplimiento de la medida de aseguramiento son su consecuencia, es decir, son su síntoma. Entre estos se encuentran:

...el hacinamiento y las otras causas de violación masiva de derechos, la reclusión conjunta entre condenados y sindicados, las fallas en la prestación de los servicios de salud en el sector penitenciario y carcelario, la precariedad de la alimentación suministrada y las condiciones inhumanas de salubridad e higiene de los establecimientos de reclusión, entre otras (Corte Constitucional de la República de Colombia, 2015).

Bajo esta realidad la política criminal ha hecho a un lado el fin de la resocialización de la persona condenada. Aseveró el máximo tribunal en esta sentencia:

...es importante recalcar que la política criminal colombiana perdió de vista el fin resocializador de la pena privativa de la libertad, en tanto, el sistema previsto para su ejecución está en una profunda crisis humanitaria. Por ello es necesario que todas las entidades estatales involucradas retomen la resocialización como su enfoque principal.

Para contrarrestar la circunstancia señalada, la Dirección Operativa Regional Noroeste del INPEC ha firmado un convenio con la Confraternidad Carcelaria de Colombia que tiene como

objeto desarrollar la metodología Asociación para la Protección y Asistencia a los Condenados (APAC) que consiste en un modelo de cambio holísticoespiritual, de incremento de los valores humanos (convenio No 003 del 17 de noviembre del 2011) con el fin de ofrecerle a las personas privadas de libertad en estado de condenadas tanto las condiciones de tratamiento como un hábitat que le permita a estas personas, una vez sean libres, incorporarse de manera positiva al contexto social y de alguna manera neutralizar los efectos del fenómeno de la *prisionalización*.

En su más estricto sentido, dicha metodología pretende ofrecer a personas privadas de libertad en estado de condenadas las condiciones que les permitan restaurarse integralmente logrando de esta manera proteger al sistema y promover la justicia social. Basta observar que ha sido avalada y promovida con éxito en prisiones de Brasil, Chile y Costa Rica, entre otros países. Dicho de otra forma, el programa APAC consiste en dar a los reclusos elementos que les posibiliten recuperarse por completo, mediante una autovaloración de la propia esencia del ser humano que les deje a los sujetos ejecutar y desarrollar sus capacidades. Se puede, en suma, señalar que es un método cuya meta es el cambio de los convictos en miembros productivos de sus familias y comunidades, con un concepto holístico que procura restaurar al individuo, en su relación con su hogar, el entorno y Dios.

El método APAC se ha implementado en el COPED, ubicado en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín, Colombia. Este pretende recuperar y reintegrar a la sociedad al individuo condenado bajo el presupuesto filosófico de “*matar al criminal y salvar al hombre*” (Ottoboni, 2002: 34). De otro lado, pretende lograr su cometido mediante la creación de una atmósfera de cuidado (asistencia médica, jurídica, social, educativa, espiritual y laboral) que le permita a la

“recuperanda” (persona privada de la libertad) alcanzar a desarrollar la conciencia de su innato valor y ayudarla a ejercitar y desarrollar todas sus capacidades, para reintegrarla a su medioambiente subcultural en condiciones que le posibiliten convivir de forma armoniosa y pacífica.

Para lograr este cometido, el APAC está conformado por doce elementos que lo fundamentan: participación de la comunidad, ayuda mutua, trabajo, religión, asistencia jurídica, asistencia a la salud, valorización humana, familia, voluntarios y su formación, centros de reintegración social, mérito y jornada de liberación con Cristo. Desde esta perspectiva, la finalidad del método es aprovechar la cárcel como espacio destinado al cumplimiento de la pena para intervenir sobre la recuperanda ya que esta es una persona concebida como un ser disfuncional por su impotencia para *“amar y ser amado”* debido a su origen familiar y a su proceso de socialización, entonces el objetivo de APAC es volverlo un individuo apto para vivir en sociedad comunidad. Una experiencia clave de esta metodología consiste en que está funcionando desde el año 2012 hasta hoy.

Atentos a esta práctica, esta tesis doctoral pretende desde sus inicios describir las dinámicas de su funcionamiento, con el ánimo de responder a la pregunta de si ¿es eficaz el método APAC como programa de resocialización en la estructura de mujeres del COPED? Esto con el ánimo de lograr una posible puesta en marcha de este en los demás establecimientos penitenciarios, sin desatender por supuesto las dinámicas de cada zona, sus culturas y demás diferencias sociales. Podría afirmarse que este interrogante obliga a indagar y a describir el tratamiento en las prisiones de Colombia con mayor acuidad para contrastar la manera en que esta metodología

propone un esquema distinto y en algún sentido más pertinente al proceso. Esto implica el estudio y análisis del APAC a partir del *penitenciarismo* contemporáneo con una mirada crítica.

Las investigaciones realizadas sobre esta materia incluyen temas relacionados con políticas y manejo penitenciario, derechos humanos en privados de libertad, empleo, religión y cárcel, sin embargo siguen siendo pocos los trabajos que den cuenta de las prácticas de castigo y del mundo del recluso, lo cual justifica esta tesis y otras que puedan presentarse sobre la materia. Sin embargo, es importante reconocer la literatura existente, antes de la construcción de la presente investigación, dado que allí se evidencian importantes lecturas sobre la realidad penitenciaria y los procesos de resocialización, y se aportan posibles soluciones para mejorar el contexto penitenciario. Sobre la base de estos aportes se ha desarrollado esta investigación, que en todo caso pertenecen al contexto brasileño, sin que en el colombiano existan aun abundantes y rigurosas producciones en el campo, razón por la cual, es lógico afirmar que el tema hasta ahora no ha sido agotado y que hay aristas sobre las cuales se ha desarrollado este trabajo que en todo caso fueron poco exploradas en las anteriores investigaciones. Es importante poner en evidencia las siguientes investigaciones:

A continuación es importante referirse a los antecedentes de este estudio; los cuales están reseñados en informes previos realizados sobre el método APAC en el contexto brasileiro.

- Martineli, (2004) en *¿Cómo es posible que haya una unidad penitenciaria que, frente al cuadro desanimador del sistema penitenciario, pueda conseguir unanimidad en el reconocimiento de su éxito?* concluye que APAC se caracteriza por el carácter normativo

del acto comunitario, la barrera de la subcultura carcelaria, descenso de la violencia física y debilitamiento de los agentes del Estado, diferenciándose así de la prisión común.

- De Vianna Vaz, (2005) en *La piedra y la ley* concluye que APAC consigue llevar a cabo una efectiva filosofía de recuperación del condenado en donde su arquitectura encaja con el ideal político de libertad y refuerza las ideas de un lugar público y de bien común, donde se da el intercambio de palabras y acciones para ir hacia un sistema más justo y sostenible. Señala el autor una correspondencia entre éthos (ética) y ley. Cuanto más desarrollada es la ética primera de una cultura menor, es la necesidad de las segundas que regulen la convivencia social. Considera a las paredes y a las normas como factores limitantes, en cambio, al éthos favorecedor sin duda de espacio de autonomía.
- Da Silva, (2007) *Análisis del perfil de los crímenes cometidos por los presos que cumplen pena en APAC* se planteó como objetivo averiguar si existía un perfil o incluso uno de cumplimiento de penas para los presos que están en el sistema APAC. Su resultado fue que este método no tiene un criterio definido para aceptar a un sujeto condenado en su metodología resocializadora. El único requisito para que un recluso ingrese al programa APAC es su el interés en pertenecer a este.
- Lira Júnior, (2009). “*Matar alCriminal y salvar al hombre*” – *el papel de la religión en la recuperación del recluso (un estudio del caso APAC – Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados – en Itaúna MG)*. El objetivo de esta tesis era analizar la relación correspondencia religión/ cárcel en cuanto a su aporte a la reforma del

condenado. Se concluyó que es perfectamente posible recuperar a cualquier individuo desviado mediante la creencia en un ser superior, específicamente desde el cristianismo.

- Marqués, (2010). *Derechos humanos y cuidado de sí: una conversación sobre el método*. El resultado al que llega el autor fue que la cárcel tiene un poder disciplinario y de control sobre los sujetos en sus actitudes y actos e influye directamente en la producción de subjetividades. Indica además que los derechos humanos en el contexto de la penitenciaría son cruciales para el cambio de los sujetos y permiten cuidar no solo el yo propio sino el de otros como verdaderos individuos éticos.
- Ordóñez, (2011). *¿Es posible humanizar una vida detrás de las rejas? Una etnografía del método de gestión carcelaria APAC*. Una de las conclusiones de la tesis doctoral fue: las políticas criminales o de seguridad públicas realizadas bajo los moldes de APAC, se pueden interpretar como novedosas, en pleno proceso de desarrollo, visibilidad y reconocimiento. Sin embargo, también pueden ser entendidas como una fachada humanizadora en donde el Estado, por medio de adquisiciones, y con el nombre común de una ONG que actúe en su lugar, estaría sustituyendo con una mano lo que el mismo hace con la otra. Es decir, puede parecer que el Gobierno priva de caracteres propios del hombre a la vida en la cárcel mediante el sistema convencional, pero la rehumaniza delegando poder a favor de las ONG. Así, APAC puede ser pensado como una estrategia del mandato gubernativo, que participa en una lógica basada en el neoliberalismo, guiada por medio del prisma de freno productivista de los gastos estatales y la desinversión social, como costoso e ineficiente.

- Gerçossimo, (2012). *La voz de los silenciados: análisis de la identidad de los recuperandos de APAC*. El autor concluye que los recuperandos se asumen como personas responsables de sus propios actos y de sus consecuencias. Además representan APAC como que los hace mejor personas.

Las conclusiones sustanciales de estos trabajos aluden a la necesidad de involucrar a las organizaciones de la comunidad y a los ciudadanos en las actividades de intervención penitenciaria con el fin de mejorar las condiciones deshumanizantes y de abandono que presentan en la actualidad los centros carcelarios, desde el rescate del valor de los reclusos. Este trabajo, a partir de la experiencia relativa de hallazgos y resultados, avanza en rescatar la importancia y papel que desempeña la religión en estos procesos e invita a los estudiosos y a las universidades a que renuncien por un momento a los prejuicios que existen alrededor del fenómeno religioso para examinar la influencia y eficacia de este en la resignificación de la subjetividad del convicto, es decir, podría rescatarse la aptitud de rendimiento que posee la creencia en un Dios para resolver los problemas sociales relacionados con el comportamiento criminal y sus inhibidores y las reacciones colectivas frente al hecho criminal, entre otros.

En este marco, la tesis tiene como objetivo general analizar la eficacia del método APAC como programa de resocialización en el COPED situado en Medellín, Colombia. La elección de este espacio se realizó atendiendo a que el Complejo Penitenciario y carcelario de El Pedregal adoptó, por primera vez en el país, el programa como una experiencia piloto en la estructura de mujeres, que podría ser extensivo a la de hombres, tal como acontece en la actualidad; así como a otros establecimientos como sucede en la cárcel de mediana seguridad de Bellavista. Durante la

época de esta tesis doctoral, el investigador acompañó al COPED en la implementación y la ejecución del programa, obviamente, como investigador externo al INPEC, y como voluntario del programa.

Para ello se consideraron cinco objetivos específicos. El primero fue referir los discursos para justificar el hecho de prevenir la pena por medio de la socialización, el segundo es describir los modelos penitenciarios que existen en la actualidad en Occidente para detectar las diferencias con el método APAC, el tercero fue reseñar el influjo de la doctrina judeocristiana en los modelos de tratamiento penitenciario, el cuarto identificar la filosofía, características y elementos fundantes del método APAC con el propósito de verificar la eficacia (impacto) de este como instrumento para resocializar e integrar socialmente a los internos en el contexto del COPED, por último, analizar los resultados del funcionamiento de la metodología APAC, en el COPED.

Para alcanzar estos propósitos fue necesario entender por *eficacia* el *reconocimiento* que han hecho los participantes de los elementos que conforman las características fundamentales del método como son la participación de la comunidad, recuperando/ayuda recuperando, trabajo, asistencia espiritual, asesoría jurídica, atención en salud, valorización de la dignidad humana, familia, voluntario, porque responden en las condiciones en que se encuentran, a sus necesidades e intereses. Bajo esta comprensión la eficacia del programa no alude únicamente a la reincidencia, sino más bien, a la apropiación que hacen sus participantes (recuperandas) de las características mismas del modelo, las cuales tienen como finalidad la *reintegración* y *restauración* de las mismas a una vida en sociedad, esto es, recobrar las

relaciones con su familia y la comunidad, en tanto responden a las condiciones en que se encuentran a sus necesidades e intereses.

La metodología de investigación para el desarrollo de la tesis, estuvo apoyada en el estudio de caso con un enfoque etnográfico, una modalidad que se considera pertinente para los propósitos del trabajo. Ahora bien, uno de los rasgos de esta estrategia consiste en centrarse en un fenómeno o situación particular, razón por la cual es descriptivo, ilumina a la persona que lo consulta sobre el entendimiento del suceso e inductivo ya que permite al autor formular hipótesis o conceptos generalizables a partir de la experiencia observada.

Por otro lado, el estudio de caso demandó, entre otras estrategias, *la observación participación* que puede definirse como la fase de trabajo de campo compuesta por tres momentos: El primero se relaciona con una interacción social no ofensiva, lograr que los informantes se sientan cómodos y conseguir ser aceptado por ellos. El segundo aspecto trata sobre los modos de obtener datos: estrategias y tácticas de campo. El aspecto final involucra el registro de estos en forma de notas de campo escritas. Estas se triangularon con entrevistas estructuradas, grupos focales, talleres y cuestionarios. En la aplicación del estudio de caso se analizaron los documentos elaborados por personal administrativo del INPEC y la Confraternidad Carcelaria de Colombia. La sistematización de los datos se llevó a cabo con el programa de Atlas. Ti y su análisis se abordó desde el interaccionismo simbólico.

Hay que destacar del trabajo de campo que obedece a tres años continuos de presencia en el interior del pabellón de APAC con visitas de dos días a la semana al COPED (2012-2014) (Véase

Cuarto capítulo). Durante este período, se trabajó con 24 recuperandas, quienes, de acuerdo con el INPEC (Reinserción social) y la Confraternidad carcelaria, se caracterizaban por los siguientes rasgos, a saber: tenían la calidad de condenada, sin importar el delito cometido; sin trastorno mental o tratamiento psiquiátrico; realizaron el proceso de inducción al tratamiento penitenciario, sin importar las fases en que se encontraban; les faltaba un (1) año como mínimo para salir en libertad; no renunciaron al programa y, al contrario, realizaron las actividades señaladas por el modelo. Adicionalmente, el grupo seleccionado cumplió con las reglas y las normas de convivencia establecidas, participando en todas las tareas, durante el tiempo objeto de la observación. Naturalmente, las recuperandas realizaron libre y voluntariamente la solicitud de ingreso al método en su debida forma y huella. Es menester indicar que dentro de los criterios de selección y permanencia no se exige, en modo alguno, la pertenencia a una comunidad religiosa, en particular. Aún más, dentro del grupo seleccionado es posible destacar que 5 mujeres eran católicas, mientras las restantes 19 eran protestantes, lo que no impidió compartir el mismo espacio.

Adicional a esto, se obtuvo durante todo este tiempo datos de documentos, como los puntos de vista de expertos y funcionarios que posibilitaron sistematizar y triangularizar la información bajo el uso de complejas técnicas de análisis de datos cualitativos como el Atlas.ti. Para el desarrollo de este trabajo, se realizó una división lógica en cuatro capítulos con el propósito de responder a la tarea central del mismo: en un primer capítulo se abordó la política criminal actuarial y su incidencia tanto en el Derecho Penitenciario como en la teoría de la pena en su tarea de prevención especial negativa, en tanto nos permite comprender las razones por las cuales una población con rasgos de excedencia específica constituyen, preponderantemente, la base poblacional del sistema penitenciario colombiano; el segundo capítulo desarrolló el tratamiento

penitenciario entendido como estrategia para llegar a la resocialización de la persona condenada, por medio de los discursos que la respaldan; luego, desde un tercer capítulo, se realizó una aproximación al sistema progresivo penitenciario y sus componentes desde una perspectiva histórica, de cara al encadenamiento del método APAC; en el capítulo final se recoge el análisis de la implementación del método APAC en el COPED, como un estudio del caso que podrá proponerse ante situaciones contextuales similares. Desarrollada la anterior ruta temática se procedió a exponer las conclusiones a las que se llegó en esta tesis, así como la bibliografía consultada para su culminación.

Las conclusiones que el trabajo investigativo arrojó se pueden resumirse en: el éxito o el fracaso de los programas de tratamiento penitenciario se determinan, por regla general, por índices de reincidencia, se entiende por tal, el haber cometido una conducta punible que atentó en contra del mismo bien jurídico por el que ya fue la persona condenada, o por vulnerar un bien tutelado de otra naturaleza. Estos eventos señalan el fracaso de la resocialización o de los fines de los establecimientos penitenciarios; en el caso del programa APAC se tiene registrado que entre el 2012 al 2016 sola una de las egresadas ha reingresado al COPED por motivos de revocatoria de la prisión domiciliaria. Lo que podría mostrar una probabilidad significativa de éxito del método apaquiano.

La experiencia en APAC permitió por un lado reducir considerablemente el nivel de prisionización debido a que anuló el desequilibrio que padece toda mujer en condición estado de privada de libertad como consecuencia de tener toda su vida minuciosamente controlada, impuesta y reprimida por los agentes penitenciarios, o sujeta a los modelos de conducta

establecidos por la subcultura carcelaria. Por otro, el periodo del cumplimiento de la pena representa una profunda incertidumbre para la persona y un proceso en el que se deshumaniza por estar recluida. En cambio, este momento fue aprovechado en APAC para que algunas de las recuperandas adquirieran u otras fortalecieran en la parte emocional los vínculos significativos con su familia, utilizaran esta etapa para el autoconocimiento y replantearan su identidad.

El método APAC creó en el contexto de la prisión un nuevo sujeto denominado *recuperanda* gracias al cambio de la individualidad de la mujer a partir de la creencia religiosa de salvarse, reconciliarse, perdonarse y amarse. Conceptos utilizados consciente y en algunos casos inconscientemente por los coordinadores y facilitadores que coordinan y facilitan el programa de forma oportuna, lo que proporcionó el efecto de “salvar” en su interior a la mujer privada de libertad de sus complejos y sentimientos altos de culpa que la ensimismaban y mantenían en estados depresivos. Además, la creencia religiosa permitió la reconciliación de la recuperanda con su pasado y la proyectó hacia el futuro, así mismo, asumirse como *recuperanda* ha facilitado sobrellevar de mejor manera el cumplimiento del término de la pena.

Esto ha sido posible gracias a que en APAC la Biblia es entendida como un libro que da cuenta y respuesta a preguntas por el sentido de la vida, el por qué y para qué de su condición de reclusa, de la pena misma y de una identidad que trasciende su existencia presente. Todo ello debido a que le otorgan máxima importancia a cada uno de los versículos y citas bíblicas de forma que instruyen, guían, corrigen y orientan la conducta a ejecutar al interior del establecimiento, lo que conlleva a que se asuma la lectura del texto con un enfoque propio y valioso para la existencia de

la mujer en estado de convicta. Esto es, se presenta una correspondencia entre la consulta del escrito sagrado y el cambio en el modo de pensar y sentir de la persona vinculada al programa.

La experiencia del trabajo de campo demostró que los supuestos sobre los cuales están contruidos los conceptos y categorías del Derecho Penal y de la ejecución penal son en muchos casos vacíos o por lo menos tautológicos. Tal es el caso de la categoría de prevención especial positiva conocida como resocialización que al ser definida desde distintas perspectivas siempre arroja un punto ciego que hace referencia a la idea de volver a la sociedad a un sujeto considerado ideológicamente como asocial, desviado o divergente. En la pesquisa empírica, en cambio, se pudo evidenciar el estado en que entraban al programa las personas privadas de la libertad, así como su desarrollo, hasta la culminación de un proceso que en muchos casos fue exitoso y por ello eficaz.

Desde esta óptica, la realidad desborda a la teoría e incluso a la norma, y las evidencias empíricas obtenidas en muchos casos informan con mayor detalle. Además, la pena se ha construido sobre un ámbito teórico y legal que a veces se olvida de la persona humana y que de forma fría define los fines de la pena sin preguntarse por su ineficacia e histórica crisis en Occidente, asumiendo una promesa que cada vez más es tomada como una broma por la sociedad civil. En el trabajo de campo, en cambio, se logró demostrar con datos, la situación en la que la persona humana se encontraba y el perjuicio real, a veces cruel, que el establecimiento penitenciario produce en el ser humano, arrojándole indefectiblemente a estados depresivos y en muchos casos a la reincidencia.

Estos conocimientos a pesar de constituir el centro del Derecho Penal, no se encuentran en los libros con los que se dicta este saber en las aulas de clase, no están sistematizados con rigor, metodología y técnicas investigativas, propensas a la interdisciplinariedad y a lo complejo del saber que involucra esferas de la inteligencia humana que normalmente son desconocidas por la tradición de la enseñanza del Derecho en la actualidad.

Este trabajo doctoral nace de una experiencia particular y profesional del investigador: para empezar se debe decir que desde la época de estudiante de Derecho en la Universidad de Antioquia tuvo contacto con el mundo de las prisiones por medio de prácticas tempranas y de acompañamiento a los programas de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia adelantados en la Cárcel Nacional de Bellavista de Medellín. Lo que le permitió ver cara a cara el dolor y el deterioro de la persona y de su vínculo con el entorno que genera la cárcel como estrategia de castigo. De modo que una vez tuvo contacto con el sufrimiento de los reclusos ha sido imposible que se desprendiera del anhelo de hacer algo para mejorar las condiciones de vida, mientras se camina a otras formas posibles de responder por la comisión del daño cometido a los bienes jurídicos protegidos con la norma penal.

Es así como una vez adquirida la categoría de docente universitario ha trajinado con estudiantes inscritos en los cursos concedidos y semilleros prestando asesoría y apoyo a reclusos y sus familias con el fin de “humanizar” la prisión o lograr que el preso tenga una mejor calidad de vida mientras purga la pena. Por estas experiencias y sueños que parecen utopías o no alcanzables en el vasto mundo de la penitenciaría fue que se vinculó en la tesis doctoral a analizar la eficacia del método APAC como programa de resocialización en el COPED. Ahora bien,

ha sido para él una sorpresa el encontrarse con el alcance de la religión en la rebaja del sufrimiento y de la prisionalización en la vida de un convicto, independiente de las discusiones de tinte ideológico que ello puede generar, sin embargo, Marx rescató de la religión su labor utópica contra su contenido político e ideológico, así como lo positivo psicológicamente hablando. En palabras de Marx (2014): “la miseria religiosa es a un tiempo expresión de la miseria real y protesta contra la miseria real” (p. 43). Resalto fuera de cita.

METODOLOGÍA

Este trabajo doctoral es una investigación sociojurídica y crítica debido a que el estudio de las instituciones jurídicas del derecho penitenciario se asume como un mecanismo dinámico que reproduce en un contexto histórico, social y económico las injusticias del orden institucional, es decir, se analiza “la actuación del sistema de justicia criminal, como un sistema que reproduce las relaciones de poder existentes en la sociedad capitalista” (Baratta, 1998, p.167). Así mismo, los procesos de “selección de los individuos que cometen infracciones a normas penalmente sancionadas” se entienden como un “bien negativo distribuido desigualmente según la desigualdad social entre los individuos” (Baratta, 1986, pp. 167 - 170). Este estudio es de tipo cualitativo y crítico porque favorece la comprensión de la delincuencia desde la mirada y la voz de las personas que realizan el acto criminal, analizando sus modos, prácticas discursivas, esto es, sus modelos de pensamiento y acción (Cid Moliné, y Larrauri Pijoan, 2001, pp. 242 – 243). Por esta causa, esta tesis opta por interactuar, permanentemente, con la base poblacional que narró su experiencia en el programa. Así las cosas, se sirve del interaccionismo simbólico, por cuanto se corresponde con el criterio de demarcación: crítica y el modelo de investigación: cualitativa.

De acuerdo con Blumer, este asume al ser humano bajo tres premisas. La primera es que la persona orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan para él. La segunda es que construir significado como acto individual se origina en el relacionamiento que cada cual mantiene con el prójimo. Por consiguiente, las definiciones que puedan surgir de este constituyen

la base de cualquier conducta social en la que permanece implícito el concepto de cultura (Blumer, 1982, p. 53). La tercera es que los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso (Ibíd, p. 2).

1. Acopio y ordenamiento de la información

Este estudio cuenta con una vasta información relativa no solo a bibliográficas, sino también, y más que todo, a los resultados de observar durante los años 2012 a 2016 el proceso en el que se creó, implementó y ejecutó el Programa Asociación y Protección de Asistencia al Condenado (APAC) en la estructura de mujeres del Complejo Penitenciario y Carcelario el Pedregal (COPED). De igual forma, se reunieron las opiniones de los actores involucrados institucional y operativamente con el programa, más los relatos de las mujeres privadas de libertad pertenecientes a este. El material recaudado se reunió y sistematizó así:

a) Revisión bibliográfica. Un primer momento del repaso bibliográfico consistió en la búsqueda de trabajos de maestría o doctorado sobre el programa APAC, además, de artículos respecto al tema. Posteriormente se hizo la búsqueda selectiva de documentos digitales teniendo en cuenta el problema de estudio y los objetivos propuestos. Luego, se efectuó un recorrido por las distintas bibliotecas universitarias y librerías de Medellín en las que se inspeccionaron físicamente los textos, encontrándose un número significativo de personas que han inquirido y escrito sobre los diversos tópicos abordados en esta tesis. Estos rastreos permitieron elaborar el marco teórico de la tesis, atendiendo intencionalmente a los autores y obras de mayor rendimiento y actualidad, a saber: Abel Téllez, Elias Neuman, Daniel Acosta, Mario Ottoboni,

Francois Houtart, Alejandro Gómez Jaramillo, Karl Marx, José Ángel Brandariz, Alessandro de Giorgi, Roberto Bergalli, Iñaki Rivera Beiras, Michel Foucault, etc. Al respecto, confrontar los capítulos uno al tres de esta.

b) Documentos de la Confraternidad Carcelaria de Colombia. En estos documentos se encuentran reunidos la información que rodeó el proceso de establecimiento, inicio e informes que ha tenido el programa APAC desde el año 2011 hasta el 2016.

- Actas de reunión entre e la Confraternidad Carcelaria de Colombia y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) con fechas:
 - ✓ 24 de enero de 2012
 - ✓ 26 de septiembre de 2012
 - ✓ 9 de noviembre de 2012
- Acta de capacitación del 17 de marzo de 2012.
- Dos documentos borradores de la propuesta de intervención metodología APAC elaborados por la Confraternidad Carcelaria de Colombia del año 2011, para radicar al INPEC como 2011– 2 una vez se dé la firma del convenio.
- Documento borrador de plan de trabajo método APAC de septiembre a diciembre de 2012 con anotaciones de la coordinadora del programa.
- Plan de trabajo método APAC de septiembre a diciembre de 2012 con papel membrete de la Confraternidad Carcelaria de Colombia.
- Plan de trabajo en Excel con fecha del 31 de agosto de 2012.

- Cronograma de trabajo en Excel con fecha septiembre – diciembre de 2012
- Documento para corregir el plan de trabajo método APAC, elaborado en el 2012 para el 2013.
- Documento final del plan de trabajo método APAC elaborado en el 2012 para el 2013.
- Encuestas de identificación 001 con fecha del 28 de mayo de 2012.
- Encuestas de identificación 002 con fecha del 28 de mayo de 2012.
- Encuestas de identificación 003 con fecha del 28 de mayo de 2012
- Encuestas de identificación 004 con fecha del 28 de mayo de 2012
- Encuestas de identificación 005 con fecha del 28 de mayo de 2012
- Encuestas de identificación 006 con fecha del 28 de mayo de 2012
- Encuestas de identificación 007 con fecha del 28 de mayo de 2012
- Encuestas de identificación 008 con fecha del 28 de mayo de 2012
- Encuestas de identificación 009 con fecha del 28 de mayo de 2012
- Encuestas de identificación 010 con fecha del 28 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 14 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 14 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 14 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 15 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 23 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 23 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 23 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 25 de mayo de 2012

- Evaluación de recuperanda del 27 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 27 de mayo de 2012
- Evaluación de recuperanda del 27 de mayo de 2012
- Informe de reunión del 19 de febrero de 2012.
- Primer informe de gestión con fecha del 5 de junio de 2012
- Segundo informe de gestión: suprimir dos puntos trimestral de abril 27 a julio 27 de 2012
- Tercer informe de gestión con fecha del 21 de agosto de 2012
- Informe de gestión en Pedregal con fecha del 27 de abril a 27 de septiembre de 2012
- Cuarto informe de gestión: rendición de cuentas con fecha de diciembre de 2012
- Informe preliminar de abril 27 – agosto 22 de 2012
- Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) de la implementación de la metodología APAC
- Informe proyecto APAC Pedregal y Bellavista de enero de 2015
- Informe de gestión de marzo de 2015
- Informe de gestión de julio de 2015
- Informe de gestión de agosto de 2015
- Reunión de junta APAC de marzo de 2012
- Reunión de junta APAC de septiembre de 2012
- Reunión de junta APAC de octubre de 2012
- Reunión de junta APAC de diciembre de 2012
- Reunión de junta APAC de enero de 2013
- Reunión de junta APAC de septiembre de 2013

- Reunión de conformación de junta en el 2014
- Solicitud de la Confraternidad Carcelaria de Colombia a la Confraternidad Carcelaria de Antioquia para vincular a Consuelo Martínez como primera directora del programa APAC en COPED Pedregal con fecha marzo de 2012
- Acta de compromiso de las recuperandas APAC –COPED – Pedregal con fecha abril de 2012
- Acta de compromiso de APAC y COPED
- Balance de inmobiliario APAC de julio de 2012
- Listado de voluntarios de 2012
- Voluntarios APAC 2012
- Solicitud de ingreso de elementos para el día de la familia en agosto 2012
- Oración de las recuperandas
- Reglamento disciplinario de APAC Colombia
- Solicitud de ingreso docente a APAC: clases de Belleza con fecha del 14 septiembre de 2012
- Constancia expedida a favor de recuperandas con fecha de 14 de septiembre de 2012
- Constancia expedida a favor de recuperandas con fecha de 17 de septiembre de 2012
- Constancia expedida a favor de recuperandas con fecha de 19 de septiembre de 2012
- Constancia expedida a favor de recuperandas con fecha de 24 de septiembre de 2012
- Constancia expedida a favor de recuperandas con fecha de 24 de septiembre de 2012 (2)
- Constancia expedida a favor de recuperandas con fecha de 24 de septiembre de 2012 (3)
- Constancia expedida a favor de recuperandas con fecha de 24 de septiembre de 2012 (4)

- Carta de invitación a ministra de justicia, fechada septiembre 18 el 18 de septiembre de 2012
- Comunicación en relación con el conflicto con el sacerdote, fechada el 19 de septiembre de 2012
- Comunicación en relación al con el tema de redención, fechada el 19 de septiembre de 2012
- Solicitud de ingreso a las familias por encuentro familiar, fechada el 23 de septiembre de 2012
- Solicitud de ingreso de pintura para laborterapia, fechada el 20 de septiembre de 2012
- Documento sobre la adaptación por tres meses de la recuperanda
- Quejas, solicitudes y requerimientos entre la Confraternidad Carcelaria de Colombia e INPEC con fechas de:
 - ✓ 10 de agosto de 2012
 - ✓ 23 de agosto de 2012
 - ✓ Septiembre de 2012
 - ✓ 2 de octubre de 2012
 - ✓ 11 de diciembre de 2012
 - ✓ 26 de febrero de 2014
- Actas de reunión de la Confraternidad Carcelaria de Colombia del 15 de enero de 2013

c) Documentos del INPEC. En estos documentos se encuentran reunidos el convenio de creación del programa APAC, requerimientos, evaluaciones y plan de mejoramiento hasta el 2016.

- Convenio N° 003 del 17 de noviembre del 2011 firmado entre la Dirección Operativa Regional Noroeste del INPEC y la Confraternidad Carcelaria de Colombia que tiene como objeto desarrollar la metodología APAC en el COPED
- Acta del INPEC con fecha del 1 de febrero del 2013
- Diagnóstico participativo del programa APAC con fecha del 26 de febrero del 2014
- Informe de la evaluación del programa APAC con fecha del 27 de febrero del 2014
- Informe del plan de mejoramiento del programa APAC con fecha del 01 de septiembre del 2015

d) Fotografías. Se recaudaron ciento treinta y cuatro (134) fotografías con el fin de evidenciar el proceso de inicio y entrada en operación del programa APAC en el establecimiento penitenciario El Pedregal. En estas se encuentran registros visuales de las recuperandas, de actividades como la celebración del día de la familia, cumpleaños, laborterapia, entre otras; algunas de ellas solo fueron usadas en la tesis para ilustrar determinados ítems del cuarto capítulo, sin embargo, este material será tenido en cuenta para futuras investigaciones, particularmente para análisis de la imagen.

e) Documentos de los actos involucrados en el programa APAC En estos documentos se encuentran puntos de vista y experiencias que han tenido tanto las recuperandas, como los actores sociales e institucionales en relación con el método APAC.

- Diarios de campo, grupos focales, talleres y cuestionarios a las mujeres privadas de libertad pertenecientes a APAC por la aptitud que ellas tienen de construir la existencia a partir de la interpretación que hacen de lo que han vivido en este modelo de tratamiento.
- Entrevistas a directivos de la Confraternidad Carcelaria de Colombia y de la Fraternidad Brasileira de Asistencia a los Condenados – FBCA – sobre la percepción que tienen de los componentes del método y su alcance en el tratamiento penitenciario, así mismo, de la experiencia del programa en el COPED. Las personas entrevistadas cuentan no solo con una experiencia idónea sobre el método APAC, sino también de las condiciones en que se encuentran las prisiones en otras latitudes.
- Entrevista a la segunda directora que tuvo el programa APAC, psicóloga profesional, sobre su experiencia en la implementación del método en el COPED en el periodo de tiempo comprendido entre el último trimestre del 2012 y todo el año 2013.
- Entrevista a la psicóloga contratada por la Confraternidad Carcelaria de Colombia desde el 2015. En la actualidad, su concepto profesional y personal sobre el alcance de cada uno de los elementos que conforman el método en el tratamiento penitenciario en mujeres privadas de libertad es de sobrada importancia debido a su vasta experiencia en población con realidad penitenciaria y carcelaria.
- Entrevista a la actual directora del programa APAC sobre su apreciación del método y su funcionamiento con privados de libertad en mujeres. Debemos anotar que esta persona es profesional en Educación y jubilada del INPEC. Durante más de veinte años manejó el área educativa: de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, de Medellín, así como del COPED lo que le permite valorar las ventajas y desventajas del método APAC en relación con el sistema PASO.

- Entrevista a la subdirectora de la cárcel sobre su postura con respecto a la eficacia del método APAC, así mismo, el concepto que tienen los funcionarios de vigilancia y custodia en con la puesta en marcha del programa en las instalaciones del COPED, mediante una entidad de naturaleza civil, como es la Confraternidad Carcelaria de Colombia, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2012 al 2016.
- Entrevista al capellán del COPED encargado de la estructura de mujeres, que da cuenta de su punto de vista en relación con el funcionamiento y pertinencia del método APAC para el tratamiento penitenciario en ellas.

1. Estrategias de recolección de la información

Los datos de orden cualitativo fueron recogidos por medio de fichas textuales, diarios de campo, entrevistas en profundidad, talleres, cuestionarios, diagnósticos rápidos de participación, grupos focales, a saber:

a) Observación participación. Entre las ventajas obtenidas a favor del recaudo de la información se cuenta con el desarrollo prolongado del trabajo de campo (2012-2016). Durante esta fase, se llevaron a cabo las visitas regulares (dos veces por semana) al pabellón de APAC ubicado en la estructura de mujeres del COPED. Allí se recogieron la gran mayoría de datos, a saber:

El rastreo comienza con observaciones descriptivas, pero focalizadas en lo que ocurre en el pabellón de APAC. Para registrarlas se elaboraron, por un lado, unos diarios de campo que se codificaron por fechas e incluyen una mirada de lo que ocurre en ese sector de la prisión, más diálogos espontáneos con las mujeres vinculadas al programa alusivos a la percepciones e

imágenes que ellas tienen de la circunstancia que están viviendo. Por otro lado, es necesario decir que algunas de ellas de forma voluntaria quisieron hacer sus propias notas de observación, las cuales fueron tomadas en cuenta en el proceso de sistematizar los datos. En este punto, es preciso advertir sobre la intermitencia de estas, ya que las recuperandas cesaban su hechura en distintos momentos debido, entre otras razones, a los niveles de estrés y ansiedad que genera la cárcel, lo cual lleva a la parálisis de algunas actividades, incluyendo esta, que se ha codificado como diarios de campo de las recuperandas. Adicionalmente, el acceso al espacio permitió que el investigador liderara procesos de formación formal (diplomado en Ética y Derechos Humanos con certificación de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín; diplomado en Cartografías de lo Femenino con el aval de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín) a favor de las recuperandas, así mismo, se les brindó asesoría jurídica constante.

b) Diarios de campo

- Elaborados por el investigador

Diario de campo 1 (julio.10.12)	Diario de campo 32 (diciembre 11.12)	Diario de campo 63 (mayo.08.13)
Diario de campo 2 (julio.18.12)	Diario de campo 33 (diciembre.12.12)	Diario de campo 64 (mayo.18.13)
Diario de campo 3 (julio.19.12)	Diario de campo 34 (diciembre.13.12)	Diario de campo 65 (mayo.20.13)
Diario de campo 4 (julio.25.12)	Diario de campo 35 (diciembre.19.12)	Diario de campo 66 (mayo.28.13)
Diario de campo 5 (agosto.08.12)	Diario de campo 36 (diciembre.20.12)	Diario de campo 67 (mayo.29.13)
Diario de campo 6 (agosto.09.12)	Diario de campo 37 (diciembre.27.12)	Diario de campo 68 (mayo.30.13)
Diario de campo 7 (agosto.15.12)	Diario de campo 38 (diciembre.28.12)	Diario de campo 69 (junio.05.13)
Diario de campo 8 (agosto.28.12)	Diario de campo 39 (enero.07.13)	Diario de campo 70 (junio.12.13)
Diario de campo 9 (septiembre.05.12)	Diario de campo 40 (enero.08.13)	Diario de campo 71 (junio.19.13)
Diario de campo 10 (septiembre.06.12)	Diario de campo 41 (enero.10.13)	Diario de campo 72 (junio.26.13)
Diario de campo 11 (septiembre.10.12)	Diario de campo 42 (enero.16.13)	Diario de campo 73 (julio.10.13)
Diario de campo 12 (septiembre.13.12)	Diario de campo 43 (enero.18.13)	Diario de campo 74 (agosto.01.13)
Diario de campo 13 (septiembre.18.12)	Diario de campo 44 (enero.30.13)	Diario de campo 75 (agosto.08.13)
Diario de campo 14 (septiembre.19.12)	Diario de campo 45 (febrero.04.13)	Diario de campo 76 (agosto.15.13)
Diario de campo 15	Diario de campo 46	Diario de campo 77 (agosto.19.13)

(octubre.09.12)	(febrero.12.13)	
Diario de campo 16 (octubre.10.12)	Diario de campo 47 (febrero.13.13)	Diario de campo 78 (agosto.22.13)
Diario de campo 17 (octubre.17.12)	Diario de campo 48 (febrero.26.13)	Diario de campo 79 (agosto.26.13)
Diario de campo 18 (octubre.23.12)	Diario de campo 49 (marzo.05.13)	Diario de campo 80 (agosto.29.13)
Diario de campo 19 (octubre.24.12)	Diario de campo 50 (marzo.06.13)	Diario de campo 81(septiembre.02.13)
Diario de campo 20 (octubre.25.12)	Diario de campo 51 (marzo.12.13)	Diario de campo 82 (septiembre.05.13)
Diario de campo 21 (octubre.26.12)	Diario de campo 52 (marzo.13.13)	Diario de campo 83 (septiembre.08.13)
Diario de campo 22 (octubre.31.12)	Diario de campo 53 (marzo.19.13)	Diario de campo 84 (septiembre.12.13)
Diario de campo 23 (noviembre.01.12)	Diario de campo 54 (marzo.20.13)	Diario de campo 85 (septiembre.16.13)
Diario de campo 24 (noviembre.06.12)	Diario de campo 55 (marzo.21.13)	Diario de campo 86 (septiembre.19.13)
Diario de campo 25 (noviembre.08.12)	Diario de campo 56 (marzo.26.13)	Diario de campo 87 (septiembre.23.13)
Diario de campo 26 (noviembre.14.12}	Diario de campo 57 (abril.04.13)	Diario de campo 88 (septiembre.23.13)
Diario de campo 27 (noviembre.15.12)	Diario de campo 58 (abril.09.13)	Diario de campo 89 (febrero.11.14)
Diario de campo 28 (noviembre.27.12)	Diario de campo 59 (abril.16.13)	Diario de campo 90 (febrero.13.14)
Diario de campo 29 (noviembre.28.12)	Diario de campo 60 (abril.18.13)	Diario de campo 91(febrero.20.14)
Diario de campo 30 (diciembre.03.12)	Diario de campo 61 (abril.23.13)	Diario de campo 92 (febrero.26.14)
Diario de campo 31 (diciembre.04.12)	Diario de campo 62 (mayo.06.13)	Diario de campo 93 (marzo.04.14)

Tabla 1. Diario de campo realizado por el investigador: 93.

- Elaborados por las recuperandas

Diario de campo (agosto. 01.12)	Diario de campo (agosto.09.12)	Diario de campo (febrero. 18.14)
Diario de campo (agosto.02.12)	Diario de campo (agosto.10.12)	Diario de campo (febrero. 19.14)
Diario de campo (agosto.03.12)	Diario de campo (agosto.11.12)	Diario de campo (febrero. 24.14)
Diario de campo (agosto.04.12)	Diario de campo (agosto.12.12)	Diario de campo (febrero. 25.14)
Diario de campo (agosto.05.12)	Diario de campo (septiembre.05.12)	Diario de campo (febrero. 26.14)
Diario de campo (agosto.06.12)	Diario de campo (marzo 11.13. a mayo 08.13)	Diario de campo (febrero. 27.14)
Diario de campo (agosto.07.12)	Diario de campo (junio.25.13)	Diario de campo (marzo. 02.14)
Diario de campo (agosto.08.12)	Diario de campo (febrero. 17.14)	Diario de campo (marzo. 03.14)
	.	Diario de campo (junio. 06.14)

Tabla 2. Diario de campo realizado por las recuperandas: 25

En todo momento, el papel del autor de la tesis fue conocido por todos los actores involucrados directa e indirectamente con APAC, atendiendo a los imperativos probos del trabajo. Ellos conocían que el objetivo central de este consistía en evaluar la eficacia del método como programa de tratamiento penitenciario.

a) Entrevista estructurada

APAC
<p>1. <u>Sentido</u></p> <p>Nombre.</p> <p>Cargo o función en APAC.</p> <p>¿Cuánto tiempo lleva vinculado(a) al programa APAC?</p> <p>¿Usted cómo entiende la metodología APAC?</p> <p>¿Para usted que significa el método APAC?</p> <p>¿Conoce el sistema de tratamiento progresivo?</p> <p>¿Conoce el sistema PASO?</p> <p>¿Tiene identificado puntos en común o las diferencias con APAC?</p> <p>¿Cuáles son las características del método APAC tanto civiles como religiosas?</p> <p>2. <u>Componentes</u></p> <p>Participación de la comunidad. ¿Para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Recuperando/Ayuda recuperando: ¿qué significa la palabra recuperando(a), y cuál es su importancia en el programa?</p> <p>Trabajo: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Asistencia espiritual: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Jornada de liberación con Cristo: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Asistencia jurídica: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Valorización de la dignidad humana: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Familia: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Voluntario y su formación: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Centro de reintegración social: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Mérito: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>Justicia restaurativa: ¿para qué sirve este elemento en el programa, y por qué es importante?</p> <p>3. <u>Relaciones</u></p>

¿Cómo ha sido la relación con la Iglesia católica/Iglesia evangélica dentro del proceso adelantado en APAC?

¿Cómo ha sido la relación con INPEC COPED dentro del proceso adelantado en APAC?

¿Cómo ha sido la relación con INPEC regional dentro del proceso adelantado en APAC?

¿Cómo ha sido la relación con los voluntarios que apoyan el programa APAC?

¿Conoce usted si el sector empresarial se ha vinculado con la APAC y cómo ha sido la relación con este programa?

4. Experiencia

Religiosa ¿Cómo ve/ ha sido/ (la) su experiencia religiosa/de fe/ espiritual/ en APAC?, ¿su participación es voluntaria o impuesta?

Laboral ¿Cómo ve/ ha sido/ (la) su experiencia laboral en APAC?, ¿su participación es voluntaria o impuesta?

Educativa ¿Cómo ve/ ha sido/ (la) su experiencia educativa en APAC?, ¿su participación es voluntaria o impuesta?

Personal ¿Cómo ve/ ha sido/ (la) su experiencia personal en APAC?, ¿cree usted que esta experiencia ha sido negativa o positiva en su vida?

5. Resocialización en APAC

- Concepto.

¿Qué significa para usted la resocialización?

¿Cómo entiende la resocialización APAC?

¿Cree usted que las recuperandas/usted necesita (n) resocializarse, en caso afirmativo/ o negativo/, por qué?

- Tratamiento

¿Qué entiende por tratamiento penitenciario, y cuál es su importancia en APAC?

¿Cuál es el rol de la educación en el tratamiento penitenciario de la recuperanda?

¿Cuál es el rol del trabajo en el tratamiento penitenciario de la recuperanda? ¿Cuáles son las actividades labores implementadas por APAC?

- Asistencia a condiciones de vida

¿Cómo influye la asistencia a condiciones de vida en el tratamiento penitenciario, y por qué?

¿Cómo influye la asistencia a condiciones familiares en el tratamiento penitenciario, y por qué?

6. Autoidentidad

- Orientación sexual.

¿La orientación (heterosexual/homosexual) de la recuperanda ocupa un papel dentro del método APAC?, ¿esto cómo influye en el tratamiento?

- Práctica sexual.

¿Qué tipo de prácticas sexuales son admitidas en el programa APAC?, ¿esto cómo influye en el tratamiento?

- Familia.

¿Qué significado tiene la familia para la recuperanda y para el programa?, ¿esto cómo influye en el tratamiento?

- Construcción de la identidad.

Preguntas para las recuperandas:

¿Cómo se percibe antes de llegar a APAC?

¿Qué imagen desde la religión cristiana se tiene de la persona condenada?

¿Una vez en el programa que identidad quiere alcanzar con la recuperanda?

Preguntas para otras personas

¿Qué imagen tiene la recuperanda de sí misma?

¿Qué imagen desde la religión cristiana se tiene de la persona condenada?

¿Cómo se perciben a las recuperandas antes de llegar a APAC?

¿Una vez en el programa que imagen o identidad quiere alcanzar con la recuperanda?

¿La imagen de peligroso influye o no en el proceso adelantado en APAC?

7. Institucionalidad

- Representación.

¿Qué percepción tienen los funcionarios del INPEC de APAC, y por qué?

¿Cómo ha sido el proceso de implementación del APAC en Pedregal?

- Funcionarios penitenciarios.

¿Qué fortalezas o debilidades ha observado en el programa APAC?

¿Está usted de acuerdo a que una entidad civil – religiosa como confraternidad carcelaria de Colombia este liderando el método APAC?

¿Es pertinente o no el método APAC en el proceso de tratamiento?

- Conflicto.

¿Cuáles han sido las dificultades más significativas en el proceso de implementación de APAC?

¿Cuáles han sido las causas del conflicto y que consecuencias ha generado ello?

¿Estas dificultades han afectado el proceso de las recuperandas, en caso afirmativo en qué sentido?

8. Espiritualidad

- Noción.

¿Qué significado tiene para usted lo espiritual y la asistencia en ello?

¿Por qué es importante la asistencia espiritual en el espacio de la prisión –APAC?

¿Usted considera que la y la asistencia en ella le permiten a la recuperanda proyectarse como mujer, madre, hija, esposa, y en qué sentido lo hace?

- Componentes.

-Religioso.

¿En APAC cuál es la finalidad de los estudios devocionales?

¿Los estudios devocionales están direccionados con el tratamiento penitenciario?

¿Los estudios devocionales son progresivos a las fases de tratamiento para la resocialización?

¿Y cuáles son los resultados esperados?

¿En APAC cuál es la finalidad de los cultoliturgia?

¿Los cultoliturgia están direccionados con el tratamiento penitenciario?

¿Los cultoliturgia son progresivos en las fases de tratamiento para la resocialización?

¿Y cuáles son los resultados esperados?

¿En APAC cuál es la finalidad de la asistencia espiritual individual y colectiva?

¿La asistencia espiritual individual y colectiva está direccionada al tratamiento penitenciario?

¿La asistencia espiritual individual y colectiva es progresiva en las fases de tratamiento para la resocialización?

¿Y cuáles son los resultados esperados?

-Educativos.

¿APAC oferta un programa de alfabetización?

¿En caso afirmativo en cabeza de quién se encuentra?, ¿esta persona es educador(a)?

¿El programa es coherente con el modelo educativo del INPEC?

¿APAC ofrece por medio de convenios con instituciones de educación superior programas universitarios?

¿Tienen contemplado becas o ayudas económicas en este sentido?

¿APAC ofrece competencias laborales, en que temas o saberes? en caso afirmativo, ¿mediante qué institución?

¿APAC ofrece competencias profesionales?, ¿en qué temas o saberes? y en caso afirmativo, ¿mediante qué institución?

¿Posee APAC insuficiencia en competencias laborales?, ¿conoce las causas de ello?

¿Posee APAC insuficiencia en competencias profesionales?, ¿conoce las causas de ello?

¿El programa APAC contempla en sus planes de trabajo para las recuperandas competencias laborales?

El programa APAC no contempla en sus planes de trabajo para las recuperandas competencias profesionales

-Trabajo.

¿Qué significado(s) tiene para usted el trabajo?

¿APAC le ha explicado la importancia de trabajar?

¿APAC le brinda posibilidades de capacitación laboral? en caso afirmativo, ¿en qué áreas?

¿Qué piensa de la laborterapia implementada por APAC como forma de sensibilización para el trabajo?

¿Qué piensa de las manualidades u oficios implementados por APAC como forma de trabajo?

¿Qué piensa de las artes implementadas por APAC como forma de trabajo?

¿Cuáles son los resultados de las actividades laborales?, ¿considera que son benéficos o desventajosos?

Tabla 3. Formato de entrevista estructurada

b) Cuestionarios, talleres, diagnósticos rápidos de participación y grupo focal

• Cuestionario

1. ¿Qué opina sobre el tratamiento penitenciario (sistema PASO) y la forma de llevarlo a cabo en los patios de esta prisión?
2. ¿Cuál es su opinión general sobre el sistema progresivo?
3. ¿Cree usted que hay diferencias entre los internos de distinta fase de tratamiento?
4. ¿Qué importancia tienen las actividades de tratamiento para pasar de fase?
5. ¿Cómo valora la eficacia de las actividades para los fines de reeducación y reinserción social?
6. ¿Cómo cree que el tratamiento penitenciario afecta a la conducta de los internos?
7. ¿Por qué cree que los internos participan en las actividades?
8. ¿Qué opinión tiene usted del desempeño profesional de los funcionarios de Atención y Tratamiento?

9. ¿Qué opinión tiene usted de los funcionarios de Vigilancia y Custodia?
10. ¿Qué opina sobre la metodología APAC y la forma de llevarla a cabo?
11. ¿Cree usted que hay diferencias entre el sistema PASO y la metodología APAC? sí o no.
12. ¿Cómo valora la eficacia de las actividades programadas en APAC para los fines de reeducación y reinserción social?
13. ¿Cómo cree que APAC afecta a la conducta de las recuperandas?

Tabla 4. Cuestionarios, talleres, diagnósticos rápidos de participación y grupo focal.

- Programa APAC
- Evaluación
- Tema: libertad religiosa

 1. Diga en sus propias palabras en qué consiste la libertad religiosa.
 2. ¿Cuál es la idea que usted tiene acerca de Dios?
 3. ¿Aceptar la religión cristiana incide en el tratamiento?
 4. ¿Aceptar o no la idea de Dios incide en el proceso que usted adelanta en APAC?
 5. ¿Usted ha sido presionada a aceptar un determinado dogma de fe?
 6. La práctica religiosa qué tipo de sentimiento o emotividad le genera.
 7. ¿La práctica religiosa tiene utilidad al interior de las prisiones? explique.

Tabla 5. Evaluación. Tema: libertad religiosa.

- Actividad de entrada
- Tema: derecho al libre desarrollo de la personalidad

 1. Contenido.
 2. Expresión o manifestación.
 3. Referencia especial al libre ejercicio de la orientación sexual.
 - Contenido.
 - Creencias sociales sobre la homosexualidad y el lesbianismo al interior de la prisión.
 4. Barreras al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.

Tabla 6. Evaluación. Tema: derecho al libre desarrollo de la personalidad

Actividad de entrada
 Diagnóstico rápido de participación
 Tema: resocialización
 En grupos de cuatro personas discutir y luego plantear cinco posibles significados de la palabra *resocialización*.

Tabla 7. Actividad. Tema: resocialización

<p>Actividad de entrada</p> <p>Diagnóstico rápido de participación</p> <p>Tema: el trabajo.</p> <p>En grupo de cuatro personas discutir y luego plantear qué significado tiene para ustedes el <i>trabajo</i></p>

Tabla 8. Actividad. Tema: el trabajo

c) Criterios para la escogencia de la información

Las entrevistas a directivos, a empleados de la Confraternidad Carcelaria de Colombia y de la FBCA; como a empleados penitenciarios se recogieron porque permitían acceder de forma directa al punto de vista y entendimiento que ellos poseen sobre el método APAC. De igual forma, sobre el proceso de puesta en marcha del programa en el establecimiento penitenciario y carcelario de Pedregal.

Por este motivo se realizaron ocho entrevistas estructuradas, las cuales se llevaron a cabo en un ambiente tranquilo y de disposición por parte de las fuentes. Tuvieron un tiempo aproximado de dos horas y todas se transcribieron literalmente.

Con el objeto de conocer la eficacia del método APAC, fue necesario observar, describir y entender a las recuperandas a partir de sus vivencias, ya que son ellas las que pueden relatar e interpretar sobre el impacto de este en el entorno de la prisión. Por ello es preciso dar a conocer la realidad que este grupo de mujeres ha construido durante su contacto con esta metodología, más la incidencia de sus elementos para su reintegro positivo al orden social. Con estas consideraciones fue que empleamos los talleres, cuestionarios, diagnósticos rápidos de participación y el grupo focal.

Por lo anterior, las estrategias utilizadas permitieron recoger lo vivido, las creencias, puntos de vista e interpretaciones que las mujeres por medio de sus discursos y relatos plasmaron sobre su proceso de tratamiento. Es preciso mencionar que junto a estas tácticas, se llevaron a cabo varios diálogos informales con las recuperandas que si bien no se tuvieron en cuenta en los diarios de campo, posibilitaron el conocimiento de la realidad estudiada.

2. Análisis de la información

Luego de sistematizar la información equivalente a una amplia tipología de material cualitativo: fichas textuales, diario de campo, entrevistas, grupos focales, talleres, fotografías; y demás, y a un número importante de los mismos, esto es, más de quinientos registros, se procedió a la etapa del análisis. Para ello, se realizaron, validaron y triangularon los datos en la siguiente tabla categorial, la cual fue revisada y admitida por expertos. En palabras más claras, esta recoge el fraccionamiento en categorías de primer, segundo y tercer nivel que fueron empleadas asimismo en la elaboración de las preguntas de las entrevistas y los grupos focales realizados. Los ítems de ella fueron sintetizados en el cuarto capítulo de este trabajo (o estudio o tesis).

a) Tabla de códigos

Tabla de códigos			
Categoría 1 ^{er} nivel	Categoría 2 ^o nivel	Categoría 3 ^{er} nivel	Códigos Atlas.Ti
APAC	Sentido (S)	Sentido	APACsSentido
	Componentes (C)	Participación de la comunidad	APACCparticipacioncomunidad
		Recuperando/ayuda recuperando	APACCayudarecuperando
		Trabajo	APACCtrabajo
		Asistencia espiritual	APACCasistenciaespiritual
		Asistencia jurídica	APACCasistenciajuridica
		Asistencia a la salud	APACCasistenciasalud
		Valorización de la dignidad humana	APACCvalorizaciondignidad
		Familia	APACCfamilia
		Voluntario y su formación	APACCvoluntarioformacion
		Centro de reintegración social	APACCcentroreintegracionsocial
		Mérito	APACCmerito
		Jornada de Liberación con Cristo	APACCjornadaliberacioncristo
		Justicia restaurativa	APACCjusticiarestaurativa
	Características (CA)	Civiles	APACCaciviles
		Religiosas	APACCareligiosas
	Relaciones (R)	Iglesia católica	APACRiglesiaticatolica
		INPEC COPED	APACRinpeccoped
		INPEC Regional	APACRinpecregional
		Voluntarios	APACRvoluntarios
		Ordenamiento jurídico	APACRordenamientojuridico
		Empresa	APACRempresa
	Implementación (I)	Administrativa	APACIadministrativa
		Programas	APACIprogramas
	Experiencia (E)	Religiosa	APACEReligiosa
		Laboral	APACElaboral
		Educativa	APACEeducativa
		Personal	APACEpersonal
Resocialización	Concepto (CO)	Sentido (RCOsentido)	RECOsentido

(RE)	Tratamiento ¹ (T)	Religión		RETreligión
		Educación		RETeducación
		Laboral ² (L)	Artes	RETLartes
			Manualidades	RETLmanualidades
			Laborterapia	RETLlaborterapia
			Maquila	RETLmaquila
Autoidentidad (A)	Asistencia a condiciones de vida (ACV)	Satisfacción de necesidades básicas		REACVsatisfacciónnecesidadesbásicas
		Satisfacción de necesidades familiares		REACVsatisfacciónnecesidadesfamiliares
	Orientación sexual (OS)	Heterosexual		AOSheterosexual
		Homosexual		AOShomosexual
		Monogamia		APSmongamia
		Promiscuidad		APSpromiscuidad
		Lesbianismo		APSlsvianismo
	Familia ³ (F)	Padre		AFpadre
		Madre		AFmadre
		Hija		AFhija
		Esposa		AFesposa
		Hermana		AFhermana
	Construcción de la identidad (CI)	Imagen de sí		ACIimágenesi
		Imagen religiosa		ACIimagenreligiosa
		Imagen de recuperanda		ACIimágenesrecuperanda
		Imagen de peligroso		ACIimágenespeligroso

¹ Sobre efectos

² Para generación de ingresos.

³ En esta categoría se explorará el vínculo afectivo con la madre ya que el padre está ausente. Asimismo, se indagarán las relaciones con los demás miembros de la familia.

Institucionalidad (IN)	Representación (RE)	Funcionarios de vigilancia, custodia y tratamiento del INPEC	INREfuncionariosdevigilancia,custodiaytraento(INPEC)
		Voluntarios (Confraternidad Carcelaria de Colombia)	INREvoluntariosconfraternidadcarcelariadeombia
	Funcionarios penitenciarios (FP)	Administrativo	INFPadministrativo
		Vigilancia y custodia	INFPvigilanciaycustodia
		Tratamiento	INFPtratamiento
		Sacerdote	INFPsacerdote
	Voluntarios (V)	Directores del programa	INVdirectoresdeprograma
		Pastores – líderes religiosos	INVpastoreslideresreligiosos
		Psicólogo	INVpsicólogo
		Profesor	INVprofesor
		Abogado	INVabogado
	Conflicto (CON)	Implementación administrativa APAC (INPEC y Confraternidad Carcelaria de Colombia)	INCONimplementaciónadministrativaapac
		Sacerdote y voluntarios APAC	INCONsacerdoteyvoluntariosapac
		Voluntarios APAC y recuperandas	INCONvoluntariosapacyrecuperandas
		Recuperandas e institución (INPEC y Confraternidad Carcelaria de Colombia)	INCONrecuperandaseinstituciónINPECycc
		Recuperanda y recuperanda	INCONrecuperandayrecuperanda
		Recuperandas y no recuperandas	INCONrecuperandasynorecuperandas
Espiritualidad (E)	Noción (N)	Sentidos	ENSentidos
	Componentes (COM)	Estudios devocionales	ECOMestudiosdevocionales
		Cultoliturgia	ECOMcultoliturgia
		Asistencia espiritual individual y colectiva	ECOMasistenciaespiritualindividualycolectiva
	Resultados (RES)	Religiosidad	ERESreligiosidad
		Culpa	ERESculpa
		Arrepentimiento	ERESarrepentimiento
		Perdón	ERESperdón
		Recompensa	ERESrecompensa
Educación (ED)	Noción (NO)	Sentidos	EDUNOsentidos
	Componentes (COMP)	Alfabetización	EDCOMPalfabetización
		Estudios secundarios	EDCOMPestudiossecundarios
		Universidad	EDCOMPuniversidad
	Resultados (RESU)	Ofrecimiento de competencias laborales	EDRESUofrecimientodecompetenciaslaborales

		Ofrecimiento de competencias profesionales	EDRESUofrecimientodecompetenciasprofesionales
		Insuficiencia de competencias laborales	EDRESUinsuficienciadecompetenciaslaborales
		Insuficiencia de competencias profesionales	EDRESUinsuficienciadecompetenciasprofesionales
		Ausencia de competencias laborales	EDRESUausenciadecompetenciaslaborales
		Ausencia de competencias profesionales	EDRESUausenciadecompetenciasprofesior
Trabajo (T)	Noción (NOC)	Sentidos	TNOCsentidos
	Componentes (COMPO)	Laborterapia	TCOMPOLaborterapia
		Maquila	TCOMPOMaquila
		Manualidades u oficios	TCOMPOManualidades
		Artes	TCOMPOartes
	Resultados (RESUL)	Dinero	TRESULdinero
		Explotación	TRESULexplotación
		Oportunidad	TRESULoportunidad
		Agotamiento	TRESULagotamiento
		Indiferencia	TRESULindiferencia
		Rechazo	TRESULrechazo

Tabla 9. Tabla de códigos ATLAS TI

3. Hallazgos y resultados

En términos generales, se examinó todo el material informativo antes mencionado. Con el análisis de los documentos se pretendió conocer la justificación, el proceso de inicio y conflictos que surgieron en el COPED alrededor del método APAC. De igual forma, se evidenció cuál es la imagen y el concepto que de las mujeres privadas de libertad que purgan condena posee el establecimiento y las organizaciones sociales de tipo religioso que sirven de apoyo y complemento a las actividades de tratamiento penitenciario.

Los diarios de campo, entrevistas, cuestionarios, talleres, el diagnóstico rápido de participación y el grupo focal se sintetizaron y organizaron considerando la tabla de categorías de contenidos temáticos creada por el investigador. Lo anterior, permitió centrar el análisis en la eficacia del método APAC. Este estudio incluye tanto los detalles de los componentes visibles de la metodología (o del tratamiento), es decir, su contenido manifiesto, como el acceso que se ha formado en las reclusas, así mismo se pudo conocer el interés, expectativa, punto de vista y temor que ellas tienen con respecto a sus hijos y a su futura salida de la cárcel.

Atendiendo a la vasta información, y a fin de garantizar un uso adecuado y riguroso de la misma, esta se organizó y examinó mediante el programa de ATLAS.Ti. Este es un sistema informático para el estudio hermenéutico del contenido de textos, audios, imágenes, videos y geodatos. El programa permite tener dos niveles de análisis: el textual y el conceptual. El primero la escogencia que el investigador realiza de fragmentos de diversos archivos del

material recolectado. Con estos se crean citas, códigos y anotaciones. El nivel conceptual.

Este elemento conlleva dos aspectos:

- Hacer correspondencias posibles entre los códigos, las citas y las anotaciones.
- Realizar escritos interpretativos.

A continuación, se visualizan algunas categorías de primer y segundo nivel:

Figura 1. Código APAC.

Figura 2. Código de resocialización

Figura 3. Código de autoidentidad.

Figura 4. Código de institucionalidad

Figura 5. Código de espiritualidad

Figura 6. Código de educación

Figura 7. Código de trabajo

El programa de Atlas. Ti refrendó el proceso de análisis e interpretación de los datos en forma ordenada y progresiva. Gracias a ello fue posible seleccionar e identificar párrafos, palabras, frases, fotografías que poseen significado en relación con el problema y pregunta de la tesis. De otra parte, permitió hacer a un lado documentos irrelevantes al estudio, pero que a futuro puede ser importante para otro. Los datos seleccionados se relacionaron, agruparon y contrastaron permanentemente con las categorías establecidas, asimismo, con las referencias teóricas que las orientan. Es preciso mencionar que la gran mayoría de estas divisiones surgieron inductivamente, es decir, del trabajo de campo, o lo que es lo mismo, de la propia realidad observada durante nuestra permanencia en el pabellón de APAC.

Ahora bien, los datos analizados permitieron darle respuesta a la pregunta planteada en la tesis doctoral. No obstante, es menester mencionar algunas dificultades. En primer lugar, fue complicado y lento crear un clima de confianza con las mujeres privadas de libertad. De tal forma que, cuando se les contó sobre las razones del proyecto, y cuando se les indagó por su ayuda como grupo de apoyo y fuente de información para este, solo una de ellas estuvo dispuesta, las demás se negaron. Al comienzo eran bastante desconfiadas y recelosas en el momento de hablar delante de la presencia del investigador, dado que concebían este trabajo como un factor desventajoso para su circunstancia jurídica y personal.

En segundo lugar, en muchas oportunidades las recuperandas no estaban emocionalmente en condiciones de compartir su experiencia y punto de vista sobre el programa. Los problemas personales, las necesidades económicas, las ansiedades y los niveles de estrés se disparaban como consecuencia del encierro. Por ello, para ese momento lo que se hacía era

brindar una escucha activa y en mesa redonda llegar al consejo adecuado al caso expuesto. En tercer lugar, el COPED es una prisión de máxima seguridad que demanda una serie de prohibiciones que se deben respetar tales como no poder ingresar grabadora, cuadernos argollados, reloj y correa, solo se podía estar en el sector de APAC en unas horas determinadas y llevar una cantidad muy pequeña de hojas de papel en blanco y uno o máximo dos lapiceros, de lo contrario, había que tramitar un permiso con la dirección; o en algunas fechas no poder pasar por condiciones como: intentos de fuga, revueltas o por no dar el conteo de los internos, en fin un sin número de circunstancias propias de un contexto de convictos. Esto generaba que muchas veces no se pudiera entrar, en muchas oportunidades se estaba desde la mañana en la penitenciaría y se debía esperar hasta las horas de la tarde para poder acceder al recinto de APAC.

4. Presupuestos éticos

Los participantes del estudio investigativo lo hicieron de forma voluntaria y libre de todo riesgo para la salud física, mental y la seguridad. Se les indicó desde el inicio que su identificación sería protegida, excluyendo sus nombres y codificando los datos que brindaron, los cuales se han guardado en un lugar hermético, al que solo ha tenido acceso el investigador, y una vez finalizada la tesis, este material se destruirá. Por eso se suministraron los formatos de consentimiento informado y, por último, va a existir un momento de transferencia de los logros obtenidos a las personas de Pedregal y demás individuos que manifiesten interés.

PRIMERA PARTE

EL ACTUARIALISMO Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

(...) la institución penitenciaria no se conforma con recoger y amontonar a los (sub)proletarios tenidos por inútiles, indeseables o peligrosos, y ocultar así la miseria y neutralizar sus efectos más desestabilizadores; con demasiada frecuencia se olvida que ella misma contribuye activamente a extender y perennizar la inseguridad y el desamparo sociales que la alimentan y le sirven de aval. Institución total concebida para los pobres, medio criminógeno y desculturante modelado por el imperativo (y el fantasma) de la seguridad, la cárcel no puede sino empobrecer a quienes le son confiados y a sus allegados, al despojarlos un poco más de los magros recursos con que cuentan cuando ingresan a ella, suprimir bajo la etiqueta infamante de “preso” todos los estatus susceptibles de otorgarles una identidad social reconocida.

Wacquant, Loic. Las Cárceles de la miseria.

1. Introducción

Desde las ciencias que intervienen en el saber penal con sus operadores jurídicos, nacen en la contemporaneidad, dos perspectivas más pragmáticas y técnicas que responden al imperativo de estructurar, en perspectiva utilitaria, el incremento de seguridad y orden exigidos al Estado al momento de abordar las preocupantes y profundas percepciones que tiene la ciudadanía sobre el crimen y la violencia. De un lado, el Análisis Económico del Derecho (AED) y, de otro lado, el actuarialismo. Uno y otro mantienen la idea de asumir el fenómeno criminal como un hecho social normal; al delincuente como un ser racional y egoísta; al sistema judicial deficiente, paquidérmico y con un margen alto de impunidad que exige inversiones de naturaleza económica considerables y, sin embargo, dejan en total abandono a la víctima. De igual forma, ambas teorías resignifican las funciones que ha de cumplir el sistema penal como instrumento de control directo de la criminalidad, con el fin de satisfacer en términos positivos las exigencias sociales de convivencia y protección. Por ello, ambas perspectivas proponen un aparato de justicia eficiente que cuente con etapas procesales cortas o rápidas en la solución de los casos, sobre todo, que controle por un buen tiempo, mediante el encierro, a los delincuentes más peligrosos. Enfatizando, explícitamente, en su neutralización, así como en su administración ante la imposibilidad de eliminarla.

Sin embargo, existen notables diferencias entre ambos análisis al momento de justificar el control del delito. Mientras que el AED se dirige, principalmente, a controlar al infractor en forma individual por medio del endurecimiento de penas, el actuarialismo prefiere decantarse por colectivos sociales calculando en cada uno de ellos el peligro que representan. El primero renuncia al tratamiento en tanto entiende al transgresor como un ser no necesitado, racional, capaz y, plenamente, responsable que hay que inocuizar, custodiar y vigilar durante el cumplimiento de la pena, mientras que el actuarialismo, a pesar de ello, se niega, formalmente, a renunciar al ejercicio de la prevención especial positiva de la

ejecución del castigo sin desconocer la necesidad de neutralizar selectiva e, individualmente, a la persona considerada en tanto pertenezca a uno de los grupos poblacionales determinados.

De lo anterior, se puede concluir que el paradigma del AED juega un papel de complementariedad, y, en modo alguno, de oposición al actuarialismo. Dado que en su labor de castigar eficiente y, certeramente, con el menor costo posible, optimiza el presupuesto económico y demás recursos asignados por la Institución para la prevención del delito. En este contexto, Feeley y Simon (1992, p. 48) afirman que hay que “manejar una población permanentemente peligrosa y mantener el funcionamiento del sistema penal con un mínimo costo”.

Tras el debilitamiento en 1970 de la función resocializadora de la pena en el ámbito anglosajón, así como las críticas a este principio por parte de criminólogos (Bargalli, 1986), más la renuncia de los Estados a reconocer y paliar los efectos negativos sobre los estratos sociales medios y bajos generados por las políticas económicas liberales, emerge a nivel suramericano (Brasil) la necesidad de reaccionar ante la orientación del *Ius Puniendi* para intervenir desde una perspectiva distinta los conflictos sociales, revirtiendo con un modelo penitenciario propio (APAC) las decisiones político criminales de menos resocialización y más encierro asumidos por los dos modelos antes referenciados.

El sistema penitenciario apaquiano no abandona la resocialización como función de la pena, y, en cambio, insiste en intervenir los factores individuales y sociales que influyeron en el acto delictual con el fin de facilitarle al condenado durante el cumplimiento de su castigo un lugar en donde pueda utilizar el tiempo para que inicie un proceso de resignificación consciente de su ser, emociones y autoestima con el fin de prepararlo a futuro a actuar apartado del delito. Dado que APAC entiende esta vulnerabilidad del individuo, explicable por las pocas o por no decir nulas condiciones educativas, económicas y sociales que lo han rodeado durante toda su existencia, sin olvidar que, al mismo tiempo, está bombardeado por

mensajes creados por la sociedad del consumo y que se los presenta como estereotipos a seguir, puesto que son esos y no otros, los que a sentir del liberalismo económico le dan valor y sentido a la vida misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se ha optado por describir el actuarialismo en sus orígenes, al igual que el modelo social, político y económico propicio a sus presupuestos para mostrar cómo ello ha favorecido a la criminología situacional, a la pena impuesta en su ejercicio de prevención especial negativa; indicando, asimismo, el impacto que sobre el derecho penitenciario ha logrado materializar. Para alcanzar lo anterior, se han consultado y expuesto a diferentes autores, tales como Feeley y Simon, Bergalli, Rivera, Brandariz, Harcourt, Pavarini, De Giorgi, Santoro, Garland, Wacquant, Iturralde, entre otros. Estos teóricos permiten comprender la necesidad de ir, nuevamente, al concepto de resocialización y a las actividades de tratamiento penitenciario, tal y como lo ordena el marco jurídico internacional y nacional a favor del condenado, a pesar de que para algunos sea un tema caduco o pasado de moda e inoperante de cara a la prisión real. Reiterar sobre el contenido de la pena con sus discusiones a lo largo de la historia y su consagración legal es una reflexión innegable, si se quiere seguir en la idea de construir para Colombia un sistema penitenciario mejor al que se tiene o suprimir y por qué no abolir esta práctica de castigo hija de la modernidad.

2. Antecedentes del actuarialismo

El actuarialismo - procede de la palabra actuario⁴ - permite funcionalizar el control social de la comunidad que cumple el Derecho Penal sobre la amenaza social y criminal que representan determinados grupos poblacionales al orden establecido, en clave administrativa. Dado que

⁴ De acuerdo con el diccionario de la lengua española (edición del Tricentenario), actuario es la “persona versada en los cálculos matemáticos y en los conocimientos estadísticos, jurídicos y financieros concernientes a los seguros y a su régimen (...)”.

renuncia a explicar el comportamiento delictual a partir de sus causas comunes y psicológicas para focalizar su esfuerzo en identificar probables agrupaciones de peligro, así como los factores de riesgo propios de cada uno de ellos y/o caracterizar sus específicas categorías de comportamiento transgresor.

Harcourt (2007, p.1) se refiere al actuarialismo como:

el uso de métodos estadísticos, en vez de clínicos, consistentes en amplias bases de datos, (sic) para determinar los diferentes niveles de actuación criminal relacionados con uno o más rasgos grupales, a los efectos (1) de predecir la conducta criminal pasada, presente o futura, y (2) de administrar una solución político-criminal basada en tablas actuariales cuyo formato se obtuvo del sector de seguros, usadas para predecir las tasas de mortalidad de diferentes grupos de sujetos asegurados y para fijar las primas individuales.

Nos recuerda Rivera (2015, p.106) que ya en la historia de las compañías de seguros se tienen registros que datan del siglo XIX que dan fe del anhelo de predecir o de anticiparse a los riesgos existentes para ese tiempo y momento social. En ellos se cuenta que el actuario se había encargado de elaborar una lista de los riesgos que podrían darse en la navegación, en los negocios o en otras circunstancias.

Más adelante y con nuevos instrumentos y técnicas estadísticas sobre ese mismo principio de predecir el futuro a partir del pasado, las empresas aseguradoras han construido grandes riquezas. Ante el éxito de esta experiencia, el actuario extendió el principio para aplicarlo a otros

campos como, por ejemplo, a algunos aspectos de la conducta humana, en particular, al comportamiento criminal.

En efecto, los profesores Jonathan Simon y Malcolm Feeley con fundamento en el *riesgo* dieron origen a la *nueva penología* y a la *justicia actuarial*, a continuación, la explicación histórica de parte del profesor Feeley sobre el origen de la política actuarial en los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) acaecida entre las décadas de 1960 a 1970.

Tal y como lo explica Feeley, en los EEUU de los años sesenta (60) y setenta (70), se dio inicio al abandono de la libertad bajo fianza como forma de excarcelación anticipada y, a cambio de ella, se proponía la detención preventiva como una nueva manera de resolver los problemas con relevancia penal. El origen de este cambio se encuentra en la aplicación de la lógica de la predictibilidad actuarial propia del derecho de seguros al proceso penal: de pronosticar a partir de sistemas de información y técnicas predictivas, basadas en la fortaleza del lazo comunitario, quién sí se iba a presentar al tribunal y quién es propenso a riesgo de huida. Se pasó a vaticinar quién cometería delitos esperando el juicio y, por lo tanto, quién encarna riesgo para la seguridad pública estará sujeto a detención preventiva (Feeley, 2008, pp. 21, 24, 26).

A lo largo de su exposición, el autor afirma que la justicia actuarial puede pensarse en dos sentidos, uno fuerte y uno débil. De un lado, el componente fuerte se enfoca en la capacidad de ofrecer asesoramiento sobre riesgo y de hacer predicciones válidas y confiables. “*Esto, tal como he sugerido, no ha sido conseguido*” (Feeley, 2008, p. 31). De otro lado, la concepción débil aspira a predecir la peligrosidad del comportamiento, aunque en lo real no pueda hacerlo, pero ha

logrado bajo esta idea establecer en las agencias del Estado norteamericano una nueva organización, técnicas, objetivos y responsabilidades en relación con la actividad criminal “que no hubieran sido permitidas bajo un régimen tradicional de derechos” (Feeley, 2008, p. 32). Feeley concluye: “ Lo cierto es que la justicia actuarial está firmemente (sic) afianzada en el sistema de justicia penal norteamericano” (2008, p. 34).

Toda esta historia para confirmar que el actuarialismo penal se vale de métodos estadísticos para determinar las decisiones políticas criminales relacionadas con el tema del crimen y aplicables a determinados grupos poblacionales. Por ende, el actuario asume el comportamiento criminal o el delito como algo normal o habitual, no evitable en la interrelación social y sobre el cual es posible decidir política y jurídicamente, manteniendo indicadores aceptables.

Lo anterior, ha impactado el funcionamiento del sistema penal en sus tres momentos de actuación. En la fase de creación de la conducta delictual, el legislador se traslada del acierto de los delitos de lesión y de peligro concreto a la técnica legislativa de los de peligro abstracto para prevenir de forma anticipada la afectación del bien jurídico (muchos de ellos de recién creación poseen contenidos indeterminados) a estadios propios de los actos preparatorios no solo de los autores sino también de los partícipes: se aumenta el número de delitos, se incrementa la cantidad de la pena, se flexibilizan las garantías procesales, entre otras.

En la etapa de la persecución del delito, el actuarialismo propone intervenir el espacio social por medio de cámaras de vigilancia, seguridad privada, comités ciudadanos de custodia, alarmas comunitarias y pago de informantes, para, mediante la llamada criminología situacional, reducir

significativamente la oportunidad de éxito en la comisión del acto delictual y hacer a un lado el funcionamiento posdelictual en la lucha contra el crimen por el control predelictual.

Al instante de la ejecución de la pena, el actuarialismo ha rescatado la función de la misma en su aspecto de prevención especial negativa o neutralizadora de los delincuentes definidos con alto índice de peligrosidad con la idea de asegurarlos más como grupos poblacionales que como individuos a intervenir en sus “almas”.

Como consecuencia de ello, la función resocializadora de la pena se mantiene como una declaración consagrada en la ley, pero sin ninguna o escasa aplicabilidad en el espacio de la prisión. Por tanto, se requiere una transformación del sistema penal que obedezca a nuevas finalidades y roles al que está llamado a cumplir el Derecho Penal al interior de una sociedad que en la actualidad se le denomina de riesgo, a un modelo económico mundial de tinte neoliberal y al declive del modelo social del Estado

De acuerdo a Domínguez Figueirido (2003, p. 9), en la década de 1970, el sistema penal enfrentó una tasa de criminalidad significativa, un costo elevado de los programas de prevención del delito y una percepción social del fracaso de la resocialización de la persona condenada. Este tiempo coincide con la crisis económica y los límites que tiene el Estado para redistribuir e integrar los poderes públicos en términos de bienestar. De igual forma, se difunden resultados de investigaciones criminológicas y sociales que parecen mostrar la no existencia de una relación directa entre marginalidad y delincuencia. Lo que ha causado según Santoro (2004), un vacío

teórico que no permite legitimar las funciones de prevención especial y general del *ius puniendi* - facultad del Estado para castigar -(p.102).

Ante esta situación, el sistema penal se ve compelido a integrar técnicas de control de bajo costo y a mostrarse eficiente en la administración de los grupos de riesgo. Para ello asume estrategias desarrolladas en el sector privado y se compromete en colaborar con otras instituciones para lograr superar el déficit de seguridad pública. (Domínguez Figueirido, 2015, p. 10).

Explica Santoro (2004, p. 108) que el primer país en articularse a esta lógica fue Estados Unidos con políticas de tolerancia cero. Conforme a ello, inician el castigo con pena privativa de libertad a comportamientos de escaso daño o actos de falta de civilidad, igualmente, se esfuerzan en presentar a esta población condenada como enemigos sociales.

Todo ello con la idea de prevenir mediante la disuasión la criminalidad propia del territorio ocupado por categorías sociales y potencialmente peligrosas con el fin de obtener a corto plazo el mantenimiento de la paz.

Santoro menciona otra característica de este cambio en el sistema penal de EEUU como es la renuncia a explicar las causas de la criminalidad en las condiciones sociales del autor del delito, a sus carencias económicas, a su grado educativo, a sus capacidades personales para asumir como su origen la libertad de elección del sujeto criminal en el momento de decidirse a infringir

la norma social y penal. Adoptando el punto de partida propuesto por Emilio Durkheim (Santoro, 2004, p. 106, 158).

Efectivamente, Durkheim (2001, p. 113) asume el crimen como una expresión general de la maldad de los hombres, es decir, el delito es un fenómeno inevitable que se presenta en todo tipo de sociedad y está en íntima relación con sus condiciones de vida, con su cambio y modificación. Expone Durkheim (2001) que el acto criminal ofende ciertos sentimientos colectivos dotados de una energía y de una claridad particular:

Para que en una sociedad determinada se dejen de cometer actos considerados criminales sería preciso que los sentimientos que hieren se encontraran en todas las conciencias individuales sin excepción y con el grado de fuerza necesaria para contener los sentimientos contrarios. Ahora bien, suponiendo que dicha condición pudiera existir efectivamente, el crimen no desaparecería, cambiaría solamente de forma; porque la causa misma que secaría así las fuentes de la criminalidad abriría inmediatamente otras nuevas.

En efecto, para que los sentimientos colectivos que protege el Derecho Penal de un pueblo, en un momento determinado de su historia, consigan penetrar en las conciencias que les estaban hasta entonces cerradas, o ejercer un mayor imperio donde no lo tenían suficiente, es preciso que adquieran una intensidad superior a la que tenían hasta entonces.

Es necesario que la comunidad en su conjunto los (sic) experimente con mayor fuerza; (sic) porque no pueden (sic) encontrar en otra fuente el máximo vigor que les (sic) permita imponerse a los individuos que, antaño, les (sic) eran más refractarios. Para que

los asesinos desaparezcan es preciso que el horror de la sangre derramada aumente en esas capas de la sociedad donde surgen los criminales; (sic) pero para esto es necesario que se extienda a toda la sociedad (ps.114 – 115).

Por ende, la criminalidad no será considerada anormal o en una tasa exagerada en tanto se mantenga dentro de cierto nivel y no supere determinado rango establecido por el orden social, de igual manera, Durkheim (como se citó en Gómez Jaramillo, 2012, p.15) asume al criminal como un agente regulador del cambio social que por su contexto no conoce, acepta o interioriza las normas que las mayorías asumen.

Hay que mencionar que Estados Unidos de Norteamérica se interesa por el pensamiento de Durkheim en el año de 1920 debido al surgimiento de las grandes ciudades como Detroit y Chicago y al impacto social que genera en ellas los procesos de transformación económica (Pavarini, 2002, p.67).

De acuerdo con Pavarini (2002, p.68), entre estos impactos se encuentran: el aumento indiscriminado de la miseria, prostitución, enfermedades mentales y delincuencia organizada; a causa de ello, la criminología pondrá a la ciudad como su centro de observación y conocimiento, en particular la relación de los hombres con su entorno espacial, y sus reacciones ante él.

Tal y como expone Park (1999, 123) la imagen que tiene el individuo de sí mismo, el rol que desempeña en la sociedad y la personalidad que asume están determinados por el mundo en que vive. El hombre crea los espacios con significados, pero estos lugares a la vez lo “habitan”, es

decir, lo condicionan para ver y percibir el mundo, lo caracterizan e intervienen su comportamiento.

La ciudad ha sido descrita como el hábitat natural del hombre civilizado. En la ciudad, el hombre ha desarrollado la filosofía y la ciencia, (sic) y se ha convertido no sólo (sic) en un animal racional sino también en un animal sofisticado. Eso quiere decir, en primer lugar, que es en el medio urbano -en un mundo construido por el hombre- donde éste (sic) alcanza por vez primera una vida intelectual y adquiere aquellas características que le distinguen de los animales inferiores y del hombre primitivo. La ciudad y el entorno urbano representan para el hombre la tentativa más coherente y, en general, la más satisfactoria de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio deseo. Pero si la ciudad es el mundo que el hombre ha creado, también constituye el mundo donde está condenado a vivir en lo sucesivo. Así pues, indirectamente y sin tener plena conciencia de la naturaleza de su obra, al crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo (Park, 1999, p.115).

Explica Bergalli (1983, pp.115 - 116) que la escuela de Chicago entiende que el espacio urbano con control social reducido es el lugar donde se corre el riesgo a que los comportamientos criminales bajo la influencia del ambiente se transmitan entre personas con características similares, de igual forma, la criminalidad predelictual tiende a concentrarse en dichos territorios, recibiendo estas zonas urbanas el nombre de áreas delincuenciales.

Lo anterior quiere decir que, en términos sociales, es normal que la criminalidad sea uno de los riesgos a los que se esté expuesto, de allí que la tarea del actuuario sea administrar la conducta

delictiva como amenaza que se presenta dentro de un rango que no ponga en cuestión el orden y la convivencia social.

3. Contexto social y político del actuarialismo:

Para comprender el actuarialismo en Colombia se debe hacer un acercamiento a las categorías de sociedad del riesgo y de gobernabilidad, véase:

a. La sociedad del riesgo. Uno de los pilares en que se soporta el actuarialismo en la lucha contra el crimen es la idea de riesgo⁵, categoría que es introducida por primera vez al campo social por Ulrich Beck en lo que él denominó sociedad del riesgo. Beck (1997, p. 18) la define como una fase de la modernidad en la que los peligros sociales, políticos, económicos e individuales tienden cada vez más a escapar de las instituciones de control y protección de la sociedad industrial.

En consecuencia, la posibilidad siempre latente de tener procesos de riesgo que culminen afectando bienes o derechos de naturaleza individual o social porque no pueden ser controlados en su totalidad genera en las personas la necesidad de actuar, es decir, es el sentimiento de inseguridad, la sensación de desprotección, desamparo o el miedo creado por la amenaza de tener peligros que se salgan de control lo que determina que el individuo se resuelva a tomar cartas sobre el asunto para su neutralización (Beck, 2002, p.214). Por eso es que cuando una persona

⁵ Los riesgos son el producto histórico, la imagen refleja de las acciones humanas y de sus omisiones (...). Beck, 1998: 237).

calcula un peligro quiere controlar el futuro, sujetar el espacio y el tiempo a su voluntad, tener como principio rector la administración de la propia vida como un proyecto empresarial.

Sin embargo, explica Douglas (1996:11, 16)

Las nociones de riesgo no están basadas en razones prácticas o en juicios empíricos. Son nociones construidas culturalmente, que enfatizan algunos aspectos del peligro e ignoran otros. Se crea, así, una cultura del riesgo que varía según la posición social de los actores (...) los grupos sociales utilizan el riesgo para controlar las incertidumbres y afirmar sus normas en la sociedad.

Como ya Thomas (como se citó en Albrecht, 2000, p.478) anotó que, “lo que se piensa como real es real en sus consecuencias, de manera que si se produce una determinada imagen de la realidad, esa imagen tiene efectos reales”.

Lo “real” puede entenderse como el conjunto de representaciones que elabora una comunidad lingüística para orientarse, seleccionar, controlar, estabilizarse y sobrevivir, sin hacer referencia alguna a una ontología (Santoro, 2004, p.433).

En este sentido se pronuncia Silva Sánchez:

(...) dudoso que la medida de la inseguridad sentida por los ciudadanos se corresponda de modo exacto con el grado de existencia objetiva de riesgos difícilmente controlables o, (sic) sencillamente incontrolables (los propios de la Risikogesellschaft) que les afectan personalmente y de modo inmediato. [...], resulta innegable que la aparición de los nuevos

riesgos se ve, en cierto modo, compensada por la radical reducción de los peligros procedentes de fuentes naturales [...]. Por ello, más bien puede sostenerse de modo plausible que, por muchas y muy diversas causas, la vivencia subjetiva de los riesgos es claramente superior a la propia existencia objetiva de los mismos. Expresado de otro modo, existe una elevadísima “sensibilidad al riesgo. (2001:37).

En relación con lo anterior, explica Prado (2013, p.304) que actualmente, el riesgo se presenta en todas las esferas del estudio de la sociedad. Así, en los ámbitos de la ciencia penal y la política relacionada con el crimen se advierte un proceso de cambio de formas vigentes de lucha contra la delincuencia, a partir de métodos y técnicas de análisis, control y reducción de amenazas.

Definitivamente, el uso del concepto de riesgo sufre una transformación cuando se utiliza en la esfera político criminal en el sentido de ser un concepto que pierde su uso objetivo en el cálculo de las contingencias y pasa a ser una categoría que permite justificar la toma de decisiones en cabeza de instituciones lícitas y judiciales bajo el significado de peligro.

Ahora bien, riesgo significa políticamente peligro. En este contexto y para comprender mejor la solicitud de protección apoyada en la sensibilidad a la amenaza, habría que decir con De Giorgi (2005, p. 126) que ella es generada por la influencia que ejerce la lógica actuarial en la percepción que se tiene sobre el delito como en determinados sujetos considerados fuente de inseguridad.

Por tal motivo, las instituciones administrativas encargadas de brindar orden y confianza en la ciudadanía (control social) se ven presionadas a presentar públicamente programas de seguridad que intervengan sobre el ambiente, los factores y los contextos que generan riesgos o sobre los comportamientos exteriores de los grupos comunitarios (De Giorgi, 2005, p.39).

Con la pretensión de rescatar o elevar el sosiego en los derechos y bienes que, estadísticamente, se ven amenazados por los peligros que se presentan en el espacio social, de ahí que se le exige a las entidades gubernativas a elevar expectativas de seguridad en la existencia subjetiva del riesgo o por la mera sospecha de esa coyuntura. Dice Beck que esa es la “razón por la que el ‘nacimiento social’ de un peligro es un suceso que es por igual improbable y dramático, traumático y perturbador para toda la sociedad”. (2002: 89).

Por otra parte, explican Brandariz García y Faraldo Cabana que las instituciones bajo la perspectiva de la política actuarial delegan entre los ciudadanos y las organizaciones sociales la obligación de mantener espacios confiables e íntegros para los bienes jurídicamente protegidos frente a los riesgos que los amenazan y de asumir el control de la delincuencia como respuesta compartida al requerimiento colectivo de seguridad.

Añaden que en la sociedad del riesgo se presenta una ‘comunitarización’ de la gestión de la seguridad, en la cual los individuos y las agregaciones sociales en las que se integran, son requeridos para que procedan a la propia protección de sus espacios de realización personal”. (2006, p. 23).

Ahora bien, la Política Criminal relacionada con el crimen, el Derecho Penal, Procesal Penal y el Penitenciario vigente están dedicándose como instrumento político de liderazgo a responder a la sensibilidad al peligro con el único propósito de controlar o reducir la delincuencia a partir de métodos y técnicas de cálculo estadístico propio del aseguramiento y manejo de la incertidumbre; sin embargo, se quiere resaltar el hecho de no olvidar que en la mayoría de los casos el sistema está actuando ante inseguridades e incertezas, amenazas no objetivas o que no se encuentran dentro de la línea tecnológica de la sociedad del riesgo para alcanzar el control concreto de la población que puede causar aquellas demandas de seguridad por ser considerada con cierto nivel de contingencia o características que hacen posible su identificación, registro y administración (De Giorgi, 2005, p.61).

Ciudadanos que por regla general son los socialmente excluidos, y por ende, fuente del fraccionamiento social (Díez Ripollés, 2005, p.10). Como se advierte, el efecto de esa caracterización culmina en que los sectores electos como portadores de riesgos de naturaleza criminal serán objetos fuertemente vigilados y controlados, pero no erradicados.

Del Rosal Blasco (2009, p.21) refiere que el delincuente no crea trabas sociales sino que son más bien estas como propias del funcionamiento del sistema los que crean delincuentes. En el mismo sentido, puntualiza Rodríguez (2007, p.103) cuando afirma que es el propio orden socioeconómico, con su incapacidad para establecer los necesarios equilibrios políticos y colectivos y de prestar la atención debida a los nuevos problemas del mundo, el que contribuye a situaciones de exclusión, y por supuesto al surgimiento de actividades ilegales.

b. Gobernabilidad. Se propone indicar en este apartado que en la base del actuarialismo se encuentra la biopolítica como un poder de control que se ejerce sobre la población con la finalidad de resolver problemas colectivos que se presentan en su interior desde la seguridad del orden político y social establecido.

Tal y como lo explica Castro (2012) en el texto *El vocabulario de Michel Foucault* hay que entender por biopolítica la manera en que a partir del siglo XVIII se buscó solucionar los problemas planteados por la población a la práctica de gobierno en relación con la salud, higiene, natalidad, longevidad, raza, etc.

Esta nueva forma del poder se ocupará entonces de lo siguiente: 1) De la proporción de nacimientos, de decesos, de las tasas de reproducción, de la fecundidad de la población; en una palabra, de la demografía. 2) De las enfermedades endémicas: de la naturaleza, de la extensión, de la duración, de la intensidad de las enfermedades reinantes en la población y de la higiene pública. 3) De la vejez, de las enfermedades que dejan al individuo fuera del mercado del trabajo; también, entonces, de los seguros individuales y colectivos y de la jubilación. 4) De las relaciones con el medio geográfico, con el clima; del urbanismo y la ecología (p.63).

En efecto, la biopolítica se centra en el arte de gobernar la vida de la especie humana por medio de la estadística, cálculos económicos y de determinadas técnicas con miras a controlar “cualquier insurrección, levantamiento o revolución contra la persona representativa del orden jurídico-político” (Ruiz, 2106, p.227) basándose en la “gestión y control de los individuos mediante su sometimiento e inmovilización” (Foucault (como se citó en Ruiz, 2016, p.232).

Con respecto a esta nueva forma de gobernar a la población, dice Foucault que una de las primeras manifestaciones de control que se hará sobre el espacio urbano obedecerá políticamente a la necesidad del burgués de neutralizar las revueltas de subsistencia promovidas por la población obrera por medio de la instrumentalización del modelo médico de la cuarentena con el fin de:

(A) Analizar los lugares de acumulación y amontonamiento de todo lo que en el espacio urbano podría provocar enfermedades, lugares que generaban y difundían fenómenos epidémicos o endémicos. Se trataba fundamentalmente de los cementerios (...) (B) el control de la circulación (...) de las cosas o de los elementos, esencialmente el agua y el aire. (C) La organización de lo que podríamos llamar distribución de secuencias (...) las fuentes de agua y los desagües o de las bombas y de los lavaderos fluviales (...) Los espacios comunes como los lugares de circulación, los cementerios, los osarios y los mataderos fueron controlados (...) (1996, pp. 93-98). Resalto fuera de cita.

Detrás de esta jugada política de control urbano se hará necesario dividir el espacio de la ciudad entre ricos y pobres ya que de ellos continuar compartiendo el mismo territorio no será posible contrarrestar los conflictos de convivencia social en los que se encuentran envueltos, de modo, que de continuar así los pobres constituyen un “peligro sanitario y político para la ciudad” (Foucault, 1996, p.103).

Hay que destacar que el biopoder encarna una forma de normalización de la sociedad en tanto la misma se amolde, de un lado, al ordenamiento jurídico y, de otro lado, se legitime tras el ejercicio de la soberanía expresada en ella (Castro, 2010, p.28). Por ello, la finalidad de la

política criminal actuarial reside en reducir legalmente el peligro producido por sujetos pertenecientes a determinados grupos delincuenciales sobre la base de prohibir cualquier señal de riesgo por pequeña que esta sea.

Lo anterior, con el pretexto de la seguridad del orden interno y tras la posible “crisis” de los dispositivos disciplinarios del sistema social (familia, ejército, fábrica, hospital psiquiátrico, escuela, prisión) que ejercían en el pasado su control por medio de la transformación del carácter fuerte o de la personalidad violenta expresada, entre otros rasgos, mediante el acto delictual.

La transición de la sociedad disciplinaria a la de la seguridad determina mostrar sus diferencias a pesar de reconocer que ambas en su naturaleza son y continúan siendo técnicas para gobernar integralmente al sujeto tanto dentro del espacio cerrado como abierto de la urbe. En este sentido se refiere Foucault:

No hay era de lo legal, era de lo disciplinario, era de la seguridad. No tenemos mecanismos de seguridad que tomen el lugar de los mecanismos disciplinarios, que a su vez hayan tomado el lugar de los mecanismos jurídicos legales (2006, p. 23).

Estos contrastes se harán y se complementarán desde la explicación y análisis que hace Castro (2012, P.65) de la clase dictada por Foucault el 17 de marzo de 1976. Primero, en cuanto al objeto: la disciplina tiene como centro el trabajo del ente individual vigilado y puesto en forma sin desconocer que en algunos eventos se puede castigar; mientras que en la biopolítica, es el

cuerpo múltiple, la población, el hombre como ser viviente, como perteneciente a una especie biológica.

Segundo, en cuanto a los fenómenos considerados: mientras las disciplinas tratan los eventos individuales de custodiar, adiestrar, utilizar y castigar como objetos de saber; la biopolítica estudia situaciones de masa, en serie, de largo aliento para su ponderación y moderación como el nacimiento, la enfermedad y la muerte.

Tercero, en cuanto a sus mecanismos: las herramientas de las disciplinas son del orden del adiestramiento del cuerpo (vigilancia jerárquica, exámenes individuales, y ejercicios repetitivos); para la biopolítica son procedimientos de previsión, de cálculo, de cómputo estadístico y disposiciones globales.

Cuarto, en cuanto a la finalidad: mientras la disciplina se propone obtener cuerpos útiles económicamente y dóciles políticamente para gobernarlos; la biopolítica persigue el equilibrio de la sociedad, su homeostasis y su orden, en síntesis, instalar mecanismos de seguridad alrededor de la gente para su regularización (Foucault, 2001, pp. 119 - 223).

Como consecuencia de este cambio, Deluze (como se citó en Brandariz, 2014b, p.49) expone que el control ha trascendido el punto fijo del presidio al discreto seguimiento e injerencia en los grupos definidos como peligrosos en todo el territorio. Este ajuste de la gestión y control de la delincuencia impacta a la pena de prisión en tanto el control del convicto se puede dar extra penitenciariamente mediante dispositivos electrónicos como el brazalete que permite su

ubicación espacial de forma inmediata, de tal forma, que mantenga a los condenados de alta peligrosidad segregados y neutralizados contenidos en la cárcel sin propósito resocializador siempre y cuando todo este proceder se justifique por razones de seguridad.

Por tanto, la perspectiva del actuarialismo es, en últimas, la de administrar a la población privada de libertad en calidad de condenados mediante el discurso de la seguridad puesto que es obvio el nexo que existe entre esta con el biopoder: la seguridad es una forma de biopoder, en el sentido de que asume la tarea de producir y transformar la vida social en un plano más general y global (Hardt & Negri, 2006, p. 43).

4. Actuarialismo y su dependencia con el modelo económico neoliberal.

En términos de Harvey, el neoliberalismo es aquella teoría de prácticas políticas y económicas que proponen que el bienestar humano puede ser mejor logrado mediante la maximización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, autonomía individual, mercados sin trabas, y libre comercio. Para ello, el Estado debe establecer funciones militares de defensa, policía y judiciales requeridas para asegurar las facultades de posesión particular y apoyar sitios de oferta y demanda de fácil funcionamiento (2008, P.2). Sin que el Estado pueda interferir en los derechos subjetivos y libertades derivados de la libertad de empresa, así mismo, se limita su política social asistencialista a solo atender aquellas personas que padecen situaciones que amenazan su subsistencia (Londoño, 2016, p.74).

Explica Lazo (2005, P.230) que el actuarialismo emerge como una herramienta de gobierno propio de la lógica neoliberal de las décadas del 70 y del 80. Con respecto al neoliberalismo, argumenta Harvey (2008, pp.5 - 6) que es una estrategia creada por las clases altas con el objetivo de recuperar el poder político y económico perdido o amenazado por los ideales socialdemócratas que se impusieron tras la Segunda Guerra Mundial. Bajo esta perspectiva, aprovecharon la crisis de 1970 y reestablecieron las condiciones para la acumulación de capital y recuperar el dominio. Hasta el punto de que ahora este modelo forma parte del sentido común con el que se interpreta, vive, y comprende el mundo.

Ahora véase lo que se produce en los años de 1980. Explica Iglesias que en esta década el territorio de los Estados nacionales no estaba en capacidad de cubrir totalmente todos los bienes y servicios que se generaban en el sector económico, lo que hace necesario fijarse y asumir los retos de ingresar en la lógica del mercado global. Para ello, es necesario transformar el modelo empresarial existente en compañías transnacionales a partir de una nueva forma de fraccionamiento del trabajo caracterizado por la desconcentración y flexibilidad de la mano de obra, el esparcimiento del proceso productivo según cálculos de beneficio frente a costos laborales e invertir en ciencia y tecnología. Todo esto con el fin de convertirse en actores centrales de la industria en un comercio mundial (Iglesias, 2010, p.15).

¿Cómo fue este proceso de reestructuración del Estado? Miremos.

4.1. Etapa del Estado bienestar o fordismo

El fordismo⁶ va a significar para la clase trabajadora el punto de partida del reclamo de los derechos laborales y el alcance de los mismos al bienestar social y económico de toda la gente. Va a posibilitar que el proletario alcance una conciencia de casta colectiva y un proyecto de vida adecuado. Esto es posible gracias a una ética del empleo que se concreta en la idea de a mayor productividad igual reparto de recursos económicos o de salarios, así mismo, el tiempo y el espacio en la fábrica les permitía a los obreros establecer vínculos más cercanos y un trato más fluido y personal de donde resultará una fuerza que se levantará en su debido momento contra el poder que ejerce el capital (Rivera, 2005^a, pp. 224,226). Dentro de las características de este modelo, Rivera (2005b, p.1) destaca el trabajo en serie, el sistema generalizado de seguridad social, la distribución pública de los recursos económicos y el consumo de masas.

Según Henry Ford, son tres las características del trabajo en serie: la primera, el avance ordenadamente planeado y continuo del artículo a lo largo de la línea de montaje; la segunda, el reparto de trabajo en lugar de dejarlo a la iniciativa del obrero y, por último, un análisis de las operaciones en sus partes constituyentes (Brenner Robert y Glick Mark, 1991, p.66).

Comenta Negri que para este momento la temporalidad se encuentra en correspondencia con la ley del valor trabajo como efecto de asumirla en términos analíticos, abstractos y cuantitativos que, en contraste, al tiempo vivo del empleo, se llegaba a la composición del valor productivo del capital (2008, p.54).

⁶ La llamada escuela de regulación definió al fordismo como un régimen de acumulación intensiva basado en la existencia de un “círculo virtuoso” que vinculaba aumentos de productividad a crecimientos de salario.

En la base de este modelo encontramos al Estado bienestar⁷ preocupado por incluir a las personas en el cuerpo colectivo mediante el cuidado de ellas por medio de programas y de asistencia y por brindarles amparo de los posibles abusos de las entidades o corporaciones con la ayuda de los sindicatos y de la asociación del trabajo, a su vez, los ciudadanos pueden apelar a los grupos comunitarios o al Estado para satisfacer sus necesidades básicas (Herner y Niszt, s.f, p. 4). Así mismo, los legisladores fueron consecuentes con estas intervenciones, por ello, soportaron y extendieron estas decisiones sociales con normas que vinculaban al poder público como al sector económico privado con compromisos de reconocer estos derechos para todos los individuos.

Siguiendo la descripción hecha por Garland del Estado bienestar, tenemos que el poder regulador de este limitó el capital y la riqueza en manos del sector privado. Esta estrategia permitió superar el conflicto económico o de clase que se estaba presentando, sin desconocer que el mercado mantenía el control en aspectos significativos de la vida social.

También cabe señalar, que el Estado en la búsqueda de integrar a todos los individuos en la ciudadanía colectiva y la igualdad de oportunidades y derechos, instituyó la seguridad social, brindó mínimos de educación, subsidió la vivienda, construyó carreteras y escuelas, creó puestos de trabajo en el sector público, entre otras disposiciones. Mientras tanto, los conservadores tenían la idea que este era el costo que había que pagar por la paz social (Garland, 2005, pp. 97 - 103).

⁷ Estado bienestar (1933 - : tipo de estado capitalista surgido tras la crisis de 1930. El estado bienestar se basó en un pacto social entre la burguesía y los trabajadores, por el cual la clase capitalista concedió aumentos de salario, derechos sindicales y mayor estabilidad laboral a cambio de aumento en la productividad, la estatización del movimiento obrero y el respeto de la propiedad privada de los medios de la producción - es decir, el compromiso de no cuestionar las bases esenciales del capitalismo – por parte de los trabajadores.

Keynes (como se citó en Anitua, 2005, p.295) cuenta que el Estado bienestar se respaldó en las propuestas económicas hechas por él en el año de 1936: solo con la intervención del Estado en la economía es posible lograr un aumento de salarios, clave del alza de la demanda y, por tanto, del crecimiento de la economía y con nuevas industrias, de ese buscado empleo pleno. Eso también debía ser fomentado desde el Gobierno con la creación de obras, aunque sean inútiles, pues lo que importa es brindar empleo y poder adquisitivo a todos los hombres, los que a la vez serían integrados por estar dentro del mercado de trabajo.

En definitiva, se construyó un modelo colectivo y de ciudadanía alrededor del salario y de las normas sustantivas del Derecho Laboral. En este contexto, se introducen en el ámbito de lo penal, dos axiomas fundamentales: la idea de que la reforma social y económica no podía sino conducir a una reducción del delito, y la de que el Estado era el responsable de la prevención y asistencia a los infractores de la ley mediante el control y el castigo (Garland, 2005, p.88).

4.2. Estado posfordista

Siguiendo a De Giorgi (2006, pp. 87 - 88), posfordismo es un término que alude más a determinadas tendencias y al espacio indefinido que se despliega entre el “ya no es” y el “aún no es”, que a la consolidación de un paradigma claramente definible. Esto es, denota dinámicas de transformación que aunque, por un lado, nos permiten pensar que nada es como antes, por el otro, nos sorprenden por no tener herramientas para describir la situación en todos sus aspectos.

El término posfordismo describe procesos de cambio del trabajo y de la producción que se caracterizan, en términos generales, por nuevas formas de empleo y por el nacimiento de una subclase social, la *underclass*, es decir, aquellas personas excluidas del modelo neoliberal que por esta condición parecen tener la fuerza suficiente de trastocar la lógica de la sociedad del consumo, con lo cual se perciben como segmentos sociales objeto de control social (Wright, 1994, p. 216). En efecto, el actuarialismo los asume como un colectivo de alto riesgo que deben ser administrados para proteger la sociedad. Feeley y Simon los representan de la siguiente manera:

La underclass es una población permanentemente (sic) disfuncional, sin alfabetización, sin habilidades y sin esperanza; un segmento de la sociedad autoperpetuado y patológico que no es integrable en el conjunto mayor, y cuya cultura fomenta la violencia (1994, p. 192).

De tal manera, que con estos procesos de transformación asistimos a un desmonte de los derechos laborales tal como explica Rifkin:

En la actualidad, por primera vez, el trabajo humano está siendo paulatina y sistemáticamente eliminado del proceso de producción. En menos de un siglo, el trabajo masivo en los sectores de consumo quedará probablemente muy reducido en casi todas las naciones industrializadas. Una nueva generación de sofisticadas tecnologías de las comunicaciones y de la información irrumpen en una amplia variedad de puestos de trabajo. Las máquinas inteligentes están sustituyendo, poco a poco, a los seres humanos en todo tipo de tareas, forzando a millones de trabajadores de producción y de administración a formar parte del mundo de los desempleados, o peor aún, a vivir en la miseria. (Rifkin, 1997:23).

El Estado posfordista surge por la recesión económica y fiscal de la década del 70 y termina por colocar al Estado bienestar en crisis hasta llevarlo a su desmantelamiento en términos de acabar con las conquistas sociales y económicas logradas en cien años de luchas colectivas (Bourdieu, 2000). Y con este desmonte se extiende, significativamente, el libre mercado hasta producir una economía global de tinte neoliberal aprovechada por quienes poseen el capital para beneficiarse de ello, al tiempo que reducen para el resto de las personas la satisfacción de sus necesidades básicas a causa del desempleo crónico que esto acarrea (Garlan, 2005, p. 174) o de relaciones laborales establecidas en contratos de trabajo de medio tiempo, de obra o labor u ocasionales. En fin, la pobreza posfordista procede de un progreso económico inequitativo y desigualitario que en medio de la riqueza apareja el empobrecimiento progresivo de la clase trabajadora (Wacquant, 2006, p. 61).

Es por ello necesario resaltar la ruptura que se presenta entre los ingresos de la clase obrera, la productividad y el consumo (De Giorgi, 2006, p. 89), y al mismo tiempo, que esta crisis facilitó el ascenso de gobiernos conservadores en Gran Bretaña, con Margaret Thatcher (1979-1990) y en EEUU, con Ronald Reagan (1981-1989).

Siguiendo a Zysman, en este contexto político y social, surge en los EEUU la política criminal denominada realismo de derecha con el propósito de reforzar las ideas de mantener la ley y el orden colectivo propias del conservadurismo, de proteger a la sociedad como a la víctima de los delitos callejeros violentos (atentados contra el patrimonio económico) e “hicieron apología de la eugenesia social y la represión, respaldando la necesidad de reforzar la pena de muerte y volver a

penas fijas y severas, especialmente las incapacitadoras”. Políticas que se replicarían en Gran Bretaña (2005, pp. 260 - 262).

Todo ello dio como resultado cambios en la forma de organización de las funciones del Estado: de la productividad y reparto del capital y los vínculos capital - Estado, capital - trabajo; de ahí que se imponga como ente regulador de la economía mundial al mercado financiero, esto es, el liberalismo económico ha triunfado gracias a todo este proceso de desreglamentar la industria y el aprovechamiento de la fuerza de trabajo (Bergalli, 2005, p.200).

Ejemplos de dichos cambios fueron: reducir los programas sociales (subsidios al desempleo y todo tipo de ayudas e intervenciones) hasta el punto de acabar prácticamente con las responsabilidades del Gobierno a favor de los grupos vulnerables, y el vínculo capital privado - Estado trajo todo un proceso de privatización de las empresas en cabeza del poder público y una entrega gradual de sus funciones al sector privado, especialmente, en los bienes y servicios básicos, con el fin de fortalecer los derechos del capital.

A causa de esto, aparece nuevamente en el entorno un cúmulo de personas estructuralmente excluidas, frágiles, inseguras y precarias con un horizonte gris e incierto (Alonso, 2015, p.15) ya que no hay, por parte del Gobierno, la voluntad de incluirlos sino de sacarlos de la satisfacción de orden económico al sostener que el único responsable de la condición de marginado es la propia persona; así mismo, afirman políticamente que los sistemas de asistencia social del Estado bienestar habían creado una sociedad pasiva y parasitaria que renunciaba a contribuir al desarrollo (Brandariz, 2012, p. 6).

De ahí que Lawrence Mead, profesor de Ciencias Políticas, en la Universidad de Nueva York presente en 1986 la siguiente tesis:

El Estado providencia norteamericano de las décadas de los setenta y ochenta no logró reabsorber la pobreza porque eran permisivos y no imponían ninguna obligación estricta de comportamiento a sus beneficiarios. La desocupación obedece a los problemas de funcionamiento personal de los desempleados. (Citado por Wacquant, 2000, p. 41).

En consecuencia, el posfordismo acepta políticamente como hecho normal el marginamiento y la exclusión en determinados sectores sociales. Conforme a Lawrence y con la finalidad de posicionar el discurso de la rectitud y de la responsabilidad individual por el acto criminal, por ejemplo, Ronald Reagan afirmaba:

Es absolutamente evidente que lo esencial de nuestro problema de criminalidad fue causado por una filosofía social que concibe al hombre, ante todo, como un producto de su medio ambiente material. Esa misma filosofía de izquierda que aspira a una era de prosperidad y virtud gracias a unos gastos públicos masivos ve a los criminales como productos desdichados de malas condiciones socioeconómicas o del hecho de haber nacido en un grupo desfavorecido. Cuando se comete un crimen la que está en falta es la sociedad y no el individuo, dice esa filosofía. La culpa es nuestra. Pues bien, en la actualidad un nuevo consenso rechaza totalmente este punto de vista. (citado por Wacquant, 2000, p.62).

De tal manera que, con la óptica de las tesis expuestas, la pobreza se explica a partir de los comportamientos de los necesitados y no por las barreras creadas por las estructuras de la sociedad o por los momentos económicos neoliberales del *workfare*⁸. En términos de Wacquant el *workfare* procede de la forma en que los Estados Unidos de Norteamérica ha reconfigurado la asistencia social del Estado de bienestar en un medio de control y vigilancia sobre la población pobre puesto que ese Estado obedece a la irresponsabilidad del individuo consigo mismo, desvinculando, tácitamente, de toda responsabilidad a la estructura social. Es decir, se ha condicionado la ayuda social de sus beneficiarios solo a quienes merezcan dichos subsidios, sean “extrabajadores temporalmente (sic) expulsados del mercado laboral, discapacitados e inválidos y madres indigentes con hijos de corta edad”, a partir de la obediencia individual, la obligación de trabajar y del buen desempeño que tengan en el oficio o actividad contratada para rescatar la moral y la ética del trabajo en esta población (2010, pp. 82, 85, 92). Explica Wacquant que “se trata esencialmente (sic) de políticas sociales de corte higienista que buscan embellecer el paisaje urbano” (2010, p. 63).

La solución a este asunto no es una política pública orientada a reformar el sistema ni subvencionar a la gente o abandonarla, sino supervisarla en su estilo de vida. Castel lo resume de la siguiente manera:

⁸ Workfare compone el conjunto de poderes que prescriben el nivel salarial sin el recurso ideológico que en el Estado social suponía el pacto. Se trata de un modelo administrativo del trabajo que se basa en el principio de dominio activo del salario y de reducir drásticamente las posibilidades de vida en el “no empleo” El nuevo régimen económico y financiero surgido, el cúmulo de la inversión financiera, la autovalorización del capital, sin que medie el trabajo vivo y el deterioro policial y político de la autonomía obrera y de la antigua forma de la fuerza de trabajo, condujo a un tipo de ideología que reconoce al capital como el único agente determinante en generar riqueza. (Rodríguez, 2004, p.25)

al separar el trigo del que es competente y competitivo, de la paja del incompetente y no competitivo, la política social posfordista construye diferentes cursos de vida para cada uno. El resultado es un nuevo tipo de gobernabilidad segmentada: autorregulación responsable en algunos, salvaje represión para otros. En esta sociedad dual, una zona hipercompetitiva y totalmente conectada en red, coexiste con un sector marginal de población excluida de bajo rendimiento (como se citó en Paredes, 2015, p.57).

En sentido contrario, se refiere Bourdieu (2000) cuando caracteriza el modelo posfordista y poskeynesiano como un superpoder que ha desmontado deliberadamente el Estado social, ha generalizado el salario precario y la inseguridad, ha destruido el movimiento sindical e hiperaumentado correlativamente el poder de la autoridad penal y policial. Bajo esta perspectiva, Garland (2010, p. 13) afirma que las prácticas del sistema penal se desvinculan de la solidaridad social para ponerse al servicio de los proyectos políticos, intereses económicos e ideológicos que dominan el contexto cultural en que se aplica. En consecuencia, los pobres excluidos del Estado de bienestar reciben al Estado penal como única vía para criminalizar la miseria bajo la excusa de cuidar el sistema y al consumidor de los desórdenes y desviaciones personales de aquella.

Por consiguiente, el postfordismo va implicar el nacimiento de estrategias dirigidas a controlar social y penalmente la excedencia de la fuerza de trabajo no captada en el proceso de producción (De Giorgi 2006, p.90) mediante su aplacamiento. Afirmación compartida por Wacquant, quien sostiene:

Lo que intenta realizar la política de criminalización de la pobreza es transformar un problema político, enraizado en la desigualdad económica e inseguridad social, en un problema de

criminalidad. Y para tratarlo utiliza el sistema policial, carcelario, judicial, a fin de no tener que tratar la realidad política y económica que está detrás de él (2006, p. 61).

Tal y como explica Wacquant, esta perspectiva epistemológica procede de los Estados Unidos con el propósito de disminuir la función del Estado en su esfera social y, a cambio, pretende ampliar el ejercicio penal para obtener seguridad física (2000, p.12) y no seguridad basada en políticas públicas. De esta manera, el concepto de seguridad se desvincula de lo social y se delimita, exclusivamente, al ámbito penal. De acuerdo con el autor (2000, p.146), la hipótesis de este paso hacia una regencia judicial y carcelaria de la pobreza es tanto más probable y pronunciada cuanto más, vigorosamente, se inspire la política, llevada adelante por el Gobierno del país considerado en las teorías neoliberales que incitan a la *mercantilización* de las relaciones y menos protectora sea la autoridad que se está analizando.

Por consiguiente, el Estado punitivo se complementa con el Estado social para administrar la pobreza avanzada propia del posfordismo, con el objetivo de impedir la realización de conductas delictivas, imponer el trabajo precario y afirmar el autoritarismo del Estado. En este sentido, añade Wacquant cinco tendencias de la evolución penal de Estados Unidos.

- ❖ Expansión vertical del sistema o la hiperinflación carcelaria. El crecimiento de las poblaciones reclusas en las tres escalas del aparato de prisiones norteamericano: centros de detenidos de las ciudades y condados, las centrales de los cincuenta estados de la alianza, y las penitenciarías federales es un fenómeno sin precedentes ni comparable en una sociedad democrática (2000, p.80). En las celdas de los condados, seis de cada diez

internos son negros o latinos, menos de la mitad tenían un empleo de tiempo completo en el momento de su encarcelamiento y dos tercios provienen de hogares que cuentan con un ingreso inferior a la mitad del umbral de pobreza.

- ❖ La extensión horizontal de la red penitenciaria. Al gran “encierro” de finales del siglo XX hay que adicionarle las personas en prisión vigilada, que están en prisión domiciliaria y las que se hallan en centros disciplinarios, más las personas de vigilancia por teléfono o electrónica. De la misma manera, la autoridad del sistema penal se amplió considerablemente gracias a la abundancia de bancos de datos criminales y a la decuplicación de los medios y puntos de control a distancia que estos permiten (2000, p.83).

- ❖ El auge desmesurado del sector penitenciario dentro del régimen público. Entre 1979 y 1990, los gastos de las prisiones de los estados se incrementaron un 325 % en concepto de funcionamiento y un 612 % en el capítulo de la construcción.

En total, Estados Unidos gastó en 1993 un 50 % más en sus prisiones que en su administración judicial; la cantidad de empleados, solo en las prisiones federales y estatales, pasaba de 264.000 a 347.000, entre ellos, 221.000 vigilantes. En definitiva, el mundo penitenciario es el tercer empleador del país (2000, 86).

- ❖ Resurgimiento y prosperidad de la industria privada de la penitenciaría. La expansión del encarcelamiento está acompañada de un alza de la industria privada. 17 empresas se reparten unas 140 instalaciones diseminadas en 20 estados (2000, p.90).
- ❖ La política de *affirmative action* carcelaria. La quinta tendencia clave de la evolución del presidio estadounidense, a saber, el “ennegrecimiento constante de la población detenida”, que hace que, desde 1989 y por primera vez en la historia, los afroamericanos sean mayoritarios entre los nuevos ingresados a las prisiones estatales, aunque no representen más que el 12 % de los habitantes del país (2000, p.93).

Recapitulando lo anterior, ante la imposibilidad de someter la economía y el mercado financiero a los presupuestos, principios y valores del Estado social, solo le queda al Estado auto confirmarse, políticamente, mediante la fuerza y la represión de los grupos sociales más vulnerables, en consecuencia, se ha hecho un cambio en materia de la función de la pena impuesta, en donde se ha pasado de abandonar la rehabilitación como principio organizador y marco intelectual del sistema penitenciario (Garland, 2005, p. 82) a ser un modelo de exclusión y de control. Un lugar que segrega a individuos peligrosos para mantener la seguridad pública (Garland, 2005, p. 291). Como lo ha dicho Wacquant: “supone utilizar la prisión como mero depósito para eliminar a una pequeña fracción de pobres” (2006, p.66).

En este escenario aparecen los precursores del actuarialismo para mostrarnos estos cambios con un discurso montado bajo la denominación de la *nueva penología*:

La nueva penología es más que un *discurso*: No se refiere a individuos enfermos necesitados de tratamiento o personas moralmente irresponsables que necesitan ser concientizadas para que asuman la responsabilidad de sus actos. Más bien, considera al sistema de Justicia Penal, y su racionalidad y eficiencia sistémicas. Se propone agrupar y clasificar, para separar los menos peligrosos de los más peligrosos y emplear así, las estrategias de control racionalmente. (Feeley y Simon, 1995: 36).

De igual forma, los autores Feeley y Simon señalan tres cambios de este reajuste. El primero, se verifica un abandono de la importancia del individuo en el sistema penal en beneficio de los grupos y las categorías de sujetos. El segundo, se produce una mudanza de las narrativas del castigo, en la medida en que, los individuos dejan de verse como necesitados que precisan un tratamiento y pasan a entenderse como sujetos de riesgo que requieren gestión; el tercero, se transforman las normas de análisis y decisión, que en el presente se acomodan a modos tecnocráticos de saber, orientados a los lenguajes de la probabilidad y el riesgo (como se citó en Brandariz, 2014b, p.54). En este orden de ideas, el actuarialismo es neutro en términos morales, puesto que busca reducir las probabilidades del riesgo del daño criminal, en lugar de reprochar, moralmente, una conducta delictual por ser incorrecta, ver al respecto a Jock Young (2001, pp. 28 -29).

5. Características político criminales del actuarialismo.

La importancia de esta descripción radica en indicar la forma en que el actuarialismo integra y modifica todo el sistema penal desde la sociedad del control a la sociedad del riesgo para ponerlo

al servicio del gobierno neoliberal yendo en contra de todas las garantías construidas a favor del condenado.

a. Estimación grupal e individualizada de niveles de riesgo. El actuarialismo se propone alcanzar mediante medidas neutralizadoras el control y vigilancia sobre grupos poblacionales que se identifican, agrupan y definen como objetos a combatir. De ahí que se valga de la capacidad predictiva que poseen los métodos estadísticos para manejar los datos que se tienen y derivar de allí categorías tales como perfiles criminales, tipología de delitos, prontuarios, el número de reincidencias, nivel educativo, domicilio, etc. a fin de lograr rasgos que faciliten la persecución eficaz de dichos grupos.

Advierte Del Rosal (2009, pp. 32, 29) que el actuarialista crea para cada grupo poblacional o subdemográfico, comportamientos delictivos o factores de riesgo que le son propios. Cuando un sujeto seleccionado no case dentro de estos rasgos lo que habrá es una falla estadística que en su caso obligará a modificar los sistemas de valorar los datos, pero en ningún momento se hace necesario verificar la correspondencia con el comportamiento desplegado por el individuo, de modo que, a la persona caracterizada se le niega el derecho a probar que su ajuste al perfil o el pronóstico acerca de su comportamiento futuro, es erróneo.

Para ganar en comprensión en lo arriba relacionado, el autor añade el siguiente ejemplo en el tema de los delitos y las penas previstas en la seguridad vial para un colectivo determinado de infractores:

Se castiga a todos los que conducen sin el correspondiente permiso de conducir, asumiendo que todos representan un mismo peligro para el tráfico rodado; es decir, se da por hecho que los conductores que conducen sin permiso no son personas individuales sino agregados estadísticos de un colectivo (el de los conductores que circulan sin permiso) y, por lo tanto, se acepta, sin dudar, que todos son iguales y que sus infracciones representan el mismo nivel de riesgo. De este modo, castigando a todos por igual, no estamos castigando a un individuo por lo que él ha hecho, sino por lo que se considera que siempre hacen los individuos de su grupo poblacional de riesgo (Del Rosal, 2009: 36). Resalto fuera de cita.

Esta tarea político criminal en términos sistémicos se lleva a cabo de dos maneras: en primer lugar, a partir del análisis de los datos de criminalidad y del cálculo de su ocurrencia, se organiza la intervención de los departamentos del Estado. Según Brandariz (2014b, p.127), estos datos permiten elegir dentro de una escala de valor de niveles de peligro los grupos poblacionales que demandan un control prioritario cuando se trata de imponer medidas neutralizadoras a infractores de alto riesgo, en contraste, con las disposiciones de control a imponer en los de baja amenaza.

En segundo lugar, el juez en el momento de tomar una medida limitadora de la libertad o de graduar el monto de la pena a imponer, se va a soportar sobre el perfil de peligro que arroja el colectivo al que pertenece el infractor, dado que él presume la amenaza (o el daño) que representa la persona por su pertenencia al grupo y no por el hecho punible que cometió, al mismo tiempo, el nivel de riesgo impacta las formas de ejecución penitenciaria (Brandariz, 2014b, pp. 128 y ss).

Teniendo en cuenta que estas prácticas de control político penal impactan directa e indirectamente a todas las personas, se hace necesario legitimar su implementación. Es por esto que el poder institucionalizado se ve compelido a acudir a los discursos de seguridad como un referente para justificar la toma de decisiones.

Ahora bien, los que tienen específicamente el propósito de gobernar de una manera y no de otra la conducta de los individuos pueden entender por seguridad lo siguiente:

procesos en los cuales el ‘acto de habla’ de etiquetar un tema en forma social y políticamente exitosa como un ‘tema de seguridad’, desplaza a este tema de seguridad del ámbito normal de la política del día a día, colocándolo como ‘amenaza existencial’, que evoca y justifica medidas extremas. (Böhm, 2016, p.179).

Los pasos de los procesos de seguridad en el ámbito de la política sobre el crimen y el sistema penal los explica sintéticamente Böhm del siguiente modo:

Primero: Definición de un objeto de referencia. Un ámbito de conflictividad social se replantea y un específico grupo poblacional es presentado como vulnerable y desprotegido frente a dicha problemática. *Segundo: Transformación de la conflictividad en problema político.* Dicha pugna exige la acción estatal en protección del grupo de referencia. *Tercero: Alcance de una audiencia relevante.* El objeto de referencia y la amenaza a la cual está expuesto son presentados ante una audiencia relevante que resulta convencida de la vulnerabilidad del primero y de la proximidad de la segunda.

Cuarto: Transformación del problema político en cuestión de seguridad. Luego de que la cuestión ahora de relevancia política y de interés público ha quedado suficientemente planteada, la misma se transforma en un asunto de seguridad. Se instala la sensación de peligro. *Quinto: Transformación de la cuestión de seguridad en amenaza existencial.* El escalamiento discursivo hace de la cuestión de seguridad un tema de vida o muerte, ya que el área a securitizarse es presentada como verdadera amenaza existencial respecto de ámbitos más amplios de la población e incluso del Estado.

Sexto: Habilitación de medidas excepcionales en el ámbito penal. El proceso securitizante resulta finalmente concluido cuando se reclama por parte de los agentes sociales y de las instituciones el ejercicio de medidas excepcionales dentro del ámbito penal. Estas medidas habilitan una actuación más agresiva del sistema punitivo con miras al aplacamiento de la amenaza existencial (Böhm, 2016, pp. 187 - 188).

Por consiguiente, lo relevante en esta materia no es el fenómeno real del peligro comprendido como algo que existe y puede ser medido en términos de probabilidad estadística de ser víctima de un delito, sino la valoración y entendimiento que hace la masa de los mismos, por ello en sociología se habla del riesgo como un concepto que se construye social y culturalmente. Es decir, para comprender el binomio seguridad – inseguridad es necesario conocer la idea que la cultura tiene sobre las mismas. Recuérdese que la esta última contiene reglas de conducta, normas morales, creencias e identidades.

Siguiendo a Inácio Thomé, la idea de la inseguridad está influida por los siguientes factores: el primero, es la experiencia previa de haber sido víctima de un delito; el segundo, es la posibilidad objetiva de sufrirlo; el tercero, es la percepción personal sobre el propio riesgo; el cuarto, son las condiciones ambientales como las características físicas y cívicas de un barrio (suciedad, deterioro, alborotos, vandalismo, pandillas).

El quinto, se relaciona con la verosimilitud de los datos disponibles sobre delitos y víctimas; el sexto, es la confianza en la eficiencia de la Policía y del sistema penal; el séptimo, es la percepción del impacto de las infracciones; el octavo, son las características sociodemográficas de los individuos tales como la edad, género, estado civil, pobreza, educación y etnia. Además de estos, existen otros factores como la incertidumbre social y económica, el reconocimiento del conflicto o desorden colectivo y la soledad o la exclusión, que pueden influir en la imagen que se tiene de la inseguridad (2004, pp. 57-58).

Como resultado de esta condición, podemos afirmar que para el actuarialismo son los métodos de la estadística los que permiten esbozar perfiles de grupos criminales con el propósito de controlar e inocuizar a los individuos que se ajusten a ellos, negando de plano la obligación punible por el hecho o acto, así como la culpabilidad, afirmando el resurgimiento del peligrosismo en materia penal.

b. Atribución de responsabilidad al sector privado en la gestión de riesgos en materia delictiva. El Estado aprovecha la exposición al riesgo de daño de los bienes en cabeza de la familia, asociaciones de industriales, productores, comerciantes, vendedores, propietarios,

profesionales, estudiantes, religiosos, deportistas, entre otros, para redistribuir al interior de estos colectivos la seguridad como un deber que les compete a todos y a todas sin renunciar a la regencia (o manejo) de la pena.

Por tanto, el actuarialismo estratégicamente reconoce el riesgo de naturaleza criminal como un fenómeno de esencia social y/o colectiva con el propósito de controlarlo mancomunadamente con el apoyo y asistencia del sector privado, en tanto estos asumen la necesidad de desplegar acciones encaminadas a prevenir que se cometa el delito como una práctica de propia defensa y de vigilancia particular, en lugar de exigir seguridad por parte del Estado. Mientras que a las agencias de policía se les entrega la función de asesorarlos y organizarlos en estos temas (Brandariz, 2014b, p.59).

Explica Brandariz que, de esta manera, el Estado está reconociendo e incentivando la aptitud que tienen diversos sectores sociales de asumir libre y responsablemente su protección ante el fenómeno criminal. De ahí que comparta con ellos el monopolio que en el pasado tenía del asedio a la delincuencia, la vigilancia y el orden en el espacio público. A esta transferencia de funciones o seguridad particular se le ha definido como prudencialismo privado, debido a que se trata de entregarle a las personas la tarea de gestionar los riesgos que les afectan en este tema, ya bien sea, a sí mismos o a su entorno familiar o de convivencia más inmediata, ejemplo de ello, es la guardia en el vecindario (2014b, pp. 123, 169).

Añade el autor, que privatizar estas funciones responde tanto al requisito de solucionar el déficit de seguridad pública como al reconocimiento por parte del Estado de su falta de

competencia en prestar solamente él la protección colectiva (2014b, p.165). De manera semejante, se refiere Santoro (2004, p.154) cuando expone que ante lo inevitable del peligro, el poder público ha renunciado a garantizar el derecho a la seguridad, sin embargo, se compromete a implementar una política social de riesgos orientada a mantenerlos en niveles tolerables.

De acuerdo con lo que explica Brandariz (2014b, 171, 164) la tarea en el control del delito y la pena del mismo se divide en dos partes. En primer lugar, el dominio del crimen requiere una ayuda pública privada que da origen al desplazamiento del Estado y permite el ingreso de un sector empresarial de gran rendimiento económico en áreas de injerencia oficial (o estatal) que suministra dispositivos tecnológicos y recursos humanos para la garantía del orden, el freno a la infracción de la norma penal y el bienestar con respecto a las demandas de seguridad.

En segundo lugar, la sanción del criminal es una competencia excluyente en cabeza del Estado que responde a la lógica de hacer creer que continúa haciendo presencia y funcionando de forma eficaz a pesar del declive del modelo social. Planteadas las cuestiones de esta manera, observamos por parte del actuarialismo, el interés radical de conservar la seguridad y el orden colectivo por medio del control de poblaciones enteras asumidas como enemigas del régimen imperante, aun por encima de cualquier otro fin que se pretenda alcanzar con el sistema penal.

c. Prevención centrada en la fase previa a la comisión del delito. El actuarialismo ofrece la posibilidad de limitar la vida cotidiana por medio de la injerencia en el espacio público con el fin de implementar medidas predelictuales. En este contexto, la prevención se entiende como el

control que se ejerce en zonas abiertas a la ciudadanía, orientado a evitar conductas criminales o a reducir significativamente su ocurrencia.

No obstante, hace que el sistema penal no intervenga cuando ha ocurrido el perjuicio del bien jurídico o del hecho punible, todo lo contrario, adelanta su tutela a estadios previos del daño para satisfacer demandas de seguridad colectiva. Por tanto, la prevención situacional y la inocuizadora están considerablemente centradas en la vigilancia del espacio urbano ocupado por las potenciales víctimas de riesgo y por la ausencia de personal de policía, como por los posibles infractores para evitar que pasen de la idea al acto criminal, lo que reduce significativamente el número de delitos como resultado de la implementación de estrategias neutralizadoras (Iglesias, 2010, p. 223).

Desde este punto de vista, explica Bergalli (2005, 206) que el Estado neoliberal se presenta como Gobierno policía para administrar la alarma colectiva generada por comportamientos transgresores que afectan el orden público y el sosiego de los habitantes como pequeños hurtos, mendicidad, prostitución, grafiteros, entre otros. Añade Bergalli, que se está en el tránsito del control disciplinario al punitivo mediante el miedo.

Es preciso mencionar que para Brandariz (2014b, pp. 39-42) este control punitivo responde a lo que Foucault intuyó como comunidades del control y que él denominó dispositivos de seguridad en donde la vigilancia permanente, la dominación y la forma de gobernar la delincuencia se extiende por todo el espacio urbanístico y metropolitano con la intención de mantenerla en niveles tolerables y funcionales.

En consonancia con lo anteriormente planteado, Brandariz (2007, p.10) menciona el hecho de rediseñar los espacios urbanos, edificios, las situaciones y el entorno en los que los individuos actúan con obstáculos personales, materiales y técnicos de actividad permanente bajo la idea de prevenir todo tipo de conducta conflictiva o criminal sin ninguna pretensión de tratamiento.

De ello resulta una reducción significativa en el nivel de tolerancia social frente al comportamiento de la delincuencia, sin embargo, esta medida no responde necesariamente a peligros reales u objetivos sino a ansiedades y sensaciones de inseguridad de la gente, es decir, a ideas subjetivas individuales de riesgo (Brandariz, 2009, p.21); y de segregacionismo de grupos de personas portadores de perfiles peligrosos para la protección de los demás ciudadanos y a los cuales hay que aplicarles una política severa o de tolerancia cero (Portilla, 2007, pp.42, 64).

Bauman (como se citó en Brandariz, 2014b, pp. 89 - 90), la persona que mejor ha entendido y explicado las fuentes que dan origen a las sensaciones de inseguridad es quien explica a partir de tres enfoques:

- a) los peligros que amenazan al cuerpo y a las propiedades de la persona o de su entorno más cercano (*desprotección*);
- b) los que amenazan a la permanencia y fiabilidad del sistema;
- c) los que atentan al lugar del sujeto en el mundo, es decir, su sitio en la jerarquía social.

Como resultado de estas prácticas punitivas, tenemos un sistema penal simbólico y no real, debido a que responde a puntos de vista y opiniones sobre miedos y amenazas a la seguridad del individuo, al sistema, a los bienes, al consumo y no a tasas reales de delitos. Dificilmente, se va a

proteger el orden social o se va a dar una solución adecuada al conflicto colectivo a partir de este acercamiento teórico.

Las respuestas criminológicas a las que se ve abocado acudir el actuarialismo, por ser fundamentales a sus intereses, son las actividades rutinarias y la elección racional.

- a. La teoría de las actividades rutinarias. La teoría de las actividades rutinarias fue creada por Cohen y Felson entre los años de 1979 – 1981, para dar cuenta de los delitos contra el patrimonio económico en su modalidad de hurto, no obstante, se ha ampliado a otras formas de infracciones.

Los autores encuentran que las ocupaciones de la vida diaria de las personas que residen en un determinado espacio urbano influyen en la conducta del infractor en relación con encontrar en el ambiente una posibilidad pasajera real para llevar a cabo la transgresión. Por ende, para la política criminal actuarial con el uso de este modelo es posible desalentar la delincuencia.

Explica Pablos de Molina, que el factor de oportunidad es el que permite aclarar el origen de la concentración del delito en el espacio (momento y tiempo), pero el contenido de lo que se debe entender como tal es muy heterogéneo. Unas eventualidades se explican por cambios sociales y tecnológicos; otras, por llevar estilos de vida que conllevan una mayor exposición a lugares, situaciones y personas peligrosas; y otras, se encuentran relacionadas con las categorías de sexo, edad o clase social (2003, pp.1023-1024).

En este modelo deben confluir tres requisitos para que se produzca el crimen: el primero, es objetivos y/o víctimas idóneas, el segundo, es delincuentes motivados, y el tercero, es la ausencia de guardianes competentes para prevenir la afectación del bien jurídico protegido.

Fuente: Felson, Marcus. 1998. *Crime and Everyday Life*. Second edition. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Figura 8. Teoría de la actividad rutinaria y el triángulo básico del delito. 1998 por Felson.

En lo que se refiere al transgresor motivado, puede ser cualquier persona que se proponga cometer un delito. Con respecto al requerimiento idóneo, Felson (1998, pp. 198-199) entiende por tal el objeto cuya exposición en el espacio y en el tiempo lo ubican en riesgo de un ataque criminal como un elemento visible. Así mismo, hace notar cuatro factores de amenaza que convergen desde el antisocial en potencia. En primer lugar, el valor porque al infractor le interesa

la cosa a la que le atribuye este; en segundo lugar, la inercia, la cual es el tamaño y el peso del artículo u objeto.

En tercer lugar, la visibilidad se refiere a la exposición de los objetivos a los ojos del delincuente; en cuarto lugar, el acceso, ello alude al diseño de las calles, ubicación de los bienes cerca de la puerta u otros rasgos de la vida cotidiana que facilitan a los transgresores hacerse con el botín. Los blancos de una infracción pueden ser una persona o un objeto, cuya posición en el espacio y el tiempo los ponen en mayor o menor riesgo de un ataque de este tipo.

Felson ha sumado tres categorías (nodo, rutas y límites) que permiten comprender por qué el actuar de las víctimas y de los objetos en el tiempo y el espacio facilitan la oportunidad para la materialización del delito. En la primera, los *nodos*: el delincuente emprende su actuar criminal alrededor de los nodos de actividad personal del afectado. Entendiendo por nodo la dirección del movimiento, de dónde a dónde se traslada el individuo o el objeto, por ejemplo: la ruta entre el hogar y el colegio.

La segunda es rutas, es decir, el lugar donde se comete el delito. Ello permite crear una cartografía del anterior. La tercera es límites: se refiere a los confines de las zonas donde la gente habita, trabaja, compra o busca entretenimiento. Las infracciones ocurren en los límites debido a que es más seguro transgredir en ellos y, a continuación, retirarse a sus áreas (1998, pp. 199-200).

En cuanto a la ausencia de guardianes capacitados para prevenir la afectación del objeto o de la persona, intervendría cualquier individuo que se encuentre con capacidades de protegerse a sí mismo o a otros distintos a la autoridad como un vecino o un amigo.

Felson (como se citó en Pablos de Molina, 2003, p. 1024) ha identificado dos factores más que incrementan la oportunidad criminal: la *ausencia del supervisor íntimo*, persona cercana al infractor que puede neutralizar su potencial delictivo y el comportamiento del *gestor del espacio* con competencia para controlar y vigilar algunos de estos transgresores como vigilante, conductor de autobús y portero.

Para Crawford (como se citó en Sozzo, 2000,), la prevención del delito se logra desde distintos niveles de responsabilidad:

El *desaliento personal* es la responsabilidad de la familia y los amigos, el *desaliento asignado* es la responsabilidad de las personas empleadas para realizar esta tarea - como los agentes policiales-; el *desaliento difuso* es la responsabilidad de aquellos empleados que no tienen asignada específicamente esta tarea - como los maestros - y el *desaliento general* es la responsabilidad de todos los ciudadanos en (Sozzo, 2000, p. 30).

- b. La elección racional. La teoría de las actividades rutinarias fue creada por Wilson y Herrnstein en el año de 1985. Hay que hacer distinguir los antecedentes de este modelo criminológico con el propósito de ganar su mayor comprensión.

En primer lugar, desde el análisis económico del delito se privilegia la ponderación que el delincuente hace en términos de riesgo de ser detenido y los esfuerzos y recompensa a obtener con el crimen, en segundo lugar, en la prevención situacional cuyo propósito es colocar barreras que permitan interferir con el éxito percibido por el maleante (Blanco Cordero, 2004, p.274).

De donde se colige que la premisa principal de la que parte esta teoría es: los delincuentes piensan antes de actuar y pretenden buscar en forma específica beneficios de su conducta criminal, sin dejar de ponderar riesgos y beneficios. Según Sozzo, el individuo calcula las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas posibles que racionalmente tiene para cometer la infracción con el fin de decidirse a actuar libremente (2000, p.25).

De ahí que el planteamiento epistemológico de la teoría de la elección racional consiste en “comprender cómo el delincuente efectúa elecciones criminales, dirigidas por un motivo particular en un escenario determinado que le ofrece las oportunidades de satisfacer ese motivo” (Felson, 1998, p.201). Es decir, lo más importante para la teoría es poder conocer el *modus operandi* de la criminalidad puesto que reduciendo o extinguiendo la oportunidad de delinquir descendiende el interés propio del infractor en la transgresión.

Los beneficios que persigue el delincuente no solamente han de ser de carácter económico, sino también de otra naturaleza, emocional, obtener la aprobación de los amigos, sentir satisfacción por el ajuste de cuentas, etc. Lo mismo ocurre con los riesgos y castigos, que no solamente han de serlo de carácter material, sino que también pueden serlo la pérdida de su reputación, la desaprobación por parte de los espectadores de la acción, el temor a una venganza por parte de la víctima, etc. (Blanco Cordero, 2004, p.274).

Por eso para este marco teórico, la decisión de cometer un delito depende de las necesidades del sujeto, del contexto situacional, de la cantidad de tiempo y esfuerzo que puede destinar a la decisión delictiva y de la calidad de la información que posee sobre el objeto o la víctima.

Para finalizar este proceso de caracterización de la política criminal actuarial, es necesario señalar la tendencia del actuarialismo hacia políticas represivas de cero tolerancia frente a la delincuencia o desviaciones sociales mediante el castigo duro y una persecución eficaz en conductas de poco daño colectivo o bajo impacto como grafiteros, bandolerismo callejero, microtráfico de estupefacientes, etc.

De acuerdo con Núñez Rebolledo, esta manera de controlar el delito se hace con el propósito de restaurar y mantener la percepción ciudadana sobre la seguridad ante conductas que molestan el sosiego e incomodan a la ciudadanía, de igual forma, se argumenta a su favor que de no intervenir estos comportamientos insignificantes, sus perpetradores pasarán a cometer crímenes graves y ya no habrá forma de detenerlos (2011, p.55).

6. Impacto del actuarialismo en el enfoque de la pena y en el derecho penitenciario.

La política criminal actuarial enfatiza la función neutralizadora de la pena por encima de la resocialización, que al igual que la anterior goza de consagración legal y con ello modifica significativamente el papel de la autoridad penitenciaria, al igual que los criterios para verificar los requisitos de medidas desprisionalizadoras, tales como, los subrogados penales, véase.

a. La pena en su función neutralizadora. El pensamiento actuarial orienta la pena de prisión hacia la función de neutralizar o incapacitar a aquellos grupos poblacionales que son clasificados como fuentes de peligro en aras de mantener obsesivamente la seguridad, el orden y el control físico en el espacio urbano.

Ello se evidencia cuando el legislador penal por razones de eficacia afecta la vida útil del criminal o el de utilidad gubernativa, disminuye los índices de delincuencia mediante el aumento de las penas y endureciendo los requisitos para obtener la libertad o suspensión de condena; así mismo, cuando al interior de la prisión la entidad penitenciaria privilegia la vigilancia y custodia en correspondencia con el perfil de amenaza del colectivo al que pertenece el prisionero, por encima de las actividades de tratamiento o resocialización.

Bergalli se refiere a ello de la siguiente manera:

El Estado neoliberal no debe reeducar, resocializar, corregir o prevenir como lo hacía el Estado social. Antes bien, ha de configurar su sistema penal basándolo sobre una nueva verdad, sobre unos nuevos fines. Estos son los estrictamente orientados a la punición (2003, p.124).

De acuerdo con Jakobs, los grupos poblacionales serán definidos como fuentes de peligro cuando no pueda presumirse de estos su seguimiento al orden jurídico. En ellos, el castigo busca compensar ese déficit de protección cognitiva por medio de la custodia. Independientemente de

la manera en que se logre enmendar tal carencia, lo más importante en términos prácticos es neutralizarlos mediante una pena privativa de libertad extensa (2006, p.74).

Buen ejemplo de ello, son las leyes conocidas en los Estados Unidos como *three-strikes*. Esta expresión del inglés, proviene del lenguaje del béisbol, juego en el que si el bateador (*striker*) batea tres veces la bola de forma fallida, queda eliminado (*three strikes and you're out*), de modo que, en el ámbito de la legislación penal, eso significa que al tercer delito, se le impone a la persona una condena que, dependiendo de los Estados, puede significar desde 25 años de prisión hasta la cadena perpetua.

Tal y como refiere Del Rosal (2009, p.15), el primer Estado que implementó estas leyes fue el de Washington en 1993, en las cuales la comisión de un tercer delito grave violento significaba una condena a cadena perpetua sin que fuera factible excarcelar a prueba al convicto (*parole*). El estado de California en 1994 fue el siguiente: su norma fue mucho más severa porque no exigía que los crímenes previos fueran agresivos, sino que bastaba con que fueran mayores *felonies*, es decir, infracciones que se castigan con privación de la libertad en la penitenciaría del Estado, no en cárcel del Condado.

Definitivamente, lo que importa al actuarialismo es la seguridad mediante el control de estos grupos poblacionales y si para ello es necesario neutralizar, excluir o eliminarles así se hará. Detrás de esta función segregadora de la pena de prisión no se esconde el hecho de asumir al sujeto criminal vaciado de su humanidad, despojado de toda condición que lo dignifica y lo eleve a un estado mínimo de respeto.

Este sujeto al perder la condición de persona digna se ha convertido en “homo sacer, no-hombre, a quien cualquiera puede matar sin cometer homicidio, puesto que su vida ha sido reducida a la mera vida, nuda vida, vida biológica o vegetativa, despojada de todo atributo político, moral, (sic) jurídico” (Ruiz, 2016, p.223).

Ahora bien, el abandono progresivo de la reintegración social del condenado no traído como se podría creer el abandono de la pena de prisión cárcel, todo lo contrario, la estructura penitenciaria se ocupa de gobernar la gente excluida del cuerpo social, esto es, de aquellos grupos que se encuentran en la imposibilidad de acceder al puesto de trabajo o de participar en los procesos productivos y por ende, del consumo.

Es necesario subrayar que probablemente el motivo de aceptar la pena de prisión en términos de custodia obedezca al fracaso de aquellas posturas criminológicas que en los años sesenta y mediados del setenta se construyeron bajo la idea de acabar la delincuencia mediante transformar, tratar y/o corregir las causas biopsicosociales que inciden sobre el sujeto infractor para lograr que una vez rehabilitado asuma comportamientos socialmente admitidos (De Giorgi, 2005, p.50).

Según de De Giorgi, el fracaso del modelo terapéutico obedece a dos factores distintos, pero convergentes. El primero, la crisis fiscal del Estado de 1970 que lleva a políticas de reducir el gasto que representaban los psicólogos, psiquiatras, educadores, criminólogos y trabajadores sociales en el campo penitenciario; el segundo, el alto índice de la recaída en el delito que indica

el fracaso del tratamiento rehabilitador que conduce a abandonar al final de 1970, la tesis de la relación causal entre marginación social con respecto al sistema y delincuencia (2005, p.50).

De una manera crítica, el Partido Republicano por razones de interés político atribuía al *Estado bienestar* la responsabilidad social de los gastos generados con los programas de tratamiento en poblaciones que no lo merecían. Lo único que aprendía el criminal era que la infracción de la ley era premiada, esto es, que delinquir paga (Velásquez Valenzuela, 2014, p.67).

A partir del año de 1980, los criminólogos abandonan los discursos y las prácticas sociales que sostenían la aproximación a las causas del delito y la corresponsabilidad del sistema en el origen del fenómeno delincuencial e imponen la idea de que el sujeto infractor es un ser normal y responsable de sus hechos, con las implicaciones que ello tiene en la idea de justificar la pena de prisión.

La base investigativa que tienen los criminólogos para justificar el giro hacia la pena de prisión en su función neutralizadora y abandonar definitivamente el ideal de erradicar las causas de la delincuencia se encuentra en un histórico estudio elaborado por el experto en el tema Robert Martinson, conocido con el eslogan “¿nada funciona bien?” (*Nothing Works*) y publicado en el año de 1975 por la revista norteamericana *Public Interest* y del cual se infería que a pesar de las actividades de tratamiento del condenado aún no se sabe científicamente si es posible rehabilitarlo (Velásquez, 2014, 69).

Martinson (como se citó en Zysman, 2005, p.258) en el año de 1974 reúne la evaluación y conclusiones a las que llegó después de estudiar en profundidad 231 programas de tratamiento resocializador implementados en prisiones de New York entre los años de 1945 a 1967: “con pocas y aisladas excepciones, los esfuerzos rehabilitadores que han sido reportados hasta aquí, no han tenido efecto apreciable en la reiteración delictiva”. Martinson afirmaba:

Podría ser, por otro lado, que haya un efecto más radical en nuestras actuales estrategias que lo mejor de la educación, o lo mejor de la psicoterapia, no puedan superar. O incluso, reducir apreciablemente las poderosas tendencias de los infractores de continuar en el comportamiento delictivo. Martison (como se citó en Zysman, 260).

Esto puede explicar la decisión político criminal que ha tomado el actuarialismo en el contexto de la penalidad de contener, incapacitar e inocuizar por largo tiempo al condenado y ubicarlo en una condición en la que no tenga la posibilidad de dañar. De asegurar temporalmente en el espacio de la prisión grupos de delincuentes a partir de construir en el imaginario colectivo ideas que refuerzan la imagen de un ser depredador y peligroso que actúa maximizando sus deseos egoístas, justamente, porque no comparte los valores propios del sistema al que pertenece y sin posibilidades de alcanzar a futuro en él su reintegración a la vida social.

Si simplemente se trata de separarlos de la vida social y no legitimar su encierro, se puede mirar incluso la posibilidad de someterlos a penas altas y a medidas pospenitenciarias inocuizadoras de indeterminada o larga duración. Santoro menciona que el mero arresto con la

pena carcelaria aparece como un sistema eficaz para neutralizar la amenaza, segregar o sedar al consecuente temor de los ciudadanos (Santoro, 2004, 141).

Según Brandariz, en esta lógica aplacadora se podría hablar de por lo menos tres maneras de neutralización privativa de la libertad: la primera es la absoluta. Se da cuando se plantea que la función de la pena es segregar sin tener en cuenta el impacto del delito o la tipología del criminal; la segunda es la selectiva. La sanción ha de excluir del espacio social a todos aquellos delincuentes que presentan un considerable nivel de riesgo delictivo y ve viable que los infractores de menor peligro sean resocializados o se controlen con un castigo distinto al encierro.

La tercera, la neutralización categorial. En esta modalidad no se persigue tampoco un aplacamiento general, sino que se diseñan perfiles de riesgo. El castigo contenedor debe reservarse para los infractores que cometan delitos respecto de los cuales se hayan constatado altas tasas de reincidencia (Brandariz, 2014b, pp.187-188).

Con respecto a las medidas pospenitenciarias, Brandariz (2014b, p.191) se refiere a ellas como un campo nuevo de trabajo punitivo en el que el poder está desapareciendo la idea en razón de la cual con el cumplimiento de la sanción se acaba la responsabilidad. Estas disposiciones son de naturaleza administrativa, civil o penal como la libertad vigilada y la privación del derecho al voto de forma permanente o temporal.

b. Derecho Penitenciario. El Derecho Penitenciario se encuentra comprendido dentro de la disciplina denominada Derecho de la Ejecución Penal. Ella alude al conjunto de normas, principios, autoridades judiciales y administrativas que intervienen en todo el proceso de la ejecución de la pena privativa de la libertad dentro del marco consagrado en el Estado social y democrático de derecho. En términos de Iñaki Rivera:

El Derecho de la Ejecución Penal (en el marco de una auténtica sociología (sic) del control penal), entendido como la última secuencia del fenómeno punitivo – como prolongación del Derecho Penal Material y del Derecho Procesal Penal en la realidad de sus consecuencias jurídicas – al cual le es plenamente aplicable la garantía ejecutiva derivada del principio de legalidad y que tiene por objeto analizar tanto el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad – y las funciones que materialmente cumplen esas respuestas punitivas -, cuanto las posibilidades de superación alternativa de las mismas de acuerdo con las exigencias que plantea el Estado social y democrático de derecho (Rivera, 2009:105), resalto fuera de la cita.

Al día de hoy, el proceso evolutivo del Derecho Penitenciario indica que este ha sido planteado para evitar la reincidencia y lograr la rehabilitación y reintegro social de los condenados al sistema gracias al ejercicio (o a la práctica) de médicos siquiatras, pedagogos, trabajadores sociales y penitenciaristas, entre otros, sin embargo, el actuarialismo neoliberal ha repercutido considerablemente a este derecho cambiando en la realidad su objetivo, su partida presupuestal, la privatización de las prisiones y las tareas atribuidas al personal jurisdiccional judicial y penitenciario.

En palabras de Pavarini, la pena de prisión entendida como medio de gobernar la criminalidad puede ser útil para neutralizar selectivamente aquellos individuos que no pueden autocontrolar su conducta en relación con el respeto por el orden social establecido. Para alcanzar este propósito solo se requiere poner a la cárcel en condiciones mínimas de operar. De otro lado, los eventos de reincidencia son resignificados por el actuarialismo como un indicador positivo de la eficacia del sistema penal en la escogencia de su población, aún más, sobre ella es posible diversificar las respuestas punitivas (2003, pp.232-233).

Con respecto a lo económico, se han reducido los gastos operativos para ejecutar la pena, de igual modo, para optimizar los recursos en el quehacer de la prisión se tienen las macrocárceles y las penitenciarías de máxima seguridad o de cumplimiento cerrado con sus pabellones de aislamiento celular, establecidas y dotadas a finales de la década de 1970 con los medios tecnológicos modernos para contener a todos aquellos que pertenecen a los grupos sociales de elevado riesgo criminal (Rivera y Lazo 2005, p.250). Todo ello, a espaldas de reducir los efectos psicológicos, de salud física y sociofamiliares que crea el presidio negativamente en el condenado.

Al lado de reducir costos, tenemos para los años de 1970 el ingreso del sector privado al sistema carcelario y penitenciario mediante la privatización de sus programas y algunas de sus funciones. En palabras de Zysman, el particular puede ingresar de cinco formas distintas en el manejo de la cárcel y/o de la prisión:

a) contratar actividades como la comida, educación, salud, servicios de seguridad y escolta; b) invitar al sector privado a designar y construir nuevas penitenciarías; c) reservar la financiación

particular para hacer otras cárceles y prisiones por medio de inversiones, préstamos u otras posibilidades de mercado; d) el manejo o gerenciamiento y operación de todo o parte de una entidad penal; y e) convenir (o adjudicar) estos servicios, más las funciones que aún en los casos anteriores son retenidas por el Estado (2005, p.282).

De otro lado, el actuarialismo ha introducido instrumentos estadísticos que le permiten al agente penitenciario evaluar en el condenado el nivel de riesgo de reincidencia clasificándolo entre alto y bajo a partir de observar una serie de datos como la conducta desempeñada durante la ejecución de la pena, singularidades al cometer el delito, características de la víctima (edad, nivel educativo, experiencia laboral, lugar de domicilio, condiciones de la familia y prontuario), de modo, que se puedan adecuar estrategias de seguridad y limitar el goce de los beneficios administrativos como permisos de salida y cambios de fase en el tratamiento, entre otros (Rivera y Lazo 2005, pp.237, 250).

En otras palabras, el actuarialismo ha inspirado el establecimiento de distintos modelos de cálculo y pronóstico de riesgo futuro de reincidencia para la persona condenada, en un periodo de tiempo concreto. De acuerdo a Pueyo y Echeburúa (2010, p.405) estos datos ponderados correctamente mediante reglas matemáticas permiten obtener un valor que señala la posibilidad de que suceda aquello que se quiere augurar.

Añaden los autores, que los modelos aplicados al ámbito de la prisión permiten resolver o no los permisos penitenciarios, el cambio de fase, el acceso a la libertad condicional y el requisito o no, del tratamiento p en prisión (2009, p.403). Hay otro aspecto que señalar, estos modelos no explican el porqué de la reincidencia sin que por ello se pueda afirmar el abandono del cien por

ciento de los modelos rehabilitadores o la superación de los mismos, lo que se observa en la práctica es una mezcla de ambos paradigmas (actuariales y clínicos) para gobernar en el ámbito del control penal.

Hay que destacar lo siguiente, estos modelos le aplican al individuo factores, distribución de riesgos y probabilidades que surgen de estudios grupales, véase los tipos más comunes.

a. Modelo penitenciario riesgo, necesidad y responsividad. Como muestra de esto y en combinación con el paradigma reintegrador, tenemos el modelo actuarial de base psicológica denominado *riesgo, necesidad y responsividad*, hecho y desarrollado por los psicólogos canadienses Andrews y James Bonta durante los años 80, se describe, a grandes rasgos, su propuesta:

En primer lugar, el riesgo de reincidencia. Andrews y Bonta (como se citó en Velásquez Valenzuela, 2014, pp.75-76) explican que el riesgo se compone de dos premisas: la primera, es que el comportamiento delictivo puede predecirse mediante el uso de instrumentos actuariales de medición de amenaza de reincidencia. Estas herramientas parten de la base de que existen factores de peligro, conductas, o situaciones específicas de la vida del evaluado que aumentan la probabilidad de que, en un futuro cercano, vaya a reanudar la comisión de delitos.

La segunda, es que la intervención que se realiza sobre el condenado debe ser acorde con el nivel de riesgo que esté presente en él. Conociendo qué factores impactan en el sujeto, se puede construir una intervención específica para el mismo, orientada a reducir estos elementos de

amenaza, de manera que, una vez que el individuo vuelva al medio libre, no incurra en conductas de peligrosidad que le lleven a cometer nuevos delitos.

En segundo lugar, necesidades criminógenas. Andrews y Bonta (como se citó en Velásquez Valenzuela, 2014, p.76) refieren que todas las personas poseen determinadas necesidades y si el objetivo de la intervención, es reducir la reincidencia de los infractores de la ley, entonces el manejo de estos debe determinar cuál de las carencias del sujeto evaluado se relacionan directamente con su historial delictivo, o bien incidan en situaciones de riesgo que puedan derivar en que cometan nuevos delitos.

En tercer lugar, la responsividad. De acuerdo con Andrews y Bonta (como se citó en Velásquez y Valenzuela, 2014, p.78), este elemento tiene dos aristas: la primera, que “el programa de intervención debe ser entregado en un estilo y modo que sea consistente con las habilidades y los estilos de aprendizaje del infractor”; la segunda, hay que identificar la personalidad y la parte cognitiva del sujeto que está en este, de manera que, ambos puedan articularse en armonía.

b. Modelo penitenciario *check list* (de chequeo) HCR-20. El protocolo de evaluación del riesgo de violencia fue inventado por Webster, Douglas, Eaves y Hart en el año de 1997. Según Pueyo y Echeburúa (2010, p.405), el HCR-20 permite predecir la amenaza belicosa en reclusos condenados a partir de específicos factores de peligrosidad. Este fue creado especialmente para detectar al interior de la prisión a convictos agresivos y funciona como una guía que permite determinar cuándo podría ocurrir el acto transgresor.

Explica Rivera (2015, p.117) que el HCR-20 demanda del personal penitenciario el registro continuo en la cartilla biográfica del condenado de aquellos hechos que pueden considerarse, a partir de los factores establecidos en el protocolo, como comportamientos agresivos y que a futuro podrían terminar efectivamente en violencia.

Los factores de riesgo están organizados en diez agentes del pasado (*históricos*: referidos a una serie de elementos que no se pueden modificar), cinco variables que hacen presencia (*clínicos*: se refieren a los componentes relacionados con la peligrosidad) y cinco aspectos del futuro (*de gestión de riesgo*: aluden a puntos que podrían tener cierto grado de impacto (o efecto) en la valoración de la reincidencia).

Al final, el funcionario debe establecer la valoración final del riesgo como baja, moderada o alta. El condenado que presente un puntaje considerable posee empíricamente una probabilidad tres veces mayor de reincidir en el delito en relación con quien es valorado con un nivel menor (Armaza, 2013, p.116).

El protocolo incluye 20 factores de riesgo, a modo de ítems que el evaluador tiene que calificar, organizados en tres subescalas que agrupan factores de riesgo los pasados, presentes y futuros. Se incluyen elementos de amenaza estáticos y activos que permiten hacer exámenes repetidos en función de los cambios en las circunstancias propias o contextuales del valorado. Se pueden establecer tres niveles de peligrosidad, baremos o

puntos de corte explícitos: bajo, moderado o alto (inminente) (Pueyo y Echeburúa, 2010, p.405).

c. Modelo penitenciario de escala de evaluación de la psicopatía, de Hare (PCL-R). Este protocolo del actuarialismo es conocido con el nombre de Psychopathy Chrccklis – revised – PCL-R, su creador fue el canadiense Robert Hare en el año de 1991. PCL-R fue hecho para ser puesto en práctica en el contexto de la prisión y en institutos psiquiátricos con el propósito de predecir la delincuencia y las psicopatías a partir de valorar los datos obtenidos en la cartilla biográfica del condenado complementada con entrevistas de naturaleza psicosocial.

Según Esbec Rodríguez (como se citó en Armaza, 2013, p.115) este protocolo es idóneo para determinar el nivel de peligrosidad del criminal señalado:

Este es un instrumento válido y fiable para identificar aquellos delincuentes varones y pacientes psiquiátricos que tienen una mayor probabilidad de reincidencia general y es un buen predictor de otros aspectos del comportamiento tras la excarcelación, así como de la respuesta al tratamiento

La PCL-R consta de los siguientes ítems para evaluar la personalidad del individuo, ellos se pueden dividir en dos grupos. El primero, se relaciona con un conjunto de características de la forma de ser como crueldad, insensibilidad, manipulación cruel, egoísmo, falta de empatía y de afecto.

El segundo grupo, alude a las características de índole conductual como estilo de vida crónicamente inestable y antisocial, necesidad de estimulación constante, bajo nivel de control

conductual, falta de objetivos a mediano y largo plazo y delincuencia juvenil. Todas ellas relacionadas con el proceso de socialización (Solís y Ruiz Ortega, 2008: 51).

Tabla 1. *Ítems de la PCL-R.*

Tabla 3 Ítems de la PCL-R		
Ítem	Descripción	Factor en que puntúa
1.	Facilidad de palabra/ encanto superficial	1
2.	Sentido desmesurado de autovalía	1
3.	Necesidad de estimulación/ tendencia al aburrimiento	2
4.	Mentira patológica	1
5.	Estafador/ manipulador	1
6.	Ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa	1
7.	Afecto superficial y poco profundo	1
8.	Insensibilidad afectiva/ ausencia de empatía	1
9.	Estilo de vida parasitario	2
10.	Pobre autocontrol de la conducta	2
11.	Conducta sexual promiscua	-
12.	Problemas de conducta en la infancia	2
13.	Ausencia de metas realistas a largo plazo	2
14.	Impulsividad	2
15.	Irresponsabilidad	2
16.	Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones	1
17.	Frecuentes relaciones maritales breves	-
18.	Delincuencia juvenil	2
19.	Revocación de la libertad condicional	2
20.	Versatilidad criminal	-

Tabla 10. Ítems de la PCL-R. Solís y Ruiz Ortega, 2008.

Tal y como explican Solís y Ruiz Ortega (2008, p.51), la PCL-R se ha utilizado en Estados Unidos de América y en Canadá para tomar decisiones sobre la asignación de patios a los condenados dentro de la cárcel, otorgar libertad condicional, el presagio de reincidencia e impulso a la agresividad y programas de terapia adecuados, así mismo, para pronosticar el quebrantamiento de suspensión de la pena y de la conducta antisocial dentro y fuera de los centros penitenciarios.

d. Modelo penitenciario la escala RISCANVI. De acuerdo a lo mencionado por Rivera (2015, pp.118, 121), en Cataluña en el 2007 se crea el protocolo RISCANVI con la finalidad de predecir

en el condenado la violencia autodirigida, la intrainstitucional, recaída agresiva y el quebrantamiento de la pena. La valoración se lleva a cabo a partir de los siguientes datos:

1) Edad del primer incidente violento o inicio de las conductas agresivas; 2) Beligerancia previa (al delito principal); 3) Comportamiento penitenciario anterior (faltas graves o muy amenazantes); 4) Evasiones, fugas y quebrantamientos de condena; 5) Problemas con el consumo de alcohol u otras drogas; 6) Dificultades de salud mental pretéritas (diagnósticos preliminares de trastornos, ira, desequilibrio de las emociones, impulsividad); 7) Intentos o conductas de autolesión antecesores; 8) Falta de soporte familiar y social, carencia de una red de relaciones; 9) Conflictos de índole laboral; 10) No tener planes para el futuro.

Si el uso del anterior protocolo da como efecto un riesgo alto, se evaluará al preso con un segundo protocolo denominado *Riscanvi complet* (Riscanvi-C). De igual forma, esta escala le permite al agente penitenciario decidir que la persona examinada obtenga o no, permisos de salida al exterior, progresiones en el grado de clasificación, acceso a régimen abierto y a la libertad condicional.

Añade Rivera que los ítems que conforman la escala Riscanvi-C están compuestos de tres subgrupos que congregan los factores de riesgo. Sus datos se obtienen del expediente penal y penitenciario, de entrevistas y observaciones directas y de otras informaciones complementarias (2015, pp. 119-120).

Factores criminales/penitenciarios	Factores personales/sociofamiliares	Factores clínicos/personalidad
Delito base violento	Desajuste infantil	Abuso o dependencia a las drogas.

Edad en el momento del delito base.	Distancia entre su residencia habitual y el centro.	Abuso o dependencia al alcohol.
Intoxicación durante el cometimiento del delito base.	Nivel educativo	Trastorno mental severo
Víctimas con lesiones	Problemas relacionados con la educación.	Comportamiento sexual promiscuo.
Duración de la pena.	Falta de recursos económicos.	Respuesta limitada al tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Tiempo ininterrumpido en la cárcel.	Ausencia de planes viables de futuro.	Trastorno de personalidad relacionado con la ira.
Historia de violencia.	Antecedentes delictivos en la familia de origen.	Pobre enfrentamiento del estrés
Inicio de la actividad delictiva o violenta.	Socialización problemática en familia de nacimiento.	Intentos o conductas de autolesión.
Incremento de frecuencia, gravedad y/o diversidad de los delitos.	Falta de soporte familiar y social.	Actitudes procriminales o valores antisociales
Conflictos con otros internos.	Amistades criminales/delincuentes.	Baja capacidad mental e inteligencia.
Incumplimiento de medidas judiciales.	Pertenece a grupos sociales de riesgo	Temeridad.
Expedientes disciplinarios.	Rol delictivo destacado.	Impulsividad, inestabilidad, desequilibrio emocional.
Evasiones o fugas	Víctima de violencia de género (sólo aplicable a mujeres).	Hostilidad
Regresión de grado.	Cargas familiares actuales.	Irresponsabilidad.
Quebrantamiento de permisos.		

Tabla 11. Factores de la escala Riscanvi-C Grupo de Estudios Avanzados Sobre Violencia de la Universidad de Barcelona, Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat catalana y la empresa Better Consultants, 2007.

La recepción del modelo actuarial en Colombia y su impacto en el derecho penitenciario.

Hasta ahora se han expuesto los modelos penitenciarios implementados en Europa y Estados Unidos, así como su naturaleza y componentes. A continuación, nos interesa exponer a, grandes rasgos, la manera en que el actuarialismo ha impactado el sistema penitenciario colombiano. Con este fin, mostraremos la relación de la política criminal actuarial con el neoliberalismo y sus efectos en la caracterización de los grupos poblacionales que conforman hoy la clientela de la prisión en nuestro entorno. Para lograr este objetivo, se abordarán las fuentes más relevantes

sobre la cuestión, a saber: José Antonio Ocampo, Luis Javier Orjuela, Manuel Iturralde, Elias Carranza, Hernando Leon Londoño, entre otros.

1. *Neoliberalismo y política criminal actuarial*. En la década de 1980, se propuso para América Latina una serie de fórmulas encaminadas a liberar el mercado (*Consenso de Washington*), a fin de obtener un crecimiento económico. Se impulsó la idea de relacionar el aumento de la deuda externa y la crisis de los países latinoamericanos con el modelo económico vigente desde 1950, denominado *industrialización sustitutiva de importaciones* debido a que este se encontraba caduco. Además, se planteó, entre otras, que la intervención del Estado en la economía y el gasto social excesivo eran causantes de la crisis del modelo económico.

Para salir de esta situación de crisis, era indispensable reestructurar el modelo económico desde la integración de las economías al mercado mundial, privatizar las empresas públicas y limitar la intervención del Estado en las dinámicas comerciales, así como el desarrollo de la política social. Este reformismo contó con el acompañamiento y la dirección de la Agencia de Cooperación Internacional (USAID), el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial (Iturralde, 2012, p.12) y (Londoño Berrío, p. 2016, p.78).

Colombia comenzó a implementar las reformas estructurales de su economía a partir de la apertura económica. Este camino se inició de la siguiente manera: en primer lugar, Virgilio Barco (1986-1990) inició, al final de su mandato, la apertura económica y comercial con la reducción de aranceles, ajustes fiscales y monetarios, reforma laboral tendiente a la internacionalización de la economía y la diversificación de las exportaciones y, sobre todo, con la atracción de la inversión extranjera (Mora, 2013, p. 10). En segundo lugar, César Gaviria (1990-1994), quien bajo el Plan Nacional de Desarrollo denominado *La Revolución Pacífica*,

continúo, diligentemente, con el proceso dinámico de internacionalización de la economía, liberalización de las importaciones y estímulos a la inversión privada, acompañado de políticas de desregulación del régimen de inversión extranjera (El Espectador, 1990), seguridad social y flexibilización laboral. Tenemos como ejemplo: empresas temporales, autorización de despido de trabajadores de diez años de antigüedad, creación de fondos de pensiones y cesantías, y cooperativas de trabajo (Ocampo, 2000, p. 57).

En tercer lugar, Andrés Pastrana (1998-2002), enfatiza en la privatización de las empresas del Estado como aeropuertos, puertos, empresas de telecomunicaciones (Orjuela, 2005, p. 118) bajo la idea de entregarle su titularidad al capital tanto extranjero como nacional; firma con los Estados Unidos en el año 2000 el Plan Colombia, que representa una ayuda de 2.200 millones de dólares para fortalecer, primeramente, las Fuerzas Militares, Ejército, Armada, compra de armamento y la aviación para combatir el narcotráfico y las guerrillas colombianas (Orjuela, 2005 p. 119).

En cuarto lugar, Álvaro Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010), cuyo gobierno se encargó de consolidar el modelo neoliberal en Colombia y su propuesta de un Estado comunitario, soportada en la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática. Los planes de su gobierno se apoyaron en tres ejes: seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social. El primero buscó garantizar el control físico del territorio y derrotar, militarmente, a las guerrillas de las Farc y Eln (Londoño Berrío, 2016, p.88). El segundo, la confianza inversionista, impulsó la apertura económica y el libre mercado, privatizó los servicios públicos y amplió las garantías a la inversión extranjera, así mismo, promovió la explotación de recursos naturales y la agroindustria para hacer frente a mercados internacionales desregulados (Lemaitre, 2011, p. 15).

Londoño Berrío indica que para garantizar estos objetivos fue necesario controlar el orden público, para ello se incrementó, significativamente, el número de miembros de la fuerza pública (2016, p. 93). Por último, la *cohesión social* cuyo fin era erradicar la pobreza y la desigualdad social mediante una política pública de naturaleza asistencialista que no permitió una inserción positiva de la población vulnerable al orden social y político actual (Quevedo y Giraldo, 2009, p. 173-214).

En quinto lugar, Juan Manuel Santos (2010-2014, 2014-2018), quien enfatiza de manera significativa en sus planes de desarrollo la entrega al sector privado de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, como la minería, energía e hidrocarburos, avalando para ello la inversión nacional y extranjera. La idea central de esta decisión política es la de alcanzar de forma directa el crecimiento económico. Para superar las dificultades que este tipo de actividades de explotación generan en las comunidades (vg., impactos en el medio ambiente) y en las operaciones administrativas de las autoridades ambientales (vg., requisitos para obtener las licencias de explotación) fue necesario modificar el Código de Minas, Ley 1382 de 2010, y fortalecer dichos objetivos mediante el documento Conpes 3762 de 2013.

En materia laboral, la Ley 1450 del 2011 estipuló que, por razones de emergencia económica, el Estado podrá diseñar e implementar programas de empleo temporal por un término máximo de un año, con una asignación salarial de un mínimo mensual legal vigente; así mismo, consagró que los trabajadores dependientes que se encuentren vinculados, laboralmente, por períodos inferiores a un mes o por días, deberán ser afiliados a la seguridad social integral. De igual forma, la Ley 1753 de 2015 establece, entre otros, que los contratos de tercerización laboral sean ajustados a la ley.

Otro punto a tener en cuenta, es la prevalencia de la sostenibilidad fiscal (Ley 1695 de 2013) sobre el reconocimiento económico en el marco de una indemnización o reparación como consecuencia de una declaración de responsabilidad por violación a derechos humanos. El exmagistrado Hernández (2011) entiende que esta ley puede ser extensible a la garantía de los derechos sociales y culturales, por lo tanto, puede interferir, negativamente, en la tutela de los mismos, mediante las diferentes acciones que requieran la asignación de recursos económicos. De ahí que el Estado pueda afirmar:

Usted tiene el derecho, y nadie se lo niega. Pero no está financiado. No es sostenible. No hay plata. Esta nueva será la Constitución del Estado neoliberal y del capitalismo salvaje, que sustituirá la del Estado Social de Derecho aprobada hace dos décadas (Hernández, 2011).

En relación con las consecuencias del modelo económico neoliberal implementado en Colombia, se podría afirmar que la decisión estatal de no intervenir la economía ha generado, preponderantemente, desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, desprotección social, acompañando con ello, irrefutablemente, a la pobreza, con todo lo que ello implica en términos de gobernar la vulnerabilidad.

Ribotta entiende la vulnerabilidad como expresión de una discriminación, explicando que entre mayor sea aquella, más fuerte serán la desigualdad sufrida y la discriminación que se produzca (2012, p. 14); por lo que sectores de la población marginada y excluida no podrán de manera efectiva acceder a recursos y servicios, esto es, exigir sus derechos, y lo que es peor, no podrán salir de la posición en que la estructura social los ha ubicado.

Situarse en este escenario social, político y económico hará evidente, más temprano que tarde, el surgimiento de conflictos y confrontaciones al orden económico impuesto. Bajo esta óptica, la resolución de los problemas estructurales de naturaleza social y económica que se expresen en formas de alteración del orden público, inseguridad, violencia y delincuencia callejera serán manejados por el Estado por medio del control penal, es decir, por la política criminal actuarial, que tiene a su cargo el control de grupos poblacionales identificados como problemáticos. Para ello se identificará en los planes de desarrollo 2010 – 2014 y 2014 – 2018 las características ya presentadas sobre el actuarialismo:

- a. Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Este documento contiene un diagnóstico acerca de la tipología de delitos con mayor ocurrencia en las principales ciudades del país que tienden a alterar la percepción de seguridad y tranquilidad de los ciudadanos (Departamento Nacional de Planeación, 2010, p.503). En relación con estos tenemos: hurto de automotores, en entidades financieras y el común; microtráfico, violencia sexual, delitos contra la familia y homicidio.

Recordemos que para el actuarialismo, esta tipología de conductas permite crear grupos con rasgos criminales propios en el que de manera positiva faculta seleccionar los individuos que a futuro deben encajar. Además, por la naturaleza individual de los bienes jurídicos afectados, suele ser muy fácil caracterizar los sujetos que ingresan al ámbito del sistema penal y obtener una condena en su contra debido a que las pruebas para estas conductas no requieren de procedimientos técnicos ni tecnológicos de punta, se recolectan, “fácilmente”, y no demandan una investigación muy detallada.

Tal y como lo explica Iturralde (2012, pp. 23-27), estos delitos denominados clásicos muestran que son los desempleados o con trabajos de reducidos ingresos, jóvenes y con

bajos niveles educativos los que encajan, “perfectamente”, al perfil, por lo que al Estado le es factible desvincular estos hechos como efectos negativos del neoliberalismo económico y centrarse, “exclusivamente”, en la responsabilidad individual de quien lo comete. Tal vez el siguiente extracto sea un buen ejemplo de lo que se quiere significar:

La Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PSCC) (...) estará orientada a (5) responder de manera efectiva a las conductas que pongan en riesgo o atenten contra la seguridad individual y colectiva y (6) promover la convivencia ciudadana. (Departamento Nacional de Planeación, 2010, p.509). resalto fuera de texto.

Con respecto a la atribución de responsabilidad social del sector privado en materia delictiva, interesa señalar que el Gobierno nacional demanda a la ciudadanía un acompañamiento activo y responsable para lograr reducir la violencia y el crimen. Para ello, estableció frentes locales de seguridad, redes de apoyo y solidaridad ciudadana y fortaleció los mecanismos de denuncia por parte de la ciudadanía (Departamento Nacional de Planeación, 2010, p.515).

En cuanto a la prevención centrada en la fase previa a la comisión del delito, se tiene que el Plan Nacional de Desarrollo implementó la vigilancia comunitaria por cuadrantes con el objetivo de prevenir los delitos que se comenten en las áreas de mayor inseguridad, focalizó la prevención situacional en las zonas más deprimidas de la ciudad y recuperó el espacio público mediante programas de renovación urbana. De esta forma, pretendió reducir, neutralizar y controlar los riesgos derivados de los delitos (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pp. 511- 512).

- b. Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. En relación con la criminalidad, el Departamento Nacional de Planeación (2015, p. 451) presentó los delitos de mayor impacto sobre los ciudadanos en el periodo 2010-2014: hurto (a personas, residencias, y entidades comerciales), extorsión, homicidio, secuestro, lesiones personales, violencia

intrafamiliar y violencia sexual. Obsérvese la ocurrencia de estos delitos por cada 100.000 habitantes en este periodo de tiempo.

Tabla VIII-1

Delitos de alto impacto. Tasas por 100.000 habitantes, 2010-2014

Delito	2010	2014	Variación (%)
Tasa de homicidio común por 100.000 habitantes	34,0	27,8	-18,1 %
Tasa de secuestro por 100.000 habitantes	0,62	0,59	-4,5 %
Tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes	135,7	194,1	43 %
Tasa de hurto a residencias por 100.000 habitantes	38,3	42,5	10,9 %
Tasa de hurto a entidades comerciales por 100.000 habitantes	28,8	44,6	54,8 %
Tasa de extorsión por 100.000 habitantes	3,0	10,3	243,3 %
Tasa de violencia sexual por 100.000 habitantes	14,8	24,6	66,2 %
Tasa de lesiones personas por 100.000 habitantes	116,9	176	45,4 %
Tasa de violencia intrafamiliar contra la mujer por 100.000 habitantes**	302,54	215,71	-28,7 %
Tasa de violencia intrafamiliar contra NNA por 100.000 habitantes**	87,61	56,59	-35,4 %

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional. Elaboración: DNP-DJSG.

**Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Considerando este diagnóstico con la tipología presentada por el Departamento Nacional de Planeación en el año 2010, se nota la continuidad de atentados contra bienes jurídicos de naturaleza individual, como patrimonio económico, vida humana independiente, integridad personal, integridad y formación sexual. En relación con el informe del 2010, puede distinguirse el aumento significativo de las conductas de extorsión, lesiones personales y violencia sexual.

Con respecto a los objetivos, metas y estrategias en la política criminal, hay que resaltar que el Departamento Nacional de Planeación las estructuró teniendo en cuenta el acuerdo de paz logrado con las Farc, de modo que tenga como eje transversal el fortalecimiento del Estado, así mismo, la modificación y la ampliación de las competencias de las instituciones encargadas de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana (2015, p. 466).

En relación con la responsabilidad social del sector privado en materia delictiva, el Estado busca fortalecer la intervención de los ciudadanos en la prevención de la criminalidad por medio de su apoyo y participación activa en programas que promuevan el mejoramiento del espacio público, la convivencia y ambientes seguros, por ejemplo, mediante el fútbol, en zonas urbanas que presenten alta conflictividad y/o criminalidad (Departamento Nacional de Planeación, 2015, pp. 466, 509).

En lo que se refiere a la prevención en fase previa a la comisión del delito, el Departamento Nacional de Planeación le apuesta a fortalecer la investigación criminal, la inteligencia policial, la vigilancia comunitaria por cuadrantes y la capacidad de seguimiento y evaluación integral de la actividad de policía; en lo relacionado al posconflicto, la política criminal busca estrategias que le permitan desarticular la macrocriminalidad y las bandas criminales (bacrim) y obtener una paz estable (2015, p.508).

En este contexto, se quisiera añadir apartes del informe final de la Comisión Asesora de Política Criminal para el Estado colombiano, en relación al diagnóstico de la política criminal, elaborado en el año 2012, el cual ha señalado que el Estado colombiano no posee una política criminal, empíricamente, fundada y enmarcada dentro de los principios y valores consagrados en la Constitución (2012, p. 27). En cambio, tiende político, criminalmente, a expresarse en formas de populismo punitivo, dado que apalanca la eficacia del sistema penal recurriendo a nuevos delitos y al aumento de penas. La comisión (pp. 30, 31) refiere que el Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, desde su año de creación al 2011 ha sufrido treinta y seis (36) reformas, con un promedio de 3.3 leyes por año. Estas reformas aluden a:

La tipificación de nuevas conductas (creación de 47 delitos), el aumento de penas para delitos ya creados (80 delitos), la modificación de causales de agravación punitiva, la variación de las

consecuencias punitivas para determinada clase de delitos, la modificación de beneficios por aceptación de cargos y la modificación de los términos de prescripción de la acción penal (p. 31).

Otro punto al que alude la comisión es con respecto a los beneficiarios reales de la seguridad física que se obtiene mediante la implementación de la política criminal. Según la comisión, al Estado no considerar factores como la desigualdad social, discriminación y pobreza, en la creación e implementación de la política criminal, termina favoreciendo con mayores niveles de seguridad a las clases sociales altas que a los pobres; a la inversa, la clase social más vulnerable es la que se ve en mayor medida afectada en su libertad, porque, desproporcionadamente, sufre la detención y la privación de la libertad en relación con las clases ostentosas, como resultado de un trato severo a la lucha contra el delito y la delincuencia (2012, p. 35, 36).

Tras de esto, se vislumbra el hecho de identificar a partir de la posición que la persona ocupa dentro de la estructura social, el acceso desigual o no a los servicios y recursos a los que como individuo tiene acceso, así como, identificar que el alcance selectivo de parte del sistema penal es una consecuencia más de las circunstancias sociales y económicas de este, que del daño antijurídico que su conducta represente.

2. Características de los grupos poblacionales que ocupan la prisión colombiana: Efectos del neoliberalismo y el actuarialismo. En este ítem se quiere partir de las siguientes preguntas: ¿cuáles son los grupos poblacionales que ocupan la prisión?, ¿por qué estos grupos poblacionales y no otros? En relación con la primera pregunta se deben de mirar los rasgos de los grupos poblacionales condenados que ocupan la prisión en Colombia, para ello se tendrá como punto de partida los hallazgos registrados en la Caracterización y perfilación de la población condenada, producida por el Ministerio de Justicia e INPEC en el año del 2011, desde las variables de la edad, estrato socioeconómico, nivel de educación y trabajo.

En cuanto la edad, los establecimientos de reclusión del INPEC reportan condenados con un promedio de edad de 35,4%. De igual forma, se determina que el 25% de la población está entre 17 y 27 años, el 50 % no supera los 33 años y el 75 % es menor de 41 años. Para los hombres condenados, se encontró que el rango de edad va desde los 18 hasta los 87 años, con un promedio de edad de 35,8 años. Así mismo, se establece que el 25 % de la población está entre 18 y 28 años, el 50 % no supera los 34 años y el 75 % es menor de 42 años (Ministerio de Justicia e INPEC, 2011, p. 48). Para las mujeres condenadas, se encontró que el rango de edad va desde los 17 hasta los 78 años, con un promedio de edad de 33,9 años. Así mismo, se establece que el 25 % de la población está entre 17 y 26 años, el 50 % no supera los 32 años y el 75 % es menor de 40 años (Ministerio de Justicia e INPEC, 2011, p. 48):

Gráfica 1. Edad de hombres condenados (2011)

Gráfica 2. Edad de mujeres condenadas (2011)

Con respecto al estrato socioeconómico, predomina el estrato 1 con el 32,8%, seguido del estrato 2 con un 29,0%, en tercer lugar, el estrato 3 con un 17,6%, el 6,7% reportaron pertenecer al estrato 0, el 3,8% al estrato 4, el 1,4% al estrato 5 y el 0,8% al estrato 6. El 7,9% de los internos(as) reportan no saber a qué estrato corresponden. Se destacó que el 69,7% de la población condenada en Colombia se agrupa en los estratos 0, 1, y 2 (Ministerio de Justicia e INPEC, 2011, p. 49).

Se encontró en la población masculina que el 69.7% agrupa los estratos 0, 1, 2 y que el 7.7% de la población dice no saber en qué estrato se puede ubicar. Se halló en la población femenina que el 64.4% agrupa los estratos 0, 1, 2. y que el 8.6% de la población dice no saber en qué estrato se puede ubicar (Ministerio de Justicia e INPEC, 2011, p. 49).

Gráfica 3. Estrato socioeconómico de hombres condenados (2011) Gráfica 4. Estrato socioeconómico de mujeres condenadas (2011)

En relación con la educación, se pudo establecer que del total de la población condenada el 65.6% reportó no haber obtenido el título de bachiller estando en libertad. Del total de hombres condenados, el nivel de educación es de primaria el 42%, secundaria 43%, nivel técnico o tecnológico 4.4%, nivel profesional 4.3%, nivel de posgrado 1%. En cambio, del total de las mujeres, el grado de educación alcanzado fue: primaria 36.5%, secundaria 44.4%, nivel técnico o tecnológico 7.1%, nivel profesional 6.9% y posgrado 0.4% (Ministerio de Justicia e INPEC, 2011, pp. 53- 54). Obsérvese el siguiente cuadro comparativo:

Gráfica 5. Nivel de escolaridad de hombres y mujeres condenados (2011).

En cuanto al empleo, se encontró que el 96.9% de la población condenada dijo haber trabajado alguna vez en su vida, iniciando en promedio a los 15 años de edad. En relación con los hombres condenados, se tiene que el 97.9% de ellos ha trabajado; el 57.8% lo hizo como independiente, el 25.2% en empresa privada, el 15.6% en empresa pública y el 6.2% en actividad ilícita. El 11,6% reportó que su actividad laboral antes de la detención era ilícita y el 84.4% era lícita; de ellas los porcentajes más altos corresponden a: 13.5% agropecuaria, 10.4% operarios, 8.3% vendedor en tiendas, 7.9% construcción, 7.7% vendedor ambulante, 4.5% mecánicos, 3.9% técnicos, 3% oficinistas, 3.3% profesionales, 1.9% jefes o directivos, 1.9% celadores, 1.8% Fuerzas Armadas y 1.4% estudiante (Ministerio de Justicia e INPEC, 2011, p. 55).

Con respecto a las mujeres, se estableció que el 93.3% ha trabajado; el 55.7% en forma independiente, el 23.8% empresa privada, el 11.2% empresa pública y el 6.2% actividad ilícita. El 11,4% de ellas reportaron que su actividad ocupacional antes de la detención era ilícita, el 80.3% que era lícita; de estas actividades los porcentajes más altos corresponden a: 16.4% vendedora en tiendas, 16.3% ama de casa, 11.8% vendedora ambulante, 10.1% servicio doméstico, 5.5% oficinistas, 3.7% técnicas, 2.9% profesionales, 2% estudiantes, 1.9% agropecuaria, 1.9% operarias, 1.5% trabajadora sexual y 1.4% jefas o directivas (Ministerio de Justicia e INPEC, 2011, p. 55).

Recogiendo las características anteriores, se tiene que en Colombia la persona condenada es un ser con una edad promedio de 35.8 años (en mayor medida hombres); perteneciente a los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2; con un nivel educativo de primaria con un 39%, y un 43.5% con básica secundaria; que el 57% ha trabajado como independiente; el 24.5 % como dependiente del sector privado, por un lado, en hombres con actividades como: agropecuaria, operarios, vendedor en tiendas, construcción y vendedor ambulante; de otro lado, en mujeres con labores como: vendedora en tiendas, vendedora ambulante, servicio doméstico, operarias, trabajadora sexual y agropecuaria.

En lo que se refiere a la posible respuesta del por qué estos grupos poblacionales habitan la prisión y no otros, es decir, cuáles son las posibles causas por las que el sistema de justicia penal

los castiga por medio de la pena privativa de la libertad, pueden encontrarse distintos factores de segregación en la violencia estructural indirecta (vg., desmonte de prestaciones laborales, educativas, habitacionales, entre otras, las cuales obstaculizan la dignificación de la vida humana) que ha impuesto el modelo económico neoliberal implementado en Colombia, como estilo de gobernar a las clases sociales más excluidas y vulnerables del país.

El profesor Elías Carranza (2012, p. 37, 59) explica que la respuesta que goza de mayor satisfacción es la que entiende que ello obedece al uso de políticas criminales que promueven un mayor uso de la justicia penal y que se centran en crear nuevos delitos, aumento de penas y límites a beneficios de excarcelación, así como en el presidio; en comparación con la tesis que afirma la correspondencia entre las tasas penitenciarias con las tasas de criminalidad.

El autor añade que en América Latina se tiene por costumbre implementar una política criminal orientada a usar la penitenciaría como un medio de solución a los problemas sociales, por medio de ubicar en ellas a personas excluidas y pertenecientes a los estratos más vulnerables, en lugar de corregir los factores sociales que los generan (Carranza, 2012, p.53). Carranza ha señalado que para una buena justicia penal es imprescindible alcanzar buenos niveles de justicia social (2012, p. 65).

Análogamente, Iturralde (2011, p.120,149) afirma que las prisiones colombianas se utilizan por la sociedad para afrontar problemas estructurales y la inestabilidad social que generan grupos poblacionales que ante las condiciones de exclusión social y desigualdad económica han optado por el delito. Iturralde señala que el proyecto neoliberal en Colombia demanda un derecho penal con un drástico componente disciplinario sobre sectores sociales marginados del mercado laboral y financiero que deben ser declarados responsables de sus actos, con independencia del contexto y los motivos por los que delinquen (2011, p. 154). Un año después añade:

La combinación de políticas económicas neoliberales con sistemas penales punitivos y excluyentes ha dado como resultado el control social de los miembros de las clases marginales, quienes terminan de manera desproporcionada en las prisiones latinoamericanas (2012, p. 23).

Entre las conclusiones de este balance resulta claro que en Colombia las clases políticas y los grupos hegemónicos que son favorecidos por la implementación y ejecución de políticas económicas neoliberales han decidido perseguir y aislar a los grupos poblacionales excluidos de la lógica del mercado mediante la prisión, dado que es una manera estratégica y útil a sus intereses.

3. Modelo Valoración Integral de Condenados (I.V.I.C. INPEC). INPEC y el Ministerio del Interior y de Justicia ante la necesidad de asumir, científicamente, el diagnóstico y clasificación de las personas condenadas, de acuerdo con la finalidad del tratamiento penitenciario contrató, en el año 2009, con la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Bucaramanga, los servicios para el diseño, validación e implementación de instrumentos científicos para el proceso de valoración, clasificación y seguimiento en el proceso penitenciario de la población condenada en las instituciones penitenciarias del orden nacional.

Dentro de estos parámetros la Universidad diseñó y validó un instrumento para valorar, integralmente, a los condenados (I.V.I.C. INPEC), teniendo en cuenta procedimientos matemáticos y estadísticos, los que permiten obtener puntos de alerta en el tratamiento penitenciario. Estas alertas están soportadas sobre la lógica del riesgo epidemiológico con niveles alto, medio y bajo. El riesgo alto indica mayor prioridad de atención; de otro lado, el conocimiento científico sobre la población carcelaria aumentará de manera exponencial al procesar las bases de datos que se crean en el ejercicio de medir y calificar a la persona condenada (Ministerio del Interior y de Justicia e INPEC, 2009, p.7).

Para construir el plan de valoración, clasificación y seguimiento al tratamiento penitenciario de la persona condenada, es indispensable partir de la identificación de los riesgos que el sujeto, individualmente, considerado presenta. Cabe indicar que para ello los integrantes del Consejo de Evaluación de Tratamiento (CET) necesitan soportar su diagnóstico de riesgo objetivo desde la criminología y la norma jurídica penal. Desde esta perspectiva, el Instrumento para la Valoración Integral de Condenados (I.V.I.C INPEC) ha incluido tres variables.

La primera, el instrumento actuarial de riesgo de reincidencia. Se entiende por tal la posibilidad del condenado de recaer en conductas delictivas. Esta variable parte de los antecedentes del condenado que incluyen tres subdimensiones: personales, el individuo en el inicio de la carrera delictiva; familiares, el papel de la familia en el inicio de la carrera delictiva; y sociales y contextuales, influencia del medio social y demográfico. En esta variable, se busca que la fuente actuarial de riesgo este tanto en la posibilidad baja, media o alta de la comisión de una conducta punible, como en un eventual comportamiento antisocial (Ministerio del Interior y de Justicia e INPEC, 2009, p.116, 119 y 120).

La segunda, visión sobre la conducta criminal y el delito. Se entiende por ello la especial concepción que tiene el condenado sobre el concepto de la conducta criminal y los delitos. El CET debe tener en cuenta cuál es la visión o concepción que tiene el condenado que está diagnosticando sobre qué es una conducta criminal y sobre lo qué es un delito porque, dependiendo de esta especial visión o cosmovisión, el condenado tendrá alta, media o baja motivación antisocial y, por tanto, los riesgos se verán condicionados por dicha visión. Esta subdimensión posee dos indicadores: 1) el concepto que tiene el condenado sobre la ley y la justicia y 2) el concepto sobre lo que es bueno o malo (Ministerio del Interior y de Justicia e INPEC, 2009, p.123).

La tercera variable objetiva corresponde a los elementos de nivel jurídico que permiten determinar la situación del condenado frente a la autoridad competente: delito, condena impuesta, tiempo efectivo, tiempo para la libertad condicional, tiempo legal entre fases de tratamiento, tiempo para la libertad por pena cumplida, antecedentes penales, disciplinarios y requerimientos (Ministerio del Interior y de Justicia e INPEC, 2009, pp.116- 126).

En lo que se refiere a la fundamentación criminológica de estas variables, el instrumento (I.V.I.C INPEC) se apoya en el modelo de Triple Riesgo Delictivo (TRD), planteado por Santiago Redondo, quien considera tres fuentes: la individual, la social y la oportunidad criminal para comprender y valorar el riesgo delictivo, tanto en individuos específicos como en grupos sociales, véase.

En el individuo, ha señalado Redondo (2008, p. 6) que, en algunos delincuentes, se reúnen características como disfunciones hormonales, alteraciones neurológicas, hiperactividad y

problemas de atención, impulsividad y tendencia al riesgo, escasas habilidades interpersonales y adicción a las drogas, que tienden a que se desarrolle en él una personalidad criminal; en lo social, menciona el autor que las privaciones económicas, culturales y sociales experimentadas por los individuos pueden influir a optar por la delincuencia; en la oportunidad para delinquir, explica Redondo que existe una relación directa entre mayores oportunidades delictivas y mayor delincuencia, y entre menores oportunidades delictivas y menor delincuencia, por lo tanto, se puede inferir, razonablemente, que a más posibilidades de cometer el delito, mayor es el nivel de tentación a la que está expuesta la persona (2008, p.7).

Según Redondo el modelo TRD sugiere que el riesgo delictivo de un individuo particular en un tiempo t depende de la combinación en él de estas tres dimensiones de riesgo: a) disposiciones y capacidades personales, b) apoyo prosocial recibido y, c) 'oportunidades para el delito a que es expuesto (2008, p. 9)

Recogiendo lo anterior, se puede decir que el objetivo principal del I.V.I.C INPEC, soportado en datos actuariales, construye las categorías que le permiten calcular el riesgo objetivo, a partir de las variables mencionadas, con el fin que el CET tome decisiones que se orienten a clasificar y promover cautelosa y, científicamente, las distintas fases del tratamiento al convicto, con lo cual el Estado cumple con la tarea de resocializar y proteger el orden social, puesto que garantiza el retorno del reo a la sociedad cuando este logre alcanzar los objetivos que se le han expuesto en el programa de tratamiento penitenciario que se ha diseñado.

Conclusión del capítulo.

El modelo económico neoliberal exige para su implementación y funcionamiento la instrumentalización del derecho represivo (policivo y penal) para que cumpla la tarea de neutralizar los desórdenes colectivos y desviaciones personales de aquellos grupos de la población que se encuentran en situaciones de marginalidad económica e inseguridad social, en tanto quieren presentar esta realidad como un problema normal de desviación social o criminal, en lugar de asumirlo en su naturaleza político social. Ya que en este paradigma el aumento de la

riqueza de quienes poseen el capital conduce, necesariamente, al progresivo empobrecimiento de las capas más vulnerables existentes en la sociedad.

A sí mismo, el neoliberalismo económico se vale del actuarialismo para explicar el fenómeno criminal, en tanto renuncia a dar cuenta del mismo desde criterios sociales, así como de la legitimidad y justicia, o de lo correcto e incorrecto del castigo, y lo enfrenta desde los cálculos matemáticos para determinar primero, la selección de conductas a prohibir con sanción penal, y segundo, anticiparse a la desviación social presente y futura de las poblaciones que encarnan riesgos para el libre mercado. Esto conduce a que el actuarialismo apele a discursos criminológicos como las actividades rutinarias y la elección racional para controlar la vida cotidiana, el espacio social e intervenir la delincuencia a partir de estadios previos a la comisión del delito.

En el caso colombiano, los grupos económicos del entorno nacional no se apartan de la lógica anterior y acuden al derecho penitenciario para controlar mediante el encierro a las poblaciones contrarias a sus intereses. Esto ha sido posible gracias a que, por una parte, el Estado desde 1986 hasta la fecha ha recurrido a políticas económicas neoliberales que le impiden exigirles, jurídicamente, a estos conglomerados que asuman compromisos sociales con estas comunidades, en lugar de represión; por otra parte, se ha implementado el modelo actuarial al interior de lo penitenciario. Indicativo de ello es el modelo de valoración actuarial creado por el INPEC para diagnosticar y clasificar a las personas condenadas, tal y como lo estipula la Ley 65 de 1993 en lo relacionado a los fines de las actividades de tratamiento penitenciario. No obstante lo anterior, se hace necesario conocer y delimitar el fin de la sanción penal desde una perspectiva social y normativa, así como de las actividades de tratamiento penitenciario en el sistema Ppenitenciario progresivo con el propósito de determinar la compatibilidad con el método APAC.

De igual manera, hay que reseñar que ante la imposibilidad de desmontar desde la legalidad la resocialización como fin de la pena y principio organizador del sistema penitenciario colombiano, la clase social dirigente en Colombia ha logrado vía aumento de penas prisionarizar por un buen tiempo a las clases sociales marginadas, así como aislar al condenado bajo un régimen que inicia en una etapa máxima de limitación a la libertad, de traslación al interior de la

cárcel que se va relajando en la medida en que este transite a la fase de tratamiento de mediana seguridad y a la confianza. Ello gracias a un modelo penitenciario de base actuarial que le permite al funcionario penitenciario construir sobre la lógica del riesgo el plan de tratamiento y posterior clasificación, como sujeción del prisionero al programa de tratamiento penitenciario que se le ha diseñado.

SEGUNDA PARTE

TRATAMIENTO PENITENCIARIO. GENEALOGÍA DE LA RESOCIALIZACIÓN

(...) El problema que se plantea con respecto al detenido no es tan solo el de una desocialización o de una reeducación. En la base del actual movimiento de reforma penitenciaria está más bien el hecho real de que la población carcelaria proviene, en su mayor parte, de zonas de marginación social, caracterizadas por deficiencias que inciden sobre la socialización primaria en la edad preescolar. Viendo bien las cosas, aquello que parece un simple matiz filosófico en la definición del fin del tratamiento ("socialización" o "resocialización") revela ser una transformación decisiva de su concepto. Esto cambia la relación entre las instituciones carcelarias y el conjunto de las instituciones, privadas o públicas, destinadas a la tarea de la socialización y de la instrucción. La cárcel viene a ser parte de un *continuum* que comprende familia, escuela, asistencia social, organizaciones culturales de tiempo libre, preparación profesional, universidad e instrucción de los adultos.

Baratta, Alessandro. Criminología y Sistema Penal

1. Introducción

El derecho penitenciario entendido como herramienta de control social formalizado mediante el modelo penitenciario progresivo incorporado en la respectiva legislación realiza el papel de proteger a la sociedad mediante la resocialización de los condenados. Para la mayoría de los doctrinantes en la materia, esta categoría integra la idea de que las personas que cometen un delito puedan llevar hacia el futuro una vida sin él.

Sin embargo, a este elemento de análisis común sobre la resocialización se le suma el hecho de que existen diversidad de nominaciones sustentadas en las diferencias de orígenes y fundamentos teóricos de los que provienen los doctrinantes que trabajan el tema. Lo que se sugiere entonces, es que sea cual fuere el término utilizado: reeducación, rehabilitación, restablecimiento, repersonalización, reinserción, readaptación, reingreso o reintegro social; existe una mentalidad de consenso por la que se acepta como categoría sociojurídica al interior de los estudiosos del fenómeno criminal que la incorporan y la defienden en sus premisas teóricas y se asume el supuesto general de que los condenados se conduzcan en libertad de un modo similar a los demás (De la Cuesta Arzamendi, 1993, pp. 11 y 12).

En relación con esta diversidad de acepciones que le corresponden al desarrollo conceptual de la categoría, tampoco es fácil delimitar los contenidos propios de las actividades de tratamiento penitenciario que permiten verificar en el prisionero el logro de tal propósito. Por eso Muñoz Conde (1985, p.93), alude a este concepto como mito, ambigüedad, fantasma, ideología, o

espejismo. No obstante, se puede llegar a identificar la correlación del papel que cumple el modelo penitenciario con el orden social que quiere validar.

Teniendo en cuenta esta indeterminación, la segunda parte del presente documento se estructuró en dos bloques temáticos: el primero se aproxima genealógicamente a la resocialización con la intención de identificar desde dos ángulos el papel que cumple esta categoría en el campo social y jurídico. El primer ángulo, un acercamiento desde lo social con la sociología funcional, el modelo socioeconómico liberal, la genealogía de Michel Foucault y el correccionalismo de finales del siglo XVIII y principios del XIX. El segundo ángulo, el soporte normativo de la pena en su función resocializadora para mostrar la necesidad que tiene el Estado de legitimar ante la sociedad el acto de violencia que recae sobre el condenado para contenerlo, preventivamente, mediante su transformación.

El segundo bloque versa sobre el tratamiento penitenciario en sus dos acepciones: normativa y criminológica, para mostrar que como actividades fundadas en la noción de peligrosidad están dirigidas a intervenir la individualidad del condenado para que se adapte al modelo de sociedad imperante, siempre y cuando, en su contenido se respeten las reglas y principios válidos para el tratamiento de los condenados, sin olvidar, parafraseando a Goffman (1961), que la prisión es un híbrido de interacción social en donde, de un lado, se pretende transformar al prisionero; y de otro lado, al reo de forma activa luchando por mantener su yo mediante la proyección de su mejor imagen.

Esta segunda parte de la investigación doctoral se fundamenta en el análisis documental de fuentes doctrinales y legislativas, a saber: Peter L. Berger y Thomas Luckmann, Rusche y Kirchheimer, Darío Melossi, Michel Foucault, Roder, Kant, Hegel, Von Feurbach, Von Lizst, Garofalo, Erwing Goffman, Juan David Posada Segura, Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario y sentencias de la Corte Constitucional.

Finalmente, se logra concluir entre todos los análisis llevados a cabo, que las actividades de tratamiento como el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación son estrategias empleadas por la administración penitenciaria para la resocialización del condenado, las cuales se deben ajustar, formalmente, al sistema progresivo adoptado en el Código Penitenciario colombiano, Ley 65 de 1993 en su artículo 12° que indica “el cumplimiento de la pena se regirá por los principios del sistema progresivo” (Congreso de Colombia, 1993), así como al respeto de los derechos humanos de los privados de libertad en el artículo 5°: “en los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, universalmente, reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral” (Congreso de Colombia, 1993).

De otro lado, el método de tratamiento apaquiano no riñe con tales preceptos ni con la progresividad del tratamiento, todo lo contrario, son, plenamente, compatibles, debido a que este se desarrolló y afirmó en el sistema progresivo brasileiro, soportado sobre la valorización humana y el reconocimiento del esfuerzo que hace el condenado para conquistar por etapas su libertad con responsabilidad (Ottoboni, 2002, p.37).

2. Origen de la resocialización

En este apartado se expondrá la categoría de la “resocialización” en sus varias épocas desde los distintos discursos que se han utilizado para apartar y disciplinar al prisionero en calidad de condenado.

2.1. Descripción sociológico funcional

El concepto de socialización hace referencia al proceso que el individuo debe pasar para ser parte de una sociedad, o si se quiere, a la vivencia, humanización y aprendizaje a partir del cual “interioriza el modelo cultural de la sociedad en la que va a vivir” (Macionis, J. y Plummer, K. 1999, p. 132).

Guy Rocher (1973) explica el término como sigue:

El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta al entorno social en cuyo seno debe vivir.(p.133).

Según Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1968, p. 165), la socialización es posible gracias al proceso de interiorizar, es decir, a la competencia del individuo de comprender de forma objetiva lo individual del otro, en tanto le sea valioso, y a la vez, de aprehender el contexto cultural como realidad con significado social.

Un aspecto importante en este proceso es que la construcción de la personalidad del individuo está permeada por los tipos de discursos que orientan las prácticas culturales del entorno del que hace parte. De suerte que esta experiencia social no es neutra y, por el contrario, tal y como lo afirma Mansilla esta es de carácter ideológico, al ser transmisora y factor reproductivo del sistema que le comunican los otros. El aprendizaje de la persona se verifica cuando adhiere como propias, en su proyecto de vida, las pautas de conducta, creencias, valores e ideas de su medio.

Valga señalar que la socialización trae consigo varios inconvenientes derivados del modelo de práctica colectiva inherente a cada época. Por ejemplo, la actual es anómica, al tener que ver con “la ausencia de normas y valores compartidos firmemente por toda la sociedad o por su gran mayoría” (Salinas, 2000, p. 34). Este proceso es continuo, dura toda la vida y siempre es parcial debido a que el individuo continúa con él a lo largo y ancho de todos sus años.

2.2. Tipos de socialización

El proceso de socialización se puede clasificar en tres tipos: primaria, secundaria y terciaria. El niño para poderse integrar o ser miembro de una cultura o subcultura determinada necesita pasar por la socialización primaria. Todo método educativo formal o informal posterior a esta fase del desarrollo humano se conoce como socialización secundaria. Por último, la terciaria es el tratamiento por medio del cual se permite a un individuo reincorporarse al sistema, a pesar de su pasado antisocial. Véanse estas etapas con más detalle.

a. Socialización primaria

La familia es el primer agente socializador del niño, por este motivo, tiene la tarea de darle afecto y de formarlo o educarlo. La interacción de los miembros del hogar con el pequeño y el medio ambiente generado en este contexto alrededor de él, serán los canales por medio de los cuales se le transmiten los valores y las normas indispensables para vivir e integrarse a la comunidad.

De hecho, la institución de la familia es la única responsable “de la imagen que se forma de sí mismo un niño como alguien fuerte o débil, listo o tonto, querido o simplemente tolerado, o la imagen del mundo, como un lugar hostil o un espacio acogedor” (Macionis y Plummer, 1999, p. 142).

Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1968, pp.167, 168) definen la identidad como la ubicación del individuo en un mundo determinado, que solo se puede asumir desde lo subjetivo junto con esa realidad, debido a que acepta a la misma vez, los roles y las actitudes de los agentes socializadores, como su universo. Es más, la persona llega a ser lo que los otros significantes lo consideren porque el yo es una entidad reflejada. Esto es, el niño es mental, psicológica y socialmente parecido a sus padres. Por eso, la interacción del infante con el núcleo familiar es de un afecto intenso, y en este relacionamiento interioriza el significado de lo que según la moral está bien o mal hecho, y por ende, diferencia la conducta prohibida y sancionada de la conducta que se permite y no se castiga.

Por último, cuando la persona humana ha interiorizado en su conciencia la realidad, el orden social y su yo pasa a ser parte de la cultura que lo rodea, y por ello, se puede afirmar que el fin de la socialización primaria se ha obtenido y ha llegado a su término (Berger y Luckmann, 1968, p. 174). 2.1.1.2

b. Socialización secundaria

Debido a que el individuo se encuentra en proceso de crecimiento es natural que la familia como agente socializador sea sustituida por otros. Se entiende por socialización secundaria el proceso educativo formal o informal que se presenta por medio de instituciones. Entre estas tenemos la escuela, la empresa, los sindicatos, los grupos de iguales, las Fuerzas Militares, la Iglesia, los movimientos sociales, los medios de comunicación, etc.

De acuerdo con Guy Rocher (1973, p. 154), las instituciones estructuran la función socializadora secundaria según las metas que se propongan, o sea, a su manera cumplen el papel de presidir la ideología del sistema social, económico y moral propia del modelo de cultura al que se pertenece. De ahí, que el individuo necesite la “adquisición de vocabularios específicos de ‘roles’, lo que significa, por lo pronto, la internalización de campos semánticos que estructuran interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional” (Berger y Luckmann, 1968, p. 175).

Muestra de ello, es la escuela, pues en esta institución el niño tiene que someterse a unas normas, cumplir con un horario, llegar puntual y ser evaluado, de suerte que sea competente para el trabajo cuando sea adulto (Macionis y Plummer, 1999, p. 143).

Otro aspecto de la socialización secundaria es su permanencia a lo largo de la vida, valga decir, vivir en el sistema conlleva un proceso continuo de transformar en cierto nivel el mundo del individuo. Verbigracia, todo ascenso o cambio de empleo en el adulto abre un nuevo ciclo de aprendizaje de las normas y elementos socioculturales de su entorno (Guy Roche, 1973, p. 136).

Sin embargo, la ausencia de estos modelos, es decir, de normas y/o valores compartidos por la mayoría de la gente, o por un porcentaje representativo, para enseñar las formas permitidas de obrar, pensar y sentir; de manera que puedan llegar a ser aceptados por la colectividad, genera posiblemente el comportamiento desviado y/o criminal. Como respuesta para neutralizar esta conducta, surge un tipo de socialización o resocialización.

c. Socialización terciaria

Petrus (1997) entiende por socialización terciaria “el proceso de intervención educativa a partir del cual un individuo se reincorpora a la sociedad después de haber evidenciado conductas antisociales, (...) asociales o disociales” (p.22). En otros términos, es un proceso correctivo que le permite a un individuo reintegrarse al sistema, a pesar de los actos transgresores de su vida pasada. Esta enseñanza tiene el objetivo de controlar el comportamiento y homogenizarlo bajo una idónea socialización (Petrus, 1997, p. 22).

Así, la tarea de la socialización terciaria es intervenir y tratar a todas las personas asociales con el propósito de resocializarlos. Para Berger y Luckmann (1968, p. 202-204) esto último es el proceso mediante el cual es posible provocar una ruptura casi total en la biografía subjetiva del individuo con el propósito de resignificar el pasado de acuerdo con el presente. Ello es viable

gracias a que en la actualidad es posible retroyectar al préterito elementos que subjetivamente no estaban disponibles.

En este sentido, se entiende que la resocialización se lleva a cabo en una entidad psiquiátrica o en una prisión, lugares en los que la persona se interna contra su voluntad. Según Jhon J. Macionis y Ken Plummer (1999, p. 151) allí aíslan a los individuos del resto de la sociedad con el objetivo de manipular su conciencia.

Sin embargo, para legitimar y justificar el internamiento como práctica de castigo se demandan cierto tipo de discursos. Ahora se revisará el carácter normativo de la resocialización a partir de las teorías fundadoras de la pena privativa de la libertad, para luego dar lugar, al informe sobre la tipología de esta que se lleva al interior de la prisión como establecimiento totalitario.

2.3. La descripción del materialismo hegeliano

Desde una perspectiva materialista, el origen de la resocialización mediante la pena privativa de libertad se puede encontrar cuando inicia el modelo socioeconómico de tinte capitalista (Bergalli, 2011, p. 26). Recuérdese que al transformarse el Estado, se modifican tanto la forma como los discursos que justifican el castigo. Ahora bien, la consecuencia del cambio en la estructura del Gobierno, de la tenencia de la tierra, de las clases sociales y del modelo de producción económica, conlleva a que grandes masas de campesinos empobrecidos emigren del campo a la ciudad y al no poder insertarse al mercado laboral se suman al sector ya desempleado de la urbe (Chincoya, 2011, p.256). Estos cambios permiten inferir que esta nueva realidad proporciona

integrar a la población al nuevo sistema mediante el posicionamiento en el espacio de la fábrica, así mismo, concentra a los excluidos en las casas de corrección y en las de trabajo con el fin de disciplinar la conciencia de estos para el trabajo industrial.

En su importante trabajo *Pena y estructura social*, (Rusche y Kirchheimer, 1984, pp. 25, 28, 45), afirman que los cambios en los métodos punitivos que se presentaron a fines del siglo XVI constituyen el resultado de un desarrollo económico que se interesa por explotar la mano de obra de los sometidos a pena de prisión. Este interés surge en el momento en que la fuerza de trabajo libre es escasa y los mercantilistas deben de un lado pagar por ella altos salarios, de otro lado, invertir dinero en equipos para cubrir las demandas del mercado. Horta (2008, p.145) afirma que a partir de este momento, se necesita la fuerza de trabajo de aquellos definidos como criminales y para ello es indispensable modificar la conducta de los ociosos y vagabundos en algo útil y productivo.

Tal y como explican Rusche y Kirchheimer (1984, p. 47) fue en Londres en 1555 donde se creó la primera institución destinada a liberar a las ciudades de vagabundos, mendigos, ociosos, ladronzuelos, prostitutas y pobres rebeldes que no querían trabajar. Lugar en donde el rey para solucionar este problema social, le permitió al clero usar el castillo de Bridewell para que se constituyera una casa de corrección. Explica Melossi (2008, p.32) que el objetivo de esta era doble. En primer lugar, buscaba la reforma de los internados por medio del trabajo, de la disciplina y desalentar a otros del *vagabundeo* y de la *ociosidad*. En segundo lugar, la institución debía asegurar su sostenibilidad mediante el trabajo textil

Pero fue en Holanda, país que poseía el sistema capitalista más avanzado a finales del siglo XVI, en donde se desarrolló hasta su máximo nivel esta institución. Añaden Rusche y Kirchheimer (1984, p.47) que este país, al no tener fuerza de trabajo de reserva, se preocupaba por la mano de obra tanto para su uso en la actividad económica, como para resocializarla. De tal forma, que estuviera dispuesta a integrarse de manera voluntaria en el mercado de trabajo:

La esencia de las casas de corrección resultaba de la combinación de los principios que regían las casas para pobres (*Poorhouse*), las casas de trabajo (*Workhouse*) y las instituciones penales. Su objetivo principal consistía en transformar en socialmente útil la mano de obra díscola. Siendo obligados a trabajar dentro de la institución, los prisioneros adquirirían hábitos laborales al mismo tiempo que recibían un adiestramiento profesional, a fin de que una vez en libertad se incorporaran voluntariamente al mercado de trabajo. Mendigos aptos para el trabajo, vagabundos, prostitutas y ladrones constituían la población habitual de esta institución (p.48).

Melossi (2008), argumenta que estas casas de trabajo (*Rasp-Huis* Ámsterdan) tenían una arquitectura celular y en cada una de sus celdas se ubicaban varios detenidos entre los cuales había jóvenes autores de infracciones menores, mendigos, vagabundos y ladrones. La manufactura por su parte, era el modelo productivo con el que garantizaban la financiación. Además, las casas se acompañaban de topes salariales establecidos por ley, de la prolongación de la jornada de trabajo, de la educación y también de:

orden y a la limpieza, al vestuario, uniforme, a la sanidad de la comunidad y del ambiente, la prohibición de blasfemar, del uso del caló popular y del lenguaje obsceno, de leer libros y cartas, de cantar baladas fuera de las que ordenaban los directores, la prohibición de jugar y de usar

apodos fueron intentos hechos para representar concretamente en la casa de trabajo el estilo de vida recién descubierto (Melossi, 2008, p. 42).

Narran Rusche y Kirchheimer (1984) que las casas de trabajo de Ámsterdam inculcaban disciplina y trabajo forzado mediante el uso de la religión. Por ejemplo, la primera cláusula normativa (1599 – 1603) relacionada con la disciplina se estipuló en los siguientes términos:

“...en primer lugar, cada recluso debe rendir gracias a Dios nuestro Señor, a la mañana, a la tarde y a la noche, de acuerdo con la antigua tradición: la primera falta será castigada con la pérdida de una comida; la segunda, a discreción de las autoridades. (pp. 51 - 52)

Además, las actas del Concejo de Ámsterdam del 15 de julio de 1589, señalan la construcción de una casa y decretan que los vagabundos, malhechores, así como cualquiera otro individuo de esta calaña, sean encerrados en ella y obligados a trabajar para su reeducación. Estas evidencias le permiten a Rusche y Kirchheimer deducir que las viviendas de trabajo al igual que casas de corrección constituyen una parte importante en el desarrollo del modelo productivo del capitalismo. En este contexto económico y religioso, la disciplina de los jóvenes fue el objetivo principal de estos albergues. Prevenir e intervenir la delincuencia fue lo que determinó el establecimiento de esta iniciativa. La experiencia de la religión protestante moldeaba entonces, en estos espacios a los pobres, los jóvenes y las prostitutas, ya que estos se debían educar o reeducar en la cultura del trabajo y de las buenas costumbres (Ibíd, pp.74, 58).

En este propósito se sustenta el futuro de la cárcel moderna: los siglos XVII y XVIII fueron creando poco a poco la institución que primero el iluminismo y después los reformadores del siglo XIX transformaron en la forma actual del penal. “La primer forma de prisión moderna está íntimamente ligada con la casa de corrección manufacturera” (Melossi, Op. cit., p. 53).

De acuerdo con lo anterior, para Melossi la resocialización de las personas condenadas tiene por finalidad principal transformarlas en proletarias, acoplándolas al orden y al régimen de la fábrica. Porque en últimas, lo que le interesa a la clase social ostentadora de los medios productivos, mediante el encierro, es extraer la fuerza de trabajo del culpado y regular la mano de obra competente que para ese momento es escasa.

Es necesario recalcar que para Rusche y Kirchheimer (Op. cit.) el problema central del encarcelamiento en la primera mitad del siglo XIX fue el siguiente:

... ¿Conforme a qué métodos deberían ser tratados los detenidos? El asunto estaba en idear una forma de tratamiento que tuviera efectos disuasivos sobre los estratos más bajos de la sociedad, no obstante (sic) a (sic) que las condiciones de vida entre la prisión y la existencia normal eran mínimas e insignificantes. El propósito del encarcelamiento se pierde cuando un interno considera que “el bienestar de la vida en prisión compensa la pérdida de libertad” (p. 124).

2.4. La descripción de Michel Foucault

Para Michel Foucault (2002), el periodo final del siglo XVIII y el inicio del XIX, van a presentar cambios en las prácticas del castigo que permitirán la entrada al sistema penal de la función resocializadora de la punición puesto que a las casas de trabajo y correctivas las continúa la disciplina inherente de la prisión. En este lapso de tiempo, se empezará a suprimir la tortura al físico del condenado, es decir, el suplicio:

Tenemos un hecho: en unas cuantas décadas, ha desaparecido el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo. Ha desaparecido el cuerpo como blanco mayor de la represión penal (p. 16).

A tener en cuenta del sentenciado, su “alma”, en razón de que se trata de “no tocar ya el cuerpo, o lo menos posible en todo caso, y eso para herir en él algo que no es el cuerpo mismo” (Ibíd, p. 18).

Desde ese momento la pena privativa de libertad cumple un fin negativo, en tanto suspende los derechos civiles y políticos del condenado con el propósito de curarlo, corregirlo y reformarlo (Ibíd, pp.17-18). Análogamente, el juez en el momento de establecer la responsabilidad penal de un sujeto y antes de enviarlo a una prisión, requiere tener conocimiento tanto de la ley, como de la información personal, y detallada del procesado aunque:

El alma del delincuente no se invoca en el tribunal a (sic) los únicos fines de explicar su delito, ni para introducirla como un elemento en la asignación jurídica de las responsabilidades; si se la convoca, con tanto énfasis, con tal preocupación de comprensión y una tan grande aplicación "científica", es realmente para juzgarla, a ella al mismo tiempo que al delito, y para tomarla a cargo en el castigo (Ibíd, p. 25).

Por ello, el juez necesita saber “acerca de las relaciones entre él, su pasado y su delito, lo que se puede esperar de él para el futuro, conocer de las pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, las perversiones; las pulsiones y deseos” (Ibíd, p.25). En esa dirección apunta el oficio del médico siquiatra, quien será el encargado de indagar e informar sobre la vida privada del autor y el contexto social en que este llevó a cabo el delito, en tanto a él le corresponde determinar el grado de peligro que representa esta persona para la sociedad. Dicho de otra forma, su función es la de hallar la manera en que el sistema puede protegerse de él; encontrar la forma de cómo intervenir sobre su alma para resocializarlo, o si es el caso, *inocuizarlo* (Ibíd, p.29).

Tal es, precisamente el papel de la cárcel a la que se le ha asignado la tarea de privar de la libertad. Consecuentemente, los *vigilantes*, los *médicos*, los *capellanes*, los *psiquiatras*, los *psicólogos* y los *educadores* entran a participar en el proceso de corrección o de cambio de estas personas (Ibíd, pp. 19,235). Se entiende que es la manera como se coloca una impronta de control a ciertas operaciones colectivas y profesionales con roles que reprimen y que son propios del castigo o de lo punitivo. En esta lógica a la penitenciaría se le asigna el cometido de:

Volver a (sic) delincuente "no sólo deseoso sino también capaz de vivir respetando la ley y de subvenir a sus propias necesidades"; lo son por la economía interna de una pena que, si bien

sanciona el delito, puede modificarse (abreviándose o, llegado el caso, prolongándose), según que se transforme el comportamiento del condenado; lo son también por el juego de esas "medidas de seguridad" de que se hace acompañar la pena (interdicción de residencia, libertad vigilada, tutela penal, tratamiento médico obligatorio), y que no están destinadas a sancionar la infracción, sino a controlar al individuo, a neutralizar su estado peligroso, a modificar sus disposiciones delictuosas, y a no cesar hasta obtener tal cambio. (Ibíd, p. 248).

Así, Foucault (Ibíd, p.239), presenta a la prisión como una entidad correctiva que prescribe en primer lugar, la separación del interno de aquello que lo ha llevado al delito y del mundo exterior ya que el aislamiento cumple un papel positivo en su proceso disciplinario. En segundo lugar, Foucault (Ibíd) define el trabajo en penales como un principio transformador de individuos adaptables a la sociedad industrial, por lo que explica la prisión como un medio de modular la pena a razón de que:

a justa duración de la pena debe, por lo tanto, variar no sólo (sic) con el acto y sus circunstancias, sino con la pena misma, tal como se desarrolla concretamente. La pena debe ser individualizada a partir del individuo castigado, objeto de una materia controlada de transformación. (p. 248).

Obsérvese, como al modular la pena, las prisiones deben ser concebidas como un lugar de aprendizaje para un saber clínico sobre los penados que permitirá transformar al detenido en un individuo útil para el sistema (Ibíd, p.252). En la perspectiva de Michel Foucault (1991, p.112), la causa de la transformación del castigo o el origen genealógico del paso del suplicio al encierro con el propósito de resocializar, es el resultado del acelerado proceso de asentamiento urbano, lo cual expone de forma directa a las nuevas formas productivas propias del capitalismo, al alcance

de la gente pobre y sin trabajo, por lo cual la burguesía, se ve en la necesidad de proteger el capital, mediante el establecimiento de medios que controlen socialmente a este grupo poblacional. Este cambio de control social origina lo que él denomina *sociedad disciplinaria*. Véase en sus palabras:

El origen de la sociedad disciplinaria se encuentra en la nueva distribución espacial y social de la riqueza industrial y agrícola que hace necesario nuevos controles sociales establecidos por el poder, la clase industrial y propietaria. Estos se tomaron de los controles de origen popular o semipopular y se organizaron en una versión autoritaria y estatal a finales del siglo XVIII (Ibíd, 114).

En consecuencia, la *sociedad disciplinaria* está representada en instituciones de control individual binario (loco-no loco; peligroso-inofensivo; normal-anormal) y de *distribución diferencial* (quién es, dónde debe estar, por qué caracterizarlo, cómo reconocerlo, cómo ejercer sobre él, de manera individual, una vigilancia constante). Es de destacar en este punto que el argumento foucaultiano ilustra una categorización espacial y social de dicha *sociedad disciplinaria*, amplificada en algunas instituciones como: el asilo psiquiátrico, la penitenciaría, las correccionales, la escuela, los hospitales, entre otras. (Ibíd, 2002, p. 203).

2.5. Correlacionismo

Esta corriente teórica surge a finales del siglo XVIII y principios del XIX, una vez consolidado el Estado moderno, con el fin de centrarse en el delincuente para corregir su personalidad (De la

Cuesta Arzamendi, 1989, p.10). De ahí que sea no la moral religiosa sino la social propia de la ilustración, del pacto social, el paradigma ideológico que fundamenta el nuevo patrón para juzgar la buena conducta.

Durante el siglo XIX, Carlos David Augusto Roder fue el más importante exponente de los postulados de la teoría correccional. Landrove (como se citó en Fernández Rodríguez, 1976:26 – 27) explica que este discurso basa y fundamenta el *Ius Puniendi* de la siguiente manera:

Primero, el derecho. Este se distingue en no tener su base en la fuerza, sino en la necesidad. En consecuencia, corresponde al Estado brindar ayuda a los delincuentes, que de todos los miembros integrantes del cuerpo social son los que más necesitados de asistencia se encuentran precisamente por su incapacidad, para una vida jurídica libre. Con lo cual, el Estado se abroga la facultad de reformar el ser interior del infractor de la norma penal.

Segundo, el delito. Este se entiende como un "síntoma" indiciario de la mala voluntad del sujeto, de una conformación psíquico-moral patológica que exige un "tratamiento" idóneo. La causa, pues, de la incapacidad social del delincuente está en su voluntad enferma.

Tercero, el delincuente. Este se hace acreedor del amparo del Estado, en virtud de su propia incapacidad para la vida jurídica libre. Cuarto, el sistema penitenciario. Roder propone el sistema celular justificado en dos ideas: la primera, el contagio del delincuente derivado de los encuentros con otros sujetos hay que evitarlo; la segunda, el individuo aislado, porque afirmativamente incide tanto en el proceso de formación educativa, como en la transformación de la moral.

Hay que añadir que Augusto Roder es quien, genuinamente, introduce en el penitenciarismo el concepto de pena correctiva o enmienda moral del delincuente, como fin exclusivo de la pena, de suerte que su discurso influye en Concepción Arenal y en Dorado Montero, padres del correlacionismo español, véase:

Roder explica (1876, p. 239) que el fundamento y fin de la pena de prisión está en la necesidad de ayudar a que la voluntad inmoral y desordenada de una persona infractora alcance en su interior lo correcto con el fin de vivir en libertad sin perturbar el orden social determinado por el reglamento jurídico. Es decir, el encarcelamiento es el medio adecuado y oportuno para enmendar radicalmente en el criminal la voluntad pervertida que externalizó al efectuar el delito. Así mismo, asimila al transgresor con un niño a quien es necesario impartirle una segunda educación para que haga uso responsable de la autonomía. Postula el autor (Ibíd):

Si en el interior del hombre, o en la voluntad, es donde exclusivamente se hallan, lo mismo el fundamento de la pena que el de la recompensa, la conformación de la voluntad del delincuente según el Derecho es el fin de la pena. (p. 242).

De otro lado, Roder (Ibíd, pp. 247 y 252) entiende que el tiempo de la pena de prisión a imponer al delincuente es determinado provisionalmente por el juez, ya que este periodo se establece de acuerdo con los objetivos de corrección propuestos y alcanzados para y por estas personas durante su encierro. Mejor dicho, transformar interiormente la voluntad, los sentimientos y los pensamientos de los individuos condenados va a depender de las

singularidades de cada uno de ellos, en suma del estado en que se encuentre la voluntad del criminal. En conclusión, Roder (Ibíd pp. 253 y 268) pretende con la pena de presidio facilitarle al infractor restaurado el libre regreso, admisión y reintegro positivo al lado de sus conciudadanos, así como beneficiar el orden y la convivencia externa en todo el conglomerado social, fortalecer toda la fuerza vinculante de la ley principio vital del Estado y garantizar la salud jurídica de la sociedad.

La idea y los argumentos expuestos por Roder son acogidos, de un lado, por Concepción Arenal (como se citó en Gómez, 2006, p.608), quien refiere para el campo de prisiones españolas el objetivo de humanizarlas y la rehabilitación, mediante la enmienda de la naturaleza moral de la persona condenada como esencia del castigo, así mismo, entiende que esta es la vía a seguir para luchar contra las causas generadoras del delito (Gómez Bravo, 2004, p.360). López (2012, p. 426) menciona que Arenal durante el tiempo en que se desempeñó como inspectora de casas de corrección de mujeres (1868 – 1873) alcanzó cambios en el sistema penitenciario a partir de comprometer a la comunidad con el reintegro a ella del delincuente.

Por otra parte, Dorado Montero (1861 – 1919), quien es el representante del correlacionismo positivista en España, gracias a que logra articular el postulado positivista de entender el delito como una manifestación de la condición enferma en que se encuentra el individuo, con la idea de concebir la pena como institución protectora del delincuente, es decir, él expone la función social integradora de la pena de prisión porque entiende que es posible corregir el descarriamiento de la naturaleza humana del individuo definido o a quien se le da el nombre de infractor para

incorporarlo al colectivo social del que hace parte (Dorado Montero, 1923, p.18; Antón Oneca, 1986, p.51).

De ahí que Dorado Montero (1923, p.17) pretenda incluir las instituciones del Derecho Penal en un papel tutelar y educador, ya que las causas del delito se explican a partir de la libre voluntad inmoral del maleante. Esto conduce a asumir al criminal como un ser con incapacidad mental, con deficiencia lógica para dirigir su vida y necesitado de medidas punitivas para ser corregido, en contraste, con el estilo de vida que llevan las personas no transgresoras. Expone Dorado Montero (como se citó en Pablos de Molina, 1979):

Al efecto, se hace preciso someterle a un tratamiento, tutelar conveniente, análogo al que se emplea con otros individuos que se hallan en situaciones semejantes (niños, locos, enfermos, etc.), y el tratamiento tutelar que conviene a los delincuentes es la pena... De esta suerte, la pena resulta ser un bien verdadero, contrato que generalmente se piensa y, no obstante, que el reo mismo la juzgue un mal (p.660).

Tal y como explica Pablos de Molina (Ibíd, p.559) el correlacionismo advertía el origen de la infracción como una consecuencia de un sujeto con una estructura mental débil, viciosa o pervertida y asumía al criminal como un ser incapaz de dirigir libremente y por sí mismo su existencia, un ser necesitado de ayuda. Por ello el cumplimiento de la pena privativa de libertad debe orientarse a la mejora del transgresor mediante una terapia individual, tutelar y pedagógica para obtener una auténtica cura del alma. Una vez se corrige su voluntad débil y se rehabilita su libertad interior, está apto para reincorporarse a la comunidad.

Debemos decir que el correlacionismo moral del delincuente da origen a las primeras ideas que concluyen en la creación del modelo penitenciario progresivo (consistente en dividir el tiempo de la condena en varios periodos: de aislamiento, trabajo y libertad condicional, bajo la idea de enmendar, gradualmente, la moral del reo para reintegrarle en la sociedad), así mismo, a la fase resocializadora de la pena de prisión que subsiste hasta el día de hoy y fue expuesta en el Congreso Nacional sobre la Disciplina de las Penitenciarías y Establecimientos de Reforma, llevado a cabo en Cincinnati, Ohio, en octubre de 1870 en el cual se planteó que:

... II. El trato de los criminales por la sociedad tiene por motivo la seguridad social. Mas, como el objeto de él es el criminal y no el crimen, su fin primordial debe ser la regeneración moral de aquél (sic). Por esta razón, la mira suprema de las prisiones debe ser la reforma de los criminales y no la imposición del dolor, o sea, la venganza. (Congreso Nacional sobre la Disciplina de las Penitenciarías y Establecimientos de Reforma, 1870, p.8).

Para terminar, nos interesa exponer, a grandes rasgos, las críticas más relevantes hechas al correlacionismo: en palabras de Ferrajoli (2004, p.270) el correlacionismo moral confunde el derecho con la moral al definir al sujeto criminal como un pecador a reeducar, coactivamente, y confiando a la pena funciones benéficas de arrepentimiento interior, de otro lado, explica Baratta (2004, p. 194) que si el correlacionismo desde el lugar de la prisión pretende educar el ser interior del infractor con el fin de integrarlo al conglomerado social, pasa por alto, sea por olvido o con conocimiento de causa, alcanzar una meta no posible de obtener porque la cárcel es un lugar represivo y uniformante que, progresivamente, despoja al prisionero de su autonomía (lo priva de roles familiares, sociales, laborales; de relaciones sexuales normales; de toma de decisiones propias, entre otras).

Por su parte, Rivera (2009, p. 18) expresa que en un Estado de derecho no es admisible modificar la conducta de los condenados a penas de prisión imponiéndoseles determinadas actividades de tratamiento reformativas que suelen basarse en una lógica de carácter premial/punitivo, lo que anula cualquier connotación de voluntariedad, así mismo, es una falacia intentar enseñar a alguien a vivir en libertad privándole de la misma al propio tiempo. Sumado a esta crítica, Borés Espí (2016, p.178) menciona que al correlacionismo se le ha cuestionado los presupuestos del que parte para dar cuenta de la violación de la ley penal, debido a que este encuentra la causa explicativa del fenómeno criminal en una anomalía del individuo, dejando a un lado, los procesos de definición sobre qué es delito, los procesos de selectividad sobre quiénes son los «delincuentes», las problemáticas económicas, sociales y culturales y, en definitiva, las circunstancias y contextos específicos que envuelven cada acción delictiva concreta. Finalmente, corregir al delincuente desde las pautas de valor creadas por quienes en un espacio y tiempo determinado son hegemónicos para determinar qué es lo correcto, y con base en qué es correcto olvidar el respeto a la diversidad cultural y a la democracia.

3. Naturaleza jurídica de la resocialización.

De acuerdo con su naturaleza, la pena se comprende como una valoración ético-social de índole negativo que se impone a una persona por haber infringido una norma jurídico penal (Jescheck, 1981, p. 91). El mal que encarna el castigo afecta, por una parte, el libre desplazamiento del sujeto condenado, y de otra, el patrimonio, la familia, la personalidad, entre otros bienes o derechos subjetivos del individuo.

Por esta razón, la necesidad de legitimar el mal que encarna el castigo ha sido una constante en la historia del hombre, asunto que ha sido objeto de análisis de filósofos, psicólogos, sociólogos y juristas, entre otros. Así, tal y como expone Von Beling (2002), la discusión de las teorías de la pena ha estado sujetas en una idea anclada en el inconsciente colectivo que funciona como un principio de justicia:

No podría existir una comunidad organizada, según patrones normativos —aunque sea elemental o tribal—, que no esté acompañada por el convencimiento de que el delito afecta al grupo y debe ser castigado y que la amenaza del castigo garantiza la paz social (p.23).

3.1. Las teorías absolutas de la pena

Las teorías absolutas de la pena tienen su origen en la filosofía idealista alemana. Estas elaboran el significado de ella a partir de la pregunta ¿por qué castigar? Así, ante el haber llevado a cabo un delito, la sentencia debe entenderse reparación, compensación, retribución, contraprestación en términos de resarcir, restablecer, retribuir, contraprestar o responder (Iñaki Rivera, 1998, p. 16).

En palabras de Ferrajoli (1995):

Son teorías absolutas. Todas las doctrinas retribucionistas, que conciben la pena como fin en sí mismo, es decir, como castigo, compensación, reacción, reparación o retribución del delito,

justificada por su valor axiológico intrínseco; por consiguiente, no un medio, y menos aún un coste, sino un deber ser metajurídico que tiene en sí mismo su fundamento (p.253).

Esto, supone una incorporación del siguiente principio de Protágoras: la pena se impone solo porque se ha pecado (*punitur, quia peccatum est*). De Grocio acogió este principio de una cita de Séneca: *Nam, ut Plato ait, nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur. Revocari enim praeterita non possunt, futura prohibentur*. (Protágoras y Séneca, como se citó en Maurach, 1962, p. 64).

a. Bases ideológicas

Von Beling (2002, p. 23) indica que en la historia jurídica universal la venganza y la pena comparten su carácter compensatorio. Se diferencian en que la primera es cobro impulsivo, desmedido e impetuoso, mientras que la segunda es retribución perfeccionada. Así, la importancia de la indemnización penal se halla en el hecho de ser una respuesta al delito, o dicho de otra manera, la necesidad de abolirlo. Una vez cometido, este no debe quedar sin castigo, lo cual debe darse sin que medien consideraciones de otra índole que puedan justificar que no sea sancionado.

Las teorías absolutas de la pena reconocen la legitimidad que tiene el Estado para devolver con el castigo lo que merece el culpable, con el propósito de proteger la libertad individual y el orden social, admiten la capacidad del hombre para autodeterminarse. Por eso, al individuo se le sanciona por haber llevado a cabo un acto reprochable jurídico - penalmente, es decir, por su hacer transgresor (Jescheck, 1981, pp. 93 y 96).

En este contexto, la persona se entiende como un ser digno, racional, inteligente y autónomo. Como señala Durán (2011) “solo el hombre libre, dotado de discernimiento y libertad para decidir entre el bien y el mal, puede ser castigado por el delito cometido” (p.126), al individuo hay que situarlo en estricto sentido de cara a la autodeterminación.

Por ello, el castigo jurídico penal se soporta sobre la el libre designio y la racionalidad del sujeto al momento de realizar el hecho punible. Por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio económico, solo quien l con autonomía afecta de forma antijurídica el bien jurídico tutelado con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, es responsable penalmente.

Cabe recordar que en la modernidad, tanto el Estado, como los ciudadanos son comprendidos y explicados desde su origen, gracias a la idea del contrato social. El mencionado acuerdo parte de reconocer el imperativo de transformar el estado de guerra entre los hombres y de sacrificar una parcela de la autonomía a favor del Estado. Con esta medida se pretende alcanzar entre las personas orden y protección. En este aspecto es ilustrativo el libro el Leviatán de Thomas Hobbes (como se citó en Bernal, 2010, p. 49):

Esto es algo más que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal, como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho y autorizareis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín *Civitas*. Esta es la generación de aquel gran leviatán; o más bien

(hablando con más reverencia), de aquel dios mortal, al cual debemos bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa.

Mir Puig (1982, p. 20) sostiene que las funciones propias del Estado de derecho se deben corresponder con los presupuestos ideológicos de las teorías retributivas de la pena, en cuyo caso, el ejercicio de castigar en cabeza de este se encuentra limitado formalmente por el principio de legalidad y la división de poderes, garantizando con ello, los ámbitos de libertad reconocidos a todos los ciudadanos. Esto implica que el Estado en el momento de tasar la sanción a imponer al criminal deba tener en cuenta objetivamente el hecho punible cometido y la culpabilidad del autor con el fin de que el individuo no pierda más derechos de los que ha asumido por la ruptura del contrato social.

Por este motivo, el Estado de derecho cuando impone el castigo no lo hace con el propósito de impartir justicia en el mundo ni para garantizar su existencia como régimen colectivo marcado por lo legal, “sino para que haya juridicidad en la vida de la comunidad (validez y observancia de su orden jurídico)” (Welzel, 1970, p. 329).

Esa juridicidad de la pena se expresa en un doble sentido. De una parte, proporcional al acto o hecho realizado por el individuo, de otra parte, al nivel de culpabilidad. De allí, que el castigo no pretenda alcanzar fines sociales (readaptación ni inocuización) o que esté aparte de ellos. El objetivo se encuentra en sí mismo, no en los efectos comunitarios conexos positivos de él como la intimidación y/o la corrección de la persona condenada y que no tienen nada que ver con su naturaleza (Welzel, 1970, p. 329). Sin embargo, por medio del cumplimiento de la sentencia el

individuo se reconcilia consigo mismo para reclamar legítimamente la categoría de miembro activo de la sociedad.

b. Fundamentos de la retribución penal

El concepto de pena también encuentra su fundamentación en la filosofía idealista alemana. Para autores como Kant el castigo es una retribución moral, mientras que Hegel lo concibe como un resarcimiento jurídico.

1. La teoría del imperativo categórico de la ley moral de Immanuel Kant (1724 - 1804)

Es necesario definir el concepto de imperativo categórico antes de relacionarlo con el Derecho, la ley penal y con su consecuencia, la pena judicial. En su diccionario de filosofía Pallares (1964) explica:

Da Kant este nombre a la norma moral. El vocablo imperativo significa lo mismo que un mandato o sea un acto de imperar, de mandar, de ejercitar el poder que se tiene sobre determinada persona o conjunto de personas. A su vez, el verbo mandar quiere decir imponer la propia voluntad a la voluntad ajena, para que alguien haga o deje de hacer determinada cosa. Los imperativos se expresan mediante proposiciones que dicen lo que debe ser (...) las proposiciones que tienen o expresan mandatos, imperativos o reglas de conducta, constituyen de la materia de las llamadas ciencias normativas (p.315).

A partir de esta definición, se puede destacar el interés social que existe de controlar mediante normas la conducta humana que se orienta libre y voluntariamente a desestabilizar el sistema. Frente a esta necesidad, Kant (1980) plantea la idea de que solo por medio del respeto de las leyes es válido coaccionar “la maldad de la naturaleza humana” (p. 243). De esta forma, se puede procurar la paz entre los hombres y entre los pueblos.

En esta perspectiva se cita el siguiente pasaje del apéndice del texto *A la paz perpetua* (Kant, 1980):

En realidad, puede decir el moralista político: el regente y el pueblo o un pueblo y otro pueblo no son injustos unos con otros si se hostilizan por violencia o por astucia; la injusticia que cometen la cometen solo en el sentido de que no respetan el concepto del Derecho, único posible fundamento de la paz perpetua. En efecto; el uno falta a su deber con respecto al otro; pero este otro a su vez está animado de iguales intenciones para con el primero; por tanto, si se hacen mutuamente daño, es justo que se destruyan ambos. Sin embargo, la destrucción no es tanta que no queden siempre algunos, los bastantes para que el juego no cese y se perpetúe, dejando a la posteridad un ejemplo instructivo. La providencia en el curso del mundo queda aquí justificada; pues el principio moral es, en el hombre, una luz que nunca se apaga, y la razón aplicada en la práctica a realizar la idea del Derecho, de conformidad con el principio moral, aumenta sin cesar a compás de la creciente cultura, con lo cual aumenta asimismo la culpabilidad de quienes cometen esas transgresiones (pp. 242 – 243).

Kant (como se citó en Pallares, 1964, p.422) a partir de la norma moral (esta tiene un origen apriorístico, en el sentido de no ser productos de la experiencia por eso son necesarias, absolutas

y universales) configura el Derecho Penal y la pena jurídica en el siguiente imperativo categórico “obra de tal modo, que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación universal” (Kant, 1980, p. 112).

Por su parte, Feijoo (2002, p. 343) opina que esta afirmación implica, en términos de legitimidad, que es justo que los sufrimientos del hombre criminal sean iguales al dolor que generó voluntariamente con su acto a otros. Cabe comprender en este asunto el discurso de Kant (1989):

Pero ¿cuál es el tipo y el grado de castigo que la justicia pública adopta como principio y como patrón? Ninguno más que el principio de igualdad (en la posición del fiel de la balanza de la justicia: no inclinarse más hacia un lado que hacia otro. Por tanto, cualquier daño innecesario que ocasionas a otro en el pueblo, te lo haces a ti mismo; si le injurias, te injurias a ti mismo; si le robas, te robas a ti mismo; si le pegas, te pegas a ti mismo; si le matas, te matas a ti mismo (p. 167).

De este modo, al hombre ejercer de manera irresponsable la autodeterminación se hace culpable y merecedor en justicia del mal de la pena, la cual se impone porque el delito no debe quedar impune. De ahí, que se deba en todos los eventos en que se presenta un crimen, por imperativo categórico, imponer el castigo.

Kant (1989) se refiere a lo justo de la pena en el libro, *La metafísica de las costumbres* de la siguiente manera:

La pena judicial (...) ha de imponérsele solo porque ha delinquido (...) La ley penal es un imperativo categórico y ¡ay! de aquel que se arrastre por las sinuosidades de la doctrina de la felicidad para encontrar algo que le exonere del castigo (...), por la ventaja que promete, siguiendo la divisa farisaica es mejor que un hombre muera a que perezca todo el pueblo. Porque si perece la justicia, carece ya de valor que vivan hombres sobre la tierra (pp. 166-167).

De hecho, este autor (Kant, 1989) ha precisado el alcance de la justicia del siguiente modo:

Incluso aunque la sociedad civil con todos sus miembros acordara disolverse (p. ej. el pueblo que vive en una isla decidiera separarse y dispersarse por todo el mundo), tendría que ser ejecutado antes el último asesino que se hallara en la cárcel, para que cada uno sufra lo que sus hechos merecen y para que no pese la culpa de la sangre sobre el pueblo que no ha insistido en su castigo: porque puede considerársele como cómplice de esta violación pública de la justicia (pp. 168 – 169).

Sin embargo, para Kant (como se citó en Feijoo, 2002, p.341) el rasero para graduar la pena con el propósito de mantenerla en justos términos se encuentra en el principio de igualdad. Para lo cual se sirve de la ley del tali3n que bien entendida determina la calidad y cantidad del castigo. Esta ley se encuentra expresada en la Biblia como sigue:

²² Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces.

²³ Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida,

²⁴ Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie,

²⁵ Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. (Éxodo, 1960: 21, 22 – 25).

En definitiva, para Kant la pena judicial es mera retribución debido a que con ella no se pretende ningún fin o propósito, esto es, se impone la pena al delincuente porque este ha delinquido y ello, en sí mismo, es suficiente para legitimarla en cada caso.

2. La teoría jurídico penal de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

El acercamiento a la teoría retributiva de la pena se hará a partir del Estado, del Derecho y de la sanción por ser categorías propias en la dialéctica de Hegel del espíritu objetivo.

De acuerdo con Hegel (1980) el Estado que ha concebido a la sociedad civil responde por una parte, a los condicionamientos o circunstancias históricas y políticas dadas en cada momento de la evolución de la historia humana, es decir, a cada época; y de otra parte, gracias al hecho de que en dicho desarrollo la persona pasa a asumirse como un ser libre, que sin embargo, debe estar señoreado por el poder estatal de manera absoluta. Afirma Hegel (1980) que:

Los orientales no saben que el espíritu o el hombre como tal es libre en sí y, como no lo saben, no lo son. Solo saben que hay uno que es libre, pero precisamente por esto, esa libertad es solo capricho, barbarie y hosquedad de la pasión o también dulzura y mansedumbre, como accidente casual o capricho de la naturaleza. Este uno es, por tanto, un déspota, no un hombre libre, un humano. La consciencia de la libertad solo ha surgido entre los griegos y por eso han sido los griegos libres. Pero lo mismo hechos que los romanos solo supieron que algunos son libres, mas no que lo es el hombre como tal. Platón y Aristóteles no supieron esto. Por eso los griegos no solo tuvieron esclavos y estuvo su vida y su hermosa libertad vinculada a la esclavitud, sino que también

esa libertad fue, en parte, solo un producto accidental, imperfecto, efímero y limitado, a la vez que una dura servidumbre del humano. Solo las naciones germánicas han llegado, en el cristianismo, a la consciencia del que el hombre es libre como hombre, de que la libertad del espíritu constituye su más propia naturaleza. (p. 67).

Por tanto, la historia de la humanidad muestra de forma positiva que se avanza y se progresa gracias a la razón y a la independencia, entendida esta como la libre autodeterminación de la persona. Asimismo, se puede inferir que dentro de los modelos de Estado que han existido, solo el de derecho concibe como persona al ser humano en cuanto hombre.

Para Hegel (1973) se es hombre cuando se tiene conciencia de la autonomía “sabe su individualidad como querer absolutamente independiente. Es persona, al saberse de esta libertad” (p.257). Por lo tanto, la idea del autor es que en el orden civil el sentido de la determinación propia se comprende con respecto al otro y en el otro: “tengo la existencia de mi personalidad en el ser de otros semejantes en mi relación con ellos y el reconocimiento de mí por parte de ellos, que es así reconocimiento recíproco” (p. 257).

Al respecto, Zaffaroni (2000, p. 287) explica que lo humano es entendido en el sistema de la filosofía de Hegel de la siguiente manera: el espíritu avanzaba por medio de tres estadios: el subjetivo (tesis), en que el hombre logra la libertad al alcanzar el uso de razón de sí mismo (autoconciencia); el objetivo (antítesis), en que la persona ya libre se relaciona con otras que también lo son; y el estadio del espíritu absoluto (síntesis), en que el alma de las generaciones se eleva por sobre el mundo.

Sumado a lo anterior, Hegel (1973, ps. 257-260) sostiene que el presupuesto para que exista el Derecho Positivo es la sociedad civil, debido a que tanto este como su correlato (los deberes u obligaciones) se instauran en la libre personalidad del sujeto, en oposición al mal llamado Derecho Natural, que no está en la competencia de limitar el arbitrio y la violencia del estado nato. También es posible recordar que Hegel justifica la existencia del derecho en la voluntad libre, no solo como ley sino también como abarcador de todas las determinaciones de la autonomía.

En este pensamiento el delito se origina en la negación que hace el individuo alejado del derecho:

La primera violencia ejercida como fuerza por el individuo libre que lesiona la existencia de la libertad en su sentido concreto, el derecho en cuanto derecho, es el delito. Es un juicio negativo infinito en su sentido completo (véase Lógica, II, B, p. 99) mediante el cual no solo se niega lo particular, la subsunción de una cosa bajo mi voluntad (§85), sino también lo universal, lo infinito en el predicado de lo mío. Es decir, que se niega no solo la capacidad jurídica, sin la mediación de mi opinión (como en el fraude, §88), sino precisamente en contra de ello. Esto constituye la esfera del Derecho Penal. (Hegel, 1999, p. 181 -182).

Por tanto, la acción desplegada por el sujeto violenta arbitraria e injustificadamente el orden social alcanzado con el Derecho, y con ello, atenta los espacios en donde es posible obtener los ámbitos concretos de libre determinación, es decir, su acto es injusto porque con ello lesiona la

independencia del individuo, entendida como autorrealización, al igual que el ejercicio racional de la libertad de las relaciones interpersonales.

Se quiere indicar para evitar confusión, que con el crimen lo que se está afectando es el Derecho, lo que expresa el autor con su acto voluntario es el no reconocimiento por parte suya de los deberes, mandatos o prohibiciones estipulados en el ordenamiento jurídico. Este hecho en opinión de Hegel (1999) manifiesta un hecho punible “la auténtica injusticia es el delito, en el cual no se respeta el Derecho ni en sí ni como se me aparece a mí, con lo que se lesionan ambos lados, el objetivo y el subjetivo” (p. 179).

Hegel también considera que la sentencia en cabeza del Estado cumple un papel positivo muy importante: acabar con el castigo como venganza ocasional en manos de particulares por medio del empleo que hace el juez de la sanción penal. En ese sentido, esta mantiene vigente contra fácticamente el ordenamiento jurídico, es decir, suprime con su práctica la acción libre y voluntaria del autor del hecho punible y restablece o reafirma el Derecho en tanto tal, y de modo que, este acto sea nulo en sí mismo:

El delito se suprime en un tercer juicio que es desinteresado, en la pena. El hacerse valer del Derecho en sí es mediar: a) de aquí que un querer particular, el juez, es adecuado al Derecho y tiene el interés de revolversse contra el delito (lo que en la venganza es accidental), b) por el poder (igualmente casual) que tienen la ejecución de negar la negación del Derecho hecha por el malhechor. Esta negación del Derecho tiene su existencia en el querer del malhechor: la venganza o pena: 1) se dirige contra la persona o propiedad del malhechor, 2) y ejerce coacción contra este. La coacción tiene lugar en general en esta esfera del Derecho. (Hegel, 1973 p. 259).

Por estas razones, la pena en el pensamiento hegeliano solo es pensable como retribución jurídica, en tanto es efecto de la existencia del acto libre que decide alterar el orden social proyectado de la ley. Más aún, Hegel (1999, ps. 187- 188) señala que esta se imputa por el uso antijurídico que hace el malhechor de su ámbito de autonomía. Por este motivo, el autor sostiene que el castigo es un derecho para el delincuente, es decir, es su derecho potestad, ello se deriva del consentimiento tácito contenido en el acto que llevó a cabo.

Como puede inferirse, lo decisivo en Hegel es el silogismo dialéctico: el delito (tesis) niega el Derecho, así como, la pena (antítesis) niega el delito, luego, afirmación (síntesis) del Derecho. Con ello, este rige las pautas de conducta que se deben seguir.

En este sentido, el análisis que hace Rodríguez (2011, p. 4) de la pena en el sistema hegeliano es compartido. Él afirma que esta es parte de la proposición normativa y que, por ejemplo, en el artículo 103 del Código Penal colombiano se le consagra como una consecuencia ante un supuesto de hecho. El castigo al determinarse en la ley y hacerse realidad cuando se aplica al trasgresor, solo expresa que es parte del derecho, es decir, la pena es la esencia coactiva del Derecho Penal, fuera de este contexto, es venganza.

De otro lado, Hegel plantea un avance con respecto a Kant en lo que tiene que ver con tasar la pena. Como se ha mencionado, Kant en el momento de imponerla se apoya en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, como criterio abstracto de igualdad; por el contrario, Hegel establece que entre esta y el delito existe una relación de resarcimiento.

Esto, se traduce en que el delito y la pena tienen como característica común que ambos son lesiones. Sin embargo, la dificultad en la compensación se encuentra en el momento de graduar el castigo para el caso concreto, debido a que con el resarcimiento se pretende lograr entre el crimen y la sentencia un equilibrio justo en términos valorativos. Para alcanzar este propósito, Hegel (1999, p. 191 – 192) propone como criterio orientador, tener en cuenta las cualidades específicas del hecho punible cometido, ya que según él, de allí surge la consecuencia como valor equivalente.

3.2. Teorías relativas de la pena

Frente a la teorías absolutistas de la pena se argumenta que esta es relativa porque debe cumplir una función social, término que lleva a discusiones doctrinales, dado que los teóricos que abogan por esta postura no logran ponerse de acuerdo acerca de cuál es esta, argumentando razones tales como establecer que ella debe ser preventiva general o su antípoda que debe cumplirse desde una perspectiva preventiva especial de precaución singular.

Esta divergencia teórica establece unos sentidos determinados de la pena: en primer lugar, aquellos que hablan de una prevención general, es decir, un estímulo que involucre a todos los ciudadanos y que se da, bien sea de manera positiva o negativa. En segundo lugar, otros que buscan con la imposición del castigo intervenir sobre el delincuente con el propósito de contenerlo, o por el contrario, de resocializarlo.

Así las cosas, la idea central del sentido de la pena para las teorías relativas se encuentra en asumir al delincuente como un sujeto peligroso, o en todo caso en la capacidad de toda persona de realizar actos sancionables con castigo. Por ende, se propone evitar a futuro la comisión de nuevos crímenes ya sea desestimulando al conglomerado social o contrario sensu, al infractor.

1. Prevención general negativa

Según esta teoría la tarea de la pena es una intimidación general que conlleva a que los ciudadanos, de manera genérica, se abstengan de vulnerar los bienes jurídicos tutelados por temor a ser sujetos pasivos del castigo. Esta postura busca prevenir actos posteriores mediante el amedrentamiento a las personas, su principal representante es el alemán Paul Johann Anselm Von Feurbach (1775 – 1833), cuyas ideas se expondrán sintéticamente en lo que sigue.

Para Von Feurbach (1989, p. 58-60) el principal objetivo del Estado conforme a la ley, es la de proporcionar unas condiciones que le permitan a los hombres libres su existencia. Por tanto, toda forma de acto que contradiga este objetivo fin lo faculta para encontrar los medios necesarios y efectivos para impedirlos de manera anticipada, según Von Feurbach este instrumento es la coacción psicológica contenida en la pena legal.

La propuesta del autor de coaccionar psicológicamente a las personas, mediante la amenaza de la pena legal, para preservar la existencia conjunta de los hombres en sociedad; se explica a partir de mirar que lo que motiva o impulsa a la realización del acto es la avidez o desenfreno

influido por el placer (1989, p. 60). De ello se entiende que el hecho punible tiene una causa psicológica.

Por este motivo el “impulso sensual puede ser cancelado a condición de que cada uno sepa que a su hecho ha de seguir, ineludiblemente, un mal que será mayor que el disgusto emergente de la insatisfacción de su impulso al hecho”(Von Feurbach, 1989, p. 60). Según explica Von Feurbach (1989), la amenaza penal se debe establecer previamente en la ley y debe ser, en efecto, impuesta en todos los casos en que el hecho punible se presente, de tal manera, que las personas puedan establecer el vínculo entre el acto prohibido y el objetivo de la coacción psicológica que se pretende obtener con el castigo (p. 61).

En todo caso, para Von Feurbach (1989) la conminación o amenaza penal no pretende:

I) La prevención contra futuras contravenciones de un injuriante en particular...II) Ninguna retribución moral...III) Ninguna clase de intimidación mediata de otro a través de (sic) los sufrimientos inferidos al malhechor...IV) Ningún mejoramiento moral, porque este sería el objetivo de la expiación, pero no el de la pena (p. 62).

Al respecto, Alcacer (2004, p. 136) explica que el motivo por el cual Furbach tiene en su marco teórico, como punto de partida del prever, el momento de la amenaza penal abstracta, es porque este autor se inscribe al tipo de hombre racional del periodo de la Ilustración y al modelo de Estado liberal puesto a su servicio.

Al igual que Von Feurbach, Beccaria (1994, p.46) defiende la función intimidatoria del castigo, pues en su concepto el Estado debe proteger las leyes civiles por ser saludables a la sociedad. Para ello, la norma se debe redactar lo más claro y simple que se pueda, de tal modo que, todos los hombres la conozcan. De otro lado, una vez los individuos estén enterados del reglamento, por temor a él se deben inhibir de cometer delitos (Beccaria, 1994). Cabe indicar que Beccaria (1994) se refiere a que la pena en el contexto del estatuto penal tiene como fin “impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales” (p. 105).

Según Alcácer (2004), a la clásica teoría de la prevención general negativa de Furbach se adiciona hoy la que parte de la psicología profunda o del psicoanálisis para motivar en contra del delito en sí “mediante la conformación de las conciencias con arreglo a los valores presentados en las normas” (p.140).

Esta teoría de la prevención general negativa ha sido criticada porque sus detractores consideran que para que pueda hablarse de una intimidación genérica la norma tiene que ser conocida por todos, o al menos por una mayoría de las personas, lo cual no sucede en la realidad puesto que no es muy grande el porcentaje de ciudadanos que están informados plenamente sobre el ordenamiento penal.

Otro campo que queda excluido de una teoría general de la pena como factor intimidante frente a conductas delictuales de las personas, es el relacionado con los crímenes pasionales, en los

cuales el sujeto obra por las motivaciones que se presentan en un momento dado y no por criterios preconcebidos frente al castigo que pueda ser impuesto por sus actos.

Iguales consideraciones llevan a fomentar críticas a esta apreciación cuando se trata de delitos económicos puesto que aquí entran a operar las estimaciones de costo beneficio. Si la pena es muy poca, la persona que despliega la conducta, a pesar de conocer el monto de esta y de haber sido, pretendidamente, intimidada por la misma, puede asumir los riesgos, si la ganancia que puede obtener es tal, que le lleve a alcanzar la meta propuesta.

2. Teoría de la prevención especial

Esta teoría pretende ser una respuesta distinta frente a los fines de la pena puesto que centra su validez no en la intimidación de las personas que conforman la sociedad, sino que incide directamente sobre el individuo que ha realizado una conducta punible para que no vuelva a delinquir.

En términos de Mezger (1933) esta teoría es “intervención corporal (física) y anímica (individual – psicológica, individual - pedagógica) sobre el autor aislado, al objeto de evitar futuros delitos” (p. 432). Este aspecto permite considerar que la pena estatal como reacción al comportamiento transgresor tiene como punto de partida la estructura biológica y de la psique del infractor. Indica Jescheck (1981) que para ello, el Gobierno debe tener en cuenta los siguientes presupuestos:

Primero, realizar un diagnóstico del comportamiento futuro de la persona condenada; segundo, la peligrosidad social de la persona condenada debe tenerse en cuenta en el cumplimiento de la ejecución penal para poder determinar el resultado del tratamiento; tercero, la eficiencia en la lucha contra la tendencia criminal del ser humano para volver a la persona condenada al buen camino reposa en la intimidación, corrección, custodia y vigilancia, pero sobre todo en la labor socio-pedagógica de la pena durante su ejecución (p. 94).

Conviene subrayar, que independientemente de que la persona condenada se acoja o no al proceso de resocialización, en ningún caso se permite durante el internamiento los tratos crueles, inhumanos o degradantes que afecten su personalidad para adaptarlo a las reglas colectivas. De hecho, manifiesta Roxin (1976, p.32) que la persona criminal se caracteriza por ser un hombre normalmente débil, inconstante y con aptitudes deficientes para la vida en sociedad, así como por características psicopáticas. Lo que demanda, tener en cuenta este dato en el transcurso de la estancia en la prisión para reducir los efectos del encierro.

Considerando la teoría de la prevención especial como corregir al sujeto criminal y como medida para proteger a la sociedad (mientras el individuo permanece en prisión), se comprende que los representantes de esta perspectiva establezcan como metas del Derecho Penitenciario: la resocialización (prevención especial positiva) y la inocuización (prevención especial negativa).

Al respecto de estos conceptos las siguientes líneas:

Resocialización

La idea de resocializar a la persona desviada no es propia del Estado moderno ya que se ha hecho presente en la historia, ejemplo de ello, es Grecia con Platón y los escolásticos con Tomas de Aquino, entre otros. Luego de configurado este, se da un gran auge de la corrección del delincuente con el propósito de incorporarlo a la sociedad y alejarlo del delito. Jescheck (1981, p. 95) plantea que el deber del cumplimiento de la ejecución penal se orienta a la educación formal o enseñanza académica del individuo condenado en los campos del ser, para que elabore o continúe con un proyecto de vida que le permita adaptarse a las ideas dominantes del sistema, como el saber profesional técnico y el trabajo. Asimismo, afirma enérgicamente el sentido de compromiso y de apoyo con el establecimiento carcelario.

Adviértase que con esta óptica lo que interesa es tener un interno no problemático y adaptado al orden y la disciplina impuesta al interior del establecimiento penitenciario y carcelario, a su vez acompañado de una formación para el puesto de trabajo y de un discurso propicio a la ideología liberal.

Postura contraria tiene Hassemer (1984, p.353) quien argumenta que el orden social tiene obligaciones que cumplir con el sujeto delincuente, ya que este se encuentra condenado por un crimen cuyo origen se puede explicar por una exigua adaptación a las normas colectivas. Esta deficiencia se deriva precisamente de la falta de deberes y obligaciones del Estado y de la comunidad con sus nacionales. De ahí, que durante el cumplimiento del castigo estos mediante los agentes del sistema penitenciario, tengan que construir una propuesta correctiva razonable

que llene el tiempo disponible y el vacío de la persona castigada para alcanzar su reintegro social.

Se puede inferir que la propuesta de la prevención especial positiva está orientada a modificar las pautas de conducta, tanto como la estructura del modo de ser del condenado, para evitar la reincidencia sin desconocer las condiciones vulnerables en que se encuentra. En el trasfondo de estos propósitos subyace el dogma de la personalidad peligrosa, lo que hace que se tenga para algunas personas culpadas un pronóstico negativo o de fracaso del proceso de resocialización. Este análisis empírico le va a permitir a Von Liszt (1882) proponer una clasificación tipología de los delincuentes en momentáneos u ocasionales, habituales corregibles o de disposición y habituales incorregibles.

Los delincuentes ocasionales según Von Lizst (1882, p.90) son aquellas personas que por una influencia externa cometen el error de realizar un hecho punible y cuya posibilidad de reincidir es mínima, lo que hace que no se requiera una corrección sistemática. Para esta clase de individuos el papel de la pena es servir de escarmiento o advertencia, así como restablecer la validez de la ley que se ha infringido. Para estos casos el castigo mínimo debe oscilar entre seis semanas y un máximo que no exceda los diez años.

Ahora bien, los delincuentes necesitados de corrección son en términos del autor aquellas personas que a pesar de tener una tendencia hereditaria o adquirida al crimen tienen la posibilidad de ser corregibles. Para poder alcanzarlo, es necesario imponerles una educación severa y prolongada bajo un sistema progresivo de tratamiento. Añade el escritor que para ello es

preciso imponer una pena (no expresada en la sentencia) que no rebaje de un año y un máximo de cinco. Al inicio del proceso el individuo es aislado celularmente, luego si tiene una buena conducta pasa a la vida en comunidad donde estará trabajando y estudiando. El sujeto que al parecer haya alcanzado el cambio será puesto en libertad bajo vigilancia de la policía por un tiempo igual al que estuvo encarcelado (Von Lizst, 1882, p. 89).

Inocuización

Al delincuente se le inocuiza, es decir, se le coloca en unas condiciones de aislamiento y de separación de la sociedad a fin de hacerlo inofensivo, de no permitirle que vuelva a dañar al sistema. En opinión de Von Lizst (1882), los criminales incorregibles que hay que neutralizar son aquellos reincidentes que han recibido una tercera condena, siempre y cuando se trate, entre otros, de uno de los siguientes hechos punibles “hurto, receptación, robo, extorsión, estafa, incendio, daños, agresiones sexuales violentas y agresiones sexuales a niños” (pp. 86-88). De igual modo, el autor se refiere que por las características de estas personas la pena a imponer es la cadena perpetua o en su caso indeterminada, con el deber de trabajar. Excarcelarlo es excepcional y se podría formular cada cinco años con la exigencia de trasladar a este individuo a uno de los establecimientos correccionales.

De este modo, con la inocuización se ha pretendido desde sus inicios darle respuesta al fenómeno de reincidencia, y tener un control absoluto sobre una determinada criminalidad que desestabiliza el orden y la convivencia social, sin tener en cuenta el límite de la culpabilidad y la prohibición de las sanciones indeterminadas. Sumado a esto, podemos concluir que las teorías de

la prevención especial no corresponden a teorías de la pena debido a que son propuestas de práctica penal para combatir el delito y, por lo tanto, son medidas de política criminal.

4. Lugar de realización del tratamiento penitenciario: la prisión como institución totalitaria

La prisión, como pena es, de un lado, el lugar establecido por el Estado para que el prisionero purgue el tiempo que el juez penal le ha determinado por haber cometido un delito y, de otro lado, cumple una función resocializadora y de readaptación social. En efecto, la pena incorpora actividades de tratamiento dirigidas a transformar la individualidad del condenado, de ahí que allí se adopten normas que regulen la vida al interior del establecimiento y las sanciones por su infracción. En consecuencia, las relaciones que se establecen entre el penado y la administración penitenciaria suelen fundamentarse en la lógica de naturaleza premios - represión. Para alcanzar a comprender los significados de esta interacción social, como la obtención o no de los fines declarados de la cárcel, se ha optado por el enfoque del interaccionismo simbólico desarrollados por Goffman en el estudio de los institutos de ejecución penal, que señala: "...el individuo presenta su sí mismo y su actividad a otros, los caminos por los cuales él guía y controla las impresiones que ellos se forman de él, (sic) y las clases de cosas que él puede y no puede hacer mientras realiza su representación ante ellos" (Goffman, 1981, p.11).

De modo que, Goffman es valioso en dos sentidos. Primero, para él la prisión es ante todo un lugar de interacción social. Por ende, hay que tener en cuenta que el prisionero quiere proyectar ante el otro una buena imagen y narrativas en defensa de su yo al momento de estar interactuando, lo que lo vincula con las representaciones sociales, características y significados

que dicha imagen incorpora, puesto que se le exige que sea lo que esta “proyección” es, y deje en lo real de ser otra cosa. Pese a ello, será parte de su interés controlar la conducta de los otros:

Este control se logra en gran parte influyendo en la definición de la situación que los otros vienen a formular, y él puede influir en esta definición expresándose de modo de darles la clase de impresión que habrá de llevarlos a actuar voluntariamente de acuerdo con su propio plan. De esta manera, cuando un individuo comparece ante otros, habrá por lo general alguna razón para que movilice su actividad de modo que esta transmita a los otros una impresión que a él le interesa transmitir (Goffman, 1981, pp. 15 – 16).

Segundo, las interacciones sociales al interior de la prisión se presentan desde la institucionalidad, bajo un control formalizado que lo único que pretende es mortificar al yo, sistemáticamente, hasta alcanzar despojarlo de los roles que desempeñaba cuando estaba en libertad. Así pues, cualquiera que este cumpliendo una pena privativa de libertad, pondrá en una balanza los premios y los castigos en el momento de organizar el tipo de vida y lugar a ocupar durante su estancia en la prisión.

Por las razones antes dadas, se va a presentar, de manera muy sintética, la descripción de Goffman y de su texto *Internados*, donde caracteriza la forma en que se desenvuelven las relaciones sociales al interior de la prisión.

Erwing Goffman (1922 – 1982) sociólogo canadiense quien desarrolló la mayor parte de su producción intelectual en Estados Unidos; investigó con detalle las características de las instituciones cerradas, al igual que la transformación de sus habitantes. Goffman (1961), adopta

el concepto de institución total en términos de entenderla como “un híbrido social, en parte comunidad residencial y en parte organización formal; y en nuestra sociedad son, (sic) los internados donde se transforma a las personas, cada una es un experimento natural sobre lo que puede hacerse al yo” (p. 25), y considera como una de ellas las prisiones, los hospitales psiquiátricos, los cuarteles, los campos de concentración, barcos, internados y conventos.

Goffman ha señalado las características esenciales de estas instituciones:

- Estar sometidas a una sola autoridad;
- Todas las necesidades y los aspectos de la vida de los internos están sometidos a un plan omnicompreensivo;
- La intención de absorber totalmente la personalidad del interno con la intención de alcanzar los objetivos propios de la institución; a su vez, todas las actividades del interno se realizan en el mismo sitio (p.19).

De acuerdo con Goffman (1961) las instituciones totales se dividen en:

- 1) establecimientos para el cuidado de las personas con algún tipo de hándicap: ciegos, huérfanos, ancianos, pobres;
- 2) instituciones para personas en principio incapaces de cuidarse a sí mismos o que pueden representar un peligro social: hospitales psiquiátricos, leproserías;
- 3) establecimientos para personas que han sido encerradas no buscando su bienestar, sino evitar el peligro que pueden suponer para la sociedad: prisiones, campos de concentración;
- 4) instituciones para realizar unas determinadas actividades laborales: barcos, cuarteles, internados, campos de trabajo; y
- 5) refugios frente al mundo/centros de instrucción religiosa: monasterios y conventos (p.18).

Para Goffman (1961, p.18) la prisión es absorbente y totalizadora; esta tendencia se objetiva y se maximiza por los obstáculos que se oponen a la interacción social con el exterior y al desalojo y aislamiento de sus miembros del ámbito colectivo: alambres de púa, altos muros, rejas, puertas cerradas debido a que es una institución que se organiza para proteger al sistema de sujetos peligrosos que se han colocado intencionadamente frente a él y no se propone el bienestar de los privados de libertad, sino el tenerlos a buen recaudo.

Refiere Goffman (1961) que los internos pueden adoptar una de las siguientes formas de adaptabilidad al interior de la institución:

Primero, “regresión situacional”, el interno se abstiene de participar activamente en las actividades propias de la institución y que no tienen nada que ver con él; segundo, “línea intransigente”, el interno se enfrenta con la institución en un deliberado desafío y se niega abiertamente a cooperar con el personal de la institución; tercera, “colonización”, el interno se construye dentro de la institución una vida relativamente placentera y estable; finalmente, la cuarta, que se refiere a la “conversión”: el interno asume plenamente la visión que el personal de la institución tiene de él, y se empeña en desempeñar el rol del perfecto pupilo disciplinado dando a entender que la institución pueda confiar y contar con él en el momento en que lo requieran (pp. 70-72).

De la descripción anterior, se puede destacar que el prisionero vive su historia durante el tiempo que dura el encierro, el cual está mediado por resistencias e instantes de fuga a los prototipos que la agencia del Estado le impone que sea, a costa de renunciar a lo que él es y se

propone ser, sin embargo, todo ser humano tiene el derecho a exigir que lo traten de manera digna, le respeten su singularidad (lo que es) y lo reconozcan tal cual.

Antes de continuar al siguiente ítem, se quiere advertir que ante todo la prisión es un espacio social del que se pueden develar y construir significados que permitan dar a conocer al mundo exterior los resultados que genera este subsistema de castigo. Puesto que en donde habitan prisionero, funcionarios que trabajan bajo el método de corregir y castigar, externos en calidad de voluntarios que desde la lógica de la compasión y mala conciencia apoyan las distintas actividades de tratamiento, no se puede afirmar que ya todo está dicho, y menos en las condiciones actuales en que se encuentran las cárceles en Colombia.

5. Tratamiento penitenciario

El tratamiento penitenciario se entiende, en términos generales, como el conjunto de actividades que buscan ideológicamente la defensa del sistema, de igual manera, el control del prisionero mediante la intervención en su individualidad. Es por ello que este fin se debe de realizar dentro de los límites específicos que lo permiten. Regulación consagrada en las normas internacionales y nacionales relacionadas con el mundo penitenciario cuyas disposiciones se expondrán sintéticamente como sigue.

- Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos-. Adoptadas por el “Primer Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente”, de las Naciones Unidas

(UN), celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en la Resolución 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.

- Procedimientos para la aplicación efectiva de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobados por el ECOSOC de la ONU en la Resolución 1984/47 del 25 de mayo de 1984.
- Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General 68ª de la ONU en la Resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990.
- Ley 65 de 1993. Código Penitenciario y Carcelario.
- Acuerdo 0011 de octubre 31 de 1995. Expide reglamento general al cual que se sujetarán las normas internas de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
- Resolución 7302 de noviembre 23 de 2005. Expide pautas para la atención integral y el tratamiento penitenciario.
- Resolución 2392 de mayo 3 de 2006. Reglamenta las actividades válidas para redención de pena en los establecimientos de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.
- Resolución 2521 de mayo 10 de 2006. Aprueba y adopta la metodología Plan de Acción Sistema de Oportunidades para la Aplicación del Tratamiento Penitenciario en los Establecimientos de Reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
- Resolución 2906 de mayo 31 de 2006. Adición a la Resolución 2521 de mayo 10 de 2006.
- Resolución 004558 de mayo 14 de 2009. Invalida parcialmente la Resolución 7302 de noviembre 23 de 2005.

- Resolución 4380 de 2014, adopta las directivas para la organización y funcionamiento del cuerpo colegiado Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET) en los establecimientos de orden nacional.
- Procedimientos de los procesos de atención integral y tratamiento penitenciario aprobados en el sistema de gestión de la calidad del INPEC.

5.1. Concepto

El concepto básico de tratamiento penitenciario es aquel que lo reduce a un conjunto de actividades dirigidas a alcanzar la resocialización de la persona condenada, sin embargo, no se puede pasar por alto el hecho de que este posee una naturaleza criminológica y normativa que genera dificultades en el momento de conceptualizarla.

a. Acercamiento criminológico

Desde el punto de vista criminológico, se considera el tratamiento penitenciario como una actividad científica y dirigida por expertos de las áreas de sicología, psiquiatría, criminología clínica, entre otros. Lo que conlleva a que existan tantas definiciones de este, como autores que se han ocupado del tema.

Por ejemplo, Alarcón (1978), cita previamente con una perspectiva crítica dos definiciones dadas sobre tratamiento penitenciario, antes de proponernos su propia noción. La primera que expone es la de “acción individualizada, tendente a modificar favorablemente aquel sector de la

personalidad del interno que influye, facilitando o provocando su delincuencia o estado peligroso” (p.18); la segunda en mencionar es: “...acción individualizada de tipo médico biológica, psiquiátrica, psicológica, pedagógica o social que tiene el fin de evitar la reincidencia del sujeto considerado y conseguir su readaptación social o su reinserción social”. (p.19)

Las anteriores nociones de tratamiento penitenciario tienen como común denominador la intervención sobre la humanidad de la persona condenada con el propósito de modificar su estado peligroso para reinsertarlo al modelo social dado. Alarcón (1978), critica las anteriores definiciones porque ellas dan por cierto dos presupuestos que no lo son: la personalidad criminal y lo legítimo del modelo social vigente. Por ello, propone entenderlo como:

“...una ayuda, basada en las ciencias de la conducta, voluntariamente aceptada por el interno para que en el futuro pueda elegir o conducirse con mayor libertad; o sea para que pueda superar una serie de condicionamientos individuales o sociales de cierta entidad que hayan podido provocar o facilitar su delincuencia” (Alarcón p.21).

El inconveniente del concepto de tratamiento penitenciario postulado por Alarcón se encuentra en que mantiene la idea de que la persona condenada por el delito es un transgresor con problemas personales y de adaptación al entorno común, lo que lo hace alguien distinto al resto del conglomerado social.

De otro lado, García (2006), refiere al tratamiento penitenciario como el:

...conjunto de las actividades instrumentales de adoptar y utilizar a los fines de la reeducación un sistema de influencia directa, inteligentemente preordenado y coordinado que permitan a quienes se aplica resolver y superar los problemas que han dado lugar a su desadaptación social, entendida como rechazo a las reglas de la vida o como dificultad para convivir adecuadamente (p.85).

Por último, Quintero (2011, p.173) dice que en la actualidad el tratamiento penitenciario debe comprender tanto aquellos procesos que se efectúan desde las ciencias de la conducta sobre la individualidad del condenado, al igual que todo acto dirigido a superar los problemas de socialización, a fortalecer los conocimientos y los contactos con el mundo exterior, a minimizar los efectos del encierro y a garantizar unas circunstancias de vida digna al interior del establecimiento.

Lo que queda claro de todo este discurso conceptual es la propuesta orientadora del tratamiento penitenciario que no es otra que intentar reducir la agresividad del transgresor, hacer consciente aspectos instintivos en cuanto a sus conductas patológicas, sensibilizarlo con respecto a su parte afectiva, favorecer relaciones interpersonales estables, lograr que pueda canalizar sus impulsos y poner en palabras su situación (Marchiori, 2013, p.10).

b. Acercamiento normativo

Desde el punto de vista legal, el tratamiento penitenciario está establecido en el marco normativo internacional y nacional del país como sigue. La aparición de las disposiciones mundiales alusivas a la reforma de los reos posee como antecedente histórico el congreso convocado por la

Asociación Nacional de Prisiones de los Estados Unidos llevado a cabo en Cincinnati, Ohio, en octubre de 1870, conocido como “Congreso Nacional sobre la Disciplina de las Penitenciarías y Establecimientos de Reforma”, el cual establece en la declaración II que:

...El trato de los criminales por la sociedad tiene por motivo la seguridad social. Mas, como el objeto de él es el criminal y no el crimen, su fin primordial debe ser la regeneración moral de aquél (sic). Por esta razón, la mira suprema de las prisiones debe ser la reforma de los criminales y no la imposición del dolor, o sea, la venganza (Asociación Nacional de prisiones de los Estados Unidos, 1871, p.8).

Luego, en Suiza, en el año de 1955, de manera oficial se dieron a conocer en el “Primer Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente” de UN las denominadas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Estas fueron aprobadas dos años después, en 1957, por el: ECOSOC mediante la Resolución 663 CI (XXIV), 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 y 1984/47 del 25 de mayo de 1984. Por último, en 1990 mediante la Resolución 45/111 se adoptó los principios básicos de tratamiento de los reclusos.

Cabe destacar, que la norma 65 de la parte II de las reglas mínimas establece que el tratamiento penitenciario para las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad debe tener como fin:

...en tanto la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho

tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto a sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. (UN, 1955).

Lo anterior es probable según de la regla 66.1:

[...] “la asistencia religiosa, en los países en que esto sea posible, a la instrucción, a la orientación y la formación profesional, a los métodos de asistencia social individual, al asesoramiento relativo al empleo, al desarrollo físico y a la educación del carácter moral, en conformidad con las necesidades de cada recluso”. (Ibíd).

Además, la regla 66.1 considera como elementos esenciales para determinar el tratamiento el conocer sobre el “pasado social y criminal, su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales, la duración de su condena” (Ibíd).

A nivel de la normatividad nacional, la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario consagra en el artículo 10 que el tratamiento penitenciario debe:

“alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad a través de (sic) la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario” (Congreso de la República de Colombia, 1993).

Y en el artículo 143 del Código Penitenciario y Carcelario se contempla que se debe proteger en todo caso la dignidad humana y satisfacer las necesidades particulares de la personalidad de

cada sujeto condenado. Esto se lleva a cabo mediante “la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia” (Ibíd).

La Resolución 7302 de 2005 en el artículo 4 define el tratamiento penitenciario como:

El conjunto de mecanismos de construcción grupal e individual, tendientes a influir en la condición de las personas, mediante el aprovechamiento del tiempo de condena como oportunidades, para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, de manera tal que (sic) logren competencias para integrarse a la comunidad como seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad (INPEC, 2005).

El artículo 144 del Código Penitenciario y Carcelario y las Resoluciones 7302 de 2005 y 4558 de 2009 plantean las fases de progresividad del tratamiento penitenciario de la siguiente forma: primero, momentos del tratamiento: observación, diagnóstico y clasificación del condenado; segundo, fases del tratamiento: alta seguridad que comprende el período cerrado; mediana seguridad que comprende el período semiabierto; mínima seguridad o período abierto; de confianza, que coincidirá con la libertad condicional (Congreso de la República de Colombia, 1993; INPEC, 2005 y 2009).

La Resolución 7302 de 2005 en su artículo 1º establece las actividades de tratamiento penitenciario mediante la estrategia PASO (Plan de Acción Sistema de Oportunidades). Las cuales son entendidas como

el conjunto de programas educativos, laborales y de enseñanza estructurados con un componente psicosocial, cultural, recreativo, deportivo, axiológico y espiritual que ofrece el sistema penitenciario y carcelario a los internos (as), como espacio de reflexión y crecimiento personal orientado hacia la integración social positiva, prevaleciendo el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos”.

5.2. Elementos del tratamiento penitenciario

De las actividades que conforman el tratamiento penitenciario se abordarán el trabajo y el componente educativo por considerarlos ejes transversales de todo proceso de socialización terciaria o reforma del individuo condenado, es decir, estos son los soportes que le dan sentido al espacio de la prisión como sitio en donde se pretende el reintegro del preso.

a. Trabajo

De acuerdo con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en el punto 71.4, el trabajo ofertado por el establecimiento penitenciario a la persona condenada debe poseer la característica de desarrollar competencias laborales de tal forma que le permitan una vez se encuentre en libertad mantener o aumentar la capacidad de ganarse su sustento respetando la ley (UN, Op.cit.).

Según Gómez de la Torre (2001, P.360) el cometido tiene como propósito formar a futuro al interno para insertarlo laboralmente cuando acceda a la libertad. Por estas razones las actividades

para el trabajo ofertadas por el establecimiento deben adecuarse a las aptitudes y a la cualificación del individuo.

En el mismo sentido se pronuncia la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 1994) donde resalta que el trabajo como actividad enmarcada dentro del tratamiento penitenciario debe ser eficaz para que de él se deriven proyectos productivos.

De acuerdo con esto, las ofertas ocupacionales en el campo del trabajo deben de estar enmarcadas dentro del hacer técnico, siempre y cuando respondan a las demandas de empleo propias del contexto social de la persona condenada (Universidad Nacional de Colombia e INPEC, 2012, p.61).

Así mismo, la Corte Constitucional (1992) en la Sentencia T-601, cuyo magistrado ponente fue Eduardo Cifuentes Muñoz estipuló que:

El trabajo desarrollado por los presos es un medio indispensable -junto con el estudio y la enseñanza- para alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo esencial del derecho a la libertad, pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de la pena a través de (sic) su rebaja o redención (...) la administración penitenciaria tiene a su cargo el deber de procurarles, en la medida de las posibilidades, una actividad laboral como fórmula de superación humana y medio para conservar la libertad.(resalto fuera de cita).

De igual forma, un año después, el máximo órgano constitucional indicó en la Sentencia T-009, cuyo magistrado ponente fue Eduardo Cifuentes Muñoz, que el trabajo en materia punitiva es:

...uno de los medios principales para alcanzar la finalidad resocializadora de la pena, ya que ofrece al infractor la posibilidad de rehabilitarse mediante el aprendizaje y la práctica de labores económicamente productivas, las cuales pueden abrirle nuevas oportunidades en el futuro y conservar así la esperanza de libertad (Corte Constitucional de Colombia, 1993).

En la Sentencia T – 429, cuyo magistrado ponente fue Juan Carlos Henao Pérez, la Corte Constitucional (2010) consolida la línea de la jurisprudencia con respecto a la función del trabajo carcelario y concluyó:

...es un elemento del que depende la efectividad de los fines resocializadores de la pena; lo que significa, entre otras, formarse en la cultura de la satisfacción personal de adelantar una labor productiva y legítima por la cual ser no sólo (sic) recompensado sino también reconocido.

Del anterior desarrollo normativo, se pueden extraer dos significados del trabajo penitenciario: el primero, entiende el trabajo en términos resocializadores debido a que las actividades laborales buscan mejorar al condenado en su conducta en tanto incorpore en sus proyectos de actuación la importancia de la ideología del trabajo en la vida social, sin que ello se traduzca necesariamente en un empoderamiento de habilidades del hacer laboral. El segundo, el trabajo es terapéutico en tanto el condenado adquiere habilidades, destrezas y cualificación ocupacional, lo cual favorece conductas socialmente aceptadas. (Universidad Nacional de Colombia e INPEC, Op.cit., p.62).

b. Educación

El ECOSOC (1990) en la Resolución 1990/20 recomienda a los Estados ofrecer a las personas que purgan condena, actividades educativas que tengan como objeto prevenir el delito, la inserción social y bajar la reincidencia, asimismo labores que contribuyan al desarrollo humano de los reclusos.

Por su parte, la UNESCO (1994) entiende que la educación en los establecimientos penitenciarios posee las tres siguientes funciones: ... En primer lugar, mantener a los reclusos ocupados provechosamente; en segundo lugar, mejorar la calidad de la vida en prisión; y en tercer lugar, conseguir un resultado útil (oficio, conocimientos, comprensión, actitudes sociales y comportamiento) que perdure más allá de la prisión y permita el acceso al empleo o a una capacitación superior. Esta educación puede o no reducir el nivel de reincidencia. Los dos últimos objetivos forman parte de un objetivo más amplio de reintegración social y desarrollo del potencial humano. En cuanto al primer objetivo, podría considerarse que se alcanzará necesariamente si se logran los otros dos, pero estos no siempre se alcanzarán si se da la prioridad al primero, aunque la capacitación en trabajos manuales mediante el empleo en la prisión puede contribuir también a un cambio de actitudes y comportamiento de los reclusos (p.13).

Por consiguiente, las actividades educativas en los establecimientos penitenciarios tienen el propósito de tratar al que está purgando pena para que no reincida nuevamente en el delito. Para alcanzar esta meta hay que corregir el déficit de educación debido a que este hecho influye significativamente en la reincidencia del crimen.

En este orden de ideas, el INPEC (Op.cit.4) propone que la actividad educativa a implementar en los establecimientos penitenciarios de orden nacional esté orientada a formar y cualificar al privado de libertad desde el trabajo, el lenguaje y el conocimiento, mediante experiencias significativas que le van a permitir captar la importancia de darle un nuevo significado al contexto social y al delito cometido.

La actividad educativa gira alrededor de cinco ejes: Libertad – responsabilidad, el objetivo es lograr que el privado de libertad se asuma como ser responsable, pueda entender cada una de sus decisiones con sus efectos; capte lo esencial de su ser, de su independencia, ello depende más de las medidas que tome soportadas en juicios de valor para resolver cada uno de los eventos que se le presenten en el mundo y no de la aprobación social o de un tercero; autonomía, el propósito es que el preso construya y se empodere responsablemente de su proyecto de vida, lo asuma como un componente vital para su existencia; creatividad, el fin es que reclusos alcancen a desarrollar el pensamiento creativo frente a la comprensión de la realidad, y puedan analizar lo no trabajado en los ámbitos de las ideas (Op. Cit., pp.19-20).

La transdisciplinariedad, el proyecto educativo pretende que la persona prisionera construya holísticamente el conocimiento a partir de la inter – transdisciplinariedad de los distintos saberes de la ciencia debido a que estos explican desde diferentes perspectivas los conflictos del mundo que le interesa, los discursos y las prácticas generales propias de su interrelación social; y la socialización del conocimiento, el modelo permite que el recluso asuma, por un lado, el proceso educativo como un espacio de diálogo y debate epistemológico de otro lado, reconozcan el cambio y reconstrucción del conocimiento social (INPEC, Op. Cit., p.21).

Según Posada Segura (2008) en materia penitenciaria el derecho a la educación está relacionado de manera concreta con otros derechos:

- Derecho a que el centro de reclusión proporcione instalaciones adecuadas para la enseñanza y la educación
- Derecho a que la administración suministre los adecuados equipos didácticos
- Derecho a que la educación sirva para redimir pena
- Derecho a que la enseñanza sirva para redimir pena
- Derecho a la educación gratuita.
- Derecho al aprendizaje
- Derecho a la investigación
- Derecho a que el estudio y enseñanza sean certificados
- Derecho a que cada centro de reclusión cuente con programas permanentes de educación
- Derecho a recibir formación técnica
- Derecho a realizar estudios superiores a distancia

- Derecho a redención de pena por la realización de actividades artísticas o culturales
- Derecho a que las actividades artísticas o culturales sean certificadas
- Derecho al suministro de los equipos de trabajo e instalaciones necesarias para desarrollar la actividad artística o cultural
- Derecho a que la administración realice las actividades necesarias para la comercialización de las obras realizadas
- Derecho a beneficiarse económicamente de la venta de los productos realizados (p.595).

Desde la jurisprudencia, la Corte Constitucional (1992) se refirió a la educación en el contexto de prisiones por primera vez en la Sentencia: T-601, cuyo magistrado ponente fue Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual dijo lo siguiente:

El trabajo desarrollado por los presos es un medio indispensable -junto con el estudio y la enseñanza- para alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo esencial del derecho a la libertad, pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de la pena a través de (sic) su rebaja o redención

En 1993, el máximo órgano de justicia estableció en la Sentencia T- 219, cuyo magistrado ponente fue Antonio Berrera Carbonell, que es un deber de la administración penitenciaria por medio de los directores de los centros carcelarios, facilitar la enseñanza y por consiguiente el aprendizaje que aporten a la readaptación social progresiva de los reclusos. En el mismo sentido, se volvió a pronunciar la Corte Constitucional (1998) en la Sentencia C – 184, cuyo magistrado ponente fue Carlos Gaviria Díaz al afirmar que:

... Las finalidades que el Estado pretende alcanzar al asumir la función de dirigir y regular el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y las medidas de seguridad, guardan necesaria relación con la readaptación del individuo mediante la consagración de programas de educación y trabajo que lo preparen para contribuir en forma productiva a la comunidad al recuperar su libertad.

6. Tratamiento penitenciario: fundamento

La definición de algunos comportamientos llevados a cabo por determinados grupos de personas o individuos en particular catalogados como peligrosos para el orden social ha sido una constante en la historia humana. Esta característica ha recaído en brujas, herejes, prostitutas, alcohólicos, vagos, maleantes, comunistas, anarquistas, traficantes de drogas, terroristas, agresores sexuales, homicidas o asesinos en serie (Armaza, 2013, p. 51). En este apartado se verá el concepto, génesis, criterios o métodos para definirlos, tipologías, y legitimación del orden social constituido.

6.1. Concepto de peligrosidad

La Universidad Nacional Autónoma de México (1982) hizo el *Diccionario jurídico mexicano* en el cual se explica el origen de la *peligrosidad* diciendo que proviene: “del latín *periculosus*, calidad de peligroso, que tiene riesgo o puede ocasionar daño) (sic). Peligro viene de *periculum*, riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal y daño, de *damnum*, detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia. “Peligroso” se aplica a la persona ocasionada y de genio

turbulento y arriesgado. Ocasionado es el sujeto provocativo, molesto y mal acondicionado, que por su naturaleza y genio da fácilmente causa a desazones y riñas” (p.75).

Por otro lado, Ángel Núñez (2004) en el *Nuevo diccionario de Derecho Penal* define la peligrosidad como la: “circunstancia personal del delincuente que lo hace socialmente temible por su malignidad. Es la perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad de mal previsto que se debe esperar del mismo autor del delito (...) saña y maldad manifestada por el sujeto activo del ilícito penal en la realización de los actos criminales”. (pp.757-758).

De estas definiciones se desprende que la peligrosidad se predica de aquella persona que por su naturaleza o carácter perverso puede ocasionar riesgos, dolor o daño. Casabona (1986, p.14) distingue dos tipologías de esta como condición o característica de un individuo. La primera alude a la probabilidad de un hombre de realizar un acto comunitariamente perjudicial no constitutivo de delito, es decir, está pensada en el sujeto destinatario del riesgo, la sociedad. El orden colectivo se siente incómodo o inquieto con el marginado, con el vago, perezoso, habitante de o en calle, con la prostituta, con el alcohólico, con el adicto a drogas alucinógenas, de quienes se predica una amenaza para el sistema y un deber de protegerse de ellos.

De otro lado, para el autor en referencia la peligrosidad criminal consiste en un juicio pronóstico sobre el acto de una persona que por sus cualidades causa delito o reincide en él, esto es, que lo hace autor de un crimen (Ibíd). En el marco de esta definición, explica Martínez (2014,p.7) que, históricamente, esta tipología ha estado relacionada a un atributo propio de un

individuo, ligado a él en tanto cualidad subjetiva de ser violento, por tanto, tiende personalmente a la comisión de infracciones.

En definitiva, la peligrosidad es un estado o condición en que se haya una persona, siendo indiferente que la conducta que ejecute en la actualidad o en el futuro sea en su naturaleza representativa de daño para los bienes jurídicos o intereses colectivos.

En contraste, a esta postura se encuentra Del Rosal (1961, pp. 398-400) para quien la peligrosidad es el efecto de las características del mundo exterior que influyen o estimulan el pensamiento del individuo y, por lo tanto, en su carácter de amenaza. Esto indica que, realidades de pobreza absoluta, miseria económica, desempleo; entornos familiares de abandono y de sexualidad desordenada; factores climáticos o propiedades físicas del medio ambiente, entre otros, constituyen la base del riesgo que representa encarna el sujeto. En términos de Del Rosal la peligrosidad es entendida como aquella circunstancia en la cual las condiciones sociales y los factores de disposición del hombre se unen, de tal manera, que hacen un ser humano en potencia para afectar el sistema o cometer un delito.

a. Génesis

El concepto de peligrosidad criminal se construye sobre la naturaleza agresiva del individuo. Ser que surge como resultado del cruce entre criminología y psiquiatría. Peligroso es aquel sujeto que es a la misma vez delincuente y enfermo mental. De aquí se desprende que la práctica del castigo penal dará un giro, de la condena del hecho punible a la del hombre infractor. De acuerdo con

Michel Foucault (1996), la génesis del sujeto peligroso (que representa una amenaza) se da en el momento mismo en que la siquiatria del siglo XIX construye la figura del sujeto criminal para dar cuenta de actos antijurídicos graves ocurridos entre 1800 y 1835 que no tienen explicación, en tanto:

... no había ningún síntoma previo, ningún trastorno del pensamiento o de la conducta, ningún delirio; que (sic) tampoco habían existido agitaciones o desórdenes como sucedía en el caso del furor; es decir, que el crimen surgía de lo que podría denominarse un grado cero de locura (p.107).

Añade Foucault que otro rasgo de estos crímenes es el hecho de que atentan contra la familia, el hogar, la vecindad, es decir, son hechos punibles *contra natura*. En el autor de estas infracciones confluyen la demencia y lo delictivo para dar como resultado la identidad del transgresor monstruoso (Ibíd: 108). Foucault, hace un apunte más: la siquiatria penetra al campo penal con el propósito de funcionar como un saber médico dirigido a la higiene pública en tanto prevenga, controle y transforme en estos individuos los móviles, los instintos, los motivos y la intención criminal; para ello es necesario conocer la naturaleza del culpable, su ser, gustos, intereses, vileza e inclinaciones (Ibíd: 109, 111).

En fin, para Foucault el saber, la prevención y la cura sobre el transgresor loco propuesta por la medicina siquiátrica en el siglo XIX funciona de manera particular para proteger al cuerpo social y a sus habitantes, de los riesgos que encarnan este tipo de delincuentes. Estos aportes y propósitos son retomados por la criminología positivista para identificar y reaccionar ante sujetos

definidos como amenazantes, con objetivos neutralizadores. A partir de esto, el fundamento de la pena privativa de libertad impuesta a un infractor ya no estará soportado sobre el grado de culpabilidad del individuo, sino sobre el juicio acerca del pronóstico de peligrosidad del malhechor, en tanto prever la tendencia para reincidir en el hecho punible. Véase.

La criminología positivista reintroduce a comienzos del siglo XX la noción de peligrosidad criminal a partir del término *temibilita*, concepto propuesto y construido por Rafael Garofalo (1912). Según él (p.105), el delito es siempre el efecto de causas individuales, es el síntoma de una anomalía psíquica o moral existente siempre en el sujeto, en su naturaleza poco evolucionada que tiene como resultado una falta de desarrollo de sentimientos altruistas y una incapacidad para adaptarse al orden social. En consecuencia, la amenaza del infractor responde a unos atributos mentales anómalos que tienen su origen en la configuración hereditaria que le impiden acoplarse al sistema.

Añade Garofalo (Ibíd) que indagar por el peligro que encarna el sujeto es preguntarse por el grado de *temibilidad* que este posee, es decir, es definir, por una parte, la aptitud criminal, entendida como “... la perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad del mal previsto que hay que temer por parte del mismo delincuente” (Ibíd: 286); y, de otro lado, “la escala de sociabilidad que aun pueda tener” (Ibíd: 351), consiste en la capacidad del delincuente de adaptarse al entorno social en que se desenvuelve (Ibíd).

Es preciso señalar que para Garofalo (Ibíd) liberar al sujeto que representa amenaza “debe determinarse por la posibilidad de adaptación del reo, es decir, por el examen de las condiciones de existencia en los cuales pueden presumirse que deja de ser peligroso” (p.352). Por ello propone criterios de carácter objetivo y subjetivo para determinar si es probable que el individuo a futuro pueda reincidir o no en el delito. Con respecto al primero, hay que tener en cuenta el daño hecho y la forma en que se realizó, debido a que de estas valoraciones se derivan la mayor o menor malevolencia, la cuantía de intrepidez o barbarie del infractor. En el ámbito individual, se debe tener en cuenta la vida precedente del preso, sus caracteres fisiológicos y síquicos, sus sentimientos hereditarios y adquiridos (Ibíd: 352).

Para finalizar este acápite es preciso mencionar que el concepto de peligrosidad va a ser reconocido por primera vez como una institución jurídica de naturaleza penal en 1893 en el Código Penal suizo, se hace con el objetivo de vincularla a las consecuencias jurídicas de la conducta punible (Casabona, Op. cit: 17). En la actualidad el término se ha extendido al Derecho Penitenciario para los empleados públicos que en razón de sus funciones deben pronunciarse sobre el tratamiento y los beneficios administrativos.

b. Tipologías de sujetos

A partir del concepto de temibilidad desarrollado por Garofalo se desprendieron dos nociones importantes para la tipología delictiva: capacidad criminal y competencia del infractor para adaptarse al entorno colectivo en que se desenvuelve. Explica Manzanera (2005) que desde estos términos se desarrollaron cuatro formas clínicas de estado o de tipos peligrosos:

a) Capacidad criminal muy fuerte y adaptabilidad muy elevada. Representan la mayor peligrosidad. Se está ante sujetos de gran dañosidad social debido a que pueden llegar a desarrollar al máximo su nocividad por estar acomodados al medio social, lo que les permite obtener una mayor impunidad. Se encuentran dentro de este grupo delincuentes de cuello blanco, los poderosos (políticos), los de mayor corrupción (banqueros, industriales, etc.).

b) Capacidad criminal muy elevada y adaptabilidad incierta. Este grupo conforma la clientela del sistema penitenciario puesto que son de fácil identificación por su falta de ajuste al medio social. Se trata de criminales profesionales (hacen del delito un estilo de vida) y delincuentes marginados, etc.

c) Capacidad criminal poco elevada y adaptación débil. Se trata de parasociales, sus delitos son leves. Aquí tenemos a vagabundos, alcohólicos, mendigos, prostitutas y toxicómanos.

d) Capacidad criminal débil y adaptabilidad elevada. Se trata de una forma ligera de estado peligroso, son delincuentes ocasionales y pasionales, su reincidencia (sic) improbable. (pp. 92 y 242).

Al referirse a la primera forma de estado peligroso, se tiene que el transgresor es una persona de alto nivel socioeconómico y comete el delito en el desarrollo de su actividad profesional (Castro Cuenca, 2010, p.36). A sí mismo, este se decide libre y voluntariamente a realizar el hecho punible guiado por motivos utilitarios de índole económica y que racionalmente pondera

en cada contexto situacional en que se desempeña y en la información disponible sobre el mismo (Pablos de Molina, 2007, p.286).

En relación con las clínicas de estado peligroso b y c, estas corresponden a los llamados delincuentes de estado. De acuerdo con Welzel (1976, pp. 18-19), estos transgresores son habituales, por lo tanto, la potencia malhechora está enraizada en su carácter. A estos pertenecen, por una parte, el grupo de maleantes habituales peligrosos, con una criminalidad grave; y por otra parte, el conjunto de los asociales en sentido estricto, generalmente, con un potencial agresor leve: el mendigo, el vagabundo, las prostitutas, el reacio al trabajo. Tal y como explica Cerezo (2006) “Delincuente habitual es aquel en el que por la comisión reiterada de hechos delictivos se ha creado un hábito de delinquir” (p.172).

Por su parte, Armaza (Op. cit.) argumenta que los delincuentes imputables de estado portan una peligrosidad criminal por poseer una forma de ser alterada, atribuible a determinadas circunstancias. De donde deriva la siguiente lista de infractores:

- a) Delincuentes imputables de peligrosidad grave (delincuentes sexuales, asesinos en serie)
- b) Delincuentes imputables de peligrosidad leve (carteristas, timadores, etc.)
- c) Delincuentes profesionales (esto es, los que hacen del delito un medio de vida) y, finalmente

d) Delincuentes por convicción o conciencia (con la gama de delitos que van desde la simple —y cuestionada— ocupación de vivienda desocupada, hasta la ejecución de acciones terroristas) (pp. 71 – 72).

Respecto a los delincuentes ocasionales, Romeo Casabona (Op. Cit: 65) explica que el criminal esporádico a pesar del síntoma de peligrosidad que presenta por el hecho punible cometido, se ha acoplado muy bien a las reglas que rigen el orden social. Solo por azar, por una condición favorable o una circunstancia extraordinaria ha infringido las normas de conducta consagradas en los tipos penales.

c. Métodos de prognosis criminal

La valoración de la peligrosidad criminal se desarrolla en dos instancias, de un lado, en la etapa procesal; y de otro lado, en fase de ejecución penal por parte del personal penitenciario y del juez de ejecución de penas y medidas ya que resulta trascendental en el instante de reconocer el adelanto en las fases de tratamiento y los beneficios administrativos, así mismo, los mecanismos que sustituyen el encierro en la prisión.

Sin embargo, los criterios para señalar la comisión de futuros delitos en los criminales peligrosos a corto, mediano o largo plazo han cambiado radicalmente a lo largo de la historia en busca de reducir los márgenes de error en el pronóstico de la reincidencia, sin desconocer que este estigma es “un bien negativo distribuido desigualmente según la jerarquía de intereses fijada

en el sistema socioeconómico y según la desigualdad social entre los individuos” (Baratta, 1986, p.167) que puede influir al instante de aplicar estas instituciones jurídicas.

- a. Método intuitivo. Según Romeo Casabona (Op. cit.: 37), este se soporta en las valoraciones que realiza el juez sobre el individuo, a partir del cúmulo de experiencia laboral que ha obtenido el funcionario a lo largo de los años, sin contar con ningún apoyo disciplinar que sirva para soportar su pronóstico. El sentenciador conoce en la práctica las formas de comportamiento criminal.
- b. Método científico o experimental. Armaza (Op. cit: 95, 96) refiere este se compone de un análisis de rasgos del carácter del infractor con base en procedimientos y técnicas elaborados por especialistas, entre ellos, sicólogos y siquiatras. El informe de estos expertos sobre la peligrosidad criminal se refiere a los hechos y al perfil del sujeto: antecedentes personales, familiares, los hábitos tóxicos si los hubiera; así mismo, las pruebas sicológicas y siquiátricas a las que al sujeto le han practicado. Como se puede ver el método busca elaborar el pronóstico delictivo a partir de conocer en profundidad el modo de ser del transgresor y el contexto sociofamiliar al que puede reintegrarse en el momento de obtener la excarcelación.
- c. Método estadístico. Este se fundamenta en el estudio analítico de una serie de informaciones que pueden influir en la personalidad del sujeto y con ello, en su comportamiento (Armaza, Op. Cit: 96). A su vez, Romeo Casabona (Op. cit: 38) entiende que el método utiliza como recurso las denominadas tablas de predicción porque se parte de la idea de que la conducta

humana es comprensible mediante los procesos de causalidad, de los cuales se pueden derivar pronósticos de la conducta que el individuo seguirá en el futuro.

A lo anterior añade Armaza (Op. cit.), que a las tablas de predicción se han de introducir los datos y los valores obtenidos a fin de lograr un cálculo sobre la posibilidad de que el delincuente vuelva a cometer un crimen, pues al fin y al cabo existe un nexo entre la conducta futura y pasada del infractor (pp. 96 - 97).

6.2. Legitimación del orden social constituido

Estimar la probabilidad futura de la comisión de comportamientos delictuales mediante un diagnóstico de competencia individual de amenaza, es decir, identificar una característica propia y exclusiva de un sujeto que lo hace nocivo facilita prevenir del daño a los bienes jurídicos tutelados por el Derecho Penal, el dominio del transgresor, y la rebaja del crimen. Por eso, el sistema y la convivencia pacífica se pretenden proteger mediante el control social formal de individuos que se asocian con la delincuencia.

Se cree que detrás de estos discursos se oculta la verdadera finalidad del tratamiento penitenciario a sujetos peligrosos, como es la defensa ideológica del sistema social, económico y político existente. Ahondando más esta afirmación, se tiene que la categoría de amenaza transgresora se utiliza cuando se crea el orden jurídico penal por parte del legislador, del acoso al delito por parte de las agencias del Estado y en la ejecución del castigo por parte del funcionario

de la prisión; siempre y cuando el individuo con su conducta afecte un bien jurídico legítimo definido previamente por el parlamento.

Debido a esto, todo el concepto del sujeto peligroso se está moviendo acríticamente en la esfera dirigencial y normativa por quienes ostentan el poder decisorio, quienes se valen del saber propio del positivismo criminológico para justificar la prevención represión y las medidas represivas con respecto a este grupo social; dejando a un lado o dando poca importancia en el proceso de análisis a la estructura social, política del sistema que da origen a esta categoría jurídica. Teniendo en cuenta la historia, se tiene que la peligrosidad criminal se deriva de la que representa determinado grupo social al orden socioeconómico y político del momento.

Al respecto, Armaza (Op. Cit: 1225 -1274) explica que las ideas de Santo Tomás aplicadas al campo penal marcarían el inicio de la era en que la pervivencia de la sociedad va a depender del tratamiento penitenciario para los delincuentes peligrosos. Esto va a permitirle al Estado ejercer el control punitivo para neutralizar tanto aquellos individuos que atentaban contra los bienes e intereses sociales, como a quienes definía de disidentes (Op. Cit: 19 y 20).

Bajo esta perspectiva, Zaffaroni (2005, p.144) refiere que la academia francesa de ciencias morales utilizó por primera vez la expresión *clases peligrosas* organizando un concurso que tenía como objetivos, de un lado, investigar según observaciones positivistas esa parcela del sistema que por sus vicios, ignorancia y miseria daban origen a una clase peligrosa; de otro lado, proponer medios que permitieran mejorarlas. Esta entidad entendía que los obreros no

inteligentes, al igual que los desempleados, configuraban este grupo social. En dicho evento participó una persona de nombre H. A. Frégier.

Cuenta Zaffaroni (Ibíd, p.145) que Frégier para 1838 definía a los pobres y viciosos como clases peligrosas debido a que a lo largo del tiempo han dado origen a la delincuencia. Dentro de estos, los más peligrosos son los que purgan condena y los liberados. Los últimos son temibles y perversos.

En lo que concierne al tema de la criminología positivista, Pavarini (1983, pp.43-52) explica que el carácter científico y sin crítica de esta teoría, como es el de fundamentar el origen del sujeto delincuente peligroso en causas y factores ontológicos y la forma de ser e historia personal del individuo sirvió entre otros fines, a los intereses en finanzas y política del entonces orden dominante. Del mismo modo, legitimó la política criminal como una respuesta necesaria para la tutela y la afirmación de los valores en los que se soporta el consenso de las mayorías. En este sentido:

La cárcel tiene un objetivo muy preciso: en la reconfirmación del orden social burgués debe educar (o reeducar) al criminal (no propietario) para que se convierta en un proletario socialmente no peligroso, es decir, para que sea un no propietario que no amenace la propiedad. (Pavarini, 2008, p.195). Resalto fuera de cita.

Por otro lado, Wacquant (2000, p.158) indica que el sistema penal en la era poskeynesiana del empleo inseguro cumple una función triple. Disciplina a la clase obrera que se opone al trabajo

precario, neutraliza y excluye a los obreros más disociadores y reafirma la autoridad del Estado en la esfera restringida que le compete.

De lo anterior, se explica porque las cárceles norteamericanas están llenas de personas provenientes de los sectores precarios de la clase obrera y, en especial, de las familias del subproletariado de color de las ciudades frontalmente afectadas por el cambio conjunto del trabajo por un salario y la protección social (Ibíd, p. 82). En este contexto, la penitenciaría ha dejado en un segundo plano el ideal rehabilitador y preventivo, para pasar a aislar y contener a los grupos vistos como peligrosos al ideal neoliberal (Ibíd, p. 85).

Por último, la consagración de la noción de sujeto peligroso en la ley penal colombiana contemplada en el Código de Procedimiento Penal, capítulo de medidas de aseguramiento; Código Penal, título de consecuencias jurídicas de la conducta punible; Código Penitenciario y Carcelario, título tratamiento penitenciario, permite justificar la estructura sociopolítica existente. En el entendido de aceptar la tipología de “personalidad no peligrosa”, “sana”, de manera conjunta con la “normalidad” de sus elementos como costumbre, actitudes, creencias, valores, etc., y validarla como modelo a seguir por parte del conglomerado social (Sotomayor, 1990, p. 209).

Conclusión.

La función resocializadora de la pena de prisión se origina para el materialismo, como para Foucault, en función de las necesidades políticas de orden económico que exigen en cada tiempo

y lugar el orden de producción industrial vigente, es decir, la corrección del ser del prisionero obedece a lograr a que este se adapte a las condiciones de trabajo impuestas por el modelo económico liberal. Así mismo, desde el punto de vista funcional, la socialización hace referencia al proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los valores socioculturales de su medio y los integra a la estructura de su personalidad, ahora bien, cuando se desvía, criminalmente, de ellos experimenta un proceso correctivo con el propósito de que vuelva a encajar en el sistema social hegemónico y a servir a las necesidades requeridas de preservación de este.

Desde estas exigencias, la institución penitenciaria ha enfrentado desde su creación la pregunta de cómo tratar de alcanzar el fin resocializador. Para resolver esta duda, se ha optado por el tratamiento basado en estudio, trabajo y enseñanza, sin embargo, queda pendiente en este proceso proteger la singularidad y características propias del ser del prisionero, en un espacio en el que hay que tener en cuenta la evidente represión que actúa contra quien es definido como peligroso para la vigencia del orden social.

Así pues, en un espacio de encierro es bastante problemático hablar de los valores del modelo cultural vigente como libertad, igualdad, solidaridad, justicia, transparencia, respeto, entre otros, cuando este representa todo lo contrario, la persona en calidad de condenado se somete, en la gran mayoría de los casos, bajo la excusa de alcanzar los objetivos planteados en el paradigma, a actividades obligatorias, a control y vigilancia continua, a horarios, rígidamente, establecidos que rompen con la lógica del afuera, con el fin de someter los cuerpos y la voluntad a un poder represivo que actúa fuera del alcance del control social informal y al parecer formal,

en este contexto se desea subrayar la contradicción en sí misma de la cárcel, no es posible bajo estas condiciones de interacción social reintegrar al infractor de la ley penal.

TERCERA PARTE

SISTEMA PROGRESIVO PENITENCIARIO COLOMBIANO EN ALIANZA CON EL

MÉTODO APAC

... La concepción burguesa de la vida y de la sociedad, en el preparar los hombres principalmente a los pobres, a los proletarios, para que acepten un orden y una disciplina que los hagan dóciles instrumentos de la explotación. Los pobres, los jóvenes, las prostitutas (...) son las categorías sociales que deben de ser educadas o reeducadas en la vida laboriosa y de buenas costumbres.

Melossi, Darío. Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario.

1. Introducción

Este capítulo describe, de un lado, la influencia que el discurso cristiano ha ejercido en la evolución que dio origen al modelo penitenciario progresivo. Los antecedentes de las características de los elementos de este sistema se encuentran en los modelos celular y auburniano. Ellos se originaron bajo la convicción de entender que la única manera de alcanzar la transformación y reintegración del prisionero a la vida social es desde el eje transversal del fenómeno religioso. Acontece que el hecho místico consta de tres elementos supraindividuales para explicar el fundamento del orden social. Primero, la creencia en la existencia de Dios, segundo, la práctica del culto, que tiene como objetivo organizar la forma en que el hombre debe de actuar ante las cosas sagradas, tercero, las reglas de naturaleza religiosa, que inducen a los individuos a comportarse de acuerdo con los valores en ellas incorporadas.

De otro lado, y en oposición a esta mirada, se ha señalado que lo que se busca con la religión es construir un entorno de sometimiento a la voluntad de quienes ostentan la estructura social vigente, para ello, esta es útil en tanto cumple la función de alienar al individuo para que acepte las disposiciones que desconocen sus derechos fundamentales y lo degradan a su mínima expresión, como una decisión de la voluntad divina que niega la vida terrenal a cambio de un ensalzamiento del más allá. Por ello hay que renunciar a esta ideología y acudir a otro referente, como la reivindicación de la vida misma y las disciplinas sociales para construir un modelo que sea una conquista de la voluntad humana y no de las reglas de juego establecidas por la creencia.

Sin embargo, esta es solo una interpretación del fenómeno religioso aceptada en su gran mayoría por los académicos críticos. No obstante, hay que recordadr que Nietzsche afirmó: “No hay hechos, sólo (sic) interpretaciones”, ¿dónde está la verdad? La verdad es una creación impuesta por el poder. Las verdades viven en una lucha hasta que una de ellas prevalece para explicar el hecho.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se ha optado por describir las bases sociales del fenómeno religioso, la evolución histórica de los principales sistemas penitenciarios, las características y elementos del modelo penitenciario progresivo colombiano y, por último, la alianza público privada entre la dirección noroeste del INPEC y la Confraternidad Carcelaria de Colombia para la implementación del programa APAC en el Complejo Penitenciario y Carcelario el Pedregal. Para alcanzar lo anterior, se han consultado y expuesto a autores, tales como: Durkheim, Houtart, Dougherty, Marx, Tocqueville y Beaumont, Téllez Aguilera, Neuman, Barros Leal, Posada Segura, entre otros. Estos teóricos permiten comprender la importancia del hecho religioso en la elaboración de los distintos sistemas penitenciarios y el papel que ha desempeñado como actividad de apoyo al tratamiento resocializador del prisionero. Como muestra de ello, en la contemporaneidad, el discurso cristiano cumple un rol transversal en la metodología APAC para intervenir al prisionero en calidad de condenado con el fin de incorporarlo, positivamente, al orden social.

2. Bases sociológicas del hecho religioso y su influencia en las normas penitenciarias.

De manera puntual, se referirán las creencias o representaciones religiosas que los hombres se hacen de sí mismos y del mundo con la finalidad de señalar que, como una de las tantas variables de idealidades humanas, permiten construir la realidad social, y al mismo tiempo, determinan el lugar que ocupa el individuo dentro de ella (Houtart, 1997, p.31).

De ahí que la religión desde lo binario permitido/vedado, bueno/malo, moral/ impúdico, sagrado/profano; va a crear y a fortalecer el orden en la vida cotidiana, así como a determinar el relacionamiento social (Durkheim, 1982, p.33).

En cuanto al estudio de las bases sociológicas de la religión, explica Houtart (1997, p.28, 30), que esta perspectiva requiere tener en cuenta dos criterios. El primero, es que ella forma parte de las representaciones que dentro de un contexto concreto e histórico le permite a los actores sociales configurar el mundo en su pensamiento y que la *“mente humana siempre está realizando un trabajo intelectual sobre la realidad para interpretarla”* (p.28). El segundo, es que la creencia (o fe) en un Dios también es un producto del individuo social humano.

a. Elementos básicos que conforman el fenómeno religioso.

Los distintos sociólogos de la religión han identificado tres elementos constitutivos básicos que hacen de un fenómeno social un hecho de esta índole. Estos componentes son las creencias, prácticas y reglas morales (Sánchez Álvarez, 2013; Dougherty, 1981; Houtart, 1997).

Las creencias religiosas

Explica Dougherty (1981, p. 74, 75), que la fe divina es solo uno de los tipos de creencia. La religión se funda sobre el convencimiento de la existencia de un Dios o de deidades (o seres supremos) con poderes superiores que son, de alguna manera, los responsables del decurso de la historia, o dicho de otro modo, que esta se encuentra dirigida y controlada por fuerzas no humanas, por lo tanto, la existencia del hombre no termina con la cesación de las funciones cerebrales. De donde se desprende el reconocimiento de lo finito y dependiente que es una persona.

Según Durkheim (1982, p. 33, 398) las opiniones, las creencias, los mitos, las leyendas y los dogmas son representaciones que expresan las cosas sagradas con las virtudes y los poderes que le son atribuidos históricamente. Sumado a esto, menciona que los credos también son un sistema de ideas cuyo propósito es expresar el mundo.

En efecto, para Durkheim (1982), lo definitorio de la religión es que es “un sentimiento de respeto por una fuerza superior al hombre individual, por un poder, en algún sentido, trascendente, con independencia de cual sea el símbolo bajo el que se haga manifiesto a las conciencias” (p.112).

De otro lado, Houtart (1997, p.32), refiere a las representaciones como una característica humana desde la cual se construye la realidad hasta edificar un mundo de símbolos y esquemas culturales. Añade el autor la naturaleza dialéctica de las anteriores: los íconos son generados e instituidos por los seres humanos, pero son también fundacionales. Es decir, las ideas o creencias son creación de la mente individual y colectiva que una vez se establecen, originan entornos que influyen repetidamente sobre la conducta de los actores sociales.

Por lo tanto, las de la organización social son instituyentes de las prácticas de los actores de la comunidad. Así pues, para Houtart (1997, p.32), efigies (o íconos o símbolos) tienen un impacto sobre la manera como las personas actúan, construyen, reproducen o cambian las estructuras de la población.

Las prácticas religiosas

Conforme a Dougherty (1981, p.75), un rasgo esencial de la religión son los actos de culto, la alabanza y la plegaria, cuyo fin es reconocerle a un ser su naturaleza superior. Para Durkheim (1982, p. XI), dichas prácticas se definen con referencia a objetos de los que se da cuenta en las creencias.

Por ello Durkheim (1982), entiende a la religión como un “sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictas, creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ellas” (p.42). Esto es, el culto a Dios es creencia y práctica dentro de una comunidad social llamada feligreses.

Ha advertido el autor en referencia, que las prácticas religiosas nacen en el seno de la comunidad de creyentes como modos de actuar con el objetivo de mantener o rehacer estados mentales de esta (1982, p.8). De igual forma, considera que los “*ritos son reglas de conducta que prescriben como debe comportarse el hombre en relación con las cosas sagradas*” (1982, p. 36).

Se quiere señalar mediante un ejemplo, como la representación y la práctica religiosa confluyen dando una respuesta al hombre para temas humanos que se necesitan interpretar. Desde el punto de vista de la narración bíblica, el origen del comportamiento desviado está establecido en el libro del Génesis, capítulo tres, cuando Adán y Eva desobedecen la ley divina al comer del fruto del árbol prohibido. A partir de ese momento, la separación de lo permitido en la norma pasa a ser parte de la naturaleza terrenal. (Génesis, 1960).

Por otra parte, el primer delito registrado en la historia de la humanidad fue el homicidio cometido años después por el hijo mayor de Adán y Eva sobre su hermano menor Abel. De acuerdo con el relato bíblico, la pena establecida por Dios a Caín consistió en estigmatizarlo y ponerle una marca (Génesis, 1960) como un ser “maldito (...) errante y extranjero en la tierra (...) Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara”. (Génesis, 1960: 4, 11.15)

A partir de este relato, se ve que el texto bíblico adoptó en un primer momento como pena básica la exclusión social del delincuente y la marca en el cuerpo para indicar a la comunidad que era un ser maldito al que no podrían darle muerte.

Posteriormente, el relato bíblico nos hablará de la obra salvífica de la humanidad mediante el hijo de Dios, Jesús o Cristo para restaurar la relación del hombre con el Padre, véase:

⁴ Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del hombre, ¹⁵ para que todo el que crea en él tenga vida eterna.

¹⁶ Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.¹⁷ Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¹⁸ El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¹⁹ Ésta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. ²⁰ Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ²¹ En cambio, el que practica la

verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. (Evangelio según San Juan 3, 4.15-21).

De manera que, a partir de la creencia en Jesús, el Salvador y la Iglesia católica se inventará como antecedente inmediato del primer sistema de prisiones, la reclusión en un monasterio, con el objetivo de que el sacerdote que cometa delitos eclesiásticos se arrepienta y se corrija antes de regresar a la vida social. Por estos fines correctivos, distintos a la regla general de la cárcel de custodia, es que afirman Cadalso (1922, p. 26), y García Valdés (1989, p.27), que la pena monacal fue su excepción, de ahí, su papel en la creación del modelo penitenciario celular. Como evidencia de ello, se puede referir el hecho de que los sacerdotes y religiosos estaban en los monasterios bajo un régimen disciplinario, con actividades de meditación y trabajos manuales en sus celdas monacales, componentes semejantes se encuentran en la prisión fundada por los cuáqueros en 1787, en la ciudad de Filadelfia, donde estos implementaron por primera vez el sistema filadélfico (Rodríguez Avilés, 2013, p. 79).

Las reglas morales de conducta

Las reglas morales inducen a los miembros de la comunidad de creyentes a actuar de acuerdo con los valores trascendentales compartidos por el grupo (Sánchez Álvarez, 2013, p.35). El propósito de ellas es incidir en el orden social (Dougherty, 1981, p.82).

Según Houtart (1997, ps. 37, 101, 103), las religiones se encuentran fuertemente vinculadas a un conjunto de normas de conducta de origen ético interpersonal cuyo alcance queda, en su mayoría, a nivel de la subjetividad de los actores sociales, como si “*la realidad social fuera el resultado de la suma de individuos y no de la red completa de relaciones sociales*” (p.101). Lo que trae como efecto asumir en relación con las transformaciones del orden colectivo una actitud

moral de cambio, de comportamientos de la persona como el amor, la caridad y la compasión, y así, la sociedad se transformará automáticamente

b. Concepto y características.

A partir de lo descrito anteriormente, Sánchez Álvarez (2013) define la religión como:

Un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, pero (sic) implica sentimientos de veneración y temor hacia Dios, (sic) o los dioses, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, (sic) como la oración y el sacrificio, (sic) para darle culto (p.34).

De igual manera, Sánchez Álvarez (2013, p. 37) enuncia cinco características del hecho de tener fe en Dios: 1º la religión está preocupada por el conjunto de creencias, así como por los de relacionamiento y acción porque sus sistemas de actos están orientadas a lo sagrado. Su objeto es diferente a otros ámbitos del orden social. 2º establece un cosmos divino dentro del cual el universo entero aparece como humanamente valioso, presenta una mentalidad del mundo articulada totalmente. 3º ofrece al hombre respuestas al problema último del significado, al sentido de la vida como algo íntegro. 4º posee componentes emotivos, no racionales que al simbolizarlos posibilitan un enlace entre la esfera consciente y la que no lo es al mismo tiempo, tiene orientaciones de trascendencia. 5º relaciona con el verdadero otro. Potencia la apertura, la interactividad del hombre con los demás.

Karl Marx

Para llevar a cabo una lectura política del hecho religioso, es necesario describir la línea de pensamiento de Karl Marx. Marx (2014) entendía que la religión es un fenómeno generado por la sociedad, el cual sufre mutaciones en la medida en que esta se transforma.

Ahora bien, Marx (2014, p.23) destacó las condiciones sociales en las que ella emerge, además, se focalizó en las funciones políticas de la religión como ideología de Estado. Explican Gómez y Silva (2015, p. 23), que en el marxismo la ideología es entendida como deformación de la realidad cuya labor consiste en preservar el dominio de clase.

Motivo por el cual la religión va a ser un instrumento empleado por la burguesía para mantener tal cual su statu quo a pesar de las contradicciones e injusticias por ellos generadas en contra de las poblaciones socialmente más vulnerables. Pues esta va a “santificar” ese mismo mundo con la promesa de un más allá de gozo Aragués (como se citó en Marx, 2014).

En esta línea, la religión va a presentar y alimentar la siguiente idea. La razón por la cual el género humano no ha podido lograr una existencia verdadera en este mundo obedece a que está condenada al pecado y al sufrimiento aquí abajo. Justificando con ello las desigualdades sociales y políticas expresadas en la realidad (Dumènil y Renault, 2015, p.129).

En otras palabras, la sociedad injusta e inhumana crea la religión y la instrumentaliza para que apoye, justifique y mantenga vigente estas realidades por medio de vanas esperanzas y de

espaldas a las relaciones sociales concretas (Kung, 1979, p. 321). Por ello Marx (2014), se referirá a esta como el “*opio del pueblo*”:

Estado y sociedad que producen la religión, como conciencia tergiversada del mundo, porque ellos son un mundo al revés (...) La religión es la queja de la criatura en pena, el sentimiento de un mundo sin corazón y el espíritu de un estado de cosas embrutecido. Es el opio del pueblo (pp. 42 - 43).

Ha señalado Marx (2014, p.43) que con su postura crítica a la religión busca “desengañar al hombre para que piense, actúe, dé forma a su realidad como hombre desengañado que entra en razón” y en consecuencia, salga de la autoalienación en que se encuentra debido a que “no se ha conquistado aún así mismo, o bien ya se ha vuelto a perder” (2014, p.42). Autocondicionamiento religioso que se explica por el desequilibrio sociopolítico en el que están inmersos los hombres.

Para Marx (como se citó en Gómez y Silva, 2015, p. 26; y Kung, 1979, p.317), es del todo evidente que Dios es una imagen del hombre por cuanto proyectamos en Él características que solo le pertenecen al ser humano:

El hombre, que en la fantástica realidad del cielo, donde él buscaba un superhombre, no ha encontrado más que el reflejo de sí mismo, ya no se contentará con encontrar solo la apariencia de sí mismo, un ser inhumano, donde busca y debe buscar su verdadera realidad (Marx, 2014: 42).

En este contexto, la alienación se comprende como la pérdida de identidad, así como la de la conciencia de sí mismo (Gómez y Silva, 2015, p.26) puesto que el orden social invertido e

inhumano la ha generado voluntariamente. Marx (como se citó en Duménil y Renault, 2015, p. 129) refiere que el camino de los hombres para recuperar la conciencia de sí es mediante las *“luchas prácticas y teóricas en la historia y de las formas colectivas de existencia y pensamiento que en ella se elaboran”*.

En términos de Marx (2014), esta modificación del orden social exige empoderar a los hombres. Ello debe hacerse desde la filosofía:

Es a una filosofía al servicio de la historia a la que corresponde en primera línea la tarea de desenmascarar la enajenación de sí mismo en sus formas profanas, después que haya sido desenmascarada la figura santificada de la enajenación del hombre por sí mismo. La crítica del cielo se transforma así en crítica de la tierra, la crítica de la religión en crítica del derecho, la crítica de la teología en crítica de la política (p.44).

Sin embargo, es preciso mencionar que Marx (como se citó en Duménil y Renault, 2015, p. 129) plantea en cuanto a la función política del fenómeno religioso no solo una crítica negativa en cuanto produce alienación en el hombre; sino que ella al mismo tiempo cumple políticamente una tarea de protesta.

En palabras de Marx, (2014) *“la miseria religiosa es a un tiempo expresión de la miseria real y protesta contra la miseria real”* [(p.43) resalto fuera de cita], por las relaciones sociales inhumanas (Kung, 1979, p.321) e injustas. Según Duménil y Renault, en este contexto, Marx (como se citó en Duménil y Renault, 2015, p.130) rescata de la religión su función utópica contra

su contenido político e ideológico. Así como lo positivo psicológicamente hablando: el consuelo Aragués (como se citó en Marx, 2014).

De ideas semejantes es Hegel (1978, p.272) con respecto a la religión. Él ha señalado que en esta Dios ha dominado y definido al hombre, pero el ser humano con su actitud interna supera la objetividad de los mandamientos; con el amor los límites de la disposición, aunque no el mundo objetivo y su sometimiento. Por ello señala:

La idea dominadora me domina, me es hostil; pero, al mismo tiempo, en mi oposición contra el mundo está de mi lado. Con la superación de la ley objetiva se anula una parte de la dominación y del estar dominado (Hegel, 1978, p.273).

Referente normativo

Se pueden reunir en la figura del bloque constitucional las distintas normas internacionales alusivas al derecho a la libertad de religión como algo fundamental de las personas condenadas. La Constitución Política colombiana estipula en el artículo 19 que “Se garantiza la libertad de cultos, y que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva” (Asamblea Nacional Constituyente de la República de Colombia, 1991, p.15).

Por otra parte, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos con el objetivo de garantizar una buena organización penitenciaria y brindar un buen trato a todos los privados de

libertad consagra en la regla 6, “respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso”; de igual forma, en la regla 41, refiere que en todo establecimiento penitenciario y carcelario se debe permitir el ingreso continuo de un representante de la religión que profesa el convicto para mantener el culto religioso a su Dios (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1955).

Así mismo, todas las actividades de tratamiento penitenciario implementadas en el penal para los condenados deben incluir la asistencia religiosa (regla 66). De otro lado, en los principios básicos para el proceso de rehabilitación de los reclusos, principio 3º se lee que “es necesario respetar las creencias religiosas del grupo al que pertenezcan los reclusos” (ONU, 1955).

En cuanto al ordenamiento jurídico interno, el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) dispone en el artículo 152 que “los internos de los centros de reclusión gozarán de libertad para la práctica del culto religioso, sin perjuicio de las debidas medidas de seguridad”. Además, la Ley 133 de 1994 garantiza en el artículo 6º numeral f) el derecho que tienen los privados de libertad en calidad de imputados o de condenados de recibir asistencia religiosa de su propia confesión en los lugares de detención. (Congreso de la República de Colombia, 1993 y 1994).

Luego el Decreto 1519 del 4 de agosto de 1998 desarrolla el artículo 6º de la ley anterior. Allí en la disposición 2º se establecen las condiciones en que se debe llevar a cabo el ejercicio a la libertad religiosa y la celebración del culto en los centros penitenciarios y carcelarios. (República de Colombia, 1998).

De otro lado, El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, (2005) emitió el artículo 3° de la Resolución 7302 del 23 de noviembre de ese año, el cual establece que el desarrollo de las actividades espirituales tiene como objetivo prevenir o minimizar los efectos del proceso prisionalización que se lleva a cabo en las prisiones.

Con respecto a la jurisprudencia, la Corte Constitucional colombiana (1997) en Sentencia C-616 de 1997, cuyo magistrado ponente fue Vladimiro Naranjo Mesa, estableció el concepto y el núcleo esencial de la libertad de religión y de culto en los siguientes términos:

la religión comporta no solo una creencia o acto de fe, sino, básicamente, una relación personal del hombre con Dios, que se traduce en el seguimiento de un sistema moral y en la práctica de un culto. De esta manera, el núcleo esencial de la libertad de religión es, justamente, la facultad de una relación con Dios.

De igual forma, afirma la Corte Constitucional de la República de Colombia (2005) que el creyente tiene el derecho de difundir su fe en un Dios en actos públicos asociándose con los miembros de su comunidad religiosa:

(...) el derecho a la libertad religiosa implica no solo la posibilidad de profesar de manera privada y silenciosa el credo de la preferencia, si no que la garantía se extiende a la difusión y realización de actos públicos asociados con las convicciones espirituales. La libertad religiosa, entonces, garantizada por la Constitución, no se detiene en la asunción de un determinado credo, sino que se extiende a los actos externos en los que este se manifiesta.

3. Referencias históricas del sistema progresivo penitenciario

Dado que el sistema progresivo recoge todos los órdenes penitenciarios que lo antecedieron con el propósito de convertir cada uno de ellos en una fase de intervención por la que el condenado ira pasando progresivamente hasta que obtenga su libertad (Téllez Aguilera, 1998, p. 80), se hace necesario describir cada uno de ellos, si se quiere comprender mejor los principios que los informan y la organización estructura que los constituye.

a. Sistema penitenciario celular

De acuerdo con Neuman (1971, p. 116), el antecedente inmediato del sistema penitenciario celular se encuentra en la prisión eclesiástica que como salvedad a la cárcel de custodia fue estipulada en el siglo XVI por el derecho canónico para aplicarla a los monjes infractores con el fin de su arrepentimiento y enmienda. Esta era una manera de hacer penitencia.

Según López Melero (2012, p. 408), la pena privativa de la libertad inspirada en los principios católicos de: el rescate del pecado por el dolor, el remordimiento por la mala acción, el arrepentirse del alma manchada por la culpa, la misericordia y la concordia consiste en el total encierro del monje de la vida social más internarse en una celda del monasterio dispuesta para ello en cuyo lugar había de purgar su pecado mediante la oración y la lectura de la biblia, una dura disciplina, ayunos alimenticios y trabajos en su calabozo.

Más tarde la iglesia católica extiende los objetivos que llevaron a crear la prisión eclesiástica y sus procedimientos al orden social e implementa en Roma en 1704 el Hospicio de San Miguel, que era una suerte de correccional para delincuentes jóvenes y de asilo para huérfanos, ancianos e inválidos (Gómez Grillo, 2005, p. 206).

Después en las creencias del protestantismo cristiano, se originó el sistema celular o de aislamiento de Norteamérica. Fue la comunidad cuáquera instalada en Pensilvania, dirigida por Willlian Penn, la que retomó la enmienda del individuo que había faltado a su idea de lo correcto mediante pena privativa de libertad oponiéndose con ello a todo castigo corporal, tales como la pena de muerte (solo la mantuvo para el homicidio premeditado y voluntario), la mutilación y los azotes que acusaba de prácticas propias de pueblos bárbaros (Ramos Vásquez, 2013, p.111).

Los cuáqueros iniciaron todo un proceso de tratamiento penitenciario basado en el poder de las Sagradas Escrituras y esperaban que el aislamiento celular ayudara al condenado a tener una experiencia personal y vital con Cristo y como resultado de ello, saliera de su mal camino y retornara a Dios.

Explican Rodríguez y Burón (2015, p. 69), que el sistema celular giraba en torno a dos asuntos. El primero, evitar la deshonestidad entre los prisioneros y el segundo, que el preso por medio de meditar en aislamiento se arrepienta. Hay que mencionar que los cuáqueros estaban en todo este proceso asesorados por Howard.

Howard (como se citó en García Ramírez, 2014, p. 272), como hombre religioso y fervoroso calvinista, cree en los beneficios de la religión como guía del comportamiento, así las oraciones de los reclusos en la mañana y en la noche tienen como objeto principal “que esos hombres y mujeres se conviertan en seres humanos mejores”.

Para Howard los establecimientos penitenciarios deberían contar con los siguientes requisitos:

- ✓ Cárceles higiénicas, para evitar enfermedades y epidemias y buena alimentación.
- ✓ Separar los condenados por delitos mayores, de los condenados por delitos menores.
- ✓ Separar los hombres de las mujeres.
- ✓ Separar los penados de los acusados.
- ✓ Educación religiosa.
- ✓ Trabajo obligatorio para los condenados y voluntario para los preventivos, pero en silencio.
- ✓ Adopción del sistema celular, o sea: el aislamiento del condenado en una celda, de manera que se evite la promiscuidad y la corrupción moral de los presos. (Howard, 2003, p. 338 y ss).

Ahora bien, los cuáqueros para dar respuestas a la conducta criminal y poder sustituir el castigo físico por la pena de prisión fundan en 1787 la sociedad “*Philadelphia Society For The Alleviating The Miseries Of Public Prisons*” con el siguiente ideario:

Cuando consideramos – se afirma en el preámbulo – que los deberes de caridad que se fundan, los preceptos y los ejemplos del fundador de la cristiandad no se pueden cancelar por los pecados y los delitos de nuestros hermanos los criminales (...) todo esto nos lleva a extender nuestra

compasión a esta parte de la humanidad que es esclava de estas miserias. Con humanidad se deben prevenir sus sufrimientos inútiles (...) y se deben descubrir y sugerir las formas de castigo que puedan – en vez de perpetuar el vicio – ser instrumentos para conducir a nuestros hermanos del error a la virtud y a la felicidad. (Melossi y Pavarini, 2008, p.168).

En consecuencia, los cuáqueros asumen la pena de prisión como retributiva ya que el infractor permanece encerrado hasta la expiración de su castigo, programáticamente, reformador. Para ello, la sanción del presidio debe reunir seis condiciones: la seguridad, higiene, vigilancia mediante sistema radial y celosía, reparto en diferentes clases, trabajos, ocupaciones e instrucción para los detenidos Ros y Sauquillo (como se citó en Tocqueville y De Beaumont, 2005, p. XX).

Características del sistema celular penitenciario

Son cuatro las particularidades básicas del sistema celular:

- ✓ La primera, es el aislamiento absoluto de los reclusos tanto de noche como de día. Apartar al preso y prohibirle recibir visitas exteriores lo libera de los vicios del mundo exterior. Por otra parte, el estar incomunicado mediante el encierro en su celda le permite una relación directa con su conciencia.

Por ello no se le permitía al recluso relacionamiento con sus pares, excepto con el director, el maestro, el capellán y los miembros de las asociaciones de ayuda y socorro espiritual (Neuman, 1971, p.121). En los eventos de ser movido fuera de la celda por orden de la administración, se efectuaba con los ojos cubiertos o encapuchado (Bergalli, 1983, p.100). En esa circunstancia “el hombre solitario siente su debilidad, se siente más dominado por el temor que por la esperanza y pierde su osadía” Howard (como se citó en Rodríguez y Burón, 2015, p.80).

Aclara Santa María de Paredes (como se citó en Téllez Aguilera, 1998, p. 63) que aplicar el aislamiento evita el contagio de la perversidad y obra en el penado en el doble sentido de imponerle un temor al régimen que sufre para que no recaiga en el delito y, especialmente, despertar su conciencia desde su proceder caótico en relación con el crimen que ha hecho, y los efectos del mismo que experimenta para que se proponga en el futuro una vida lejos de él.

- ✓ Lectura bíblica y educación religiosa obligatoria. A los reclusos solo se les autorizaba la lectura de la Biblia y no se les permitía escribir cartas para terceros (Neuman, 1971, p.121).

Además, las biblias y los libros de oración estaban protegidos y puestos en lugares idóneos, quien los dañe debe ser sancionado. Con respecto a la liturgia religiosa, esta estaba a cargo del capellán. En su caso, debe ser un cristiano que converse con los reclusos, conozca lo que pasa, que sepa llamar la atención y exhortar a los presos irreflexivos y descorteses, cuide del enfermo

y presente la misericordia revelada en el Evangelio a quienes tienen condenas altas. Howard (como se citó en García Ramírez, 2014). Cuenta Tocqueville y De Beaumont (2005, p. 186), que el prisionero encuentra un gran consuelo en la lectura bíblica

De otro lado, los miembros de la Pennsilvanya Prison Society tenían a su cargo la enseñanza religiosa con el fin de alcanzar el arrepentimiento tal como sucedía en los penitenciaros de la Iglesia católica (Barros Leal, 1994, p.487).

Ahora bien, esta enseñanza provee al penado hábitos de orden y reglas de conducta, quizás pueda asumir los principios morales que enseña la religión pues al fin religión le consuela el espíritu de modo que una vez retorne a la sociedad regresa obediente a las leyes.

Con este perdón moral, el criminal recobra la autoestima, sin la que no existe la honradez en modo alguno. Este es el resultado al que la sociedad no puede aspirar jamás, porque las instituciones humanas, aunque poderosas sobre las conductas y las voluntades, no pueden hacer nada sobre las conciencias. (Tocqueville y De Beaumont, 2005:192).

- ✓ Silencio absoluto. El penado no podía sostener ningún tipo de diálogos ni de comunicaciones al interior de la penitenciaría a no ser que fuera con el personal administrativo. Dado que consideraban el trato entre ellos la causa de su corrupción e inmoralidad (Tocqueville y De Beaumont, 2005, p.137).

- ✓ Prohibir el trabajo. Para poder alcanzar el arrepentimiento del recluso, no se permitían actividades laborales ya que se tenía la idea de que estas podían interferir en la meditación (López Melero, 2012, p. 421). Posteriormente, se permitió que se realizaran algunos trabajos simples en las celdas como tejedor, zapatero, picapedrero, carpintero, y sastre (Tocqueville y De Beaumont, 2005, p.158).

Peco (como se citó en Neuman, 1971, p. 121) enumera 11 puntos para descartar el sistema celular penitenciario:

- a. Es incompatible con la naturaleza social del hombre.
- b. Impide la readaptación social del hombre.
- c. Importa un sufrimiento cruel.
- d. Expone al abatimiento.
- e. Requiere un personal con actitudes varias y complejas.
- f. Exige frecuente comunicación con el reo.
- g. Origina gastos costosos.
- h. Del cambio brusco del ambiente nacen serios peligros.
- i. No se aviene con la distinta idiosincrasia de los delincuentes.
- j. Desconoce la naturaleza humana.
- k. Las legislaciones tienden a limitar su duración.

Se concluye esta descripción el sistema celular penitenciario, reconociendo que a pesar de haberse superado, aún se mantiene el aislamiento celular en términos reducidos. Con respecto al sistema progresivo, el retiro sigue como el primer periodo de observación; en términos de

regímenes penitenciarios el encierro se conserva en las prisiones de máxima seguridad; por último, en los arrestos del fin de semana (Téllez Aguilera, 1998, p.64; Neuman, 1971, p.123).

b. Sistema penitenciario auburniano (sistema mixto o del silencio)

Cuentan Tocqueville y Beaumont (2005), que el origen del sistema penitenciario auburniano está soportado sobre un plan perverso. En 1821, en la prisión de Auburn, se experimentó con ochenta criminales encerrándolos en aislamiento completo bajo el propósito de reformarlos.

De todo esto resultó que en el transcurso de un año, cinco de ellos murieron, uno se volvió loco, el resto de criminales presentaron conductas suicidas y un alto deterioro físico y moral. Dado que la absoluta soledad “*consume al criminal sin descanso ni piedad, no reforma, mata*”. Entonces en 1823, el gobernador del Estado de Nueva York sugirió abandonar definitivamente el sistema penitenciario celular y propuso uno mixto. Tocqueville y Beaumont (2005:112, 113).

Con respecto a los inconvenientes del aislamiento total, se propuso conservarlo, pero mantenerlo solo en la noche confinando a los penados en sus celdas y haciéndolos trabajar durante el día en los talleres comunes en medio de un absoluto silencio (Tocqueville y Beaumont 2005, p.114).

El autor del régimen penitenciario auburniano tal como ha llegado hasta la actualidad, es el capitán Elam Lynds, quien era hombre duro, inteligente e insensible a los sufrimientos de los

presos y tenía poca o ninguna fe en la posibilidad de reforma de ellos, a los que consideraba salvajes, cobardes e incorregibles (Fernández García, 2001, p.114).

Para Lynds (como se citó en Neuman, 1971, p. 127), el castigo de mayor eficacia y menos dañino a la salud de los penados era el corporal pues obtenía el control de estos de forma inmediata, por ello ordenaba a la guardia tratarlos severamente. Al respecto, decía “creo imposible gobernar una prisión sin utilizar el látigo. Solo quienes han podido aprender la naturaleza humana en los libros podrían decir lo contrario” (Tocqueville y Beaumont 2005, p. 311).

De acuerdo con Téllez Aguilera (1998, p. 74), el sistema penitenciario auburniano parte de intereses económicos derivados de la productividad de los talleres penitenciarios debido a que en ese momento en los Estados Unidos los empresarios demandaban mano de obra barata y no cualificada con el fin de oponerse al pago de salarios altos exigidos por los sindicatos de trabajadores. Por este motivo la explotación laboral de los penados cubría la demanda económica de empleo no calificado para ese entonces.

Características del sistema Auburniano

Posee tres características básicas y se implementó tras los siguientes ejes: orden, obediencia, sobriedad, industria, instrucción religiosa y literaria, reflexión religiosa, y eliminación de cualquier gasto dispendioso para el Estado (Tocqueville y Beaumont, 2005, p.XLVI).

- ✓ Aislamiento celular nocturno. La separación fue mantenida dentro de celdas de forma individual. De acuerdo con Neuman (1971, p. 128), cumplía dos propósitos: permitía que el penado descansara y, por otra parte, impedía la contaminación entre estos

- ✓ Trabajo diurno en común. Dentro del establecimiento los penados trabajan reunidos en distintos talleres de toneles, cantería, tejedores, relojes, peines, satinado, muebles de madera y guarniciones (Téllez Aguilera, 1998, p.75). Esta actividad solo se suspende a la hora de los alimentos. No les conceden espacios de recreación o la práctica de actividades físicas. En cuanto a la limpieza de la cárcel, el vestido y el calzado de presos y personas del establecimiento, estaba a cargo específicamente en algunos de ellos (Tocqueville y Beaumont 2005, p.154).

Un grupo de empresarios aportaban las materias primas y recogían los productos ya terminados, a cambio los penados recibían una pequeña suma de dinero (Tocqueville y Beaumont 2005, p. XLVI).

- ✓ La regla del silencio absoluto. Los penados desarrollan sus actividades laborales en obediencia a las normas y a las órdenes con el más estricto silencio. Tienen en cualquier circunstancia prohibido comunicarse entre sí. Ni mediante palabras o señas a pesar de comer los alimentos en la misma mesa, recibir juntos la instrucción religiosa y las clases académicas (Ramos Vásquez, 2013, p.113). Con ello se prevenían las fugas, los contactos diferenciales y los motines.

Tanto es que en distintos lugares del establecimiento aparecen avisos: ¡silencio! de igual forma, a los reclusos no se les permitía mantener contacto con personas externas al establecimiento ni recibir visitas de sus familiares, también los ejercicios físicos estaban prohibidos (Rodríguez y Burón, 2015, p.72).

De manera particular, Ramón de la Sagra (como se citó en Téllez Aguilera, 1998) opina en relación con prevenir actos violentos y motines, lo siguiente:

¿Cuál es, pues, el agente maravilloso y secreto que refrena a un número tan crecido de criminales, provistos de armas terribles en los utensilios que manejan? ¿qué causa oculta les retiene para no intentar, con la muerte de sus guardas, una huida fácil que sería favorecida por lo aislado y desierto del paraje que habitan?. Este agente secreto, esta causa oculta no es otra que la regla severa del silencio, sin la cual es irrealizable el sistema penitenciario, y quimérica toda esperanza de evitar la corrupción de los encarcelados. (pp. 75 – 78)

A pesar de la aplicación severa de la regla del silencio, no fue posible mantener incomunicados a los presos. Manifiesta Neuman (1971) que:

Mediante los golpeteos en las paredes se pasan la noticia de una celda a otra, utilizando además un lenguaje manual semejante a los sordomudos e incluso los pies sirven a la comunicación y hasta el modo de arrojar arena en los húmedos corredores. Los golpeteos en las cañerías y el deslizar del agua por ellas sirve al mismo objeto poniéndose en contacto entre sí, las dos plantas de cada pabellón (p.130).

Con respecto a la parte religiosa, cuentan Tocqueville y Beaumont (2005, p. 154), que el domingo una vez el capellán termina la misa y los penados regresan a sus respectivas celdas, le esperan allí con gran alegría para que este los asista espiritualmente. El prisionero recibe educación religiosa sobre Dios acorde a su credo. A cambio de estas actividades litúrgicas y formativas, la administración penitenciaria obtiene un informe del sacerdote en relación con el estado emocional de los presos que se encuentran en su custodia.

c. Sistema progresivo.

Téllez Aguilera (1998, p. 80), ha explicado que son cuatro los sistemas progresivos que se han creado a lo largo de la historia por la experiencia obtenida de los directores de prisión: Manuel Montesinos y Molina, Alexandre Maconochie, George M. Von Obermayery Walter Crofton. Estos lograron superar los problemas derivados de los componentes de aislamiento celular absoluto y regla del silencio, inconvenientes propios de los sistemas americanos filadélfico y auburniano, gracias a que, de un lado, remplazan estos elementos. A título ilustrativo, véase al respecto el comentario dado por Montesinos en el año de 1876 en relación con el aislamiento celular absoluto:

Además de que sólo (sic) satisface una de las condiciones de toda pena, cual es la mortificación del penado, ataca por otra parte el objeto más esencial de ellas. Perfeccionar al hombre es hacerlo más sociable, (sic) y todo lo que tienda a destruir o entorpecer su sociabilidad impedirá su mejoramiento, por esto las penas lejos de combatir deben favorecer este principio, (sic) y desterrar la incomunicación absoluta.” suprimir comillas (Montesinos, 1979, p.19).

De otro lado, con tacto y prudencia enrutaron el deseo innato de libertad de los reclusos motivándolos para que en función de su buen comportamiento la pena fuera, gradualmente, disminuyéndose. Para ello organizan en niveles el tiempo de cumplimiento de la pena, lo que

conlleva a que esta vaya perdiendo severidad en términos de disciplina y control de la locomoción en el espacio de la cárcel hasta llegar a la libertad condicional del condenado.

Los modelos soportan esta clasificación sobre la conducta mantenida por el interno durante su estancia en el establecimiento penitenciario, así como, en el buen desempeño en la ejecución de la actividad laboral que se le ha encomendado, aunque cualquier involución negativa en el comportamiento del recluso podía hacerlo regresar a un régimen más riguroso que se traducía en una limitación de la movilidad dentro de la prisión (Gómez de la Torre, 2001, p. 115). Hay que señalar que el prisionero no puede avanzar, objetivamente, de una fase de tratamiento a otra, sin haber estado antes en la, inmediatamente, anterior. De esto, deriva Téllez Aguilera (1998, p. 80) la afirmación de que el interno deja de ser un sujeto pasivo del sistema penitenciario para convertirse en un agente que dispone mediante su comportamiento y su trabajo, de la posibilidad de conseguir la libertad anticipada.

A continuación, vamos a referirnos a las características de los sistemas creados por los citados directores de prisiones siguiendo su orden cronológico.

❖ Manuel Montesinos y Molina.

Ha señalado Fernández Rodríguez (1976, p.64) que Montesino dio inicio al primer sistema progresivo en el presidio correccional de Valencia en 1836, un año después de haber asumido como director de este. Su sistema de clasificación y separación constaba de tres periodos.

El primer periodo, denominado “de los hierros”. Era el aplicado a los recién ingresados, a quienes se les comunicaba de los demás presos. En este nivel era obligatorio que llevaran grilletes de extensión y grosor correspondientes a la condena establecida y realizaban tareas de limpieza, por último, cuando el recluso elegía en forma voluntaria un trabajo, pasaba a un taller para aprender o desempeñar un oficio y abandonaba las tareas domésticas que se encontraban bajo su responsabilidad (Fernández Bermejo, 2013, pp. 118 – 119).

El segundo periodo, del trabajo. El trabajo era fundamental en el sistema de Montesinos pues consideraba que era el mejor medio para reformar a los delincuentes. En este nivel, los penados eran capacitados en los talleres para que adquirieran aptitudes artesanales o profesionales. El trabajo era obligatorio, pero no forzoso. (Leganés Gómez, 2013, p. 29; Fernández Bermejo, 2013, p.120). Tercer periodo, libertad intermediaria. En esta categoría, el prisionero podía salir al exterior por cierto tiempo aunque limitado, mediante la compañía de un solo vigilante. Esta fase duraba hasta la libertad definitiva (Leganés Gómez, 2013, p. 121).

❖ Maconochie.

Téllez Aguilera (1998, p. 81) refiere que el modelo de Maconochie data del año de 1840 y se utilizó por primera vez en la isla de Norfolk, ubicada en Australia. Consistía en medir la duración de la pena por una suma de trabajo y buena conducta impuesta al condenado dependiendo de la gravedad del delito y del castigo establecido. La suma se hallaba representada por un determinado número de marcas o vales que cada penado debía alcanzar para obtener la libertad condicional o definitiva.

Este sistema se dividía en los siguientes momentos: *periodo de prueba*. En régimen de aislamiento celular diurno y nocturno, con trabajo duro obligatorio y escasa alimentación. *Periodo de trabajo*. El trabajo era en común por el día bajo la regla del silencio y en la noche, aislamiento nocturno. En esta fase era donde se le comenzaban a dar a los penados las marcas o vales. Los prisioneros eran clasificados en cuatro clases dependiendo del número de marcas que obtenían y de su mejora en la conducta. Cuando llegaba a clase primera, podía acceder a la libertad condicional. –*Periodo de libertad condicional*. El mismo duraba hasta la libertad definitiva y el liberado podía hacer uso de su libertad con determinadas restricciones (Garrido Guzmán, 1976, pp. 89 – 90).

❖ Obermayer.

De acuerdo con Gómez de la Torre (2001, p. 116), Obermayer (1792-1862) fue director de la prisión de Kaiserlantern en Baviera a partir de 1830 y de la Munich, desde 1842. Su sistema progresivo se dividía en tres periodos: primer periodo. Vida en común bajo la regla del silencio. Este tiempo era utilizado para observar la personalidad del interno. Segundo periodo. Tras la observación de la personalidad del reo, este era destinado a un grupo heterogéneo formado por unos veinticinco a treinta presos, dado que este director partía de la base de que las personas viven en sociedad mezcladas y, por tanto, también era adecuado que esto fuera así en prisión ya que no era bueno crear un *clima falso* que perjudicase al recluso en su inserción a la sociedad. Tercer periodo. Si el penado trabajaba podía obtener la libertad condicional con un tercio de antelación.

❖ Crofton.

Walter Crofton (1798-1879) fue director de prisiones en Irlanda, en el año 1854 en donde aplicó por primera vez su modelo progresivo. Su sistema penitenciario incluía un periodo intermedio ubicado antes de la libertad condicional a razón de que ponía en duda esta fase por encontrar dificultades en el momento de controlar y vigilar la conducta del penado. Lo que transformaba este tiempo en pura y simple libertad (Téllez Aguilera, 1998, p. 82). Este sistema irlandés estaba dividido en cuatro períodos: el primero. De aislamiento celular diurno y nocturno. El segundo. Trabajo en común diurno bajo la regla del silencio y aislamiento nocturno. El tercero o intermedio. Se cumplía en prisiones especiales, denominadas *intermedias*. El cuarto o libertad condicional. El recluso era excarcelado para cumplir la última etapa de la pena en libertad (Leganés Gómez, 2013, P.31).

Luego en el año de 1870, en Cincinnati, se hizo, en el ámbito privado, el Congreso Internacional Penitenciario en el que se adoptó el sistema penitenciario progresivo como modelo

a continuar tanto en Europa como en los Estados Unidos de América para poder conseguir la reforma moral de los criminales:

la clasificación progresiva de los prisioneros, basada en el mérito y no en algunos principios arbitrarios tales como la edad, el crimen, etc; debería ser aplicada en todas las prisiones (...). Este sistema comprendería tres grados a saber: 1, un grado penal con encarcelamiento celular más o menos largo según la conducta; 2, un grado de reforma basado sobre un sistema de notas favorables en el que los presos pasan de una clase a otra, ganando en la promoción a cada clase sucesiva un aumento de comodidades y de privilegios; 3, un grado de pruebas en que son admitidos únicamente los que se juzgan reformados, con objeto de establecer su firmeza moral y la realidad de su reforma. Es necesario que el preso pase por un periodo de prueba antes de obtener la confianza. Es la falta de garantía de su reforma la que eleva una muralla de granito entre el delincuente que cumplió su pena y el hombre honrado. Este periodo de prueba es una parte esencial del sistema de reforma penitenciaria, puesto que ofrece a la sociedad la única garantía que pueda tener esta de la confianza que merece el penado; y esta garantía es la sola condición que puede abrir libremente los varios caminos del trabajo honrado al delincuente que vuelve a la sociedad. Falco (como se citó en Ramos Vásquez, 2013: 344 - 345).

Antes de terminar, se quiere referenciar que el sistema progresivo penitenciario es el adoptado por las Naciones Unidas en sus recomendaciones y por casi todos los países del mundo; desde finales del siglo XIX se extendió por Europa y por América, hasta mediados del siglo XX.

4. Sistema progresivo penitenciario colombiano.

La idea central del sistema penitenciario colombiano se enmarca dentro de la lógica progresiva, es decir, en la opción de brindarle al condenado el medio de obtener de forma anticipada y gradual la condición de hombre libre mediante su asistencia a las actividades de tratamiento y buena conducta. Para este fin existen en las leyes colombianas los subrogados penales como la libertad condicional y la prisión domiciliaria; así mismo, los beneficios administrativos, entre ellos, el permiso de salida de las setenta y dos horas que se logra una vez el condenado ha disminuido a la pena impuesta una tercera parte. Prerrogativas que se obtiene de la sumatoria del tiempo físico y el redimido por actividades educativas, de trabajo o enseñanza.

Véase, a grandes rasgos, la evolución del sistema progresivo penitenciario colombiano siguiendo el orden cronológico de su configuración legislativa, como las características de los elementos que lo constituyen:

a. Antecedentes

En relación con los antecedentes del sistema penitenciario progresivo en Colombia tenemos en primer lugar el Decreto Ley 1405 de 1934 quien fue el que dio inicio a los:

procesos de clasificación y tratamiento y ordenó en su artículo 188, el inicio del periodo de observación para su posterior ubicación, que de acuerdo con el artículo 199, se agruparían afines al delito cometido, la reincidencia, la edad, los antecedentes y las circunstancias personales (Acosta, 1996:45).

En segundo lugar, el Decreto Ley 1817 del 17 de julio de 1964 adiciona y reforma al Decreto Ley 1405 de 1934 en lo relacionado a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955, así mismo, estipula en el artículo 136 la implementación del sistema progresivo:

En la elaboración del reglamento interno, además de las disposiciones que se consagran en este estatuto, debe tenerse en cuenta el tratamiento diferente que deben ser sometidos procesados y condenados. En estos últimos se observarán las normas sobre el sistema progresivo y la disciplina atenuada. (Presidencia de la República de Colombia, 1964). Subrayado fuera de cita.

En tercer lugar, la ley 65 de 1993 desde su artículo 12 que reza “el cumplimiento de la pena se regirá por los principios del sistema progresivo” (Congreso de la República de Colombia, 1993), permite en el año de 1995 la aplicación del sistema progresivo mediante varias experiencias pilotos que se llevan a cabo en siete centros carcelarios y penitenciarios de mujeres del país. Finalmente, en 1997 se ordena su implementación en todos los del Estado.

b. Características

La idea central que caracteriza al sistema progresivo es la disminución de la intensidad de la pena, en función del estudio de la conducta y la manera de comportarse del preso, por medio de la aplicación puesta en marcha de un modelo en el cual el interno atraviesa distintas etapas en el curso del cumplimiento del castigo (Díaz Galvis *et al.*, 2004, p.12).

Es decir, durante el cumplimiento de la sanción impuesta al recluso por el juez y cuando este ha determinado su culpabilidad por el hecho punible cometido, lo remite al sistema penitenciario para que según las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, principio 60, “ 2) (...) se adopten los medios necesarios para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad” (ONU, 1977).

Por ello el condenado, con su asentimiento, debe transitar por fases de análisis, diagnóstico, clasificación e intervención en donde tenga la alternativa de no ser suprimido en su dignidad, amor propio, libertad y forma de ser, es decir, “deja de ser un sujeto pasivo del Sistema (sic) (...), para disponer, a través de (sic) su trabajo y conducta, de una libertad anticipada” (*Téllez, 1996:20*).

Lo anterior es posible siempre y cuando se enmarque dentro de los principios que informa el sistema progresivo penitenciario como son la dignidad humana, la convivencia y la concertación, la gradualidad y la progresividad, la legalidad, la igualdad, la equidad, la pacificación y la autonomía contemplados en el artículo 1 de la Resolución 7302 INPEC, 2005). Sara Hilarión (s.f), los interpreta de la siguiente manera:

- ✓ Principio de dignidad y potencialidad. Garantiza condiciones de vida acordes con la dignidad del ser humano y desarrollo de potencialidades y capacidades independientemente del delito cometido.
- ✓ Principio de integralidad del desarrollo humano. Busca garantizar la realización de todas las necesidades inherentes a la condición biopsicosocial del ser humano.

- ✓ Principio de sostenibilidad del desarrollo humano. Se refiere a la necesidad de satisfacer las necesidades humanas con un sentido de responsabilidad y respeto intergeneracional, haciendo uso racional de los recursos naturales, de tal suerte que se garantice la perdurabilidad de los logros de la intervención.
- ✓ Principio de equidad. Busca que todas las personas reciban la misma atención y trato de las autoridades y gocen de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Se refiere a cuatro presupuestos fundamentales: la equidad de género, la potenciación de la participación social, la interculturalidad y el manejo de la comunicación.
- ✓ Principio de legalidad. Es concordante con los principios constitucionales, las leyes, los tratados internacionales y las normas vigentes en materia penal, carcelaria y penitenciaria.
- ✓ Principio de concertación. El proceso de cambio no puede ser impuesto, debe ser concertado y esto exige el establecimiento de compromisos mutuos.
- ✓ Principio de progresividad. Se espera que la persona privada de su libertad pase por fases de tratamiento que conduzcan al desarrollo progresivo de sus potencialidades, de manera tal que se logre reintegrarse a su entorno familiar y social. A medida que la persona avanza en su proceso de revaloración, se le procuran progresivamente niveles de mayor confianza y se le otorgan beneficios administrativos.

Para poder alcanzar el objetivo de retornar al condenado al orden social, es indispensable rodearlo de los anteriores principios, de lo contrario, no se podrá “incidir en el comportamiento actitudinal, potencialidad y facultad del recluso en sus expectativas y aspiraciones” (Acosta, 1996:35).

c. Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET)

El Consejo de Evaluación y Tratamiento es el órgano encargado de llevar a cabo el tratamiento progresivo penitenciario desde los principios antes expuestos. De acuerdo con los artículos 142 y 145 de la Ley 65 de 1993, este posee una naturaleza interdisciplinaria y debe estar conformado por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapeutas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. (Congreso de la República de Colombia, 1993).

Luego el Consejo Directivo del INPEC (1995), por medio del Acuerdo 0011 del 31 de octubre en su artículo 79 estableció las funciones específicas del Consejo de Evaluación y Tratamiento Penitenciario de la siguiente forma:

1. Hacer seguimiento individual al interno, consignándolo en la cartilla biográfica, desde el momento de su ingreso mediante el estudio del proceso penal, documentos, entrevistas personales y familiares y a través de (sic) la observación de su comportamiento en general.
2. Estudiar desde el punto de vista de las diferentes disciplinas a los condenados e indicar la clase de tratamiento que requieren y conceptuar sobre el tipo de establecimiento donde deben descontar la pena.
3. Proponer, desarrollar y participar activamente en los programas terapéuticos de índole individual y general señalados como fundamentales en el tratamiento penitenciario.

4. Formular observaciones ante la Junta de Evaluación de que trata el siguiente artículo, en relación con el trabajo, estudio y la enseñanza de los reclusos bajo tratamiento, observando las disposiciones que rigen la materia.
5. Asesorar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en las decisiones que debe adoptar en relación con la ejecución de las penas.
6. Las demás que le sean asignadas por ley o reglamento, acordes con su naturaleza.

El Consejo de Evaluación y Tratamiento actuará bajo la responsabilidad y coordinación guía del respectivo director del establecimiento. Una vez constituido, se darán sus propias normas, previo visto bueno de la Dirección General del INPEC.

Con respecto al Consejo de Evaluación y Tratamiento, este debe estar constituido mínimamente por tres profesionales con el propósito de poder garantizar un concepto interdisciplinario desde los aspectos jurídico, de seguridad y biopsicosocial, según el artículo 9, párrafo 2, de la Resolución 7302 (INPEC, 2005).

El Consejo de Evaluación y Tratamiento debe de iniciar un proceso progresivo con la persona condenada que, en términos generales, consta de los siguientes de acuerdo con la Resolución 7302 del INPEC (2005):

- “1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno.
2. Alta seguridad que comprende periodo cerrado.

3. Mediana seguridad que comprende el periodo semiabierto.
4. Mínima seguridad o periodo abierto”.

d. Beneficios administrativos

Los beneficios administrativos como instituciones jurídicas están para reducir el efecto adverso de la prisión en la persona condenada. Así pues, la Ley 65 de 1993 en su artículo 146 los consagra desde el sistema de tratamiento progresivo penitenciario como un derecho subjetivo que facilita el regreso paulatino del prisionero a la vida en sociedad, y de otro lado, reduce los efectos del encierro derivados de la sentencia que le han impuesto (Congreso de la República de Colombia, 1993).

Concepto

Los beneficios administrativos son derechos de los condenados (Posada Segura, 2013) que les permiten gozar por un lapso de tiempo su libertad siempre y cuando reúnan una serie de requisitos establecidos en la ley y decretos reglamentarios.

De manera distinta es la opinión de Vega Higuera (2010), quien señala: “son concesiones, favorecimientos, gracias o atenciones administrativas otorgadas a los ejecutores de penas privados de su libertad, luego del cumplimiento de ciertos requisitos exigidos por la ley” (p.57).

Por otra parte, para Cita Triana (2014), los beneficios administrativos son “todos aquellos mecanismos que suponen una modificación de las condiciones de cumplimiento de la condena,

traducidas a una reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad o una modificación en las condiciones de ejecución de la condena” (p.24).

Naturaleza jurídica

En materia de beneficios administrativos, se tienen dos posturas que se contraponen. La primera es la asumida por el INPEC (2012), quien los entiende a partir de lo estipulado por la Corte Constitucional de la República de Colombia (2002 y 2005), en las sentencias C – 312 y T-1093, respectivamente, como actos potestativos y discrecionales de la autoridad jurisdiccional.

En términos de la Corte Constitucional de la República de Colombia (2002), en la sentencia C – 312, cuyo magistrado ponente fue Rodrigo Escobar Gil, los beneficios administrativos son:

(...) una serie de mecanismos de política criminal del Estado, inherentes a la ejecución individual de la condena, que suponen una disminución de las cargas que deben soportar las personas que están cumpliendo una condena y en algunos casos, pueden implicar la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad (...) o una modificación en las condiciones de ejecución de la condena.

A esta postura del INPEC, le antecede la asumida por la rama del poder ejecutivo (1998), quien reglamentando los permisos hasta de setenta y dos horas se refirió a este beneficio administrativo en el Decreto 232 del 2 de febrero de ese año como una facultad discrecional en cabeza de los directores de los establecimientos penitenciarios que la pueden conceder a los condenados que cumplan con los requisitos que la Ley 65 de 1993 estableció en el artículo 147.

La segunda postura, es la asumida por el profesor Posada que los entiende como un derecho intrínseco a favor del condenado. Ahora bien, si entendemos que los beneficios administrativos están en íntima relación con el tratamiento penitenciario progresivo, y este es un “derecho subjetivo y exigible de todo preso o, al menos, en todo preso condenado a una sentencia de prisión”(O’Donnel, 2004, p. 227) se puede concluir que estos beneficios son verdaderas facultades de la persona condenada.

Fundamento

La razón de ser de los beneficios administrativos descansa en el hecho de obrar como elementos que hacen parte del tratamiento progresivo penitenciario en sus distintas fases (Congreso de la República de Colombia, 1993) e involucran un mayor ámbito de libertad. En consecuencia, se convierten en estímulos “para asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad” con el propósito de indicarle que “continúa formando parte de ella” (ONU, 1977).

Por lo anterior, cuando el condenado avanza a la fase de mediana seguridad, el tratamiento progresivo penitenciario se piensa desde la perspectiva de que este alcance mayores derechos en el espacio del penal, o en sentido adverso, el régimen del penal tenga una menor injerencia en su libertad, y una vez se le ubica en dicha etapa, se le reconozca, por ejemplo, el derecho a las salidas de hasta las setenta y dos horas para que pueda ir recuperando paulatinamente su excarcelación.

En palabras de Hilarión Díaz (como se citó en López Jaramillo *et al.*, 2003), se entienden así:

(...) beneficios administrativos que se le deben brindar a las personas condenadas, para que puedan construir un proyecto de vida que les permitan convertir el tiempo de condena en tiempo de reflexión y de oportunidad para su revaloración como ser humano, para la superación de las limitaciones y el desarrollo progresivo de sus potencialidades, de manera tal que se puedan reintegrar a su entorno familiar y social como seres creativos, productivos y autogestionarios, una vez recuperen su libertad. (p.51).

Requisitos comunes

Los beneficios administrativos comparten entre ellos tres requisitos.

- ✓ Primer requisito, de naturaleza procesal. El reconocimiento de los beneficios administrativos parte del presupuesto de tener la sentencia condenatoria en firme o debidamente ejecutoriada
- ✓ Segundo requisito, de carácter objetivo. Haber descontado entre el tiempo físico y el tiempo redimido un porcentaje de la pena impuesta que variará en porcentaje según el beneficio administrativo solicitado
- ✓ tercer requisito, de carácter certificatorio. Este requisito busca que el Consejo de Evaluación y Tratamiento, o el Consejo de Disciplina, o el director del establecimiento penitenciario o el director regional verifique y luego certifique al juez de ejecución de penas y medidas que el

condenado cumple con los requisitos establecidos en la ley y decretos reglamentarios para reconocer el beneficio administrativo requerido por el condenado (Rueda Soto, 2010:140).

e. La Red Social de Apoyo

La Red Social de Apoyo es entendida como el conjunto de entidades públicas y privadas, personas jurídicas y naturales, que se articulan con el objetivo de implementar y ejecutar programas en el campo educativo, laboral, cultural, recreativo, espiritual, terapéutico para lograr la reinserción social de los privados de libertad (López Jaramillo, 2003, p.56).

Estas entidades y personas van integrar dos tipos de grupos. El primer grupo de la red se conforma por personal penitenciario e internos; el segundo grupo por las instituciones y personas que provienen de afuera de la prisión. Explica López Jaramillo (2003) que entre las funciones asignadas a la red como apoyo al tratamiento penitenciario se tienen:

Proporcionar apoyo efectivo a las necesidades de los privados de libertad.

Contribuir a la solución eficaz y eficiente de las diferentes necesidades sociales.

Permitir que se expresen necesidades diversas.

Proporcionar información real sobre los problemas.

Permitir que se dé un proceso de construcción colectiva.

Permitir la confrontación de problemas y soluciones. (p.57).

La fundamentación jurídica de la red social de apoyo se encuentra en la siguiente normativa de la Constitución Política de Colombia en el artículo 2° del Título I de los principios fundamentales: Son fines esenciales del Estado:

servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa (...)”.(Asamblea Nacional Constituyente, 1991). .

Y en el Título IV, Capítulo 1°, artículo 103:

(...) El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes estancias de participación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

De otro lado, la Ley 65 de 1993 en el artículo 157 establece que la Dirección del INPEC y los directores de centros de reclusión podrán organizar cuerpos de voluntariado social, para atender las necesidades de los internos y de sus familias; y en el artículo 158 indica que lo podrá hacer mediante contratos y convenios de cooperación. (Congreso de la República de Colombia, 1993).

Así mismo, la ley 720 de 2001 tiene como objeto “promover, reconocer y facilitar la acción voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la

corresponsabilidad social, reglamentar la acción de los voluntarios en las entidades públicas o privadas y regular sus relaciones”. (Congreso de la República de Colombia, 2001).

Debemos señalar que esta fundamentación jurídica de la red social de apoyo, la cual fue descrita de manera detallada en el punto anterior, fue la que permitió que en el año 2011 se llegará a un acuerdo entre la regional noroeste del INPEC y la Confraternidad Carcelaria de Colombia, como entidad civil con presencia reconocida, de larga data, en los distintos establecimientos penitenciarios del orden nacional para implementar y ejecutar un programa de tratamiento con un componente espiritual, con el fin de contribuir a la reinserción social de un grupo de mujeres que se encuentran recluidas en el Complejo Penitenciario y Carcelario el Pedregal, cuyas características se describen a continuación

5. Caracterización de la alianza entre la Dirección Operativa Regional Noroeste del INPEC y la Confraternidad Carcelaria de Colombia para la implementación del método APAC en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Pedregal (COPED)

La Dirección Operativa Regional Noroeste del INPEC, ha firmado un acuerdo con la *Confraternidad Carcelaria de Colombia*⁹ (convenio N° 003 del 17 de noviembre del 2011) que

⁹ Es una asociación de personas jurídicas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de interés general, con personería y patrimonio propio. Tiene carácter cristiano y está guiada por su declaración de fe y valores conforme a los principios bíblicos. Sin partidismo político, es decir, porque como es sin ánimo de lucro no asume compromiso de proveer política partidista doctrinal de bando, partido o movimiento. Organizada en 1980 y establecida como entidad el 05 de mayo de 1982 mediante personería jurídica 1483 por el Ministerio de Justicia. Goza de plena autonomía en sus asuntos civiles y religiosos como entidad cristiana de acuerdo con la Constitución nacional y las disposiciones

tiene como objeto desarrollar la metodología Asociación para la Protección y Asistencia a los Condenados (APAC) que consiste en un modelo de cambio holístico – espiritual, de valorización humano. Esta pretende ofrecer a personas en prisión las condiciones que les permitan restaurarse, integralmente, logrando de esta forma proteger a la sociedad y promover la justicia social.

Así mismo, se tiene como meta transformar las personas privadas de libertad en miembros productivos de sus familias y comunidades, con una concepción holística que procura restaurar al individuo, con respecto a su familia, el orden social y Dios.

El INPEC (2011), determina que la aplicación del modelo APAC se llevará a cabo en el COPED y, específicamente, con población de mujeres reclusas con los siguientes objetivos específicos:

- a) Favorecer los vínculos personales, sociales, (sic) familiares de las internas para facilitar sus posibilidades de inserción social, en el marco de las propuestas resocializadoras definidas en la Ley 65 de 1993, específicamente en su TITULO XIII (sic) tratamiento Penitenciario (sic), atendiendo sus dimensiones afectiva, cultural y social.
- b) Desarrollar acciones preventivas, de promoción e intervención al personal que voluntariamente acceda al programa desde esferas afectiva, cultural y social (sic). Estas se enmarcan en procesos de educación, la instrucción, el trabajo, (sic) la actividad cultural, recreativa y deportiva (sic) y las relaciones de familia. Se llevaran (sic) a cabo conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto.

- c) Promover principios de autodisciplina y métodos de valoración humana que procuren el cambio en el corazón de las personas privadas de libertad.
- d) Restaurar y fortalecer los lazos y relaciones familiares como un elemento determinante para la construcción de redes sociales primarias, lo anterior debe atender el ordenamiento jurídico y (sic) como una estrategia en el tratamiento penitenciario.
- e) Brindar asistencia espiritual y material a las personas privadas de libertad en el marco del Decreto 1519 de 1998, respetando la libertad de cultos y la fe de cada interna del programa.
- f) Asistencia social pos – penitenciaria (sic) a las egresadas del programa, apoyando los lineamientos trazados por el INPEC, buscando consolidar un Centro de reintegración social.
- g) Otorgar una formación previa y permanente al voluntariado destinado al APAC para obtener la colaboración del mismo y que sean parte integrante del proyecto.

a. COPED

El Complejo Carcelario y Penitenciario de Pedregal es uno de los 11 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) creados bajo las directrices impartidas en los documentos CONPES 3277 de 2004, 3412 de 2006 y 3575 de 2009 con el fin de asegurar que se cumpla la

política pública de ampliar la capacidad de cupos de reclusión y el consecuente descenso del hacinamiento penitenciario y carcelario que padece el país.

Es de señalar que este establecimiento fue entregado por el Ministerio del Interior y de Justicia, al INPEC, el 30 septiembre de 2010. El día 5 de mayo del 2011 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en Resolución 001797 crea el complejo derogando en lo pertinente la Resolución N°. 8131 del 8 de julio de 2010 en la que se suprimió la Reclusión de Mujeres de Medellín y se creó la Reclusión de Mujeres Pedregal de Medellín, de igual forma, la Resolución N°. 2668 del 5 de marzo de 2010 por medio de la cual se creó el Establecimiento Carcelario de Medellín.

El Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín - Pedregal (Antioquia), se encuentra ubicado en el occidente de la ciudad de Medellín en el corregimiento de San Cristóbal, sector El Pedregal, en el kilómetro 6 vía al mar finca la Teresita. Se compone de una reclusión para hombres y otra para mujeres compuesta por áreas de mínima, media y alta

seguridad.

Fotografía N° 1. Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín - Pedregal (Antioquia). En INPEC (s.f).

El complejo tiene capacidad de dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco cupos distribuidos en tres sectores: hombres, mínima de mujeres y la reclusión de mujeres (INPEC, 2015). En cuanto a la infraestructura física, cuenta con lo siguiente:

- Zona externa. Esta área cuenta con portales de entrada, zona vehicular, zona peatonal, puestos de guardia y controles, zona administrativa, cancha múltiple de fútbol y

baloncesto, zona de acopio de basuras, caniles, almacenes, bodegas, alojamiento de guardia y armerillo.

- Establecimiento. La reclusión se encuentra conformada por sectores de alta, mediana y mínima seguridad; los cuales a su vez están conformados por pabellones donde se encuentran las respectivas celdas, aulas educativas, aulas para taller y/o fábrica, biblioteca, canchas múltiples de fútbol y baloncesto, sala de visitas, salas de audiencias, salas de reconocimiento, salas de visitas conyugales, sanidad básica para cada sector y una sanidad especializada para todo el complejo, baños comunes, locutorios, Unidades de Tratamiento Especial (UTE) y Unidades de Medidas Especiales (UME -maternas, tercera edad-), guardería y sala cuna en el sector de reclusión de mujeres, garitas, rancho (lavandería, panadería, cocina, comedores), cuarto de calderas, entre otros (p.20).

b. Confraternidad Carcelaria de Colombia

La Confraternidad Carcelaria de Colombia (CCC, s.f.), fue fundada en 1980 por los esposos Donald y Georgia Rendle, canadienses quienes llegaron al país en 1973 en la Misión Bautista.

Evolución institucional

La historia de la CCC (s.f) se ha dividido en cuatro épocas distintivas, resumidas así:

- ✓ Preámbulo histórico (sic) (1973 – 1980).

Durante este período se dio inicio a la obra carcelaria en la antigua Cárcel (sic) la (sic) Ladera en la ciudad de Medellín. Posteriormente en 1975 los Rendle lograron con el apoyo de la Misión Bautista en Canadá construir el primer templo para la iglesia (sic) en la nueva cárcel Bellavista, la cual aún se mantiene hasta hoy y que (sic) fue inaugurada en 1976. Este período fue importantísimo porque se construyeron las bases que han sido fundamentales para el establecimiento de la CCC.

✓ Época de afiliación, organización y consolidación (1980 – 1991).

Este fue el año del nacimiento oficial de la Confraternidad Carcelaria de Colombia. Fue una de las épocas más difíciles de este ministerio por el incremento de la violencia. El traslado de los Rendle a Bogotá produjo algunos cambios. En Medellín quedó encargado el Dr. Francisco Archila en compañía de Mario Mazo, Leonel Parra (QEPD) entre otros. Los años 80`marcó (sic) la historia de la prisión de Bellavista la cual llegó a ocupar las primeras páginas de la prensa escrita por la violencia que se vivió en su interior. Mientras tanto en Bogotá se conformó la primera Junta Directiva de la Confraternidad Carcelaria.

En 1982 los Rendle afiliaron a la CC Colombia a la Prison Fellowship International. Desde Bogotá se dio inicio a un despliegue misionero por todos los rincones del país donde estaba construida una cárcel. La misión era clara: predicar libertad a los cautivos. Llevando un mensaje de esperanza a quienes la han perdido. Así, esta época permitió el fortalecimiento de la Confraternidad Carcelaria como ministerio en Colombia. Fue reconocida como solución a la problemática que se vivía en las prisiones por parte del INPEC en cabeza de una de las

autoridades más reconocidas del Instituto de prisiones (sic) el Dr. Bernardo Echeverry Ossa (QEPD).

✓ Época de avivamiento (1991 – 1999)

Es el tiempo durante el cual se dieron muchos cambios en la CCC. Cambio de liderazgo y recuperación de la visión. La década de los 90`volvió a producir cambios sustanciales. Los Rendle salieron del país y con frecuencia visitaban el ministerio. La transición fue difícil y al pasar los años la CCC fue perdiendo fuerza debido al poco tiempo que tenían quienes asumieron la dirección del ministerio. En 1992 el ministerio en Medellín se organiza como una sucursal del ministerio nacional. Surge entonces la idea de crear en cada región un ministerio regional de CC., y se da un gran crecimiento.

En 1992 se obtiene la primera personería jurídica, la 1785 de la Gobernación de Bolívar, dando paso a la iniciativa de organización de la confraternidad carcelaria en las regiones. A pesar de las dificultades esta fue una época de avivamiento. Como hechos sobresalientes de los 90` se puede destacar la restauración del ministerio de CC en Antioquia. La transformación que vivió Bellavista. El impacto de la CC por medio de actividades sociales. La crisis que vivió el ministerio en Antioquia en 1997.

La celebración en medellín de la asamblea nacional en la que se eligió una nueva junta directiva la cual le ha dado un viraje al ministerio nacional. La reconstrucción del templo en la prisión de Bellavista.

✓ Época de reorganización (1999 – 2010)

Es una época de reforma de estatutos, cambio de la sede principal de Bogotá para Medellín, justo donde nació este ministerio, volvió a las bases de sus fundadores y hoy continúa creciendo y fortaleciéndose y viviendo un avivamiento histórico en todas las penitenciarías y cárceles del país.

Declaración de fe de la Confraternidad Carcelaria de Colombia

Se basa en el contenido del credo de los apóstoles:

El Credo de los Apóstoles

Creo en Dios Padre Todopoderoso,

Creador del cielo y de la tierra;

Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro;

Que fue concebido del Espíritu Santo,

Nació de la virgen María,

Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos;

Fue crucificado, muerto y sepultado;

Descendió a los infiernos;

Al tercer día resucitó de entre los muertos;

Subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso;

Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo,
 La Santa Iglesia Universal,
 La comunión de los santos,
 El perdón de los pecados,
 La resurrección de la carne
 Y la vida perdurable. Amén.

Visión, misión, valores y logo

En este acápite se expone de Confraternidad Carcelaria la filosofía cristiana que ilustra la forma de relacionarse con el otro y el punto a partir del cual construye e implementa las actividades llevadas a cabo con población penitenciaria, carcelaria y familias.

El ministerio incluye esfuerzos en el campo de la evangelización, el servicio inspirado por la misericordia, (sic) y la reforma de la justicia. Estos esfuerzos se realizan a través de (sic) una variedad de programas prácticos y relevantes de propiedad de la Confraternidad Carcelaria Internacional que incluyen el Árbol Ángel, el Proyecto del Árbol Sicómoro, la Reintegración a la Comunidad, Comunidades de Restauración, y otros proyectos que promueven la transformación, la reconciliación, (sic) y la restauración de las personas cuyas vidas han sido impactadas por el crimen y el encarcelamiento.

Los valores centrales se expresan a través (sic) de la Unidad (sic) que tenemos en Jesucristo, expresada en nuestro respeto por (sic) y nuestra cooperación con personas creyentes procedentes de las diversas denominaciones cristianas en todo el país que se identifiquen con los principios que nos rigen.

La Cooperación (sic) en el desarrollo de nuestra misión, expresado en nuestro apoyo y trabajo con las iglesias (sic), los capellanes, (sic) y con organizaciones relevantes de la comunidad. El Amor (sic) y el respeto para con todas las personas, expresado en relaciones que afirman el valor y la dignidad de todos los seres humanos y que promueven la transformación, la reconciliación, y la restauración. (Confraternidad Carcelaria de Colombia, s.f.).

Figura 9. Logo de la Confraternidad Carcelaria de Colombia.

El logo está representado por un junco o tallo de grano doblado (“la caña cascada”) que está sobrepuesta sobre un globo estilizado. La imagen de esta caña cascada está basada en el texto bíblico: “*No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue: por medio de la verdad traerá la justicia*”. (Isaías, 1960: 42, 3) Esta es una imagen de esperanza que destaca que ninguna persona está tan torcida o doblada como para ser alguien irremediabilmente quebrado, o tan alienado que sea imposible de alcanzar restauración. La justicia se puede alcanzar cuando son restaurados la paz y el bienestar.

c. APAC

Figura 10. Logo APAC

La APAC dispone de un método de valorización humana, por lo tanto, de evangelizar para ofrecer al condenado condiciones de recuperarse y su propósito es proteger la sociedad, auxiliar a la víctima y promover la justicia (Ottoboni, 2002, p.21).

Surgimiento de APAC

En 1972, a partir de la Pastoral Penitenciaria Católica, en la ciudad de San José de los Campos, del Estado de San Paulo (São Paulo) fue creada por el Dr. Mario Ottoboni la APAC con el significado “Amando al Prójimo Amarás a Cristo” y con el objetivo de trabajar con la población penitenciaria y carcelaria que para esos momentos vivía en pésimas condiciones de abandono estatal, rebeliones y revueltas permanentes.

En 1974, la Pastoral Penitenciaria Católica se constituyó en una entidad civil de derecho privado, sin ánimo de lucro, manteniendo los mismos objetivos, para poder superar las dificultades que fueron surgiendo en el desarrollo de su trabajo de asistencia y defensa de los presos con la administración penitenciaria, específicamente con el personal de vigilancia y custodia que veía el trabajo desempeñado por ellos como un grupo de personas que defiende o “protege bandidos”.

A partir de este momento, la entidad pasa a denominarse Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados, que ampara al trabajo de la pastoral “Amando al Prójimo Amarás

a Cristo” (APAC), así como al de otras Iglesias cristianas con una mirada ecuménica. El organismo de derecho privado respalda y garantiza la pastoral penitenciaria en su tarea evangelizadora y esta a la privada. Ambas tienen la misma finalidad: ayudar al condenado a recuperarse y a reintegrarse a la convivencia social.

En 1986, APAC se afilia a Prisión Fellowship International, órgano consultativo de la ONU para asuntos penitenciarios. A partir de esa época el método pasó a ser divulgado a otros países del mundo por medio de congresos, seminarios y visitas al presidio de Humanité. Actualmente, en Brasil, existen las APAC en más de 12 estados, en solo Sao Paulo hay 22. Otras ya fueron implementadas en países como Ecuador (Quito y Guayaquil), Argentina (Córdoba y Tres Ríos), Perú (Arequipa), Estado Unidos (Iowa, Texas, Kansas y Minnesota), Noruega, Nueva Zelanda, Latvia, Alemania, Bulgaria, Inglaterra, Bolivia, Australia, Puerto Rico, Holanda, Corea del Sur, Singapur, Gales, Australia, Escocia, Chile, Costa Rica (Cartago) y Colombia (Medellín – San Cristóbal).

Filosofía APAC, fundamentos bíblicos y decálogo

Explica Ottoboni (2002,), que en razón de sus fallas y defectos, el sistema penitenciario común mata al hombre y al criminal que existe en él, mientras que APAC propone desde los principios de su existencia: “matar al criminal y salvar al hombre” (p.34).

Continúa Ottoboni (2002), diciendo que todo ser humano lleva dentro de sí un hombre listo para matar o morir, dispuesto a la guerra y a la paz. Trae en sí la fuerza del amor y del odio, del

perdón y de la venganza. Cuando es poseído por la fuerza del pecado, distante de su realidad de hijo de Dios, es capaz de cometer todo tipo de atrocidades. San Agustín afirmaba: “No existe un pecado que el hombre cometa que otro hombre no sea capaz de cometer”, y San Francisco de Asís decía: “Todos nosotros tenemos dentro del corazón un lobo voraz”. San Agustín y San Francisco de Asís (como se citó en Ottoboni, 2002, p.34).

En conclusión: “Nunca perder de vista que la Metodología de (sic) APAC fue inspirada en el sacrificio de la Cruz y considerar la Misericordia de Cristo quien, volviéndose hacia Dimas, al arrepentido ladrón en la Cruz le anunció su salvación” (Ottoboni, 2007, p. 34)

La APAC se basa en los siguientes tres textos bíblicos para llevar a cabo todas las actividades de tratamiento propuestas en su método:

- ✓ “Acordaos de los presos, como si estuvierais con ellos encarcelados, y de los maltratados, pensando que también vosotros tenéis un cuerpo”. (Hebreos, 1960: 13, 3).
- ✓ “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme”. (San Mateo, 1960: 25, 35-36).
- ✓ “Hacia la media noche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios, los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos”. (Hechos, 1960: 16, 25-26).

La APAC posee los siguientes principios (decálogo) que informan y orientan la implementación y ejecución del método.

- I. El amor como camino.
- II. El diálogo como entendimiento.
- III. La disciplina como amor.
- IV. El trabajo como esencial
- V. Fraternidad y respeto como meta.
- VI. Responsabilidad para el crecimiento.
- VII. Humildad y paciencia para vencer.
- VIII. El conocimiento para ilustrar la razón.
- IX. La familia organizada como soporte
- X. Dios como fuente de todo. (Gomes Moutinho, 2012).

Componentes de tratamiento penitenciario APAC

Según Ottoboni (2002), APAC es una entidad que posee un método específico de trabajo con las personas condenadas a pena de prisión que busca la recuperación del recluso durante el cumplimiento de la misma, más su reintegro al orden social: “método de valorización humana, por lo tanto de evangelización, que ofrece a los condenados condiciones para recuperarse, logrando de esta forma el propósito de proteger a la sociedad y promover la justicia”. (p.21).

Cuenta Ottoboni, que el sistema de prisiones común asume al criminal como un ser irrecuperable, mientras que en APAC se valora la esencia de la persona que erró y que en el

cumplimiento de la pena se hace necesario respetarlo en su dignidad como imagen y semejanza de Dios. Aquí vale recordar la máxima: “Toda persona es mayor que su propio error”.

Cuando esto ocurre, afirma Ottoboni (2002), que “el proceso de evangelización ya está caminando rápido, fuerte y va creando raíces en la personalidad del ser humano, liberándolo de todas las ataduras que lo esclavizan” (p.22). Por otra parte, cuando se recupera a un condenado la consecuencia lógica es que la sociedad está cuidada y prevenida de la violencia ((Ibíd, p. 22).

El método APAC está conformado por doce (12) elementos que deben ser trabajados conjuntamente, una vez que, de acuerdo con sus idealizadores, su eficacia depende de la aplicación de todos ellos. Los cuales son descritos a continuación:

APAC – Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados

Figura 11. Componentes del APAC. La Confraternidad Carcelaria de Colombia utilizó esta presentación en todas las capacitaciones relacionadas sobre el método APAC.

- ✓ *Participación de la comunidad.* El método reconoce la importancia de la participación de la comunidad en la fase de cumplimiento de la pena para recuperar al condenado. De que conozcan sobre los graves problemas penitenciarios, que descubran el abandono de los reclusos detrás de las rejas con el propósito de que se sensibilicen y capaciten para ayudar al preso en su retorno al orden social ante la incapacidad absoluta del Estado para cumplir dicha finalidad (Ottoboni, 2002, p. 48).

Si de un lado los funcionarios penitenciarios representan la primera fuerza y del otro, el condenado la segunda fuerza dentro del establecimiento penitenciario, la comunidad en la prisión, participando del trabajo de recuperación del condenado, representa la tercera fuerza, sin ningún compromiso político con la institucionalidad o descrédito. Ella llega confiable. Por ello el condenado:

Sabe que está allí alguien que quiere ayudarlo gratuitamente, por amistad, por sentimiento cristiano y porque cree que todo ser humano nació para ser feliz, que aquel momento vivido por el preso es pasajero, transitorio, hasta que haga el descubrimiento de sus propios valores, del semejante y de Dios (Ottoboni, 2002: 49).

- ✓ *El recuperando ayudando al recuperando.* Es fundamental enseñar al recuperando a vivir en comunidad, a socorrer al hermano que está enfermo, a ayudar a los más viejos y, cuando fuera el caso, a prestar todos los servicios que requieran sus compañeros de prisión: en los corredores, en el comedor, en la pulpería, en la farmacia, en la Secretaría,

etc. De hecho, por no saber respetar las reglas de buena convivencia social, en razón de la falta de respeto y ausencia de límites del otro, es que, en la mayoría de los casos, la persona terminó siendo (Villareal Castillo, 2006, p.208).

De este modo, en APAC hay un representante de celda que tiene la función de mantener la disciplina y la armonía entre los recuperandos, organizando la higiene personal y la limpieza de el calabozo, promoviendo así mismo, una mayor calidad y bienestar para los condenados (Ottoboni, 2002, p.51).

Así mismo, se ha previsto en este elemento la existencia del Consejo de Sinceridad y Solidaridad (CSS) que es un órgano de auxilio en el manejo del programa APAC. Sin poder de decidir, el CSS colabora en todas las actividades, opinando acerca de la disciplina, seguridad, reparto de tareas, realización de reformas, fomento de fiestas, celebraciones, veeduría del trabajo para el cálculo de la redención de penas, etc. (Ottoboni, 2002, p. 51).

- ✓ *Trabajo.* Según Ottoboni (2002, ps. 52 – 57) solo no enmienda al condenado. Este debe hacer parte del contexto, parte de la propuesta, más no debe ser el elemento fundamental, pues no es suficiente para recuperar al preso. Además, es preciso tener claro el objetivo de la labor en cada uno de las fases del tratamiento, toda vez que la legislación brasilera adopta el modelo progresivo del cumplimiento de la pena, a fin de no frustrar las expectativas de crecimiento del prisionero.

De esta forma, el trabajo en APAC está relacionado con la fase de tratamiento en la que se encuentra el recuperando. Ottoboni ((2002). recomienda para el régimen cerrado trabajos de labor terapéuticos como: “tapicería, pintura de cuadros al óleo, decoración de azulejos, graffiti, técnicas en cerámica, confección de redes, manteles, cortinas, trabajos en madera, arcilla, silk screen, pintura de frisos y todo lo que permita al recuperando ejercitar la creatividad, la reflexión sobre lo que está haciendo”. (p. 53).

Para el régimen semiabierto, en el evento en que el recuperando no tenga un estudio definido, es el momento oportuno para lograrlo, realizando cursos profesionalizantes, técnicos o similares como: zapatería, panadería, sastrería y talleres mecánicos.

El método APAC para el régimen abierto (prisión-albergue) propone que el recuperando que pretende disfrutar del beneficio tenga una profesión definida, presente una promesa de empleo compatible con su especialidad y tenga revelado en la modalidad semiabierta méritos y plenas condiciones para volver a la convivencia social. Por ese motivo, APAC defiende la preparación rigurosa del recuperando antes de obtener esa ayuda, no solamente para favorecerlo, sino también para no frustrar a su familia y proteger a la sociedad.

- ✓ *La religión y la importancia de hacer la experiencia de Dios.* Es equivocado el pensamiento que cree que la religión sola o aislada de los otros elementos del método basta para preparar al prisionero para su retorno a la sociedad (Ottoboni, 2002, p.58).

Así mismo, el método APAC proclama, pues, la necesidad imperiosa de que el recuperando tenga una religión, crea en Dios, ame y sea amado, sin importar este o aquel credo y, mucho menos, sofocándolo con llamamientos que lo angustien en lugar de hacerlo reflexionar (Ottoboni, 2002, p.59).

Hay que hacer notar que la religión es un elemento de suma importancia en la metodología APAC debido a que ayuda al recuperando a su crecimiento personal, le da esperanza y es un factor que sirve para despertar en él su conciencia y su responsabilidad.

Oración de las recuperandas de APAC:

Señor Jesús,

Tú viniste al mundo para liberar a todos los pecadores y condenados.

A las víctimas de las tinieblas y del error, les trajiste la luz de la verdad.

A las víctimas del pecado y de la muerte, les trajiste el perdón y la vida.

A las víctimas del odio, de la violencia, de la guerra y del remordimiento, les trajiste la caridad, la mansedumbre y la paz...

Tú, Señor, nos conduces a caminar por el verdadero camino del bien, de la justicia, de la felicidad...

Tú nos señalas y caminas con nosotros, los nuevos rumbos de la honestidad, del respeto, de la ética humana y cristiana...

Señor,

Bien sabemos y comprendemos que condenas los actos de todos aquellos que persisten obstinadamente en recorrer los caminos del crimen, del vicio, del desamor y de la muerte...

Señor,

Tenemos certeza y confianza que no abandonas a tus hijos e hijas, que sucumbieron a la tentación del maligno, hoy condenados al sufrimiento de una prisión cuyo término no se divisa...

Tú viniste, "para salvar lo que estaba perdido", para dar oportunidad de vida nueva a todos, mediante el don de tu propia vida, como holocausto por la remisión del mundo...

Gracias Señor,

Porque en tiempo todavía oportuno, tú viniste a mi encuentro, a través de hermanos de verdad, que me arrancaron de la perdición, dando sentido nuevo y contenido a mi vida tan desvariada.

Danos señor,

Un corazón renovado, un corazón de niño, abierto, simple, sincero, acogedor y fraterno. Transforma nuestra voluntad para que sea atraída únicamente por el bien, ilumina nuestra inteligencia para que contemplemos todo bajo el claro de tu luz... Penetra en nuestros sentimientos para que se identifiquen con tus sentimientos...

En fin, Señor,

Después de este peregrinar terreno, ábrenos de par en par los portones de la felicidad eterna.

¡Amén! (Ottoboni, 2002, pp. 243- 244).

- ✓ *La asistencia jurídica.* Una de las mayores preocupaciones del condenado, sino la primera, se relaciona con su situación jurídica. Todo el tiempo el recuperando está preocupado en saber el estado de su proceso para calcular el tiempo que le resta en la prisión.

El profesional del derecho que atiende a los recuperandos necesita tener conciencia de la situación que envuelve al ser que cumple pena privativa de libertad, para dar respuestas

adecuadas y oportunas a las preguntas formuladas por él. A sabiendas que el 95% de los internos carecen de recursos para contratar su propio abogado (Ottoboni, 2002, p. 59).

- ✓ *Asistencia a la salud.* El propio sistema de prisiones en muchos de los casos es responsable de las enfermedades físicas y mentales de los reclusos. Debido a ello se requiere una asistencia médica y psicológica pronta para alcanzar en el condenado una mejor calidad de vida durante el cumplimiento de la pena de prisión. Para el APAC es necesario que haya preocupación de atraer al grupo de voluntarios personal médico, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, odontólogos, etc. para que no falte asistencia a los convictos (Ottoboni, 2002, p.62).
- ✓ *Valorización humana, base del método.* Para Ottoboni (2002), el preso crea máscaras, se muestra valiente, despreciativo, pero en el fondo es frágil. Por eso el método tiene por objetivo colocar en primer lugar al ser humano y, en este sentido, todo el trabajo de los voluntarios debe dirigirse a reformular la autoimagen del hombre que erró, se debe estimular el amor propio y por el prójimo. Llamarlo por su nombre, conocer su historia, interesarse por su vida, visitar su familia, y atenderlo en sus justas necesidades. (p. 63).
- ✓ *La Familia.* En cuanto a la familia, Ottoboni (2002, p.64) afirma: La familia del recuperando no puede, en hipótesis alguna, estar excluida de la metodología APAC, toda vez que todos los datos estadísticos dan cuenta que entre los factores determinantes de la criminalidad, la familia contribuye con el 98%.

Son hogares desestructurados, en todos los aspectos, que viven al margen de la religión, la ética, la moral, la cultura, etc. Sufren la exclusión social y acaban, por esto mismo, tornándose en fuente generadora de delincuencia.

Por ese motivo, la familia del recuperando necesita recibir atención especial del método APAC.

- ✓ *El voluntariado y el curso para su formación.* Con respecto a los voluntarios, es preciso enfatizar que el trabajo en APAC está basado en la gratuidad, en el servicio al prójimo. Para esa labor, el voluntario, verdadero apóstol de los convictos, necesita estar preparado. Su espiritualidad debe ser ejemplar, sea por la confianza que el recuperando deposita en él, sea por las atribuciones que se le conceden y que debe desempeñar con fidelidad y convicción (Ottoboni, 2002, p.67).

En su preparación, la persona que prestará este servicio participará de un curso de Estudios y Formación de Voluntarios, durante el cual ha de desarrollar sus aptitudes para ejercer ese ministerio con eficacia y observando un espíritu estrictamente comunitario. Esta actividad académica normalmente se desenvuelve en 42 clases de una hora y 30 minutos de duración cada una. Se recomienda que sean dictadas, si es posible, semanalmente dos sesiones (Ottoboni, 2002, p.69).

Según Ottoboni (2002), es importante que el voluntario tenga conciencia de que el trabajo a ser desarrollado con los recuperandos se aparta de los patrones normales, por tratarse de contactos

con personas de múltiples problemas, no siendo plausible ni admisible improvisar. Además, debe conocer la realidad de los presos y del sistema penitenciario. (p. 69).

- ✓ *Centro de Reintegración Social.* APAC creó el Centro de Reintegración Social (CRS), que tiene dos pabellones, uno destinado al régimen semiabierto y el otro al abierto, no frustrando así la ejecución de la pena.

La creación del CRS ofrece al recuperando la oportunidad de cumplir la pena en el régimen semiabierto próximo a su núcleo afectivo: familia, amigos y parientes, facilitando la formación de mano de obra especializada y favoreciendo su reintegro social, teniendo en cuenta la ley y los derechos del sentenciado. El interno no se aleja de su ciudad y encuentra, lógicamente, apoyo para conseguir una libertad definitiva con menos riesgos de reincidencia, además, de sentirse protegido y amparado como ser humano (Ottoboni, 2002, p.71).

- ✓ *Mérito.* Para Ottoboni (2002, p.72), no vale que el recuperando sea “obediente” o no a las normas disciplinarias. Eso es muy vago y de poca validez ya que en las prisiones comunes el acatamiento a las normas disciplinarias es una imposición coercitiva del sistema. El preso sabe que, de fallar en ese aspecto, tendrá su conducta comprometida para obtener los beneficios penitenciarios. No se trata, por lo tanto, de una alternativa de aquel que cumple la pena sino de una orden del régimen.

En cambio, para APAC lo que se pretende es ver al recuperando prestar servicios, en toda la propuesta socializadora, como representante de celda, como miembro del CSS, en la Secretaría, en el relacionamiento con sus compañeros, con los visitantes y con los voluntarios. Se ve, pues,

que no se trata solamente de una conducta prisional, sino de un testimonio que envuelve el mérito del cumplidor de la pena (Ottoboni, 2002, p.73).

Por esa razón, en APAC, toda tarea ejercida como las advertencias, elogios, salidas, etc.- debe integrar su proceso. Es el registro de su día a día en la prisión. Es allí donde se buscarán los elementos necesarios para evaluar su mérito y no apenas su conducta. Y es importante que sepamos que, cuando este pasa a ser lo referencial, el péndulo de la historia de la vida en la cárcel, el recuperando que cumple pena privativa de libertad comienza a comprender mejor el sentido de la propuesta de APAC, porque es por merecimiento que él prosperará, y la sociedad y él mismo serán protegidos (Ottoboni, 2002, p.73).

- ✓ *Jornada de liberación con Cristo.* Esta es el punto alto de la metodología. Son tres días de reflexión e interiorización con los recuperandos. El equipo de expositores debe estar constituido, de preferencia, por miembros del grupo de voluntarios porque son ellos quienes viven los problemas que afligen el día a día de los reclusos.

La jornada nació del imperativo de provocar una definición del recuperando en cuanto a adoptar una nueva filosofía de vida. Se divide en dos fases principales: en la primera, se procura revelar a Jesucristo a los recuperandos. Su benevolencia, su poder, su misericordia, su sencillez, su sentido de lo justo e igualdad. Para Dios todos somos semejantes y titulares de los mismos derechos (Ottoboni, 2002, p.74).

La parábola del hijo pródigo es la fiel conductora de la jornada, culminando con el retorno a su familia, en un encuentro emocionante del recuperando con sus parientes. La segunda etapa ayuda al recuperando a pasar el filme de su propia vida, para conocerse mejor. Esta actividad promueve, en esa etapa, el encuentro del recuperando consigo mismo, con Dios y con el semejante, para volver a los brazos del Padre con el corazón lleno de amor (Ottoboni, 2002, p.74).

Conclusiones.

La creencia en Dios, las actividades de formación religiosa y sus reglas de conducta han estado presentes desde sus orígenes en los distintos sistemas penitenciarios, como un medio para alcanzar el fin resocializador del infractor y, en un segundo momento, el derecho del convicto a declarar su creencia y de a rendirle culto a su divinidad ha sido incorporada al contenido de la ley, de ahí que, el operador jurídico tenga la obligación legal de reconocer y respetar la fe de todos los privados de libertad, así mismo, la creencia religiosa ha pasado de ser el fundamento del modelo penitenciario a uno de sus elementos, en donde el contenido de dichos componentes: credo, actos litúrgicos y preceptos morales deben respetar la singularidad y la diferencia que le son propias y hacen distintos el ser de cada individuo, ello está, de igual forma, reconocido en los diversos marcos jurídicos concernientes al tratamiento de los reclusos, el cual parte, en un Estado de derecho, de la dignidad, en tanto atributo del ser humano.

Parece que en el espacio de la prisión, el fenómeno religioso cumple la tarea de prevenir o reducir el deterioro que sufre la persona reclusa, por ejemplo, ella padece de ansiedad, depresión y alteraciones mentales, como consecuencia del confinamiento, segregación, disciplina y control que ejerce el Estado por medio de los funcionarios penitenciarios. La fe al parecer brinda reconciliación consigo mismo y hace más llevadero el tiempo que dura la condena.

La protección de la población marginada y desamparada por el orden social, así como, por las agencias del Estado, de manera especial, la que vive hoy el encierro de presidio bajo unas condiciones de violación permanente de derechos humanos, demanda de las organizaciones sociales hacer esfuerzos por conocer la realidad concreta de cada centro penitenciario y carcelario del país y proponer programas de tratamiento resocializador que blinden en lo fundamental la estructura psíquica del condenado de su degradación, así mismo, propiciar en el espacio social de la prisión discursos y acciones que permitan en un ambiente democrático y participativo avanzar a crear alternativas a este modelo de control social.

CUARTA PARTE

¿EL MÉTODO APAC COMO ALTERNATIVA DE RESOCIALIZACIÓN DE LA PERSONA CONDENADA ES EFICAZ? ESTUDIO DE CASO: COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EL PEDREGAL (COPED)

(...) la prisión debe ser un aparato disciplinario exhaustivo. En varios sentidos: debe ocuparse de todos los aspectos del individuo, de su educación física, de su aptitud para el trabajo, de su conducta cotidiana, de su actitud moral, de sus disposiciones; la prisión es "omnidisciplinaria". (...) la acción sobre el individuo debe ser ininterrumpida: disciplina incesante.

Foucault, Michel. Vigilar y Castigar

1. Introducción

A lo largo de este capítulo, se propone describir los hallazgos encontrados durante el trabajo de campo relacionados con la puesta en marcha del Programa Asociación y Protección de Asistencia al Condenado (APAC) en la estructura de mujeres del COPED desde la mirada de los actores involucrados en dicho proceso con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación doctoral: ¿el método APAC como alternativa es eficaz para que se resocialice la persona condenada?

Figura 12. Dibujo realizado por recuperanda Claudia Reina. 2012

Para resolver, adecuadamente, la pregunta de investigación fue necesario entender el concepto de eficacia como el *reconocimiento* que han hecho los participantes de los elementos propios del derecho y sus instituciones, tal como ha sido sugerido por el sociólogo Pierre Bourdieu (2000, pp. 206-207; cfr. Villegas, 2014). En términos de este autor: “el derecho no puede ejercer su eficacia específica sino en la medida en que obtiene reconocimiento” (2000, p. 207). Este significado presta un rendimiento importante para esta tesis, en tanto resulta extensivo, además, de las normas e instituciones jurídico-políticas, a las prácticas mismas del derecho, en general, y del derecho penitenciario, en particular, tal como ocurre con las actividades resocializantes. Tratándose del modelo APAC, la eficacia redundante, justamente, en la apropiación que hacen sus participantes (recuperandas) de las características mismas del método, las cuales tienen como finalidad la reintegración y restauración de las mismas a una vida en sociedad, esto es, recobrar las relaciones con su familia y la comunidad, a saber: participación comunitaria, recuperando/ayuda recuperando, trabajo, asistencia espiritual, asesoría jurídica, atención en salud, valorización de la dignidad humana, familia, voluntariado, en tanto responden a las condiciones en que se encuentran a sus necesidades e intereses.

Así las cosas, la correspondencia entre la noción de eficacia en Bourdieu y el significado de la cárcel como un espacio de relacionamiento social en Goffman resultan indisociables¹⁰, no solo, epistemológicamente, sino también, metodológicamente, ya que,

¹⁰ Tanto para uno como para otro autor los sujetos de una situación social determinada adoptan consciente e inconscientemente discursos y prácticas que los hacen aptos para desempeñarse en un contexto preciso; asimismo, los discursos de los sujetos se entienden como prácticas (prácticas discursivas); el sujeto

por un lado, permite afirmar que el modelo APAC e posibilita que las recuperandas asuman una identidad basada en la valorización de su parte humana, a partir de su relacionamiento consigo misma y con las otras recuperandas e individuos participantes en el método. En este sentido, el modelo permite construir una subjetividad basada en la presentación que cada una de ellas hace de su esencia a otros, a partir de los valores contenidos en el proceso, lo cual le demanda asumir, actitudinalmente, otros comportamientos, entre los cuales cabe destacar el trato respetuoso hacia otros, la solidaridad, la participación, el reclamo responsable, etc. Por otro lado, la relación entre ambos pensadores y categorías permite justificar la metodología adoptada en esta investigación, ya que aborda, directamente, la descripción, orden y análisis de las interacciones de las recuperandas para establecer su mayor o menor reconocimiento del método, a partir de sus *decires* y *prácticas* relacionándolas con su construcción identitaria, libre y responsable.

Debido a esta comprensión del término eficacia y de la cárcel como espacio de relacionamiento, esta tesis se ocupa de un estudio de caso desde un enfoque etnográfico, ya que permite comprender el significado de esta experiencia en función de la eficacia para responder a la pregunta de investigación. No sobra advertir que el estudio de caso es, en efecto, viable en las investigaciones criminológicas, ya que “es una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares” (Martínez Carazo, 2006, p. 165). De igual forma, el trabajo investigativo se centra en un “fenómeno o situación particular; es descriptivo; ilumina al lector sobre la comprensión del

competente es, a su vez, un sujeto creyente en dichas prácticas, debido a que cree en el significado que tiene el acto para él (Martín, 1998, p. 66).

caso e inductivo ya que permite al investigador formular hipótesis o conceptos generalizables” (Navarro, 2010, p. 103). Aunque hay que reconocer que, a pesar de sus fortalezas, la estrategia tiene inconvenientes. Arend Lijphart (1971; CELAEP, 2008, pp. 211-238) lo señala del siguiente modo:

... La gran ventaja de los estudios de caso radica en que se centra en un solo caso, el mismo que puede ser examinado de manera exhaustiva incluso cuando los recursos de investigación a disposición del investigador son relativamente limitados. Sin embargo, el estatus científico del método de estudios de caso es algo ambiguo, debido a que la ciencia es una actividad generalizadora. Un solo caso no puede constituirse ni en la base para una generalización válida, ni el campo para desacreditar una generalización ya establecida (2008, p. 232).

Según Stake (1994) los estudios de casos se pueden clasificar de tres maneras: intrínsecos, instrumentales y colectivos. Los intrínsecos, se caracterizan por aclarar un problema o experiencia, verbigracia, el caso clínico; los instrumentales, se identifican porque se enfocan en una experiencia particular para comprender una pregunta que va más allá del fenómeno analizado. y los colectivos, tienen fines similares a los instrumentales, pero desde un conjunto de casos. Esta tesis corresponde a un estudio de caso de naturaleza instrumental debido a que se busca darle respuesta a la pregunta de investigación desde el punto de vista de los actores involucrados en el proceso adelantado con las actividades de resocialización programadas en APAC.

Por su parte, la etnografía significa la descripción del estilo de vida de un grupo de personas, habituadas a vivir juntas (Galeano, 2004, p. 56). Su objetivo es captar el punto de vista de un grupo social concreto describiendo las acciones y los relacionamientos que se

desarrollan en dicho contexto. Para Galeano, la modalidad etnográfica se estructura sobre la base de observar, con cierto grado de permanencia, continuidad y profundidad, las actividades o circunstancias sociales objeto de interés. Por eso nos informa que el investigador debe estar donde el hecho tiene lugar. (Galeano, 2004, p. 60).

En este contexto, el papel del investigador es el de ver lo que sucede, escuchar lo que se dice, de quién se dice o qué se dice; preguntar, recoger todo tipo de información para tener claridad sobre el tema objeto de investigación (Patiño & Rojas, 2005, p. 51). Durante esta fase del estudio de caso desde un enfoque etnográfico, se pretendió describir y reconocer la construcción que hacían los actores de los significados, visiones y puntos de vista con respecto a las vivencias en los procesos de tratamiento de APAC. El trabajo de campo consistió en visitar el patio donde funciona este método durante los años comprendidos entre 2012 a 2014, con el propósito de realizar una presencia continua en el interior del pabellón con visitas de dos días a la semana. Esto fue posible gracias a la ayuda de la Confraternidad Carcelaria de Colombia, entidad encargada de administrar el programa.

Durante los años objeto de observación, participación y análisis (2012-2014), el proceso llevado a cabo en APAC estuvo caracterizado por los siguientes rasgos:

- El 27 de abril del 2012, la Confraternidad Carcelaria de Colombia dio inicio al proceso de implementación del modelo APAC en la estructura mínima de mujeres del COPED. La invitación a las prisioneras se hizo en todos los patios de forma

abierta, luego se seleccionaban las internas que cumplían con el perfil y los parámetros establecidos por el INPEC y la Confraternidad Carcelaria de Colombia.

Fueron cinco los pasos que siguieron las entidades comprometidas con el programa: el primero, *criterio de selección*: que sean mujeres que tengan la calidad de condenadas sin importar el delito cometido, sin trastorno mental o tratamiento psiquiátrico, que hayan hecho el proceso de inducción al tratamiento penitenciario, sin importar las fases en que se encuentren, que les falte un (1) año como mínimo para salir en libertad, dos meses de prueba en donde la interna puede renunciar al programa y volver, nuevamente, a las actividades que desempeñaban antes de ir a APAC. Transcurrido este periodo, el tiempo de permanencia al programa era obligatorio por seis (6) meses a un (1) año, cumplir con las reglas y normas de convivencia establecidas en el programa y obligatoriedad de participar, activamente, en todas las actividades planificadas. Segundo, *convocatoria conjunta entre el INPEC (Reinserción Social) y la Confraternidad en los diferentes patios*. Tercero, *cada interna en forma libre y voluntaria elaboró una solicitud con firma y huella*, donde manifestó que quería pertenecer a APAC y, al mismo tiempo, presentó su renuncia al programa o taller donde estaba redimiendo pena. Cuarto, *Reinserción Social* realizó los análisis de cada una de las peticiones hechas por las mujeres con el fin de decidir quiénes podían pasar al programa. Quinto, *personal de vigilancia y custodia*, que procedió al traslado de las mujeres a la estructura mínima de seguridad, donde inició APAC.

Gracias a la Confraternidad Carcelaria, fue posible observar y participar desde el programa. Como investigador se comenzó a brindar asesoría jurídica en temas relacionados con derecho penitenciario, luego con capacitaciones en derechos humanos y sus mecanismos de defensa, favoreciendo la aceptación por el grupo de mujeres vinculadas al método. Durante este tiempo, se logró estar al interior del patio alrededor de cuatro horas, desde las ocho a.m. hasta a las 11:30 a.m., los días lunes y miércoles o martes y jueves. De esta manera, se podía observar las actividades diarias que tenían asignadas las mujeres en el cronograma establecido. Posteriormente, se estuvo en reuniones programadas con los funcionarios penitenciarios y la Confraternidad, que tenían como objetivo chequear el proceso adelantado, así mismo, acudir a las distintas capacitaciones programadas sobre el método APAC, con el fin de conocer sus componentes.

El tiempo en que se estuvo observando la ejecución del método (2012-2014) se contabilizaron 118 mujeres seleccionadas por el INPEC para estar en el programa, sin embargo, no todas cumplieron el perfil establecido, previamente, lo que generó que muchas de ellas no hicieran procesos, ejemplo: una interna ingresó el 14 de mayo del 2012 y salió en libertad el 7 de junio del mismo año, su proceso duró 23 días. A esto se le suman las renunciadas que las presas presentaron de forma voluntaria al programa, más los traslados de algunas de ellas.

Como resultado de esta realidad, se pudo escoger como unidad de análisis a 24 mujeres que cumplieron, cabalmente, con el perfil de permanencia establecido por el programa. Ellas reúnen las siguientes características: todas provienen de una estructura

familiar conformada con un promedio de cinco a seis hermanos, hijas de padres desunidos o huérfanas, con un promedio de edad entre 20 a 40 años, madres solteras, viven en casas arrendadas o en la propiedad de sus madres, con nivel escolar básico, desempeñaban como actividad laboral oficios varios o empleadas domésticas. En relación con los delitos, se tiene que están condenadas por atentados al patrimonio económico, salud pública, seguridad pública, libertad individual y otras garantías, y, por último, la fe pública.

De las 24 mujeres, durante 2012-2014, se recogieron 93 diarios de campo que corresponden a 20 meses de observación que, en términos de presencia real en el pabellón de APAC, suman 372 horas sin intermitencias ni suspensiones. Así mismo, se tienen documentos de la Confraternidad Carcelaria de Colombia que aluden al proceso que rodeó al programa desde el año 2011 al 2016. De igual manera, se contó con los escritos del INPEC que dan fe de requerimientos, evaluaciones y planes de mejoras desde 2011 hasta el año 2016. Así las cosas, la base documental es, considerablemente, amplia y confiable para generar los resultados que esta investigación presenta sobre la eficacia del programa APAC, especialmente, en su fase de implementación (abril de 2012) y ejecución (mayo de 2012).

De otro lado, durante la construcción de los datos etnográficos, el investigador se enfocó a la producción, recopilación y análisis de la información recogida desde un punto de vista *cualitativo*, aumentando, comparando y validando el análisis, a partir de entrevistas a profundidad, grupos focales y talleres, con el fin de escuchar a los actores sobre sus vivencias y apreciaciones sobre el programa, esto es, a las 24 recuperandas del método. De igual forma, se recogieron las voces de diferentes sujetos que intervinieron en el proceso,

tratando de buscar el conocimiento interpersonal desde la prisión, puesto que ese es el lugar donde ocurren las interacciones sociales con sus significados. Gracias a ello, se obtuvieron, durante todo este tiempo, tanto datos procedentes de los documentos referidos, como los puntos de vista de expertos y funcionarios que posibilitaron sistematizar y triangularizar la información con el uso de técnicas de análisis de datos cualitativos como el *software* Atlas.Ti, destacando, principalmente, las prácticas discursivas de las recuperandas de acuerdo con los elementos del modelo APAC, los cuales nos permitieron comprender e interpretar, mediante las unidades hermenéuticas del *software*, la eficacia del tratamiento penitenciario en el entorno del pabellón APAC.

Así las cosas, el análisis constó, además, de un número considerable de fuentes documentales, de un ejercicio lógico de interpretación, lo cual constata la confiabilidad de los resultados de este trabajo investigativo sobre la eficacia del programa. Recuérdese que el modo de evaluar los resultados se realizó mediante un ejercicio documental exhaustivo, en el que se destaca, principalmente, la voz de sus intervinientes.

Con respecto a la composición, la escritura de este último capítulo, como uno de los cuatro momentos del proceso investigativo, permitió hacer énfasis analítico y experiencial en los argumentos y las conclusiones contenidos en los tres capítulos anteriores, haciendo hincapié en las narraciones de los actores para lograr responder a la pregunta y los objetivos planteados en el estudio. En esta tesis, la parte teórica es indisoluble de la parte experiencial, ya que una y otra responden, progresivamente, a la pregunta de investigación. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con el diseño metodológico, en este capítulo se

identificaron, inicialmente, unas categorías de análisis que fueron ajustándose y aumentando durante el proceso de análisis de los hallazgos, naturalmente, estas categorías están en directa correspondencia con los componentes del programa, con el propósito de realizar su lectura de acuerdo con la eficacia del mismo. En este sentido, las categorías fueron divididas en tres niveles, a saber: categorías nivel 1: APAC, *resocialización*, *autoidentidad*, *institucionalidad*, *espiritualidad*, *educación y trabajo*. Dentro de cada una de las categorías de nivel 1, se definieron dos subcategorías de niveles 2 y 3, por ejemplo, dentro de la categoría 1 denominada APAC, se definieron como categorías de niveles 2 y 3 las siguientes: sentido, componentes, características, relaciones, implementación, experiencia (nivel 2). Participación de la comunidad, recuperando/ayuda recuperando, trabajo, asistencia espiritual, asistencia jurídica, asistencia en salud, valorización de la dignidad humana, familia, voluntario y su formación (nivel 3). Es importante señalar que estas categorías de análisis, fueron transversales y orientaron todo el proceso de investigación tanto teórico como experiencial, al tiempo que permitieron otorgar unidad al análisis de los diarios de campo, las entrevistas y los grupos focales (Véase tabla de códigos Atlas Ti, capítulo Metodología).

Con estas precisiones, es necesario señalar que el propósito fundamental de este escrito, como momento final del proceso de investigación, es dar a conocer la forma en que los actores involucrados asumen los procesos adelantados en el programa, destacando sus prácticas discursivas (percepciones, opiniones, sentimientos), a partir de la voz de los actores involucrados que, sumados a los análisis teóricos y a la interpretación de los datos recogidos en campo, pueden determinar la eficacia del programa para alcanzar los fines de

la cárcel (resocialización). Las personas que están involucradas en el método son quienes adelantan día a día las actividades, se adaptan a las normas establecidas, adecuando y resignificando el espacio, construyendo un hábitat. Ellos son los que pueden dar cuenta del sentido de la experiencia y de sus objetivos resocializadores. En este capítulo se reproducen, en términos lógicos y analíticos, los datos obtenidos y la significación atribuida por sus beneficiarios. En este sentido, se hace un acercamiento etnográfico al método APAC, apropiado apto y resemantizado por los miembros que tienen interés en él. A partir de este momento, se presentan los datos obtenidos del ejercicio experiencial de investigación, el cual debe ser leído considerando los capítulos anteriores.

2. Programa Asociación y Protección de Asistencia al Condenado (APAC)

a. APAC

Este acápite reúne las experiencias e interpretaciones hechas por los actores sociales e institucionales en relación a la noción de los componentes del método y de su alcance en la transformación de la subjetividad de las recuperandas.

Sentido

Hay cuatro maneras de acercarnos a esta significación. Desde la mirada de los capacitadores de la Fraternidad Brasileira de Asistencia a los Condenados (FBCA) para Colombia la metodología APAC es un “modelo que permite poner una carga de humanidad a favor del preso”. (p24: diario de campo 30 (diciembre.03.12) rtf - 24:1).

Así mismo, consideran que mientras caminan hacia una sociedad incluyente trabajan para que con las APAC las prisiones sean más humanas, acogedoras y cuidadoras de los que allí llegan: “APAC es solo un peldaño en la escalera, el sueño mayor es un mundo sin cárceles” (P382: entrevista (1).rtf - 382:15).

Para la Confraternidad Carcelaria de Colombia, la importancia de la metodología APAC, está en la posibilidad de ofrecerles a los prisioneros mediante los elementos que trae la metodología, condiciones para que se recuperen (P389: Entrevista 1.rtf - 389:1). Valorando de manera integral al ser humano, teniendo en cuenta para la reintegración, el carácter biosicocultural del ser humano desde tres valores fundamentales: el amor, la disciplina y la confianza (P379: Entrevista rtf - 379:1, 36).

La finalidad central de la Confraternidad Carcelaria tras del programa es la de transformar espiritualmente los valores y las creencias de las recuperandas, así como las formas en que interactúan con su yo interno y con los demás, en el contexto de una nueva relación con Dios. Esto bajo la premisa de que el Señor ama a todos los humanos, y que todas las personas se deben reconciliar consigo mismas, con el prójimo, con la creación y con el Altísimo (P194: plan ejecución pedregal 2011-2.rtf - 194:13).

De otro lado, el personal penitenciario administrativo (dirección y capellán) señala que vienen de un modelo o sistema opresivo y afirman no conocer la metodología APAC. No obstante, al parecer esta tiene una nueva visión y consideran que es una oportunidad para el

sistema de prisiones. Asumen que es un programa de mejoramiento del ser humano que se fundamenta en revivir los valores de cada quien. Es darle una nueva oportunidad a la persona condenada (P378: entrevista.rtf - 378:11). De igual forma, es un plan integral de ayuda al interno en búsqueda de su resocialización. (P380: entrevista.rtf – 380:15).

Sin embargo, existe una notable diferencia en el personal de vigilancia y custodia. Estos interpretan otra cosa. Están inconformes con el patio de APAC, ya que consideran que es un pabellón con privilegios a los privados de libertad y muy distinto a las demás secciones de la estructura de mujeres. (P378: entrevista.rtf - 378:17).

Este entendimiento por parte de la guardia se recoge cuando uno de ellos dice: “APAC es una alcahuetería pues las señoras que son voluntarias no alcanzan a conocer lo suficiente a las reclusas y ellas, las internas, se hacen las sufridas ante las voluntarias para su propio aprovechamiento”. (P80: diario de campo 81(septiembre.02.13).rtf - 80:2.).

En relación con las recuperandas, se puede advertir lo siguiente: ellas parten de no desconocer que el pabellón donde funciona APAC es un lugar de castigo (p76: diario de campo 78 (agosto.22.13).rtf - 76:2), pero distinto a los demás patios que funcionan en la estructura de mujeres.

A saber, en los otros patios, el número de internos es muy elevado en comparación con el espacio que los alberga, razón por la cual se presentan infinidad de actos de violencia física y verbal (p50: diario de campo 54 (marzo.20.13).rtf - 50:1), además, se encuentra

lesbianismo y alucinógenos, hechos que entorpecen los planes de tratamiento. A renglón seguido, aluden al dinero y al tiempo de la redención como lo que motiva al prisionero para participar de las actividades de educación, trabajo y enseñanza, sin eso no hay para ellos procesos de resignificación (p35: diario de campo 40 (enero.08.13).rtf - 35:4).

De otro lado, afirman que “los patios son una guarida de ladrones (p73: diario de campo 75 (agosto.08.13).rtf - 73:1) en donde la ley es ver, oír y callar (p22: diario de campo 29 (noviembre.28.12).rtf - 22:3). De modo, que las emociones se disparan permanentemente de tantos pensamientos que se entrecruzan, ¿cómo hacer para controlar las emociones?”. (P26: diario de campo 32 (diciembre 11.12).rtf - 26:2). De estos relatos, podemos inferir las consecuencias posiblemente irreparables para la psicología de la mujer privada de libertad.

En tanto que APAC se considera como “un centro de recuperación social” (p22: diario de campo 29 (noviembre.28.12).rtf - 22:3) que las prepara para enfrentar la vida basándose en lo espiritual (p11: diario de campo 18 (octubre.23.12).rtf - 11:1), pero para estar allí se necesita de mucha disciplina y sometimiento (p56: diario de campo 6 (agosto.09.12).rtf - 56:2; p76: diario de campo 78 (agosto.22.13).rtf - 76:3).

Podemos concluir que, efectivamente, la intervención a la estructura física del patio donde ha funcionado APAC, como la presencia permanente de los voluntarios y coordinadoras en él, propician un entorno que brinda tranquilidad y confianza para que la recuperanda se lance a una transformación de su estilo de vida, descubra sus potencialidades y se recree así misma, de igual forma, reduce los efectos de la prisionalización al poder sentir que no se encuentra neutralizada por el orden social.

En este sentido manifiesta una de ellas “APAC como lugar de prisión es especial porque vivimos en familia, acá se cumple la condena con valoración, descubrimos nuestros dones, nuestros talentos y ya no estamos aisladas” (p27: diario de campo 33 (diciembre.12.12).rtf - 27:3).

Fotografía 2. Patio de APAC. 2012

Fotografía 3. Recuperandas y voluntarios.2012.

Componentes

El programa APAC como método de tratamiento consta de los siguientes componentes: participación de la comunidad, recuperando/ayuda recuperando, trabajo, asistencia espiritual, asesoría jurídica, atención en salud, valorización de la dignidad humana, familia, voluntario y su formación, centro de reintegración social, mérito, jornada de liberación con Cristo y justicia restaurativa.

De estos elementos, no se han podido implementar el centro de reintegración social, mérito, jornada de liberación con Cristo y la justicia restaurativa. Con respecto al resto de

los componentes, se puede decir que el trabajo de sondeo y de campo arrojó mayores datos de los cuales se pueden derivar las respectivas significaciones para los actores del proceso.

Valorización humana y asistencia espiritual

Para Valdeci Ferreira, director de la Fraternidad Brasileira de Asistencia a los Condenados – FBCA –, los elementos que conforman la metodología de APAC se pueden sintetizar en dos: la valorización humana y la asistencia espiritual. La valorización de la dignidad humana fundamenta o sirve de base al método (P382: entrevista valdeci (1).rtf - 382:1) en tanto ayuda al prisionero a desarrollar la conciencia de su dignidad como a potencializar todas sus capacidades (P382: entrevista (1).rtf - 382:2).

En efecto, se puede evidenciar que las recuperandas llegaron al programa con una imagen negativa como resultado de la tacha, estigmatización y rol que les han asignado en el orden social a lo largo de su trayectoria, pero en APAC han logrado a partir de la interacción en las distintas jornadas académicas y terapéuticas con los voluntarios del proyecto, reencuentros significativos consigo mismas para redefinir esa imagen, y hoy se asumen con una valoración asertiva de su ser. Por ello afirman:

En el tema de valores, como mujer, creía que el valor me lo daba otra persona, uno mismo es el que se valora y recibe el trato de otros de acuerdo a (sic) eso; el respeto lo veo aprendiendo a amar a mi familia y dándoles un trato más especial a mis hijos. (p89: diario de campo 9 (septiembre.05.12).rtf - 89:7).

Este cambio se ha dado mediante el establecimiento de los valores inherentes a su naturaleza humana y de la mejora de los vínculos afectivos para que incorpore y adopte estas virtudes en la interacción social. APAC utiliza para ello, entre otras estrategias, una terapia de la realidad.

Explica Valdeci que esta terapia consiste en ayudarle a la recuperanda a darse cuenta que “necesitan reconocer sus errores para poder continuar con nuevos proyectos de vida, a (sic) pensar con los pies en la tierra sobre su realidad y darles a entender que no va a ser fácil su retorno a la sociedad”. (P382: entrevista valdeci (1).rtf - 382:1).

Vemos que la implementación de esta terapia logra que las recuperandas efectivamente incorporen los valores y a la vez reflexionen sobre su realidad:

Estamos en este lugar con las emociones afectadas por la vida pasada: maltratos, abandono familiar, violación de derechos por parte del estado (sic). Llegamos a APAC con la esperanza que todo cambiara sin desconocer que seguimos regidos por un sistema que no cambia, así queramos cambiar pensamientos, hábitos y aptitudes (p90: diario de campo 90(febrero.13.14).rtf - 90:1).

En este sentido, manifiesta un funcionario de la dirección del establecimiento penitenciario, que ha venido observando que las privadas de libertad que pertenecen al APAC se están dando cuenta de que “ellas valen por lo que son y no por el rango que ocupa (sic) en el mundo delictivo” (p378: entrevista.rtf - 378:9).

En entrevista hecha a la actual directora del APAC sobre esa percepción, explica que ello ha sido posible gracias a un cambio de la autoimagen para el direccionamiento del autoconcepto hacia su valorización (p388: entrevista.rtf - 388:11).

Hay que destacar que el método APAC responde positivamente a la pregunta de la investigación debido a que ha tomado en cuenta los grandes beneficios para el tratamiento penitenciario del condenado y su integración social, estimando a las recuperandas como personas valiosas, a pesar de estar cumpliendo una pena privativa de libertad.

Fotografía 4. Recuperanda. 2012.

Con respecto a la asistencia espiritual, explica Valdeci (P382: entrevista valdeci (1).rtf - 382:11) que la tarea de los voluntarios es hablarle a los privados de la libertad acerca de un Dios bueno, misericordioso, que está esperando a que el hijo retorne a pesar de los errores o pecados en que haya incurrido porque para el Señor el hombre es mayor que su error, culpa o pecado, tal y como reza en el evangelio según San Lucas, capítulo 15.

Luego que el recuperando tenga un encuentro personal con la divinidad, ya se halla en las manos de Dios. De esta forma, el elemento de la valorización humana y la asistencia espiritual se encuentran para producir sintéticamente un ciudadano de bien que contribuya a la construcción de su país (Ibíd382:11).

Esta forma de comprender la asistencia espiritual es compartida por una de las coordinadoras de APAC cuando en entrevista realizada se le preguntó por este componente:

Cuando el ser humano se encuentra cara a cara con su creador (sic) comprende cuál es su papel en este mundo, su propósito, es mejor ser humano, no hace al otro lo que no le gustaría que le hicieran a él, mira al otro como semejante, se recupera emocionalmente, reconoce sus errores, su pecado, pero sobretodo comprende cuánto lo ama Dios, entiende el significado de la muerte de Cristo en la cruz. (p390: entrevista.rtf – 390:26).

De igual forma, el presidente y representante legal de la Confraternidad Carcelaria de Colombia (p389: entrevista 1.rtf - 389:5) explica la asistencia espiritual como un componente del método para el encuentro entre Dios y el recluso, y una vez este se dé, la persona recupera o adquiere valores como el respeto a la vida, honestidad, convivencia y compromiso que son fundamentales para una conducta saludable.

En el mismo sentido se pronuncia el capellán católico del COPED pues considera que Cristo es el que trasforma. Jesús es la columna vertebral, el alma, la vida y el corazón para ser mejor persona (p380: entrevista 1.rtf - 380:90).

De otro lado, para las recuperandas (p387: grupo focal.rtf - 387:123 - 138) la asistencia espiritual recibida en APAC ha sido importante para el cambio que han hecho en sus vidas y en la manera de pensar. Ya no son tan groseras, pecadoras, resentidas y confían que Cristo es quien las guía y las lleva por el mejor camino, han aprendido a enamorarse de Dios.

Afirma una de ellas que:

La fe es la convicción de lo que no se ve y se espera. Yo antes cuando estaba en la guerrilla no creía en Dios y ahora creo gracias a la fe que he tenido. He experimentado la fe que he puesto en Dios. He cambiado mi vida. Cada día aprendo a conocer más a Dios. (p387: grupo focal.rtf - 387:130).

El componente espiritual es eficaz en el proceso de tratamiento gracias a que la creencia en Dios implanta en el ser de la recuperanda representaciones que le cambian las estructuras mentales que la llevaron a delinquir por unas ideas de autocontrol que influyen enérgicamente sobre su conducta y la manera de relacionarse socialmente.

Es posible que este componente sea problemático en el caso de atribuir al privado de libertad toda la culpa de su condición de prisionero. Hay que tener en cuenta que el condenado puede entender su estado como una consecuencia de su forma de actuar o de sus decisiones equivocadas, a razón de encontrarse apartado de Dios, a su desobediencia o a su ignorancia en el conocimiento del Señor.

Sin embargo, ese Dios lo espera con los brazos abiertos para consolarlo y hacer de él una mejor o sana persona. APAC deja por un lado el análisis de la estructura social, por el otro, la forma de gobierno imperante, como es el neoliberalismo, para dar cuenta de la causa del fenómeno criminal, además, se niega aceptar como la instrumentalización política que históricamente se ha hecho de la creencia religiosa sirve para tener controlada la población desposeída, hoy mayormente prisionera por parte de los grupos imperantes.

Ahora bien, la terapia del principio de realidad utilizada en el método APAC debe ser acompañada de procesos de educación ciudadana, ética y política para que la recuperanda logre avanzar en el entendimiento de su entorno social, político y económico, es decir, la idea es pensarse en torno a la culpabilidad por el hecho punible, en la medida justa: hasta dónde va su responsabilidad y en dónde inicia la del sistema imperante.

Familia

Con respecto al componente de familia, la Confraternidad Carcelaria ha constatado que en la gran mayoría de los hogares a los que pertenecen las recuperandas hay una particularidad disfuncional y desestructurada con motivo de la exclusión que ha padecido ese sector social.

En algunos casos estas familias son fuentes generadoras de delincuencia, y de violencia física corporal y psicológica, lo cual incidió en la recuperanda a optar por el mundo delictivo. De acuerdo con Valdeci (p385: entrevista (4).rtf - 385:1) “el preso es el resultado

de una familia enferma, doliente y cada vez más desestructurada”. A ello refiere la siguiente anotación:

Si esa recuperanda tiene una familia disfuncional, tiene una familia que está vendiendo droga, tiene una familia que está consumiendo alcohol, tiene una familia que tiene muchas dificultades, anda metida en el mundo de la delincuencia entonces para nosotros es vital que si a esa familia la encontramos con esas condiciones también hagamos un proceso con ellas, porque la idea es que recuperemos ese marco familiar (p381: entrevista 2.rtf - 381:5)

En materia de tratamiento penitenciario, el componente de familia es de suma importancia en tanto le permite a la mujer que se encuentra condenada a creer en su proceso de recuperación y reintegro social. Verse en compañía de sus seres queridos en un momento en el que pretende resignificar la conducta dañosa por la cual se encuentra privada de libertad, fortalece su idea de construir un proyecto de vida.

Para poder alcanzar esa meta del APAC, se ha promovido, desde diferentes esferas, la restauración y fortalecimiento de vínculos que por muchas razones se encuentran fracturados, mediante encuentros familiares, visitas a las familias y, en casos puntuales, asistencia social. En un encuentro familiar, una de las recuperandas (p85: diario de campo 86(septiembre.19.13).rtf - 85:2) afirmó:

Este tiempo de familia jamás lo podremos olvidar. Estar junto a mis hijos, verlos disfrutar el almuerzo, decirles que los amo sin afanes y con tranquilidad, abrazarlos muchas veces. Esto

sólo (sic) lo ofrece APAC, en el sistema común no se puede (sic) vivir estos tiempos de familia.

Se debe recordar el estereotipo social de idealizar a la mujer como un miembro del bien para su núcleo familiar en su papel de madre o esposa, en cambio a la privada de libertad la presenta como un ente del mal y la única responsable de la ruptura del hogar. Ser consciente de este estigma la condiciona de allí en adelante para cualquier interrelación con sus seres queridos. APAC es un modelo que puede ser eficaz, en tanto reduce significativamente los efectos psicológicos irreparables que el hecho de estar en prisión comporta tanto en la mujer en condición de prisionera como en sus allegados.

Por esto consideramos que APAC es un método que se debe tener en cuenta en el sistema de prisiones colombiano. El objetivo de restaurar el vínculo entre el recuperando y sus seres queridos con los encuentros de familia se ha logrado. De ello quedan un sinnúmero de evidencias en las distintas declaraciones de las recuperandas, donde afirman que esta actividad les permite unirse nuevamente a la familia, tener contacto piel a piel con sus seres queridos después de tantos años sin verlos y prepara a los hogares cuando retornen a ellos una vez obtengan la libertad. A las mujeres, les da ánimo y valor para alcanzar el proceso de recuperación que han iniciado (p148: escritos de diferentes preguntas.pdf – 148).

Figura 13. Relato de recuperandas. 2013.

Participación de la comunidad y del voluntariado

Para la Fraternidad Brasileira de Asistencia a los Condenados – FBCA –, sin estos componentes no hay oportunidad de cambio para las personas privadas de libertad (p382: entrevista 1.rtf - 382:17).

Esta idea es compartida por la Confraternidad Carcelaria debido a que el modelo de tratamiento propuesto por APAC depende en gran parte del compromiso genuino de la gente para con la mujer en condición de privada de libertad. Ello desde lo económico y desde el tiempo que el voluntario entrega en las actividades programadas (p389: entrevista 1.rtf - 389:2).

En pocas palabras con estos componentes se pretende:

Estos elementos son fundamentales para APAC, (sic) porque aquí es donde permite que los costos a través (sic) del involucramiento de la comunidad se reduzcan, un preso le cuenta (sic) al estado (sic) alrededor de \$1.500.000 mil pesos mensuales, APAC a través (sic) del involucramiento de profesionales de manera voluntaria de empresas y demás está permitiendo que los costos se reduzcan y también que la sociedad vaya perdiendo el sesgo, el estigma que tiene hacia los privados de la libertad (p390: entrevista.rtf – 390:19).

El involucramiento de la comunidad y del voluntariado es de suma importancia dentro de un proceso de tratamiento debido a que rescata el papel activo de la sociedad en la transformación positiva de las mujeres privadas de libertad.

Figura 14. Relato de recuperandas. 2012.

Este componente es eficaz debido a que logra movilizar y articular a la red social de apoyo. La coordinadora de la red social de apoyo de la Iglesia católica se dirige a las recuperandas en los siguientes términos:

El programa ha impactado positivamente por ello queremos trabajar en alianza con la confraternidad (sic) Carcelaria, debido a que estamos convencidos que el método de (sic) APAC permite la resocialización, y estamos dispuestos a apoyar con personas que apadrinen a las internas y sus hijos, y a profesionales que las acompañen. (p41: diario de campo 46 (febrero.12.13).rtf - 41:2).

La presencia de la comunidad en este espacio permite correr velos y conocer de las ocultas prácticas de castigo y dominación adelantadas por algunos funcionarios penitenciarios que no comparten en estas instituciones iniciativas de humanización en el trato, pese a ser un entorno en el que debería imperar por el principio de estricta legalidad los derechos fundamentales de todos los privados de libertad para una reintegración social positiva, así como la transparencia de las actuaciones de los administradores de los centros de reclusión-cárceles y prisiones.

Por último, la comunidad y los voluntarios pueden estar al tanto y hacer pública la penuria económica en que viven allí la gran mayoría de mujeres privadas de libertad, así como de las condiciones de abandono estatal y, en muchos casos, familiar en que se encuentran.

Lo anterior, para despertar sentimientos de ayuda y transformación en los actores

sociales con el fin de obtener un sistema de prisiones mejor que el que existe o cercano a la legalidad estipulada en los tratados internacionales y al respeto de los derechos fundamentales de las privadas de libertad. Acceder a esta verdad a través del APAC lo hace eficaz. Gracias a este programa algunas universidades de la ciudad tienen presencia en el centro penitenciario y carcelario mediante los programas académicos de proyección social:

Se matricularon 16 recuperadas (sic) en el Diplomado (sic) en ética (sic) y Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas (sic) con sede en Medellín el cual fue aprobado mediante consejo de facultad (sic) y delegado el observatorio (sic) de Victimologia (sic) para la realización (sic) seguimiento y evaluación del mismo (p102: informe flor semestral 2015.rtf - 102:2).

Trabajo

Para la Confraternidad Carcelaria el sentido atribuido al componente del trabajo es doble. Primero, cumple el rol de romper con el ocio y el tiempo libre en el que se encuentra la gran mayoría de privados de libertad durante el cumplimiento de la condena. Sin embargo, afirman que dentro del método APAC es un elemento más debido a que está comprobado que este por sí solo no recupera (p389: entrevista1.rtf - 389:4).

Segundo, el trabajo es un elemento en su inicio fundamentalmente terapéutico en donde la recuperanda explora sus habilidades y destrezas que le permiten saber en qué es buena y qué puede hacer. Luego hay que llevarla progresivamente a procesos de industrialización

para el reintegro social (p388: entrevista.rtf - 388:4; p390: entrevista.rtf - 390:24, p389: entrevista1.rtf - 389:4).

En cambio, para los administradores penitenciarios es lo más importante para el desarrollo personal del privado de libertad, en tanto el trabajo crea en él estructura, disciplina y valores como el de salir adelante sin delinquir (p378: entrevista.rtf - 378:5).

En cuanto a las recuperandas, son tres los significados que le otorgan al componente del trabajo. El primero es que las aleja de la depresión y de las preocupaciones creadas por el encierro, el segundo es que les permite identificar que pueden y son capaces de aprender un arte o una manualidad, el tercero es que les enseña a ser responsables y las proyecta para su futuro fuera de la prisión (p387: grupo focal.rtf - 387:260 - 272).

Fotografía 5-. Muestra de manualidades. 2012.

Hay que hacer notar que APAC por medio de este componente crea entornos de terapia laboral que le permiten a la recuperanda despertar las habilidades favorables para las conductas socialmente aceptadas. No obstante, no se observa que el programa avance en la cualificación de la recuperanda acorde con sus aptitudes así como a las demandas de trabajo propias del mercado.

Se constató como única opción de trabajo la llegada y puesta en funcionamiento de una maquila de confección en donde previamente se capacitó a las recuperandas en su manejo, pero lo devengado por estas labores no se ajusta a la norma laboral.

Por esto creo que en este componente, pierde eficacia a razón de no abrir oportunidades laborales que en el futuro le permitan a la recuperanda conservar su libertad, a título de ejemplo citamos lo que una de ellas afirmó: “yo le he dicho a la confraternidad: cuando me vaya en libertad yo no voy a coger una aguja, prefiero morirme de hambre” (p 7: diario de campo 14 (septiembre.19.12).rtf - 7:6).

Recuperando ayuda a recuperando

La metodología con el fin de resignificar a la mujer en condición de privada de libertad le otorga el nombre de recuperanda oponiéndose de esta forma a los significados sociales negativos que se le confiere con expresiones como “presa, reclusa, ”; de igual forma, en el patio de APAC quieren romper con la idea general que tienen los penados: en ese lugar de lo

que se trata es de sobrevivir, o de la ley del más fuerte, logrando con ello transformar el egoísmo propio del ser humano (.p389: entrevista 1.rtf - 389:3; p390: entrevista .rtf - 390: 21; p379: entrevista.rtf - 379:2; p194: plan ejecución pedregal 2011-2.rtf - 194:2).

Aceptada la existencia de la prisionalización, esto es, la mujer en estado de privada de libertad, va perdiendo de forma gradual su pensamiento particular y el control de su propia vida, al tiempo que incorpora en mayor o menor nivel las prácticas y conductas de la subcultura carcelaria. Se ve positivo que en APAC se plantee, como una de sus aspiraciones, reducir los efectos negativos que esta experiencia genera en el ser humano mediante el valor del apoyo mutuo.

Es preciso mencionar que respecto a este tema se les preguntó a las recuperandas cuáles son las dificultades de llevar a la práctica la parte de este componente del método y esto fue lo que contestaron: es un cambio muy brusco someterse a las normas, ceder a la metodología, así como al carácter de cada una de nosotras sumado al estrés producido por el espacio hermético y monótono del día a día, esto se ha convertido en obstáculo para apoyar o ayudarnos las unas a las otras (.p148: escritos.rtf - 148:5).

En lo que se refiere a la creación de la figura *recuperandas*, observamos que las privadas de libertad han perdido desde el primer día que hacen su ingreso a la prisión el nombre. De ahora en adelante, será bautizada con un número único de identificación (NUI) más uno consecutivo de registro TD por parte del sistema de información SISIEC WEB como de los administradores penitenciarios.

Ahora sufre una nueva pérdida, la de su propio carácter, más la de un actor que está en disputa por la transformación identitaria de su alma con la propia institución: para esta, la mujer privada de libertad es una “interna” de la cual se espera la forma de ser estándar impuesta para ella. En cambio estando en APAC, las mujeres privadas de libertad se asumen como si se tratara de una nueva socialización de “unas personas en cambio del ser y del espíritu; en recuperación, transformación, ya no somos internas o condenadas sino recuperandas”. (p387: grupo focal.rtf - 387:34 – 48)

APAC propone llamarlas recuperandas porque es un término que identifica mejor al privado de libertad ya sea en hombres o en mujeres:

La palabra recuperando se toma a raíz de que se hace un análisis con los calificativos a las personas que pierden la libertad, (sic) preso, delincuente, recluso, prisionero, interno, entonces en un seminario que se hizo (sic) reflexión en Argentina, en Ecuador, (sic) en Brasil sobre el nombre que se le debería dar a la persona que debería estar en APAC se encontró recuperando, porque lo que hace APAC es recuperar a esa persona, recuperarlo (sic) para regresarlo a la sociedad, el término mismo da de por sí (sic) un calificativo, (sic) que identifica mejor a la persona que está en prisión. (p389: entrevista 1.rtf - 389:3).

Sin embargo, los administradores penitenciarios son de la idea de que “hablar de recluso o recuperando a pesar de que (sic) significan (sic) lo mismo”. Con la palabra recuperando le estamos dando importancia a la persona”. (p378: entrevista.rtf - 378:4) Con esto dan señales de no estar dispuestos a resignificar sus estereotipos de la noche a la mañana.

Mientras que la Confraternidad Carcelaria y la administración penitenciaria luchan por absorber el perfil humano de la mujer privada de libertad, algunas de ellas están dispuestas a resistir para mantenerse durante el tiempo que dure la pena mediante la creación de estrategias y prácticas individuales y posiblemente colectivas de hacer creer que su subjetividad se ha doblegado y está sujeta a las condiciones propuestas por los agentes del tratamiento penitenciario, tal y como lo explicó Goffman: “ella dará a entender al uno y al otro que pueden confiar y contar con ella en el momento en que la requieran” (1961: 70 – 72).

Experiencia e Impacto en su Implementación

El propósito de esta parte es no sólo aproximarnos a las representaciones y actuaciones que los distintos actores tomaron en relación a APAC durante el proceso de implementación y ejecución del método, sino que también permita dar a conocer la forma en que este proceso impactó la vida de las recuperandas.

El 27 de abril del 2012, la Confraternidad Carcelaria de Colombia dio inicio al proceso de implementación del programa APAC EN la estructura mínima de mujeres del COPED, con un total de 24 recuperandas que ingresaron, paulatinamente, al mismo como se muestra a continuación: abril 27: 10, mayo 14: 8, mayo 15: 1, mayo 18: 1, mayo 23: 4 (p164: Ago. 21 2012 informe preliminar.rtf - 164:86 - 91).

Fotografía 6. Estructura mínima de mujeres COPED. 2012.

El proceso mediante el cual las mujeres privadas de libertad se vincularon a APAC duró dos semanas. Se describe a continuación los pasos ejecutados (p164: Ago. 21 2012 informe preliminar.rtf - 164:86 - 91):

- Criterios de selección. Entre el INPEC (reinserción social) y la confraternidad concertaron los siguientes criterios para vincular a una interna al programa: que tenga la calidad de condenada sin importar el delito cometido, que no tenga trastorno mental o tratamiento psiquiátrico, que haya hecho el proceso de inducción al tratamiento penitenciario, sin importar las fases en que se encuentre, que le falte un (1) año como mínimo para salir, la obligatoriedad de seis (6) a un (1) año de permanencia en el programa, cumplir con las reglas y normas de convivencia establecidas en el programa este y la obligatoriedad de participar, dinámicamente, en todas las actividades planificadas.
- Convocatoria conjunta entre el INPEC (reinserción social) y Confraternidad en los patios.

- Cada interna en forma libre y voluntaria elaboró una solicitud con firma y huella, donde manifestó que quería pertenecer a APAC y, al mismo tiempo, presentó su renuncia al programa o taller en donde estaba redimiendo pena.
- Luego las solicitudes pasaron a reinserción social. Allí realizaron los análisis de cada una de las peticiones hechas por las mujeres con el fin de decidir quiénes pasaban al programa.
- Por último, Se procedió el traslado de las mujeres a la estructura mínima de seguridad.

Perfil de la mujer vinculada a APAC

Entre las características personales de las mujeres vinculadas al programa, se pueden describir las siguientes categorías: condición familiar, nivel de educación, actividad laboral y tipología de delitos¹¹.

- Condición familiar.

En relación con la estructura familiar, la mayoría de estas mujeres vienen de hogares numerosos con un promedio de cinco a seis hermanos, viven en casas arrendadas o de propiedad de sus madres y son hijas de padres desunidos o huérfanas. Además, son, en su

¹¹ Para la elaboración de este acápite, se **tuvieron** en cuenta las encuestas de identificación y evaluación aplicada en el año 2012 por la dirección del programa APAC y que aparecen en el atlas Tic 6.2. en los documentos primarios con el código p103 al p110; p115 – 127, p145.

gran mayoría, separadas y víctimas de violencia de género, se sostienen económicamente por sí mismas o con la ayuda de sus progenitoras.

Con respecto a la condición familiar de madre, tenemos que diecinueve mujeres son progenitoras con hijos menores de edad, catorce de ellas tienen un rango de años entre 20 - 40, y cinco, entre 41 a 65. Cuatro, cuya existencia oscila dentro del rango de 41 – 65, son mamás con hijos mayores. Una, no tiene hijo.

Tabla 12. Madres con hijos mayores-menores de edad. 2012

De las mujeres con un rango de edad de veinte a cuarenta años (20 – 40), catorce (14) de ellas suman en total veintiocho (28) hijos con edades que van desde los dos (2) a catorce (14) años. De dos años, uno; con cinco, cuatro; de seis, tres; con siete, tres; de ocho, cinco; con nueve, tres; de diez, dos; con 11, tres; de 12, uno; con 13, uno y de 14, uno.

Tabla 13. 19 mujeres entre 20-40 años de edad suman 28 hijos

- ✓ Educación. Nos proponemos exponer el nivel de educación de cada una de ellas desde dos rangos de edad: 20 a 40 y 41 a 65. Dos de las señoras del intervalo 41 - 65 son analfabetas; 13 mujeres han terminado la básica primaria, siete entre 20 a 40 años y seis entre 41 a 65; siete de ellas con edad entre 20 a 40, poseen la secundaria; dos, tienen técnica profesional, una entre el lapso de edad 20 a 40 y la otra, entre 41 a 65.

Tabla 14. Nivel de educación

Tabla 15. Oficio o labor desempeñada

✓ Actividad Laboral. En relación con el oficio desempeñado por las mujeres antes de su captura se tienen reseñados los siguientes: empleada doméstica, oficios varios, auxiliar de oficina, actividad agrícola, ayudante de cocina, auxiliar de enfermería, una sin experiencia de trabajo y cuatro eran amas de casa.

✓ Tipología criminal. Las conductas delictivas por las que se encuentran privadas de libertad las mujeres que integran APAC las podemos reunir de mayor a menor ocurrencia en tres grupos principales. Vale la pena anotar que una cantidad considerable de ellas son reincidentes.

La primera, es atentados contra la salud pública por la microventa de sustancias estupefacientes; la segunda, es por las afectaciones al patrimonio económico, en su gran mayoría, hurto; la tercera, es por lesionar la seguridad pública con el porte de arma de fuego de defensa personal sin el permiso de la autoridad competente.

Tabla 16. Tipología de delito

Una posible claridad de por qué se presentan estas conductas criminales pueden ser: la causa de la microventa de sustancias estupefacientes obedece a la condición de madre soltera en estado de marginalidad social y económica que reporta una utilidad de ingresos ilícita, de poco riesgo, para cubrir fundamentalmente sus necesidades vitales.

Con respecto al delito de hurto, se encuentra que está íntimamente relacionado a factores de marginalidad social y económica como a problemas de adicción a sustancias alucinógenas.

En cuanto al porte ilegal de arma de fuego, se cree que responde al fenómeno social de control que el hombre ha ejercido históricamente sobre la mujer que por razones de sumisión decide portar antijurídicamente el arma de fuego de su compañero afectivo, quien es el verdadero dueño.

La tipología antes descrita con respecto a la pregunta de este estudio nos permite afirmar que mientras no se contraponga el nivel educativo tan bajo en que se encuentran las mujeres vinculadas al programa no será posible que superen sus condiciones de exclusión social.

En materia de tratamiento penitenciario, APAC es deficiente en tanto que sus actividades en educación formal no existen, es más, el componente formativo no se encuentra contemplado dentro de sus elementos.

Con respecto a la educación para el trabajo, solo han establecido actividades de manualidades, artesanías, bisutería, pintura artística y, en los últimos días, han capacitado en máquina plana y fileteadora a las recuperandas con la finalidad de instalar en el pabellón de APAC una maquila de confecciones.

Con el aprendizaje de estas actividades laborales han de integrarse a la sociedad, de ahí que nos preguntemos si con ello es suficiente para no reincidir de nuevo en el delito? ¿Serán capaces de sobrevivir por ellas mismas y sus familias mediante estas ocupaciones?.

Si nos tomamos en serio este asunto, creemos que no. Sin embargo, estas circunstancias se debe mirar el alcance del componente religioso para compensar esta falencia del método con el fin de indicar el impacto de este en el proceso de tratamiento.

Personal penitenciario en oposición

Tan pronto el COPED entrega oficialmente el pabellón de estructura mínima de mujeres a la Confraternidad Carcelaria para que dé inicio al programa, surgen al interior del personal penitenciario del COPED dudas, inquietudes y temores sobre el alcance y las implicaciones inherentes a la cesión de este espacio físico y de la entrega del tratamiento penitenciario de esta población a la Confraternidad Carcelaria como una entidad civil.

(...) el proceso de APAC es complicado porque implica un cambio de mentalidad en la institución y esto genera inconvenientes menores para lo que se busca lograr con el proyecto. La preocupación radica en la pérdida de control del territorio ya que el proceso que se adelanta en APAC no está bajo la dirección del INPEC sino de la confraternidad carcelaria (sic). (p34: diario de campo 4, julio 25. 2012. rtf - 34:25 - 28).

De modo, que solo hasta el 25 de julio del 2012 se pudo expresar de forma verbal el temor de parte del personal administrativo penitenciario, así como de vigilancia y custodia, el cual se concretaba en sufrir la pérdida del dominio tradicional que han ejercido al interior de los centros penitenciarios en manos de un tercero, quien encarnaba de alguna manera el fenómeno de la privatización.

De este entendimiento, nacen una serie de actuaciones administrativas contra la APAC que afectaron mucho la eficacia del método y las vidas de las mujeres privadas de libertad. Lo primero, es que permitieron la puesta en marcha del APAC sin tener previamente parametrizadas o constituidas sus actividades dentro del plan ocupacional del

establecimiento, al parecer, con el propósito de que no se le asignaran cupos que aportaran redención (p96: acta confra 2 septiembre 26 de 2012.rtf - 96:6; p 8: diario de campo 15 (octubre.09.12).rtf - 8:12; p19: diario de campo 25 (noviembre.08.12).rtf - 19:7).

A consecuencia de la falta de redención, se afectó de forma muy negativa el estado emocional de las recuperandas, surgen en ellas comportamientos ansiosos y depresivos, así como a somatizar estos estados mentales; afloran los conflictos entre ellas y se rebelan a realizar las actividades programadas por APAC (p10: diario de campo 17 (octubre.17.12).rtf - 10:1, p11: diario de campo 18 (octubre.23.12).rtf - 11:3, p14: diario de campo 20 (octubre.25.12).rtf - 14:3, p16: diario de campo 22 (octubre.31.12).rtf - 16:2). Una de ellas se pregunta:

(...) ¿Entonces qué? Me limito a pagar cárcel pero ¿el descuento?; por momentos llego a este estado, me pregunto para donde voy, no habla el INPEC de un beneficio para nosotros, eso en parte también me afecta, estamos en un pare (se pone a llorar). No he querido ser una carga, no quiero ser un problema más, yo quiero colaborar. A veces me siento preocupada por el descuento, yo tengo capacidad de resistir, de saber esperar, quiero creer que vendrán cosas mejores, pero por dentro no aguanto más. ¿Qué es un tiempo prudente, un año?. El subdirector de hombres nos dijo que el programa de APAC empezó mal porque empezó sin redención (p16: diario de campo 22 (octubre.31.12).rtf - 16:2).

Añádase que el 10 de septiembre del 2012, COPED, área de reinserción social, propone por primera vez parametrizar las actividades de APAC con respecto al plan de acción y sistema de oportunidades, P.A.S.O para que las mujeres adscritas al mismo puedan

redimir pena, advirtiéndole que eso se hace conjuntamente con Bogotá (p 4: diario de campo 11 (septiembre.10.12).rtf - 4:3).

Solo hasta el 4 de abril del 2013, el establecimiento hace entrega a las recuperandas de las órdenes de trabajo para redención de la pena como programa educativo con seis horas diarias, esto es, un año después de su entrada en funcionamiento (p54: diario de campo 58 (Abril.09.13).rtf - 54:08). A la fecha, no se tienen procesos disciplinarios en contra del personal penitenciario administrativo por las infracciones cometidas.

De igual forma, desde sus inicios los profesionales penitenciarios se negaron a acompañar el programa, a pesar de que, el convenio lo tenía establecido en el literal (J) correspondiente a las consideraciones y a la cláusula 5°, numeral 3, por ejemplo, enviando a APAC mujeres privadas de libertad próximas a salir de la penitenciaría por haber cumplido su pena con el fin de impedir los procesos de tratamiento: “la señora Teresa (sic) de Jesús moreno (sic) quien ingresó el 14 de mayo,(sic) y salió en libertad el 7 de junio. Su proceso duró 23 días”. (p164: Ago. 21 2012 informe preliminar.rtf - 164:224)

La segunda, es que el personal penitenciario dio inicio a una serie de acciones hostiles en contra del programa tales como ofrecerle a las recuperandas otras labores con descuento a cambio de su renuncia, sacándolas de las ocupaciones programadas, además, establecieron la zona de fumadores en uno de los salones asignados, entre otras actuaciones. (p45: diario de campo 5 (agosto.08.12).rtf - 45:5; p164: Ago. 21 2012 informe preliminar.rtf - 164:231; p44: diario de campo 49 (marzo.05.13).rtf - 44:1).

Además, emprendieron una serie de actos hostiles en contra de las recuperandas que iban desde el cierre de los alojamientos antes de la hora ordenada hasta reporte de mala conducta por cualquier comportamiento indebido, al respecto, una de las recuperandas manifestó “La (sic) dragoneante (...) nos quiere ‘terapear’, yo veo un pequeño problema no visible” (p11: diario de campo 18 (octubre.23.12).rtf - 11:30; p45: diario de campo 5 (agosto.08.12).rtf - 45:5, p39: diario de campo 44 (enero.30.13).rtf - 39:1; p52: diario de campo 56 (marzo.26.13).rtf - 52:7).

La tercera, fueron las actuaciones del capellán católico. En relación con los actos del sacerdote como funcionario penitenciario, se constató, a la luz del trabajo de investigación, que la representación que él tenía de APAC fue que era un centro de adoctrinamiento cristiano evangélico de la Confraternidad Carcelaria.

Es preciso mencionar que la representación del capellán no era infundada. Hay que hacer notar el por qué en un contexto en donde la mayoría de privados de libertad tanto en hombres como en mujeres son de credo católico se tengan dentro del programa diecinueve (19) cristianas y sólo cinco (5) católicas. Además, hay que decir que en el proceso de selección se trajeron solo cristianas y no se invitaron a las católicas (p21: diario de campo 28 (noviembre.27.12).rtf - 21:3). En vista de esto, la Confraternidad Carcelaria manifestó:

(...) cuando hubo un momento de tensión en APAC Medellín, tal vez porque se pensó que era simplemente un grupo religioso que se iba a imponer en la cárcel (sic) pero creo que de pronto cometimos el error de darle ese matiz (p389: entrevista 1.rtf - 389:13).

De ahí que todas las actuaciones del capellán se enmarcaran dentro del celo religioso en disputa por las almas de las mujeres en recuperación, así lo percibieron distintos actores vinculados con el proceso, tal como lo manifestó una de las recuperandas “Quiero (sic) sugerirles que ustedes como equipo de trabajo pangasen (sic) de acuerdo. Esto parece una pelea de religión y poder”. (p86: diario de campo 87(septiembre.23.13).rtf - 86:1).

En estos mismos términos fue reconocido por el personal administrativo “al principio con la iglesia (sic) católica se tuvo dificultades con la articulación del programa” (p378: entrevista.rtf - 378:11); así mismo fue aceptado por la Iglesia católica, con respecto a la siguiente pregunta: cómo ha sido la relación con la Confraternidad Carcelaria de Colombia como entidad evangélica dentro del proceso adelantado en APAC?

Contestó: Ha sido difícil. La comunicación no ha sido fluida. Les falta ser más ecuménicos. A tal punto (sic) que dentro del programa tenemos espacios de participación muy reducidos (sic) pero respetamos el programa. Hoy tenemos una relación mucho mejor, cordial. En el pasado teníamos choques con las coordinadoras. Las relaciones con Lacides Hernández han sido muy fraternales ((p380: entrevista.rtf - 380:40 - 43).

Sobre la disputa entre católicos y protestantes por la reforma de la subjetividad o del alma de la mujer privada de libertad, interesa subrayar que ambas comunidades religiosas

han estado relacionadas con el mundo de la prisión desde sus orígenes, pues tienen en común reformar o curar al condenado basados en la fe.

La Iglesia católica introduce en el año de 1724 la penitenciaria como espacio de encierro para la reforma del prisionero con el objetivo de que sea nuevamente admitido en la sociedad (Rusche y Kirchheimer, 1984:82- 83). De lado de los reformadores, se tiene que crearon el primer sistema penitenciario en Filadelfia en el año de 1790 (bis: 151). Sin embargo, tienen notables disparidades en materia de creencias. La Iglesia católica afirma la idea de que el hombre es salvo tanto por la gracia como por las acciones, “por las obras te probaré mi fe”; en tanto que los reformadores Lutero y Calvino predicán que el individuo es redimido por la misericordia, independientemente, de las actuaciones.

Estos hechos, aunque aledaños al método apaquiano, impidieron medir en condiciones de normalidad su eficacia, impactaron negativamente la vida de las privadas de libertad en sus derechos fundamentales, como la redención y no recibir un trato degradante durante el cumplimiento y ejecución de la pena.

3. Resocialización

La noción de resocialización se caracteriza por tener más de una definición, es decir, es un término polisémico. Sin embargo, siguiendo el interaccionismo simbólico se puede dar cuenta de la construcción del o de los significados que llevan a cabo las personas involucradas en el método APAC para alcanzar la transformación de las recuperandas.

a. Sentido

Desde la mirada de la administración penitenciaria, de los coordinadores del programa APAC, así como de los profesionales de apoyo, se concluye que coinciden en buscar que el privado de libertad en su circunstancia de condenado logre regresar a la sociedad en condiciones de convivir armoniosa y pacíficamente. Además, que lo haga alejado del delito, por medio de la transformación, restauración o resignificación de su historia de vida.

Para ello, es necesario que el privado de libertad comprenda qué hizo, qué lo llevo a hacerlo, qué factores de tipo económico, familiar o estado emocional incidieron en su realización ((P390: entrevista.rtf -390:69, P379: entrevista.rtf -379:67, P388: entrevista.rtf -388:23, p378: entrevista.rtf - 378:13).

Sin embargo, reconocen ambas entidades que lo anterior es el deber ser, lo ideal, debido a que el sistema de prisiones colombiano no cuenta con el personal idóneo para cumplir con esta tarea, por ejemplo, el COPED no posee hoy empleados del área de sicología para atender a la población privada de libertad, tanto a hombres como a mujeres (p389: entrevista 1.rtf -389:22, p378: entrevista.rtf - 378:13). En relación a ello un funcionario penitenciario afirma que:

En la mayoría de cárceles y prisiones se vive el día a día con las situaciones que vayan ocurriendo. No se da una verdadera personalización del tratamiento o resocialización. Lo

único que realmente se hace es vigilar que el interno no se fugue, cumpla la ejecución de la pena o no se muera en el tiempo en que purga la pena (p378: entrevista.rtf - 378:13).

Hay que anotar lo siguiente, ante esta cruda realidad, la Confraternidad Carcelaria con el programa APAC se encuentra de alguna manera supliendo las funciones del INPEC en el tema de tratamiento penitenciario mediante el grupo de profesionales voluntarios adscritos al mismo. Planteadas las cosas de esta forma, podemos inferir lo apropiado de las organizaciones sociales en las actividades de tratamiento, sin desconocer que el llamado a cumplir con dichas funciones es el Estado.

De conformidad a lo expresado por las recuperandas, se deduce que para ellas la resocialización es un cambio de vida alejada del delito, el cual es voluntario y se proyecta una vez se encuentre en libertad, pues han reconocido los errores y las fallas en que han incurrido por manejar mal sus vidas (p387: grupo focal.rtf - 387:185 - 246).

Razón por la cual necesitan aprender, descubrir o rescatar valores: “resignificación (sic) es recuperación de los valores que siempre han estado y en un momento de la vida los deje (sic) perder” (p93: diario de campo 93(marzo.04.14).rtf - 93:1), y principios de convivencia, por medio de Dios, para amarse a sí mismas, a sus hijos y a los demás (p387: grupo focal.rtf - 387:185 - 246).

En un taller grupal (p156: trabajo (resocialización).rtf - 156:) concluyeron sobre este tema lo siguiente:

Figura 15. Relato de recuperandas. 2012.

Parece ser que la explicación posible a la necesidad de las recuperandas de aprender valores o normas de convivencia de naturaleza religiosa (p156: trabajo (resocialización).rtf - 156:) para alcanzar un nuevo sentido en sus vidas (resignificación) obedece al rango educativo: primaria y básica secundaria en que se encuentran.

Por lo tanto, entienden la resocialización como la necesidad de aprender desde cómo hablar hasta cómo conducirse en relación con los otros de forma correcta con la idea de obtener identidad social, y una vez estén libres, esto le sea reconocido por el sistema social. De ahí que van Dijk (2000:52) afirme:

Las ideologías sirven no solo para coordinar las prácticas sociales dentro del grupo, sino también para coordinar la interacción social con los miembros de otros grupos.

Las ideologías sirven para definir' grupos y su posición dentro de las estructuras sociales y en relación con otros grupos.

En definitiva, por las características de este grupo de mujeres, el proceso en APAC se enmarca más en una socialización que en la resocialización. Este hallazgo ya había sido identificado en la experiencia de la Fraternidad Brasileira de Asistencia a los Condenados – FBCA -:

(...) otros y son la gran mayoría, nunca han tenido un proceso de socialización, siempre estuvieron alejados de la sociedad, nunca han participado de estos espacios sociales, estuvieron siempre alejados de todo, para ellos nosotros vamos a hacer un proceso de socialización, porque será la primera vez que participaran en una comunidad (p382: entrevista (1).rtf - 382:5).

b. Tratamiento penitenciario en APAC

Lo expuesto en el acápite anterior permite inferir que en APAC la noción de tratamiento penitenciario lo entienden en un sentido extenso para poder abarcar todas aquellas actividades que le permiten a la recuperanda avanzar en el establecimiento de su modo de ser o proceso de socialización, a reducir los efectos de la prisión y a garantizar la conformidad con sus necesidades existenciales.

Tratamiento religioso

Explica Valdeci Ferreira (p382: entrevista (1).rtf - 382:) que en APAC las actividades religiosas ayudan a los recuperandos a darse cuenta de su delicadeza humana, de lo vulnerables que son, de las posibilidades diarias de caer de nuevo en el delito. En este sentido, se planifican los devocionales, los estudios bíblicos, el discipulado, el culto o la eucaristía.

En términos de la Confraternidad Carcelaria, “el devocional es el alimento espiritual para el alma de la recuperanda”. Busca que ella adquiera la costumbre de depender de Dios, así mismo, le permite creer que durante el día todo va a marchar bien, en paz y en calma. De otro lado, el culto tiene el sentido de expresar en congregación los pedidos y gratitud a Dios conforme a todo lo que pasa en APAC, en sus vidas y familia. (p381: entrevista. 2. rtf - 381:16; p 387: grupo focal.rtf - 387:432 –439; p390: entrevista.rtf - 390:109).

Con los versículos bíblicos, las recuperandas reflexionan y se confrontan a sí mismas en qué deben mejorar, dónde deben cambiar, qué tienen que dejar y cómo pueden proyectarse. La enseñanza a una recuperanda de amar a Dios implica amar al prójimo, la va a impulsar a que en la relación con el otro sea amable, entonces si ella tiene un buen vínculo con Dios, lo debe tener también con los demás. Cristo es la columna vertebral, el alma, la vida y el corazón para ser mejor persona. (p379: entrevista.rtf - 379:35; p381: entrevista parte 2.rtf - 381:13; p390: entrevista.rtf - 390:107; p380: entrevista.rtf - 380:90).

Escojamos un estudio bíblico de los tantos que aparecen registrados en los diferentes diarios de campo para aclarar e ilustrar mejor como APAC implementa el texto bíblico a los fines antes expuestos. Diario de campo 5 (agosto.08.12).rtf - 45: 3 – 9).

Tema: “La Sanidad”

Texto Bíblico: San Mateo 4: 23 – 24.

23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.

24 Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó (Reina – Valera 1960).

Explicación del texto bíblico: Jesús se relacionó con personas en sufrimiento, con dolor. Tres cosas enseña la palabra: Dios sana las dolencias y su predicación cura enfermedades físicas, espirituales y emocionales.

En el área espiritual sienten angustia, no tienen libertad, poseen ataduras, actitud de hipocresía, vida sin paz y sin gozo, rompen la unidad, falta amor, no manifiestan ese sentimiento hacia otros, presentan incapacidad para tratar con el pecado. En el área emocional se manifiesta en la amargura al hablar, muchos temores, se sienten perseguidas, aisladas y desconfiadas.

En el área física, hay una somatización como diarrea, ganas de vomitar, úlceras y migrañas. Lo que causa todo esto es el resentimiento. El rencor tiene proyección en los huesos, Salmo 32:3. ¿Por qué? por las actitudes de venganza, de no perdonar, de malevolencia.

- Condiciones para la sanidad:

1. La sanidad es un regalo de Dios y no lo merecemos (Isaías 53: 4 - 5)
2. Honestidad de la persona que está herida, saber cuál es el agravio.
3. La dependencia del sanador: la mujer samaritana bebe de Jesucristo.
4. Ser conscientes de que Dios quiere sanar mi resentimiento.

Las recuperandas oran y bendicen la prisión y a sus autoridades.

En resumen, lo que pretende APAC, con los estudios bíblicos, es que la recuperanda vaya progresivamente acogiendo en su diario vivir la enseñanza cristiana para transformarla cualitativamente en su voluntad, en sentimientos y pensamientos con un hábito de disciplina y obediencia a las reglas de conducta.

Hay que mencionar que para este propósito APAC presenta una imagen paterna de un Dios de amor y bueno en la magnitud que aparece en el relato sobre el hijo pródigo (Lucas 15: 11-32). Esta representación del Señor ha influido en el entorno de APAC, de tal manera que, de una y otra forma y con la misma creencia, se escuchan oraciones en la voz de las recuperandas en el siguiente sentido:

Tenemos un padre incondicional, tenemos amor, Dios (sic) te damos gracias en este (sic) mañana, reconocemos nuestra falta, Dios (sic) tu amor es igual con el que está perdido, como el que está en casa enojado, resentido, con envidias, Dios (sic) tu (sic) eres una fiesta continua, constante, una paz que no la da el dinero. Perdónanos (sic) Señor. (p38: diario de campo 43 (enero.18.13).rtf - 38:3).

Los hallazgos permiten afirmar la eficacia de las creencias y actividades religiosas en el proceso social de las recuperandas. De tal forma, ha sido la enseñanza religiosa recibida que ha determinado el modo en que ellas resignifican su pasado histórico como la construcción de su futuro.

Una de ellas narra su cambio de la siguiente manera:

“APAC me han enseñado a Dios, en el pasado me gustaba beber, bailar, tener sexo con cualquiera; yo estaba en una nube muy oscura (sic) pero acá en APAC aprendí a valorarme como mujer y aprendí el perdón (p 7: diario de campo 14 (septiembre.19.12).rtf - 7:8).

La idea es comportarse socialmente de acuerdo con las reglas de conductas morales que prescribe Dios tales como el amor, la caridad y el perdón. Recordando que el perdón es lo más profundo y esencial del cristianismo, sin el cual el privado de libertad en calidad de condenado no podría recuperar su valía (p7: diario de campo 14 (septiembre.19.12).rtf - 7:11; (p 387: grupo focal.rtf - 387:274 – 280; p133 a 143: cuestionarios; p380: entrevista.rtf – 380: p380: entrevista.rtf - 380:90).

Así pues, las recuperandas reconocen que para tener un proceso de socialización deben seguir los mandatos de Dios, aprender a perdonar y a tomar decisiones responsables. Una de las mujeres (p78: diario de campo 8 (agosto.28.12).rtf - 78:6) afirma que ella estaba contaminada, ante la solicitud de explicar esa expresión contestó: “fumar, decir vulgaridades, pensar en hacer el mal, maldecir, querer conseguir plata a cualquier costo”. Y hace la siguiente representación:

Así mismo, las recuperandas destacan que lo más importante de estas actividades es el cambio en su comportamiento, la corrección de costumbres dañinas para su existencia, el consuelo para su vida y el amor para consigo mismo, a fin de poder crecer como personas. (p 387: grupo focal.rtf - 387:462 – 472; p151: programa APAC, libertad religiosa; p152: programa APAC, libertad religiosa; p153: programa APAC, libertad religiosa).

Tratamiento mediante actividades laborales

De acuerdo con el director de la Confraternidad Carcelaria, la cárcel es un monumento al ocio, en APAC, se mantiene a la recuperanda ocupada con actividades de laborterapia. Ha

señalado que las actividades de trabajo por sí solas no rehabilitan, por ello, estas labores se deben complementar con el componente espiritual (p381: entrevista parte 2.rtf - 381:21).

De otro lado, explica una de las directoras de APAC que el privado de libertad no tiene una cultura del trabajo, por ello, mediante la laborterapia se busca incorporar valores necesarios para tal fin, tales como la paciencia, el compromiso y la responsabilidad.

Fotografía 7. Laborterapia.

En cuanto a las manualidades, no han podido comercializar los productos para generarle recursos económicos a las recuperandas, en cambio, con la maquila obtienen ingresos, pero son muy bajos al grado de llegar a la sobreexplotación. De otro lado, se han dado cuenta de que esta absorbe mucho tiempo, alterando con ello el resto de las actividades del programa. (p390: entrevista.rtf - 390:139).

Desde el punto de vista de las recuperandas, las actividades laborales son un medio de rebusque o subsistencia con el que pueden cubrir durante el tiempo que dure la condena las

necesidades personales y familiares ((p59: diario de campo 62 (mayo.06.13).rtf - 59:5); (p59: diario de campo 62 (mayo.06.13).rtf - 59:6); (p75: diario de campo 77 (agosto.19.13).rtf - 75:2).

Fotografía 8. Artes y oficios.

Entre las recuperandas, podemos hallar un alto índice de necesidades insatisfechas por no gozar de ingresos económicos, desde lo registrado en los diarios de campo, podemos dar una idea de ello: “estoy pasando por una crisis económica, llevo varios días sin minutos y sin poder llamar a la casa, sin saber de mis hijos” (p16: diario de campo 22 (octubre.31.12).rtf - 16:1).

Ahora bien, el programa APAC no ha podido brindar posibilidades reales de integración social a las recuperandas, pues solo ha alcanzado a despertar en ellas el valor que posee el trabajo en la vida de cualquier persona, así como el descubrimiento de sus habilidades y destrezas, sin llegar a ofertar actividades laborales que representen unos ingresos

significativos para ellas, además, de que sean pertinentes al contexto sociocultural al que estas pertenecen, como a su interés de aprendizaje.

Así mismo, algunas de ellas han manifestado que no les gustan las manualidades y que les aburren, sienten que no son productivas con dicha actividad, están cansadas de coser y trabajar con la aguja, pues no les atrae la costura. Expresan que les gustaría tener otras opciones (p66: diario de campo 69 (junio.05.13).rtf - 66:1; p 7: diario de campo 14 (septiembre.19.12).rtf -7:6; p362: inpec 5373 - at y tto-.pdf - 362:1; p 387: grupo focal.rtf - 387:146).

Tratamiento mediante actividades educativas

Los hallazgos en este componente mostraron que el programa solo brinda a las recuperandas que no saben leer y escribir encuentros de lectoescritura y alfabetización, de igual forma, en aquellas que quieran validar el bachillerato se les capacita para presentar las pruebas ICFES (p390: entrevista.rtf - 390:127; p56: diario de campo 6 (agosto.09.12).rtf - 56:5; p102: informe flor semestral 2015.rtf - 102:7).

El perfil de las recuperandas señala que poseen un nivel demasiado bajo de educación y poca actitud de parte de ellas para ser profesionales. Si a ello le sumamos el estado de pobreza y vulnerabilidad social, tendremos un factor de riesgo para la reincidencia. Que el componente educativo no se halle consagrado dentro de los elementos que conforman el método APAC PODRÍA ser un indicador de desaciertos o de su ineficacia.

4. Autoidentidad

En esta categoría, se abordó la imagen que desde lo institucional y la religión cristiana se tiene de la persona condenada; la percepción que tiene de sí la recuperanda y cómo se proyecta; la identidad que quiere alcanzar el método con ella.

a. Construcción de la identidad

Para la institución penitenciaria los privados de libertad son seres humanos peligrosos cuyo grado de riesgo tiene nexos con los rasgos de personalidad y el delito cometido. Pero en el imaginario del personal de vigilancia y custodia el peligro se explica de manera distinta. Ellos entiende muy bien que se están relacionando con lo excluido de la sociedad, con aquellos seres humanos que los agentes socializadores no fueron capaces de corregir (p51: diario de campo 55 (marzo.21.13).rtf - 51:2).

De igual forma, son de la idea de no creer en la resocialización porque el “que era no deja de ser por mucha cárcel que le metan” (p41: diario de campo 46 (febrero.12.13).rtf - 41:8; p51: diario de campo 55 (marzo.21.13).rtf - 51:1). “Ellas deben sentir la cárcel. ¿Por qué tanto privilegio a la persona privada de libertad? La cárcel se hizo para el dolor” (p 9: diario de campo 16 (octubre.10.12).rtf - 9:1). Dentro de este marco, se encuentran los preconceptos sociales sobre el condenado, la idea es que los privados de libertad tienen que sufrir hasta morir en prisión y purgar penas largas debido a que no son socializables.

De acuerdo con la Confraternidad Carcelaria las ideas como el comportamiento del dragoneante obedecen al tipo de formación que ha recibido en la escuela penitenciaria. Allí “han sido entrenados sólo para preocuparse por la seguridad y para mirar a las personas que están privadas de la libertad como delincuentes” (p381: entrevista parte 2.rtf - 381:11).

Esta afirmación es compartida por personal penitenciario del área de tratamiento, estas fueron sus palabras: “Hay parte de la guardia que se opone al tratamiento penitenciario ya que solamente le interesa la seguridad. Hay que tener la habilidad de seleccionar el personal de guardia para APAC” (p88: diario de campo 89(febrero.11.14).rtf - 88:1).

En este mismo sentido, se pronuncia el capellán del establecimiento “ellos no acompaña (sic) ni apoya (sic) el proceso de tratamiento o lo coartan. Tienen la idea de que son malos, delincuentes, manejan una ideología delictiva (...) le dan mayor importancia a algunas (sic) otras actividades que las de tratamiento”. (p380: entrevista.rtf - 380:132).

Desde el punto de vista del cristianismo, la percepción que se tiene de la persona privada de libertad es la de un ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El prisionero es “una proyección de Dios. Tienen una dimensión espiritual al ser la imagen y semejanza de Dios, independientemente de su condición personal. La persona es sagrada” (p380: entrevista.rtf - 380:128; p381: entrevista parte 2.rtf - 381:8).

De esta manera, se ha identificado el grupo de mujeres de APAC. La respuesta a la pregunta qué imagen tiene el cristianismo de la persona condenada fue “la de una hija de Dios que debe ser corregida, rescatada, salvada”. (p 387: grupo focal.rtf - 387: 378).

Otro punto, es la concepción que posee la mujer de sí misma dentro de este contexto. Se percibe con una imagen negativa, indicativo de ello son las siguientes expresiones que utilizaron en las distintas actividades de indagación como en el grupo focal: mala, perversa, agresiva, rencorosa, grosera, vengativa, insegura, desordenada, drogadicta, entre otras. (p 387: grupo focal.rtf - 387:146).

Con esta imagen tan fracturada de sí misma y explicable debido a una historia llena de pérdidas, carencia de afecto, abandono familiar, social y gubernamental, no es raro que surja en ella una baja autoestima y autoconfianza ante la frustración de sus sueños, incapacidad de relacionamiento, cansancio mental y falta de proyectos de vida. (p388: entrevista a flor.pdf - 388:28; p390: entrevista.rtf - 390:89; p380: entrevista.rtf - 380:124).

Con frecuencia, ellas manifiestan la angustia por el presente y futuro de sus hijos. Interrogantes como: “ahora que (sic) futuro hay para mis hijos, que (sic) me espera cuando este (sic) en la calle”; “los hijos pequeños que deje (sic) van a estar ya grandes. Uno quisiera devolver el tiempo, ¿Qué (sic) voy a hacer?”. (p16: diario de campo 22 (octubre.31.12).rtf - 16:9, p41: diario de campo 46 (febrero.12.13).rtf - 41:12). La intranquilidad y el sufrimiento por no ver a sus hijos, la pérdida de su amor o la recriminación por el tiempo que no está con ellos,

son sensaciones negativas a razón del estado de abandono en que ellos se encuentran, de manera que, asumen que han fracasado en su rol de madres:

“estoy muy ansiosa, tengo arrebatos de salir corriendo, esta es la cuarta navidad que paso sin mis hijos, yo me estoy perdiendo verlos crecer, compartir con ellos”; “mis hijos le dijeron a mi mamá “Abuelita mi mamá es tan mala que no sale? Es que no va a volver?”.
(p22: diario de campo 29 (noviembre.28.12).rtf - 22:8).

Así pues, todo método de tratamiento que trabaje con mujeres privadas de libertad debe recoger el anterior relato y preocupación para poder predicar su eficacia, creemos, de acuerdo con lo observado en campo, que APAC logra integrar en su propuesta metodológica esta necesidad. Con respecto a la proyección, la recuperanda se identifica con su calidad de madre, por ello se visualiza a futuro al lado de sus descendencias, desempeñando activamente su rol de guía y modelo de conducta en la educación de sus hijos:

Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y de esta manera se puede elegir el camino del bien, eso se lo podemos enseñar a nuestros hijos para que elijan el camino correcto”; “Yo anhelo la libertad y estar con mis hijos”; “cuando salga en libertad, pienso irme a una pieza, estar con mis niños y ponerme a trabajar” (p19: diario de campo 25 (noviembre.08.12).rtf - 19:1; p58: diario de campo 61 (abril.23.13).rtf - 58:3; p65: diario de campo 68 (mayo.30.13).rtf - 65:3).

APAC es un método que combina todos sus elementos para intervenir de forma individual y colectiva el ser de la recuperanda con el propósito de recuperar y fortalecer el vínculo con sus hijos con la mirada del perdón y la reconciliación.

QUINTA PARTE

CONCLUSIONES

La pena es represión en cuanto a su naturaleza objetiva, sufrimiento en cuanto a su naturaleza subjetiva, prevención en cuanto su fin principal. La modalidad, los caracteres y los fines secundarios – retribución, expiación, intimidación, enmienda - pueden deducirse fácilmente de la naturaleza y del fin principal.

Costa, Fausto. El delito y la pena en la historia de la filosofía.

a. A nivel institucional

1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) poco a poco está, de una parte, apartándose por razones presupuestales del modelo integral de tratamiento progresivo del condenado, por ello la ausencia de sicólogos, educadores y trabajadores sociales en el Complejo Penitenciario y Carcelario El Pedregal (COPED) y de partidas económicas para proyectos laborales en beneficio de los preliberados, y de otra parte, se limita a cumplir en forma real el compromiso por la seguridad y vigilancia del recluso para contenerlo mientras purga la pena, detrás de ello no están escondiendo el hecho de segregar o de negar de facto el tratamiento degradante y deshumanitario al que están exponiendo en el día a día la vida del prisionero con tal de mantener el orden cultural, sin embargo, las organizaciones como la Confraternidad Carcelaria pueden cumplir un buen papel a favor de los presos debido a que rescatan en su quehacer de ayuda para el campo penitenciario el modelo dicho. Sobre este tema, futuros procesos investigativos pueden dar cuenta con mayor profundidad del número y tipo de identidades que pertenecen a la red social de apoyo para el convicto en donde se puedan identificar discursos y prácticas de resistencia.
2. El personal de Vigilancia y Custodia es apático e incrédulo al tratamiento penitenciario lo que se traduce en conductas agresivas y deshumanizantes contra los privados de libertad. Así mismo, al interior del establecimiento prevalece el control ejercido por estos funcionarios a tal grado de invisibilizar y en muchos casos descalificar y en otros momentos anular todas las iniciativas de intervención ejercida. Han transformado en sentido estricto la vida en la prisión como una zona de no derecho. Ejemplo de ello, es cuando anulan en lo factico con su poder jerárquico el acceso que tienen las mujeres prisioneras a los medios jurídicos de protección propios de un debido proceso en materia de sanciones disciplinarias.

A esto se llegó debido a que se pudo observar la forma en que el personal de Vigilancia y Custodia se dirige a las mujeres privadas de libertad, en una falta total de reconocimiento de la condición de persona digna con derechos propios, bajo la excusa de tener la categoría jurídica de reclusas cuyo contenido ellos lo relacionan o referencian prejuiciosamente a un ente peligroso. Esta idea lleva a no creer en el cambio del individuo y a prácticas degradantes. Lo anterior se puede abordar con cursos de formación en derechos para directivas, administrativos con el objeto de que incluyan campañas de buen trato a la guardia.

Todo programa de intervención a ejecutar por parte de una entidad civil en cualquier establecimiento penitenciario y carcelario del país debe ser previamente socializado, discutido y puesto en común acuerdo con los funcionarios de Vigilancia y Custodia, de lo contrario, estará llamado a fracasar por muy noble que este sea. Debido a que la vida al interior de un presidio se ha regido siempre, de una parte, por los criterios valorativos establecidos de la guardia: la seguridad y el orden en la prisión y, de otra parte, del personal administrativo responsable del componente rehabilitador. Compartir este territorio con un tercero genera comportamientos hostiles y antagonistas debido a que no están dispuestos a dar poder sobre el cuerpo y el alma del recluso. Un motivo más para rechazar de parte de ellos el desarrollo de las tareas de reintegro social.

3. Los jueces de ejecución de penas y medidas a espaldas de prácticas desprisionalizadoras dan un manejo demasiado restrictivo en el momento de interpretar y aplicar las normas contentivas de los subrogados penales cuando están resolviendo los casos sobre la libertad condicional y la prisión domiciliaria. Diseñando con ello un Derecho Penitenciario selectivo y discriminador que genera un elevado hacinamiento de las mujeres más vulnerables y abandonadas por el orden económico y social al interior del sistema de presidios colombiano, con base en prejuicios y estereotipos peligrosistas de la imagen del “delincuente” propio del positivismo criminológico, haciendo a un lado las garantías y los principios propios del Estado social y democrático de derecho como límite al poder punitivo del

Estado. Con respecto al asunto, próximos trabajos pueden tratar sobre el estudio de las decisiones jurisdiccionales tomadas por los anteriores funcionarios con el fin de identificar prácticas, discursos y tendencias ideológicas vulneradoras de los derechos humanos.

b. A nivel del método Asociación y Protección de Asistencia al Condenado (APAC).

1. El éxito o el fracaso de los programas de tratamiento penitenciario se determinan por regla general por índices de reincidencia carcelaria, se entiende por tal, cometer una conducta punible que atentó en contra del mismo bien jurídico por el cual ya fue la persona condenada, o por vulnerar un bien tutelado de otra naturaleza. Estos eventos señalan el fracaso de la resocialización o de los fines jurídicos de los establecimientos penitenciarios; en el caso del programa APAC se tiene que entre el año 2012 al 2016 sola una de las internas que egresó, retornó al Complejo Penitenciario y Carcelario (COPED) por motivos de revocatoria de la prisión domiciliaria. Lo que podría mostrar una probabilidad significativa de éxito del método apaquiano.
2. La palabra resocializar se caracteriza por tener más de un significado, es decir, es un término polisémico. Sin embargo, para las recuperandas equivale a rescatar los valores y principios de convivencia para corregir la conducta delictual con el fin de adaptarse a las pautas de conducta establecidas por la cultura dominante y poder así reintegrarse al sistema, esto es, construir una identidad a pesar de las condiciones de exclusión en que se encuentran como si las desigualdades sociales fuesen un estado “normal”. Con respecto a este vocablo, posibles investigaciones deben indagar sobre la idea que hacen los reclusos tanto hombres como mujeres de este puestos que son ellos los sujetos y objetos del proceso de integración social, sin embargo la mayoría de las veces su voz y expresiones no se tienen en cuenta en las pesquisas científicas, ya es hora de pasar de representarlos a darles su propio lugar para hacer conjuntamente un nuevo orden democrático y participativo.

3. La religión cristiana ha establecido e impregnado históricamente la esencia de los sistemas penitenciarios con el propósito de recuperar al prisionero para el orden político y social mediante el arrepentimiento y enmienda de los actos delictuales. En ese sentido, la educación religiosa, la creencia y las prácticas litúrgicas son un medio idóneo para persuadir y crear disciplina que son nuevamente retomados por el método APAC para socializar a las recuperandas en el terreno de la prisión bajo el marco de los valores de perdonar y reconciliarse con ellas mismas y con los demás en una lógica terapéutica.
4. Las mujeres vinculadas al método. La mayoría de ellas están purgando pena por transgresiones contra el patrimonio económico y la salud o seguridad pública, conductas punibles cometidas para satisfacer y resolver con prontitud necesidades personales y familiares derivadas de su estado de pobreza y exclusión social dado que son madres solteras, viven en casas arrendadas, por lo general, en compañía de sus madres, no cuentan con el apoyo económico del padre de sus hijos ni de sus padres biológicos, que en algunos casos ni los conocen. En este contexto, el delito se ha convertido en una alternativa para conseguir dinero “fácil y rápido” para el sustento. A pesar de ello, actualmente, los discursos sobre el crimen no ponen cuidado a los factores socioeconómicos que influyen en este, ni al puesto de la mujer en la estructura del sistema, por el contrario, se enfatiza en teorías de la prevención situacional de la delincuencia y de la elección racional vinculándose a la idea de un Derecho Penal y Penitenciario para enemigos.

En cuanto a su papel de madre, se tiene que este rol queda totalmente disminuido como resultado de la pérdida de libertad, lo que genera en ellas demasiado sufrimiento al ver que han dejado a su hijo o hijos en una situación de abandono y desesperanza e inmersos en un contexto barrial hostil y propicio para el reclutamiento por los grupos delincuenciales que operan en el sector. Indican como prioritario recuperar a sus hijos. Por otro lado, son mujeres que han sido lastimadas física y psicológicamente en forma sistemática y significativa por sus parejas y, en

muchos de los casos, por sus madres, lo que llevó a algunas a la prostitución, al alcoholismo y a las drogas, que explican la causa de su inicio en la actividad delictiva.

Acerca del nivel educativo, en términos generales, poseen un rango demasiado bajo o prácticamente nulo debido a que se encuentran entre los grados de primaria o básica secundaria. Llegan al contexto de la prisión prácticamente a culminar el proceso de socialización. En cuanto al trabajo, la mayoría se ha desempeñado como empleadas domésticas u oficios varios indicativos de su exclusión. Lo que da cuenta de los procesos de escogencia de los delitos y de las mujeres criminalizadas por la estructura social y por las agencias policiales, son ellas contra quien actúa y funciona en la realidad el sistema penal. Hay que añadir que este tipo de prácticas no mide los efectos tan negativos que crean en la vida de los hijos de dichas mujeres, donde se pudo encontrar enfermos siquiátricos, tasas altas de abandono escolar, problemas de conducta, entre otros.

Sobre este punto, futuros procesos investigativos con un enfoque diferencial pueden versar sobre el impacto de la ausencia de la madre por encierro en la prisión en el modo de ser del hijo, sobre todo, si tiene de cuatro a 16 años, debido a que es este rango en donde se estructura la identidad social, así como su efecto en la delincuencia juvenil. Además, en cuanto al tema del dominio o control del hombre sobre la mujer identificar la correspondencia que existe entre este con en el surgimiento de la transgresión femenina, tipología de infracciones, características socioeconómicas, grado de constreñimiento y mirar si impacta o no en la categoría de la culpabilidad como elemento del delito, limitador de la pena a asignar.

5. La experiencia en APAC permitió por un lado reducir significativamente el nivel de prisionización debido a que anuló el desequilibrio individual y social que padece toda mujer interna en la penitenciaría como consecuencia de tener toda su vida minuciosamente controlada, coaccionada y reprimida por los agentes penitenciarios, o siguiendo los modelos de conducta establecidos por la subcultura carcelaria. Por

otro, el periodo del cumplimiento de la pena representa una profunda incertidumbre y un proceso en el que se deshumaniza la persona convicta por concebir los momentos vaciados de significados y el lugar carente de actividades productivas. En cambio, este tiempo y espacio fue aprovechado en APAC para que algunas de las recuperandas adquirieran u otras fortalecieran afectivamente los vínculos con su familia, utilizaran los días para conocerse a sí mismas y reconstruir su identidad individual y social.

En el marco de la humanidad del castigo, próximas investigaciones pueden tratar sobre las tareas de prevención y retribución de la pena desde la perspectiva de *género* y condición de *progenitora*, de igual forma, analizar el conflicto entre los subrogados penales y los fines de la condena con enfoque diferencial. Así mismo, estudiar el control a las reacciones de venganza comunitaria por el delito cometido de madres cabeza de hogar.

6. Las enseñanzas religiosas impartidas en APAC proporcionaron a las recuperandas un manejo estable de sus emociones y despertaron en ellas sentimientos de protección, seguridad y autoestima, es decir, se fortaleció su subjetividad y amor propio, de la misma manera, se rescató en ellas valores como ser solidaria y el respeto por el otro. El acercamiento a la religión cristiana evangélica redujo en las mujeres los niveles de inquietud y de angustia personal, activó el empeño y el estar dispuesta para llevar a cabo las actividades planificadas para el día a día, es decir, se encontró que en el entorno de la prisión el cristianismo cumple una tarea terapéutica en tanto que brinda bienestar psicológico.

Sobre este punto, futuros procesos investigativos deben volver a meditar sobre las relaciones entre religión y política criminal, ética, y control social, etc. No desechar el asunto como un tema concluido, todo lo contrario, rescatar la capacidad de rendimiento que posee el fenómeno espiritual en la solución de los problemas colectivos por razones atribuibles al extravío de la sociedad o delincuencia, entre otros.

Ahora bien, las actividades religiosas se tradujeron en el deseo de las recuperandas por alcanzar sus proyectos, una vez lograda la liberación de sus temores, culpas, incertidumbres y reducido su angustia, han tenido tiempo de pensarse con esperanzas y metas, sin hacer a un lado la responsabilidad por el hecho cometido. El equilibrio emocional se alcanza gracias a que mutan el sufrimiento humano inmediato en una perspectiva futurista de: “Dios fabrica el camino de los sueños y el sentido de la vida” (Ferreira, 2013).

Hay que tener en cuenta que estas mujeres han llevado toda una existencia sometida a múltiples penurias económicas y maltratos de toda índole, y alcanzar en ellas un bienestar psicológico da cuenta de la eficacia y necesidad del método APAC en el sistema de prisiones colombiano, es decir, en un entorno tan complejo lograr activar en el privado de libertad un sentido positivo de la vida genera un éxito indiscutible.

No obstante, los funcionarios penitenciarios del área de Tratamiento no se han dado cuenta o se niegan a reconocer la capacidad transformadora inherente de las actividades espirituales en el proceso de rehabilitación penitenciario de las internas, ello puede ser explicable por los prejuicios que giran en el campo de las disciplinas sociales sobre el fenómeno sagrado. Sobre esta materia próximas indagaciones pueden versar sobre puntos en común y diferencias entre la religión y la psiquiatría, el psicoanálisis, y la psicología y su incidencia en el reintegro social del prisionero.

7. El método APAC creó en el contexto de la prisión un nuevo sujeto denominado *recuperanda* gracias al cambio individual de la mujer a partir de la creencia religiosa de salvarse, reconciliarse, perdonarse, y amarse. Conceptos utilizados consciente o inconscientemente por los que coordinan y facilitan el programa de forma oportuna, lo que proporcionó el efecto de “liberar” de su interior a la persona privada de libertad de complejos y sentimientos altos de culpa que la mantenían sumergida en estados depresivos. Vale la pena decir que, la creencia religiosa

permitió que la interna estuviera en paz con su pasado y la proyectó hacia el futuro, así mismo, asumirse como tal ha facilitado sobrellevar de mejor manera el cumplimiento de la ejecución de la pena.

Esto ha sido posible gracias a que en APAC la Biblia se entiende como un texto que da cuenta y respuesta a preguntas por el sentido de la vida, el por qué y para qué de su reclusión, de la pena misma, de una identidad que trasciende su existencia actual. Todo ello porque le otorgan máximo poder a cada uno de los versículos y citas bíblicas de forma que instruyen, guían, corrigen y orientan las conductas a ejecutar al interior del establecimiento, lo que conlleva a que se asuma leer este texto con un enfoque personal y significativo para la realidad de la mujer en condición de condenada. Esto es, se presenta una correspondencia entre esta lectura bíblica y el cambio en la subjetividad de la persona adherida al programa.

APAC genera un contexto en donde es posible cambiar los valores y las creencias que traen las mujeres de sí mismas, mediante un proceso de reforma espiritual soportado en una nueva relación con Dios (teoterapia educativa), sin ponerlo de presente de manera explícita en el momento de hacer la convocatoria en los respectivos patios, es decir, si bien es cierto que el vínculo de las mujeres al programa es voluntario, en el proceso mismo de selección y bienvenida no se les informa de modo específico que van a ser transformadas en su individualidad mediante la fe religiosa.

El programa apac favoreció en cada una de las recuperandas procesos de humanización y aprendizajes como el autodescubrimiento de destrezas, cualidades y actitudes que por motivos asociados a sus historias de vida suelen desconocer. Esto fue posible gracias a que el espacio del pabellón -aula- generó un clima antiestrés, es decir, un ambiente libre de tensiones y de violencia física como psicológica propio del entorno del sistema de prisiones, con el fin de brindar tranquilidad.

Desde esta perspectiva, APAC permitió, de modo eficaz, que emergieran en las recuperandas experiencias y proyectos de vida alternativos a lo que vivieron en el mundo criminal. Favoreció la manifestación de sus emociones, entre ellos, impulsos autodestructivos, con el fin de comprenderlos y porque no, controlarlos y corregirlos. APAC rescata nuevamente las causas biopsicosociales que inciden sobre el sujeto en el momento de delinquir para lograr que una vez más asuma comportamientos socialmente aceptados.

En este punto, futuros procesos investigativos pueden versar sobre modelos de tratamiento penitenciario en América Latina con el objetivo de transformar la realidad de la prisión y hacer de ella un mejor espacio mientras se camina a su abolición. Estas indagaciones científicas se deben construir desde una lógica interdisciplinar.

El programa APAC dotó de discursos, fe y valores a las recuperandas que les sirven de marco de referencia para entender y exigir explicaciones de la realidad por ellas percibida, independiente del contexto social en que se encuentren. Se niegan a renunciar a razonamientos de los hechos que afectan sus proyectos de vida en el contexto del castigo, o sea, han logrado empoderarse con tal solidez de sí mismas que se han permitido hacer uso de sus derechos con el propósito de mejorar sus condiciones al interior de la prisión, a pesar de, las consecuencias que ello les genere.

8. La eficacia del método APAC posee rendimiento en el entorno exclusivo de la prisión en tanto reduce al mínimo los efectos de la prisionalización, es decir, llega hasta la puerta del presidio. Hasta aquí es eficaz, a pesar de que, en dos de los componentes más importantes del tratamiento penitenciario el programa se queda sin mayor impacto, como son los del trabajo y la educación. El empleo solo ha llegado a entenderse explícitamente como una actividad terapéutica, no es pensado en términos de competencias laborales propias para el contexto social al cual pertenecen todas y cada una de las mujeres adscritas a la metodología. Todo lo contrario, de forma implícita, estas actividades cumplen la tarea de obtener el

respeto por el capital ajeno y el control del consumismo, a pesar de que, nunca adquirieran la calidad de clase obrera.

La educación no aparece como un componente del método, sin embargo, se han brindado enseñanzas de lectoescritura para aquellas mujeres que no saben leer y escribir, facilitado espacios formativos para que otras logren validar el bachillerato o adelantar diplomados en Ética y Derechos Humanos en alianza con algunas universidades. Este hecho deja corto al proceso de reintegro social, pues en el fondo se perpetúan las condiciones de vulnerabilidad individual y colectiva de las mujeres vinculadas al programa, las cuales, lo más posible, fueron las causas que las llevaron a la penitenciaría, lo que aumenta las probabilidades de reincidencia. APAC desafortunadamente no logra romper el ciclo exclusión –cárcel – exclusión.

Sobre este punto, futuros procesos de investigación pueden versar desde una perspectiva de género sobre el análisis de las actividades educativas y laborales en la Regional Noroeste del INPEC, en contraste, con el desarrollo humano planteado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en la Resolución 1990/20 de 1990, las normativas internacionales de derechos humanos, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y los principios básicos para el tratamiento de los reclusos.

De otro lado, el método APAC en su filosofía y componentes no hace explícito u omite la necesidad de intervenir como sujetos políticos el entorno con el propósito de plantear e identificar democráticamente las prácticas y discursos que seleccionan la porción poblacional a formar parte de la cárcel, dando a entender que “afuera” todo está y marcha muy bien y que la única responsable de su estado actual es la prisionera misma por el estilo de vida que llevaba. Surge entonces la pregunta de en dónde queda la afirmación cierta: la estructura social genera la delincuencia. Aun más, sin ello no es posible en términos racionales dar cuenta de la reincidencia en la infracción sin necesidad de atribuirlo necesariamente al fracaso del tratamiento penitenciario.

No se puede pasar por alto que la conducta punible como fenómeno colectivo debe analizarse en las relaciones e intercambios que se presentan en la vida creada por el sistema. Configuración de la cultura que con el propósito de mantenerse a lo largo del tiempo acude desde una perspectiva instrumental basada en la idea de instrumento a categorías de *peligroso social* y *peligrosidad criminal* para su defensa.

Con respecto a este asunto, próximas investigaciones desde un enfoque que establezca diferencias pueden abordar el vínculo de marginación y criminalidad femenina, modelo económico, políticas macroeconómicas y hecho punible; Estado Social y delincuencia de mujeres, seguridad y humanismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta, D. (1996). *Hacia un modelo de sistema tratamiento progresivo penitenciario: el devenir penitenciario*. Bogotá: INPEC. Recuperado de <http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estudios%20Penitenciarios/1.2.pdf>

——— (1996). *Sistema Integral de Tratamiento Progresivo Penitenciario*. Bogotá: INPEC.

——— (1996). *Hacia un modelo de sistema tratamiento progresivo penitenciario: el devenir penitenciario: INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)*, Bogotá. Recuperado de <http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/Estudios%20Penitenciarios/1.2.pdf>, consulta: 14 de marzo de 2015.

Alarcón Bravo, Jesús (s.f). *El Tratamiento Penitenciario*. Recuperado de http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Revista%20Naranja%20%28Documentos%29/Seccion_2/tratamiento%20penitenciario.pdf, consulta: 15 de marzo de 2015.

Albrecht, Peter Alexis. (2000). El Derecho Penal en la intervención de la política populista, trad. R. Robles Planas. En J. M. Silva Sánchez (Dir.), *La insostenible situación del Derecho*

Penal (pp. 471 - 487). Granada: Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt, Área de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra.

Alcácer, R. (2004). *Los fines del Derecho Penal: una aproximación desde la filosofía política*. Colombia: Editorial Universidad Externado de Colombia.

Alonso, Luis Enrique. (s.f). *Postfordismo, crisis y fragmentación de la sociedad de consumo: los nuevos espacios de la distribución comercial y el comprador posmoderno*. Recuperado de http://www.cccb.org/rcs_gene/alonso.pdf, consulta: 15 de julio de 2015.

Alonso Rimo, Alberto (2009). Medidas de seguridad y proporcionalidad con el hecho cometido (A propósito de la peligrosa expansión del Derecho Penal de la peligrosidad). *Estudios Penales y Criminológicos*, (XXIX), 107-139.

Ambos, K., Böhm, M., y Zuluaga, J. (Eds.). (2016). *Desarrollos actuales de las ciencias criminales en Alemania. Segunda y tercera escuela de verano en ciencias criminales y dogmática penal alemana*, Vol. 1, Serie CEDPAL, Göttingen: Göttingen University Press

Anitua, Gabriel Ignacio. (2005). *Historia de los pensamientos criminológicos*. Buenos Aires: Editores del Puerto.

Antón Oneca, José (1986). *Derecho Penal Derecho penal*, suprimir coma 2º Edición (2 edic.), . Madrid: Editorial AKAL Akal.

- Arévalo, Luis Fernández (s.f). *Control de la peligrosidad criminal y libertad vigilada postpenitenciaria*. Recuperado de <http://www.derechopenitanciario.com/comun/fichero.asp?id=2566>., consulta:15 de noviembre de 2014.
- Armaza Armaza, Emilio José (2013). *El tratamiento penal del delincuente imputable peligroso*. Granada, España: Editorial Comares.
- Bacigalupo, E. (2008). Sobre la ideología de las teorías de la pena. *Circunstancia*, (16).
Recuperado de <http://www.ortegaygasset.edu/fog/ver/768/circunstancia/ano-vi---n-16---mayo-2008/ensayos/sobre-la-ideologia-de-las-teorias-de-la-pena#Resumen>
- Bajo Fernández, Miguel (1983). Reflexiones sobre el sentido de la pena privativa de libertad. *Revista Mexicana de Justicia* 1(1). Recuperado de <http://www.bajotrallero.es/publicacion/Reflexiones%20sobre%20la%20pena%20privativa%20de%20libertad.pdf>, consulta: 16 de abril de 2015.
- Barajas Languren, Eduardo (2011). *La reinserción social en el sistema penitenciario del Estado de Jalisco* (tesis doctoral). Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León, México. Recuperado de <http://eprints.uanl.mx/2316/1/1080089640.pdf>, consulta: 14 de marzo de 2015.
- Baratta, Alessandro (Septiembre de 1990). Resocialización o control social. Por un concepto crítico de "reintegración social" del condenado. Seminario *Criminología*

crítica y sistema penal. Comisión Andina de Juristas y la Comisión Episcopal de Acción Social, Lima, Perú.. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/80416092/BARATTA-Alessandro-Resocializacion-o-Control-Social>, consulta: 14 de abril de 2015.

_____ (1998). Democracia, Dogmática Y Criminología: Cuestiones Epistemológicas Y Políticas De Las Ciencias Penales Contemporáneas. En Sánchez Sandoval, Augusto y Armenta Fraga, Venus (Eds.), *Política criminal y sociología jurídica*. Faltan las páginas (pp. y números de páginas) México: Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, Unam. El Libro suprimir “suprimir comillas Política Criminal Y Sociología Jurídica”. suprimir Augusto Sánchez Sandoval Y Venus Armenta Fraga Editores, Escuela Nacional De Estudios Profesionales Acatlán, UNAM, suprimir

Barros Leal, C. (2005). La prisión desde una perspectiva histórica y el desafío actual de los derechos humanos de los reclusos. Serie Estudios de Derechos Humanos. Tomo II, 496-506. Recuperado de <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1836>

Bautista, Jairo Alonso (2011). Equidad o inequidad tributaria: La distribución del impuesto a la renta en Colombia: suprimir dos puntos (1990-2002). Cuadernos de Contabilidad *Cuadernos de Contabilidad*, . 12 12(30), pp. 45-76.

Beccaria, C. (1994). *De los delitos y de las penas*. trad. Juan Antonio de las Casas,

Barcelona, España: Ediciones Altaya.

Beck, Ulrich, Giddens, Anthony y Lash Scott (1997). *Modernización reflexiva: política, tradición y estética en el orden social moderno*. Madrid: Alianza Editorial.

——— (1998). *La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad*, trads. Jorge Navarro (caps. I, II [3, 4 y 5], III y IV), Daniel Jiménez (cap. II [1 y 2]) y María Rosa Borrás (caps. V-VIII), Barcelona: Paidós Ibérica.

——— (2002). *La sociedad del riesgo global*, trad. Jesús Alborés Rey, Madrid: Siglo Veinte.

Berdugo Gómez De La Torre, Ignacio Y, y Zúñiga Rodríguez, Laura et al. (2001). Manual De Derecho Penitenciario *Manual de derecho penitenciario*, . 1º Edición, suprimir. Madrid: Editorial Colex.

Bergalli, Roberto *et al.* (1983). *El pensamiento criminológico*, Vol. 1, Bogotá: Temis.

——— (2003). Las funciones del sistema penal en el Estado constitucional de derecho, social y democrático: perspectivas socio-jurídicas. En *Sistema penal y problemas sociales*, pp. 25-82. Valencia: Tirant lo Blanch

——— (2005, enero-junio). Relaciones entre control social y globalización: fordismo, disciplina posfordismo y control punitivo. *Sociologías*, (13), pp. 180-211.

Berger, P y Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores.

Bernal, G. y Cortés, M. (2010). *Teorías de la pena*. Bogotá: Grupo editorial Ibáñez.

Betegon, J. (1992). *La justificación del castigo*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Blanco Cordero, Isidoro (2004). *La corrupción desde una perspectiva criminológica: un estudio de sus causas desde las teorías de las actividades rutinarias y de la elección racional*. En F. Pérez (Coord.), *Serta: in memoriam Alexandri Baratta*, (pp. 267 – 296). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

Böhm, María Laura (2016). *Securitización*. En Ambos. Kai. (coord.), *Desarrollos actuales de las ciencias criminales en Alemania*, (pp.173-201). Göttingen: (CEDPAL).
Recuperado de
www.oapen.org/download?type=document&docid=610400

Borés Espí, Josep García *et al.* (2016). 6. Suprimir El Tratamiento En El Discurso Rehabilitador: Tropezando En Las Mismas Piedras (Pp. 177 – 2002) poner

más abajo, ya lo hice. En: suprimir dos puntos Borés Espí, Josep García y Rivera Beiras, Iñaki (Comps.), La Cárcel Dispar. Retóricas De Legitimación Y Mecanismos Externos Para La Defensa De Los Derechos Humanos En El Ámbito Penitenciario *La cárcel dispar. Retóricas de legitimación y mecanismos externos para la defensa de los derechos humanos en el ámbito penitenciario*. (pp. 177-203). ,1º Edición, suprimir Barcelona: Editorial suprimir Ediciones Bellaterra.

Boullant, Francois (2004). *Michel Foucault y las prisiones*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión Editorial.

Bourdieu, Pierre. (2000, mayo). La nueva vulgata planetaria, *LAmerica dans les têtes*, dossier de *Le Monde*. F., Sanabria y Vargas, G. (Trads.). Recuperado de http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/42_04ens.pdf, consulta: 14 de julio de 2015.

Brandariz García, José Ángel. (2007). Nuevos riesgos, nuevas ansiedades y expectativas sociales en materia de seguridad ante el delito. En P. Faraldo, L. Puente y E. Souto (Coords.), *Derecho Penal de Excepción: terrorismo e inmigración* (pp. 139-160). España: Tirant lo Blanch, sitio web: *Dialnet*. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=192162>

——— (2009). Sobre control y lógicas del castigo en el capitalismo postfordista. *Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale*.

Recuperado de

<http://www.juragentium.org/topics/migrant/es/castigo.htm>

——— (2012). La gestión de la exclusión social por parte del sistema penal. En M. Presno (Coord.), *Procura N° 2, Crisis económica y atención a las personas y grupos vulnerables* (pp. 112 – 131). España: Universidad de Oviedo-Área de Derecho Constitucional. Recuperado de <https://presnolinera.files.wordpress.com/2013/09/crisis-econ3b3mica-y-atencic3b3n-a-las-personas-y-grupos-vulnerables.pdf>, consulta: 7 de junio de 2015.

——— (2014a). ¿Una teleología de la seguridad sin libertad? la difusión de lógicas actuariales y gerenciales en las políticas punitivas. En M. Presno (Coord.), *Fundamentos. Cuadernos monográficos de teoría del Estado, Derecho Público e historia constitucional* (pp. 313 – 352). Oviedo: Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Recuperado de <http://www.unioviedo.es/constitucional/fundamentos/Portada.html>.

——— (2014b). *El gobierno de la penalidad: la complejidad de la política criminal contemporánea*. Madrid: Dykinson.

Bravo, Omar Alejandro (2011). *Las prisiones de la locura, la construcción institucional del preso psiquiátrico*. Cali: Editorial Universidad Icesi.

Brenner, Robert y Glick, Mark. (1991). *La escuela de la regulación: teoría e historia*,

Recuperado de

<file:///C:/Users/carlos.ruiz/Desktop/david%20garlan/Robert%20Brenner,%20Mark%20Glick%20et%20al.,%20La%20escuela%20de%20la%20Regulacin%20teora%20e%20historia,%20NLR%20I-188,%20July-August%201991.pdf>,

Bueno Arus, Francisco (1966). Panorama comparativo de los modernos sistemas penitenciarios. *Conferencia*, Universidad de Madrid, Madrid, España. Recuperado de dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2784668.pdf, consulta: 21 de abril de 2015.

——— (2006), Novedades en el concepto de tratamiento penitenciario. *Revista de Estudios Penitenciarios*, (252), 9-36. Recuperado de http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Revista_252-2006.pdf, consulta: 14 de abril de 2015.

Cadalso, Fernando (1922). *Instituciones Penitenciarias Y Similares En España*
Instituciones penitenciarias y similares en España. Madrid: Editorial,
 suprimir coma F. Góngora, . Madrid suprimir

Camarena Adame, María Elena y Tunal Santiago, Gerardo (2009). *La religión como una
 dimensión de la cultura. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*,
 22(2), 41-55. Recuperado de
<http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/NOMA0909240041A/26151>

Carranza, Elías (2012). Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué hacer?,
 suprimir coma en revista: suprimir Anuario de Derechos Humanos *Anuario de
 Derechos Humanos*. No. suprimir (8), 2012. Suprimir pp. 31 – 66. de:
<http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/issue/view/1970>, Tomado el 1 de
 febrero de 2017 suprimir doi: 10.5354/0718-2279.2012.20551

Castro, Edgardo. (2005). *El vocabulario DE de Michel Foucault: un recorrido alfabético
 por los temas, conceptos y autores*. Buenos Aires: Editorial Universidad Nacional de
 Quilmes.

_____ (2010). ¿Qué es la política para la biopolítica? En *Biopolítica del Sur*
 (pp. 21 – 33). Santiago de Chile: Arcis.

Castro Gil, Luis Eduardo (2015). *Informe Estadístico*. Bogotá: INPEC.

Cid Moliné, José Y y Larrauri Pijoan, Elena (2001). *Teorías Criminológicas. Explicación Y Prevención De La Delincuencia* *Teorías criminológicas. Explicación y prevención de la delincuencia*, . 1º Edición, suprimir Barcelona: Editorial BOSCH Bosch.

Cita Triana, Ricardo Antonio *et al.*, (2014). *Lineamientos para el fortalecimiento de la política penitenciaria en Colombia*. Proyecto fortalecimiento y seguimiento a la política penitenciaria en Colombia. Bogotá: Ministerio de Justicia y del Derecho.

Cohen, Stanley (1988). *Visiones De Control Social* *Visiones de control social*, . Ediciones suprimir Barcelona: PPU.

Comisión Asesora de Política Criminal (2012). Informe final-Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano *Informe final. Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano*. Recuperado de https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/INFO%20POLI%20CRIMINAL_FINAL23NOV.pdf

Cuesta, José Luis, Amunárriz, María Isabel, Muñoz Luz M., Lorenzo Ramiro y Resuste Mauricio. (1976). La peligrosidad y los jóvenes: prostitución toxicómanos y ebrios habituales. *Cuadernos del Instituto Vasco de Criminología*, (1), 30-66.

Cutiño Raya, Salvador (2013). *Análisis del principio de resocialización y su realidad en el sistema penitenciario español* (tesis doctoral). Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Sevilla, España. 2013, Recuperado de:
https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/806/salavdor_cuti%C3%B1o_tesis.pdf?sequence=1, consulta: 14 de abril de 2015.

De Giorgi, Alessandro (2005), *Tolerancia cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control*, . cColección eEnsayo, trads. Iñaki Rivera y Marta Monclús, Barcelona: Virus

_____ (2006). *El gobierno de la excedencia. posfordismo y control de la multitud*, trads. José Ángel Brandariz García y Hernán Bouvier, Madrid: Traficantes de Sueños.

_____ (2009). Hacia una economía post-fordista del castigo: lLa nueva penología como estrategia de control post-disciplinario. Tomado de la revista suprimir Delito y Sociedad *Delito y Sociedad*, volumen suprimir 1 I, número suprimir (27). , pp. 45-71.

_____ (2016). Castigo y Eeconomía Ppolítica. En: revista suprimir Delito y Sociedad *Delito y Sociedad*, 1(41), año 25. suprimir PP pp.. 9 – 36.

De la Cuesta Arzamendi, J. (1993). La Resocialización: Objetivo de la Intervención Penitenciaria. *Papers D'estudis I Formacio*, (12), 9-21.

Del Rosal Blasco, Bernardo (2009). ¿Hacia el derecho penal de la postmodernidad?. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, (11-08), pp.08:1-08:64.
Recuperado de <http://criminet.ugr.es/recpc/11/recpc11-08.pdf>

Del Pont Koclin, Luis Marcó (1974). Penología Y Sistemas Carcelarios *Penología y sistemas carcelarios*, . Buenos Aires: Editorial Ediciones Depalma

Díaz Aguilar, Cecilia Natalia (s.f). *Inimputabilidad y peligrosidad en el Derecho Penal contemporáneo*. Recuperado de
http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20Numero_3/inimputabilidad.pdf

Díaz Galvis, María; Ramírez, Hernando y Vélez, Liliana (2004). *Plan de Acción y Sistemas de Oportunidades*, PASO. Bogotá: Ministerio del Interior y de Justicia e INPEC.

Díez Ripollés, José Luis. (2005). De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, (07-01), 1-37. Recuperado de <http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-01.pdf>.

Diccionario de la lengua española (edición del Tricentenario). Recuperado de

<http://dle.rae.es/?id=0dK6SJH>

Domínguez Figueirido, José Luis y Rodríguez Basanta, Anabel. (2003). Lógica actuarial, seguridad y sistema de justicia criminal. En C. da Agra, J. Domínguez, J. García, P. Hebberecht y A. Recasens (Coords.), *Seguridad en la sociedad del riesgo. un debate abierto* (pp. 329-351). España: Atelier, sitio web: *Academia*. Recuperado de http://www.academia.edu/6482734/L%C3%B3gica_actuarial_seguridad_y_sistema_de_justicia_criminal.

Dorado Montero, Pedro (1923). Bases Para Un Nuevo Derecho Penal *Bases para un nuevo derecho penal*, . Barcelona, : Editorial Calpe.

Dorado Montero, Pedro (1927). Naturaleza Y Función Del Derecho *Naturaleza y función del derecho*, . Madrid, : Editorial Reus.

Dougherty Jude P (1981). *La religión como objeto de estudio filosófico*. Revista *Anuario Filosófico*, vol. 14, n 2, 71 – 85. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10171/2086>.

Douglas, Mary. (1996). *La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales*, trad. Víctor Abelardo Martínez, Barcelona: Paidós.

DNP (Departamento Nacional de Planeación). (2011). Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. *Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad*. Departamento Nacional de Planeación. Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf>

_____ (2015). Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país *Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Todos por un nuevo país*, Tomo I lt.,. suprimir punto Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%20I%20internet.pdf>

Duménil, Gérard; Lowy, Michael y Renault Emmanuel (2015). *Leer a Marx*, trad. Irene Agoff, Buenos Aires: Amorrortu editores.

Durkheim, Émile (1982). *Las formas elementales de la vida religiosa. El sistema totémico en Australia*, trad. Ramón Ramos, Madrid: Akal.

Durkheim, Emilio. (2001). *Las reglas del método sociológico*, trad. Ernestina de Champourcín, México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

ECOSOC (1990), Resolución 1990/20, del 24 de mayo *La educación en los establecimientos penitenciarios*. Recuperado de

[http://www.unesco.org/education/uie/online/prisp/annexo.](http://www.unesco.org/education/uie/online/prisp/annexo.html)

html, consulta: 14 de abril de 2015.

Equipo académico La bisagra (Ed.). (2011). *Reseña crítica de “Miserias del presente,*

riqueza de lo posible”, de Gorz, André. Argentina: La bisagra. Recuperado de

[http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.ac](http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=10505399&ppg=2)

[tion?docID=10505399&ppg=2](http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=10505399&ppg=2)

Esbec Rodríguez, Enrique (2003). Valoración de la peligrosidad criminal (riesgo – violencia) En sicología forense. Aproximación conceptual e histórica. *Psicopatología Clínica Legal y Forense*, 3, (2), 45 – 64.

Feeley, Malcom y Simon, Jonathan. (1995). La nueva penología. Notas acerca de las estrategias emergentes en el sistema penal y sus implicaciones. *Delito y Sociedad*. *Revista de Ciencias Sociales*, (6/7), pp. 33-57.

Feeley, Malcolm (2008). Reflexiones Sobre los Oorígenes de la Jjusticia Aactuarial. Tomado de la revista: suprimir Delito y Sociedad *Delito y Sociedad*, vol. suprimir 2, suprimir coma Núm. suprimir (26) (2008) suprimir, pp. 19 – 36.

Feijoo, B. (2002). Las teorías clásicas de la pena. *Revista Peruana de Ciencias Penales*, edición especial. sobre el Código Penal peruano. (11), 332-336.

Felson Marcus y Clarke Ronald V. (1998). La ocasión hace al ladrón. Teoría práctica para

la prevención del delito, trad. Maite Díaz i Pont y David Felipi Saborit). En Serie

Claves del Gobierno Local, 6 (pp. 193-234). Londres: Fundación Democracia y

Gobierno Local. Recuperado de

http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/855/claves06_09_felson_clarke.pdf?sequence=1

Fernández Bermejo, Daniel (2013). Individualización Científica Y Tratamiento En

Prisión *Individualización científica y tratamiento en prisión*. Premio

Nacional Victoria Kent. Secretaría General De Instituciones Penitenciarias,

Ministerio Del Interior, Gobierno De España. suprimir En: Recuperado de

<http://Www.Institucionpenitenciaria.Es/Web/Portal/Documentos/Publicaciones.Html>

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/Individualizacixn_Cientixica_y_Tratamiento_en_prisixn_Web_Premio_VK_2013_2_Accxsit_.pdf

Fernández García, Julio; Pérez Cepeda, Ana; Sanz Mulas, Nieves; Zuñiga Rodríguez, Laura (2001). *Manual de derecho penitenciario*. Salamanca: Editorial Colex.

Fernández Rodríguez, María Dolores (1976). El Pensamiento Penitenciario Y Criminológico De Rafael Salillas *El pensamiento penitenciario y criminológico de Rafael Salillas*. Monografías (Tesis doctoral). De La suprimir Universidad Dde Santiago Dde Compostela, 1º Edición, suprimir Editorial: suprimir Universidad De suprimir Santiago Dde Compostela, España.

Fernando Cadalso Cadalso, Fernando ya se puso arriba (1922). Instituciones Penitenciarias Y Similares En España. Editorial, F Góngora, Madrid

Ferrajoli, L. (1995). *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*. Madrid: Trotta Editorial.

Ferrajoli, Luigi (2004). Derecho Y Razón. Teoría Del Garantismo Penal *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*. 6º Edición (6 edic.), . Madrid: Editorial Trotta.

Foucault, Michel. (1996). *La vida de los hombres infames*. Buenos Aires: Caronte Ensayos.

——— (1996). *La vida de los hombres infames, ensayos sobre desviación y dominación*, eds. y trads. Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría. La Plata, Argentina: Editorial Altamira.

——— (2006). *Seguridad, territorio y población, curso en el collège de France (1977-1978)*. Buenos Aires: Editorial Fondo de Cultura Económica.

Galeano Marín, María Eumelia (2004). *Diseño De Proyectos En La Investigación Cualitativa* *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*, . 1ed. suprimir
Medellín: Ed. suprimir Fondo Editorial Universidad Eafit. Medellín, 2004. suprimir

García Guerrero, Julio (2013). *El consentimiento informado en los pacientes privados de libertad* (tesis doctoral). Universidad de Valencia, Valencia, España. Recuperado de <http://roderic.uv.es/bistream/handle/10550/30168/TEXT0%20DEFINITIVO.pdf?sequence=1>, consulta: 15 de abril de 2015

García Pablos de Molina, Antonio (2003). *Tratado de Criminología*, 3ª ed., Madrid: Tirant lo Blanch.

García Ramírez, Sergio (2014). *Los reformadores Beccaria, Howard y el Derecho Penal Ilustrado*. Valencia: Tirant – Lo Blanch.

García Valdés, Carlos (1989). LA PRISIÓN, AYER Y HOY *La prisión ayer y hoy*. Tomado De: Derecho Penitenciario (Escritos, 1982 – 1989) Ministerio De Justicia.
.Http://Www.Cienciaspenales.Net Recuperado de
<http://www.cienciaspenales.net/files/2016/07/3valdes-1.pdf>

Garland, David. (2005). *La cultura del control, crimen y orden social en la sociedad contemporánea*, trad. Máximo Sozzo). Barcelona: Gedisa.

Garland, David (2005). La Cultura Del Control. Crimen Y Orden Social En La Sociedad Contemporánea *La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea*, . Barcelona: Editorial Gedisa.

_____ (2006). Las contradicciones de la “sociedad punitiva”. El caso británico. Tomado de la revista: suprimir Delito y Sociedad *Delito y Sociedad*. Volumen suprimir 1 I, número suprimir (22). , pp. 95-111.

_____ (2010). Los conceptos de cultura en la sociología del castigo. *Delito y sociedad*. Págs 7 – 32. Tomado de la revista delito y sociedad: vol. suprimir 2 2, Núm. suprimir (30), pp. 7-32..

Garófalo, Rafael (1912). *La Criminología. Estudio sobre la naturaleza del crimen y teoría de la penalidad*, trad. Pedro Borrajo, Madrid, España: Editorial Daniel Jorro.

Garrido Guzmán, Luis (1976). Compendio De Ciencia Penitenciaria *Compendio de ciencia penitenciaria*. Colección Dde Estudios Ddel Instituto Dde Criminología Yy Departamento Dde Derecho Penal. Editorial Universidad De Valencia. suprimir Valencia, : 1976 suprimir Editorial Universidad de Valencia.

Gaviria, C. (7 de agosto de 1990): Discurso de posesión del señor Presidente de la República de Colombia, César Gaviria Trujillo *Discurso de posesión del señor presidente de la República de Colombia, César Gaviria Trujillo*: . agosto 7 de 1990. suprimir Presidencia de la República. , Bogotá.

Giner, S. (2010). *Sociología*. Barcelona, España: Ediciones Península.

Goffman, Erving (1961). *Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*. Buenos Aires, Argentina suprimir: Amorrortu ediciones editores.

_____. suprimir punto (1981). La Presentación De La Persona En La Vida Cotidiana *La presentación de la persona en la vida cotidiana*, . 1º Edición En Castellano, 1981: Tercera Reimpresión, 1997 suprimir. Editorial, suprimir Buenos Aires: Amorrortuo Eeditores.

Gómez Bravo, Gutmaro (2004). Crimen Y Castigo: Cárceles, Delito Y Violencia En La España Del Siglo XIX *Crimen y castigo: Cárceles, delito y violencia en la España del siglo XIX*. (Tesis Ddoctoral), . Facultad De Geografía E Historia, suprimir Universidad Complutense Dde Madrid, Madrid, España.

Gómez de la Torre, Ignacio Berdugo y Zúñiga Rodríguez, Laura (2001). *Manual de Derecho Penitenciario*. Salamanca, España: Editorial Colex.

Gómez Grillo, Elio (2005). *Evolución Histórica de la Cárcel*. I Congreso Internacional Sobre Derecho Penal y Criminología. Venezuela. Recuperado de

<https://es.scribd.com/doc/6678247/i-Congreso-Sobre-Derecho-Penal-y-Criminologia-Tsj>.

Gómez Hermoso, María del Rocío (2013). *Informe sobre la eficacia de las predicciones sobre peligrosidad de los informes psicológicos forenses emitidos en los juzgados de vigilancia penitenciaria de Madrid*. Madrid, España: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Gómez Jaramillo, Alejandro. (2012). *Estados del arte de los procesos de evaluación y caracterización de la población interna, Bogotá*. Universidad Nacional de Colombia – INPEC.

Gómez Jaramillo, Alejandro y Silva García, Germán (2015). *El futuro de la criminología crítica*. Bogotá: Editorial Universidad Católica.

Juan Carlos Gómez Leyton Gómez Leyton, Juan Carlos (2010). *Política, Democracia y Ciudadanía en una Sociedad Neoliberal Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal* (Chile: 1990-2010). 1ª edición, suprimir Santiago de Chile, : Editorial ARCIS/ PROSPAL/ CLACSO.

González Sánchez, Ignacio (primer semestre de 2011). Redefiniendo la pobreza y la penalidad: I La formación del Estado neoliberal. Tomado de: suprimir revista

española de sociología (RES) *Revista Española de Sociología (RES)*. N° (15), primer semestre, 2011. Suprimir PP pp. 97 – 124.

_____ (2015). La penalidad neoliberal: Aumento de Presos y Reconfiguración del Estado en España (1975-2008) *La penalidad neoliberal: Aumento de presos y reconfiguración del Estado en España (1975-2008)*. (Tesis Ddoctoral), . Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, suprimir Universidad Complutense Dde Madrid, Madrid, España.

Hardt, Michael y Negri, Antonio. (2006). *Multitudes. Guerra y democracia en la era del Imperio*. Barcelona.

Harvey, David. (2008). El neoliberalismo como destrucción creativa, trad. Germán Leyens. *Apuntes del CENES*, 27 (45): enero – junio. pp. 10 – 34. Recuperado de <http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/cenes/article/view/3032>

Hassemer, W. (1984). *Fundamentos del Derecho Penal*. Barcelona, España: Editorial Bosch.

Hegel, G.W.F. (1973). *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*. 2ª ed., México:Editorial Porrúa.

————— (1978). *Escritos de juventud*. México: Fondo de Cultura Económica.

————— (1999). *Principios de la filosofía del Derecho o Derecho Natural y Ciencia Política*. 2ª ed., Juan Luis Vernal, Barcelona, España: Editorial Edhasa.

Hernández, Gerardo A. (s.f). *El tratamiento penitenciario, una mirada desde la criminología*. Recuperado de <http://extension.upbbga.edu.co/inpec2009/Estudiosprimeraparte/areasdisciplinarias/criminologia.pdf>, consulta: 15 de abril de 2015.

Hernández, José Gregorio (6 de junio de 2011). “ suprimir comillas Adiós Aal Estado Ssocial Dde Dderecho” suprimir comillas , . En suprimir La Patria *La Patria*, p. o pp. falta el número o los números de página Manizales, 6 De Junio suprimir.

Herner Alejandro y Niszt Acosta Florencia. (s.f). *La gestión preventiva del delito en el contexto de las nuevas racionalidades políticas neoliberales*. En Actas V Congreso Nacional de Sociología Jurídica, La Pampa: Universidad Nacional de La Pampa y Sociedad Argentina de Sociología Jurídica Argentina.

Hilarión Díaz, Sara. *La subdirección de tratamiento y desarrollo y el sistema de atención a la población interna*. Documento interno. Santafé de Bogotá: INPEC.

Houtart, Francois (1997). *Sociología de la religión*. México: Plaza y Valdés editores.

Iglesias Skulj, Agustina. (2010). *Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros: cambio de paradigma en el Estatuto de la Ley Penal y en los mecanismos de control* (tesis doctoral). Universidad de Salamanca, Salamanca, España.

Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Como el autor es el PNUD, va en la p. Ya lo puse allá.

Ingenieros, José (1913). *Criminología*, . 1º Edición, suprimir Madrid: Editorial Daniel Jorro.

INPEC (2013), *Glosario Penitenciario*. Bogotá: (s.e). Recuperado de http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_CONTENTIDO/NOTICIAS%20Y%20NORMATIVIDAD/ESTADISTICAS/GLOSARIO%20DE%20TERMINOS_0.pdf, consulta: 15 de abril de 2015.

————— (2011) *Caracterización y perfilación criminológica y penitenciaria de la población condenada y privada de la libertad en los establecimientos de reclusión del INPEC y propuesta para el direccionamiento del tratamiento penitenciario en Colombia*. Bogotá: (s.e) Recuperado de <https://relatores tematicos.uniandes.edu.co/images/stories/relatorias/PRISIONES OCT 2011/E>

NT.ESTATALES/INPEC/OTROSDOCUMENTOS/caracterizaciony
 perfilacioncriminologica2011.pdf

————— (s.f). *Hacia la construcción de una nueva relación. Modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario colombiano*. Bogotá: (s.e). Recuperado de www.inpec.gov.co/.../INPEC.../MODELO%20EDUCATIVO/970014.doc, consulta: 15 de abril de 2015.

Iturralde, Manuel Y y Ariza, Libardo José (2011). *Los Muros De La Infamia: Prisiones En Colombia Y En América Latina* *Los muros de la infamia: Prisiones en Colombia y en América Latina*, . Ediciones Uniandes, Bogotá Bogotá: Ediciones Uniandes.

————— (2012). En *Contra Dde Llos Ppobres: Justicia Ppenal Yy Pprisiones Een América Latina. El Ccaso Dde Colombia*, . Pp. 15 – 30, va más abajo, ya lo puse En Gargarella, Roberto, suprimir coma (coord.). *El Castigo Penal En Sociedades Desiguales* *El castigo penal en sociedades desiguales* (pp. 15-30), . Buenos Aires, : 1º Edición, suprimir Editores Miño Y y Dávila

Jakobs, G. (1997). *Derecho Penal. Parte general*. 2ª ed., corregida, Madrid: Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S. A.

————— (2006). *La pena estatal: significado y finalidad*. Madrid: Editorial Tomson Civitas.

————— y Cancio Meliá, Manuel. (2006). *Derecho penal del enemigo*, 2ª ed.,

Madrid: Civitas.

Jaramillo Giraldo, Juan Esteban (2016). La Pproducción Nneoliberal de Vvidas Rresiduales. Agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación *Agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación*. Recuperado de <http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2016/10/12/la-produccion-neoliberal-de-vidas-residuales/> consultado Consulta: el 23/02/2017 23 de febrero de 2017.

Jescheck, H. (1981). *Tratado de Derecho Penal. Parte general*. (3ª ed., trads. y adiciones de Derecho español por Santiago Mir Puig y Francisco Muñoz Conde. Barcelona, España: Editorial Bosch.

Jiménez de Asúa, Luis (1920). *El estado peligroso del delincuente y sus consecuencias ante el Derecho Penal moderno*. Madrid, España: Editorial Reus Recuperado de bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110107673.

Jiménez Martínez, Custodia (2012). La libertad vigilada en el CP de 2010. Especial mención a la libertad vigilada para imputables peligrosos. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, (7).

Kant, E. (1980). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres, crítica de la razón práctica, la paz perpetua*. 4ª, México: Editorial Porrúa.

————— (1989). *La metafísica de las costumbres*. trads. y notas de Adela Cortina Orts y Jesús Conill Sancho. Madrid, España: Editorial Tecnos.

Kerbo, Harold (2004). Estratificación Social Y Desigualdad. Estratificación social y desigualdad. El Conflicto De Clase En Perspectiva Histórica, Comparada Y Global. Suprimir *Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica, comparada y global*. (5 edic.). Trad. María Teresa Casado. Quinta Edición, suprimir Madrid: Mc Graw Hill, . Trad. María Teresa Casado, Madrid. suprimir

Kung, Hans (1979). *¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo*. 2ª ed., Madrid: Ediciones Cristiandad.

Lambuley García, Héctor Hernando (Coord.). (2011). *Caracterización y perfilación criminológica y penitenciaria de la población condenada y privada de la libertad en los establecimientos de reclusión del INPEC y propuesta para el direccionamiento del tratamiento penitenciario en Colombia*. Bogotá: INPEC.

Lara Corredor, David Eduardo (2008). Libertad religiosa, persona y Estado. De la identidad a la tradición. *DIDAC Nueva Época*, (51), 55 – 61.

Lazo, Gemma Nicolas *et al.* (2005). La desembocadura en la «sociedad del riesgo». Su marco teórico europeo. En Rivera Beiras, Iñaki (Dir), *Política criminal y sistema penal viejas y nuevas racionalidades punitivas* (pp. 226 – 253): Editorial Anthropos.

Leal Medina, Julio (1999). La Problemática existente para la aplicación y ejecución de las medidas de seguridad (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.

Leganés Gómez, Santiago (2013), . Clasificación Penitenciaria Y Medio Abierto. *Clasificación penitenciaria y medio abierto.* (Tesis Ddoctoral), . Facultad De Derecho, suprimir Universidad Dde Valencia, Valencia, España.

Lemaitre, Julieta (cComp.). (2011). Derechos enterrados. Comunidades étnicas y campesinas en Colombia, nueve casos de estudio *Derechos enterrados. Comunidades étnicas y campesinas en Colombia, nueve casos de estudio.* Bogotá: Universidad de los Andes. Facultad de Derecho, Centro de Investigaciones Sociojurídicas. suprimir Ediciones Uniandes.

Hernando León Londoño Berrío Londoño Berrío, Hernando León (2013). Pluralismo Punitivo y Derechos Humanos: El Caso de la Comuna 13 de Medellín-Colombia (2000-2010) *Pluralismo punitivo y derechos humanos: El caso de la comuna 13 de Medellín-Colombia (2000-2010).* (Tesis Ddoctoral). Universidad Pablo de Olavide, Departamento de Derecho Público. Programa de Doctorado en Derechos Humanos

y Desarrollo. Sevilla, España. Suprimir Recuperado de <https://rio.upo.es/xmlui/bitstream/handle/10433/2015/londo%C3%B1o-berrio-tesis14.pdf?sequence=1> Consulta: 1 de febrero de 2017

Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Trabajo al servicio del desarrollo humano. Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Va en la p porque el autor es PNUD, ya lo puse allá.

López Jaramillo, Olga et al., (2003). *Sistema progresivo penitenciario alternativo. Un modelo de intervención para el sistema penitenciario colombiano*. Medellín: Universidad de Antioquia – Instituto de Estudios Regionales (INER).

López Melero, Montserrat (2012). Evolución de los Sistemas Penitenciarios y de la Ejecución Penal. *Anuario Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá)*, V, pp. 401-448. Recuperado de <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/08/doctrina39626.pdf>

López Melero, Montserrat (2012). Evolución Dde Llos Ssistemas Ppenitenciarios Yy Dde Lla Eejecución Ppenal. Tomado De La Revista: *Anuario Facultad De Derecho Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá)*. (5), - Universidad De Alcalá V (2012), suprimir Ppp. 401-448.

Lutz, Bruno (2013). Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social.

En revista: suprimir Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad *Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad*. Vol. XX No. 57 20(57), pp. 177 – 189.

Macionis, J. y Plummer, K. (1999). *Sociología*, trads. Roberto Garvía y Celia Valiente.

Madrid: Editorial Pearson Educación.

Maldonado Fuentes, Francisco (2011). ¿Se puede justificar la aplicación copulativa de penas y medidas de seguridad? Estado actual de las posiciones doctrinales que buscan dicho objetivo. *Polít. crim.*, 6 (12), pp. 387 - 447. Recuperado de http://www.politicacriminal.cl/Vol_06/n_12/Vol6N12A5.pdf

Mansilla, M. (s.f). *La socialización diferenciada por sexo*. Recuperado de http://www.ifejant.org.pe/Aulavirtual/aulavirtual2/uploaddata/19/Unidad1/Tema5/socializacion_diferenciada_-_Eugenia_Mansilla.pdf.

Martínez, Pedro Ramón (2013). *Convergencia de las ciencias jurídicas, criminológicas y penitenciarias en la verificación de las consecuencias jurídicas del delito. Especial atención a la eficiencia de la pena de prisión* (tesis doctoral), Universidad de Murcia, Murcia, España. Recuperado de <http://www.tdx.cat/bistream/handle/10803/123983/TPRM.pdf?sequence=1>, consulta: 15 de abril de 2015

Martínez Carazo, Piedad Cristina (2006). El Método de Estudio de Caso. Estrategia Metodológica de la Investigación Científica. Tomado De La Revista: Pensamiento & Gestión *Pensamiento & Gestión*, . (20). Universidad Del Norte, pp. 165-193, . 2006

Martínez Garay, Lucía (2014). La incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad: consecuencias para la dogmática de las medidas de seguridad. *Revista para Análisis del Derecho*, (12).

Marx, Karl (2014). *Introducción a la crítica de la filosofía del Derecho de Hegel*, trad. José María Ripalda, Valencia: Pre – Textos.

Matthes, Joachim (1971). *Introducción a la sociología de la religión. I religión y sociedad*. Madrid: Alianza Editorial.

Maurach, R. (1962). *Tratado de Derecho Penal*. Barcelona, España: Editorial Ariel.

Mayer, M. (2007). *Derecho Penal parte general*. Montevideo – Buenos Aires: Editorial BdeF.

Melossi, Dario y Pavarini, Massimo (2008). *Cárcel y Fabrica los Orígenes del Sistema Penitenciario (siglo XVI – XIX)*. 6º ed., México: Ed. Siglo XXI,

Mezger, E. (1933). *Tratado de Derecho Penal*. Tomo 1. 2ª ed., alemana trad. José Arturo Rodríguez Muñoz, Madrid, España: Editorial Revista de Derecho Privado.

Milla Vásquez, Diana Gisella (2014). Los Beneficios Penitenciarios Como Instrumentos De Acercamiento A La Libertad. Análisis Desde La Legislación Iberoamericana *Los beneficios penitenciarios como instrumentos de acercamiento a la libertad. Análisis desde la legislación iberoamericana*. (Tesis Ddoctoral). Facultad De Derecho, suprimir Universidad Dde Alcalá, Alcalá de Henares, España.

Ministerio Ddel Interior Yy Dde Justicia Ee Instituto Penitenciario Yy Carcelario, . (2009). Diseño, Validación E Implementación De Instrumentos Científicos Para El Proceso De Valoración, Clasificación Y Seguimiento En El Tratamiento Penitenciario De La Población Condenada En Los Establecimientos De Reclusión Del Orden Nacional. Instrumento Para La Valoración Integral De Condenados I.V.I.C. *Diseño, validación e implementación de instrumentos científicos para el proceso de valoración, clasificación y seguimiento en el tratamiento penitenciario de la población condenada en los establecimientos de reclusión del orden nacional. Instrumento para la valoración integral de condenados I.V.I.C.*, suprimir coma 1 Edición, suprimir Bogotá: Editorial suprimir Instituto Penitenciario Yy Carcelario.

Miquelarena Meritello, Alejandro (2013). Las Cárceles Y Sus Orígenes *Las cárceles y sus orígenes*. Tomado De, Recuperado de

[Http://Www.Pensamientopenal.Com.Ar/System/Files/2013/08/Doctrina3706](http://Www.Pensamientopenal.Com.Ar/System/Files/2013/08/Doctrina3706).

<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2013/08/doctrina37067.pdf>

MIR, S. (1989) ¿Qué queda en pie de la resocialización? *Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología* (2), edición extraordinaria, pp. 35-42.

Mir Puig, Carlos (2015). *Derecho Penitenciario. El cumplimiento de la pena privativa de libertad*. 3ª ed., Barcelona: Atelier.

Miranda Rodrigues, Anabela (2001). Consensualismo Yy Prisión: Nuevos Desafíos. Tomado De : En ARROYO ZAPATERO Arroyo Zapatero, Luis Yy Berdugo Goómez de la Torre, Ignacio (Dirs.): . Homenaje Al Dr. Marino Barbero Santos In *Memoriam Homenaje al dr. Marino Barbero Santo. In memoriam*. (Ppp.367-389). Cuenca: Ediciones Dde Lla Universidad Dde Castilla - La Mancha, y Eduiciones Universidad Salamanca, Cuenca suprimir.

Montesinos Yy Molina, Manuel (1846): .“ suprimir comillas Reflexiones Sobre La Organización Del Presidio De Valencia, Reforma De La Dirección General Del Ramo, Y Sistema Económico Del Mismo *Reflexiones sobre la organización del presidio de Valencia. Reforma de la dirección general del ramo y sistema económico del mismo*. s.l.e. Por El Coronel Montesinos, Visitador General De Los Presidios Del Reino”. Imprenta Del Presidio. Copia Facsímil. Servicio De Reproducción De Libros De Librerías París-Valencia. 1979. Suprimir.

Mora, J. (1994). *Diccionario de filosofía*. Barcelona, España: Editorial Ariel.

Moya Vargas, Manuel Fernando (s.f.). *Análisis jurídico del tratamiento penitenciario*.

Recuperado de

<http://extension.upbbga.edu.co/web2/pagina2/archivos/DERECHO.pdf>, consulta: 15 de abril de 2015.

Muñagorri Laguia, Ignacio (1977). *Sanción penal y política criminal. Confrontación con la nueva defensa social* Madrid, España: Editorial Reus.

Muñoz, F. (1985). *Derecho Penal y control social*. Jerez: Editorial Fundación Universitaria de Jerez.

Navarro Hernández, Nancy (2010). Aprendizaje Multiprofesional basado en Problemas en Profesionales de la Salud: un Estudio de Caso. *Aprendizaje multiprofesional basado en problemas de profesionales de la salud: Un estudio de caso*. (Tesis Ddoctoral), . Universidad de Barcelona, Barcelona, España. 2010. suprimir

Negri, Antonio. (2008). *La fábrica de porcelana, una nueva gramática de la política*, trad. Susana Lauro, Barcelona: Paidós.

Neuman, Elías (1971). *Evolución de la pena privativa de la libertad y regímenes penitenciarios*. Argentina: Ediciones Pannedille.

Núñez Rebolledo, Lucía (2011). La prevención del delito a través de los paradigmas criminológicos. En Ordaz Hernández, David *et al.* (coord.), *Criminología reflexiva. Discusiones acerca de la criminalidad*, pp. 49 – 76, México: Editorial Ubijus.

Ocampo, José Antonio, Sánchez Fabio y Tovar, Camilo Ernesto. (2000). Mercado laboral y distribución del ingreso en Colombia en los años noventa. *REVISTA DE LA CEPAL Revista de la Cepal* 72. suprimir Tomado de: Recuperado de http://biblioteca2012.hegoa.efaber.net/system/ebooks/9895/original/Mercado_laboral_y_distribucion_del_ingreso_en_Colombia_en_los_años_noventa.pdf

_____ (2001). Un Futuro Económico para Colombia *Un futuro económico para Colombia*. s.l.e Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL). suprimir

O' Donnell, D., Uprimny, I. y Valencia, A., comps. (2001). *Compilación de instrumentos internacionales. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional*. Bogotá: Oficina en Colombia Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

_____ (2004). *Derecho internacional de los Derechos Humanos*. Bogotá: Oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

- Olivas Díaz, Amaya. (2010). Tendencias del presente penal. La evolución de la política criminal hacia el castigo oblicuo. *De Cive*, (0), pp. 110 – 130.
- O' Malley, Pat (2015). Repensando la penalidad neoliberal. Trad. José Ángel Brandariz García. Tomado de la revista: suprimir Delito y Sociedad *Delito y Sociedad*, volumen 2, número 40 2(40). , pp. 11-30. Traducción de (Universidad de A Coruña, España). suprimir
- Orjuela Escobar, Luis Javier (2005). La Sociedad Colombiana En Los Años Noventa: Fragmentación, Legitimidad Y Eficiencia *La sociedad colombiana en los años noventa: Fragmentación, legitimidad y eficiencia*. Bogotá: Universidad De Los Andes, Facultad De Ciencias Sociales, Departamento De Ciencia Política, Centro De Estudios Socioculturales E Internacionales, suprimir Ediciones Uniandes.
- Ostrosky, Solís Feggy *et al* (2008, octubre). Estandarización de la PCL-R en población penitenciaria mexicana. *Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias*, 8 (2), pp. 49-58.
- Ottoboni, Mario (2002). *¿Vamos a matar al criminal? Método APAC*. San José de los Campos, Brasil: Centro Internacional de Justicia y Reconciliación. Confraternidad Carcelaria Internacional.

Pallares, E. (1964). *Diccionario de filosofía*. México: Editorial Porrúa.

Panarello, Giulia (2015). “Historia Y Concepto De La Criminología Crítica. Genealogía De Una Teoría Entre Muertes, Resurrecciones Y Transformaciones” *Historia y concepto de la criminología crítica. Genealogía de una teoría entre muertes, resurrecciones y transformaciones*. Trabajo De Maestría (Tesis de maestría). Del: Máster Universitario En Estudios Avanzados En Derechos Humanos Instituto De Derechos Humanos “Bartolomé De Las Casas”, Universidad Carlos III De Madrid. Tomado De: Recuperado de [Http://E-Archivo.Uc3m.Es/Handle/10016/21234](http://E-Archivo.Uc3m.Es/Handle/10016/21234)
<http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/07/doctrina41538.pdf>

Paredes Torres, Flor María (2015). *Criminalización de la pobreza y derechos humanos*. (Tesis de maestría). Universidad Carlos III de Madrid. Recuperado de http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/21233/TFM_MEADH_Flor_Paredes_2015.pdf

Park Ezra, Robert. (1999). *La ciudad y otros ensayos de ecología urbana*, trad. Emilio Martínez, Barcelona: Ediciones del Serbal.

Patiño Peña, Luceli Yy Rojas, Mauricio. Métodos Y Enfoques En La Investigación Cualitativa, *Métodos y enfoques en la investigación cualitativa*. Tomado De: Recuperado de <Http://Www.Tecnoeduka.Uuuq.Com/Documentos/Investiga/Libros/Rojas%20patino>

%20-%20cualitativa.Pdf.Ojo, dice que no se puede acceder a ese sitio Última Visita,
Consulta: 7 Dde Jjunio Dde 2012 Aa Llas 9:00 p.m.

Pavarini, Massimo. (2002). *Control y dominación: teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico*. Argentina: Siglo XXI Editores.

——— (2003). “Economía del exceso” y castigos excesivos. *Cahiers de defense sociale: Bulletin de la Société internationale de défense sociale pour une politique criminelle humaniste*, (30), pp. 230-245. Sitio web: *Defense sociale*. Recuperado de <http://www.defensesociale.org/revista2003/14.pdf>, consulta: 21 de enero de 2016.

Payá, Víctor Alejandro (2011). Reflexiones etnográficas en torno al tatuaje en prisión. En Ordaz Hernández, David y Cunjuma López, Emilio Daniel (Ed.), *Criminología reflexiva. Discusiones acerca de la criminalidad*. México: Editorial Ubijus.

Petrus, A. (Coord.). (1997). *Pedagogía Social*. Barcelona, España: Editorial Ariel.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). (2013). Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. *Informe regional de desarrollo humano 2013-2014. Seguridad ciudadana con rostro humano: Diagnóstico y propuestas para América Latina*. Recuperado de <http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf>

_____ (2015). Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Trabajo al servicio del desarrollo humano. *Informe sobre desarrollo humano 2015. Trabajo al servicio del desarrollo humano*. Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Suprimir Recuperado de http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2015_report_sp.pdf

Posada Segura, Juan David (2013). Tratamiento penitenciario: dificultades y posibilidades. En: Gallego, Elkin y Posada, Juan David. *Delito y tratamiento penitenciario en el contexto de los derechos humanos*, pp. 69-81. Medellín: Ediciones UNAULA – Instituto Colombiano de Derechos Humanos.

_____ (2008). *El Sistema Penitenciario: Estudio sobre la privación de la libertad y los derechos fundamentales*. Bogotá: Librería Jurídica Comlibros.

Prado, Carolina. (2013). *La cuestión del trabajo penitenciario frente al cambio de paradigma. Conflictos y desafíos de su aplicación, tras el debilitamiento del ideal resocializador y en el contexto del posfordismo. El caso de Cataluña* (tesis doctoral). Universidad de Barcelona. Recuperado de <http://www.tdx.cat/search?query=La+cuesti%C3%B3n+del+trabajo+penitenciario+frente++cambio+de+paradigma.++Conflictos+y+desaf%C3%ADos+de+su+aplicaci%C3%B3n%2C+tras+el+debilitamiento+del+ideal+resocializador+y+en+el+contexto+del+postfordismo.+El+caso+de+Catalu%C3%B1a&scope=%2F&ocult=0>

ProQuest ebrary (2015). Reseña crítica de “Miserias del presente, riqueza de lo posible” de

Gorz, André. Recuperado de

<http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=10505399&ppg=2>

Pueyo, Antonio Andrés y Redondo Illescas, Santiago (2007). Predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia. *Papeles del Psicólogo*, 28(3), pp. 145-146. Recuperado de <http://www.Cop.Es/Papeles>.

Pueyo, Antonio Andrés y Echeburúa, Enrique. (2010). Valoración del riesgo de violencia: instrumentos disponibles e indicaciones de aplicación. *Psicothema*, 22 (3), pp. 403-409. Recuperado de <http://www.psicothema.com/pdf/3744.pdf>

Pujol Robinat, Amadeo y Puig Bausili, Luisa (2008). Concepto de peligrosidad criminal. Evolución histórica del concepto. *Cuadernos de Política Criminal*, I (94), pp. 255-283.

Quevedo, Ruth Yy Giraldo, César (2009). “suprimir comillas Balance Ddel Ccomponente Ssocial Ddel Plan Nacional Dde Desarrollo “Hacia Uun Estado Ccomunitario” 2002-2006” suprimir comillas. En: suprimir dos puntos Quevedo, Ruth; Gallardo, Álvaro Yy Perilla, Marisol. (2009) suprimir Crisis Del Modelo Neoliberal Y Desigualdad En Colombia: Dos Décadas De Políticas Públicas *Crisis del modelo*

- neoliberal y desigualdad en Colombia: Dos décadas de políticas públicas.* (pp. 173-214). Bogotá D.C.: Ediciones Desde Abajo. Pp. 173-214 suprimir
- Quintero, Fabián (2011). Tratamiento penitenciario en la provincia de Buenos Aires. El desafío de ajustar la legislación a la práctica internacional. *Opinión Jurídica*, 10 (19), pp. 171-178.
- Ramos Vásquez, Isabel (2013). *La reforma penitenciaria en la historia contemporánea española*. Madrid: Dykinson.
- Redondo Illescas, Santiago (2008). Individuos, Sociedades Y Oportunidades En La Explicación Y Prevención Del Delito: Modelo Del Triple Riesgo Delictivo (TRD). Publicado En La suprimir Revista Española De Investigación Criminológica *Revista Española de Investigación Criminológica*, . Artículo Número 7º , Revista Número 6º. suprimir Recuperado de [Http://Www.Criminologia.Net/Pdf/Reic/Ano6-2008/A62008art7.Pdf](http://Www.Criminologia.Net/Pdf/Reic/Ano6-2008/A62008art7.Pdf)
<http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano6-2008/a62008art7.pdf> Consulta: 22 de marzo de 2017.
- Reglamento Interno de la Confraternidad Carcelaria de Colombia. Recuperado <http://www.pfcolombia.org/>

Requejo Rodríguez, Paloma (2008). Peligrosidad criminal y Constitución. *InDret. Revista para el Análisis del Derecho*, (3), pp. 1-23.

Ribotta, Silvina, suprimir coma (2012), . “ suprimir comillas Reglas Dde Brasilia Ssobre Aacceso Aa Lla Jjusticia Dde Llas Ppersonas Een Ccondición Dde Vvulnerabilidad. Vulnerabilidad, Ppobreza Yy Aacceso Aa Lla Jjusticia” suprimir comillas, . En suprimir Revista Electrónica Iberoamericana *Revista Electrónica Iberoamericana*, . Centro De Estudios Iberoamérica, Vol. suprimir 6 6, Núm. suprimir (2), Pp. 77-114.

Rifkin, Jeremy. (1997). *El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era*. Barcelona: Paidós.

Rivera Beiras, Iñaki (1992). *Cárcel y derechos humanos, un enfoque relativo a la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos*. Barcelona, España: Editorial María Jesús Bosch, S.L.

_____ (1996). *La cárcel en el sistema penal, un análisis estructural*, 2^a ed., Barcelona, España: Editorial María Jesús Bosch, S.L.

_____ (1997). *La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos, la construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría*. Barcelona: Editorial J.M. Bosch.

- (2005 a). La crisis del welfare y sus repercusiones en la cultura política europea. En *Política criminal y sistema penal viejas y nuevas racionalidades punitivas*, pp. 219-254. Barcelona: Anthropos.
- (2005 b). El populismo punitivo. Análisis de las reformas y contrarreformas del sistema penal en España (1995-2005). Barcelona: Observatorio del sistema penal y los derechos humanos. Universidad de Barcelona.
- (2009). *La cuestión carcelaria. Historia, epistemología, derecho y política penitenciaria*. (2 ed.). Buenos Aires: Editores Ddel Puerto.
- (2015, septiembre). Actuarialismo penitenciario. Su recepción en España. *Revista Crítica Penal y Poder*, (9), pp. 102-144
- Rocher, G. (1973). *Introducción a la sociología general*. Barcelona: Editorial Herder.
- Rodríguez, Emmanuel. (2003). *El gobierno imposible: Trabajo y fronteras en las metrópolis de la abundancia*, Madrid: Traficantes de Sueños.
- Rodríguez, G. (2011). El concepto de pena, ¿un aspecto incontrovertido en su teoría? Recuperado de www.somecrimnl.es.tl.

Rodríguez Avilés, Juan Antonio (2013). El Ordenamiento Jurídico Penitenciario Español Vigente: Carencias Y Disfunciones *El ordenamiento jurídico penitenciario español vigente: Carencias y disfunciones*. (Tesis Ddoctoral). En Derecho Penal Y Política Criminal, suprimir Universidad Dde Granada, Granada, España.

Rodríguez Magariñoz, Faustino Gudín y Nistal Burón, Javier (2015). *La historia de las penas. De Hamurabi a la cárcel electrónica*. Valencia: Tirant – Lo Blanch.

Rodríguez Mesa, M^a José. (2007). Las razones del Derecho Penal. Modelos de fundamentación y legitimación. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 09(10), pp.10:1-10:20. Recuperado de <http://criminnet.ugr.es/recpc/09/recpc09-10.pdf>.

Romeo Casabona, Carlos María 1986. *Peligrosidad y Derecho Penal Preventivo*. (s.l): Editorial Bosch.

Roxin, C. (1976). *Problemas básicos del Derecho Penal*. Madrid: Editorial Reus.

————— Arzt, G. y Tiedemann, K. (1989). *Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal*. Barcelona: Editorial Ariel.

Rubio Hernández, Herlinda Enríquez (2012). La prisión reseña histórica y conceptual. *Ciencia Jurídica*, 1(2), pp.11-28.

Rueda Soto, Marco Antonio (2010). *Función de ejecución de penas y medidas de seguridad*. Serie plan de formación de la rama judicial. Programa de formación especializada: área penal. Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura.

Ruiz Funes, Mariano (1953). La defensa social, el delito y el peligro. *Revista Mexicana de Sociología*, 15 (2). Recuperado de <http://www.jstor.org/stable/3537897>.

Ruiz Gutiérrez, Adriana María. (2016). *Derecho y violencia: de la teología política a la biopolítica*. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.

Ruiz, José Ignacio. (2009). Peligrosidad y reincidencia desde una perspectiva psicológica. En Ruiz, José Ignacio y Rodríguez, Luz Estella (Dirs.) y Meluk, Emilio (Coord.), *Estado del arte en psicología: aportes desde la psicología jurídica y clínica al contexto penitenciario*. Bogotá: s.e. Recuperado de <http://extension.upbbga.edu.co/inpec2009/Estudiosprimeraparte/areasdisciplinarias/psicologia.pdf>, consulta: 18 de noviembre de 2014.

Ruiz Vargas, Mario Antonio (2007). Primera aproximación hacia una pedagogía de la resocialización. *Nómaditas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, (16), pp. 151-160. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18101612>.

Sáenz, M. (2007). El discurso resocializador: hacia una nueva propuesta para el sistema penitenciario. *Revista de Ciencias Sociales*, 1(115), pp.125-136.

Salinas, C. (2000). *Curso de introducción a la sociología*. Recuperado de <http://es.scribd.com/doc/59254013/Carlos-Salinas-Curso-de-Sociologia>.

Sánchez Álvarez, Pilar (2013). *Religión y sociedad actual. Impronta de la religiosidad en la comunidad autónoma de Murcia* (tesis doctoral). Universidad de Murcia.

Saánchez Sandoval, Augusto Yy Gonzáález Vidaurri, Alicia. De La Criminología Crítica A La Sociología Jurídica En El Pensamiento De Alessandro Baratta. IN MEMORIAM. *De la criminología crítica a la sociología jurídica en el pensamiento de Alessandro Baratta. In memoriam*. Recuperado de http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/criminologia_critica.pdf

Santa Biblia (1960). *Biblia Reina Valera*. Sociedades Bíblicas de Colombia.

Santoro, Emilio, (2004). *Cárcel y social liberal*. Bogotá: Temis.

Santoro, Emilio (2008). Cárcel Y Sociedad Liberal, *Cárcel y sociedad liberal*. 1º Edición, suprimir Bogotá: Editorial Temis.

Sanz Morán, Ángel José (2007). El tratamiento del delincuente habitual. *Política Criminal*, 2(4), 1- 16. Recuperado de <http://www.politicacriminal.cl>.

Scime Salvador, Francisco (1999). *Criminología. Causas y cosas del delito*, Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas.

Serrano Gómez, Alfonso (s.f). *Ley de peligrosidad y rehabilitación social*. Recuperado de Dialnet-Ley Peligrosidadrehabilitación Social-2788013%20(1).Pdf.

Silva García, Germán (1999). Ideologías punitivas y tratamiento penitenciario en la justicia. *Revista Derecho del Estado*, (7), Recuperado de <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derest&page=issue&op=view&path%5B%5D=99>, consulta: 15 de abril de 2015.

————— (2010). Una mirada crítica al uso de la pena de prisión por los jueces. *Nuevos Paradigmas de las Ciencias Sociales Latinoamericanas*, 1(1), 59 - 86. Recuperado de <http://www.ilae.edu.co/IlaeRevista/VolNro1.php>

Silva Sánchez, Jesús María. (2001). *La expansión del Derecho Penal*, 2ª ed., Madrid: Civitas.

Soler, Sebastián (1929). *Exposición y crítica de la teoría del Estado peligroso*, 2ª ed., Buenos Aires, Argentina: Editorial Valerio Abeledo.

Sotomayor Acosta, Juan Oberto (1990). Crítica a la peligrosidad como fundamento y medida de la reacción penal frente al inimputable. *Nuevo Foro Penal*, (48), pp. 199-213.

Sozzo, Máximo. (2000). Seguridad urbana y tácticas de prevención del delito. En *Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal*, 6 (10), pp. 17 – 82.: Editorial AD-HOC S.R.L.

Sozzo, Máximo y otros (Comp.). (2016). Postneoliberalismo y Penalidad en América del Sur *Postneoliberalismo y penalidad en América del Sur*. 1º edición, suprimir Buenos Aires: editorial suprimir CLACSO.

Stratenwerth, G. (2000). *Derecho Penal. Parte general I. El hecho punible*. trads. Manuel Cando Meliá y Marcelo A. Sancinetti. (s.l.): Editorial Thomson.

Támara Barbosa, Manuel Javier (2008). *Direccionamiento del tratamiento penitenciario en Colombia: investigación científica como fundamento*. Recuperado de http://www.ascofapsi.org.co/documentos/2008/TRATAMIENTO_PENITENCIARIO_COLOMBIA.pdf , consulta: 16 de abril de 2015.

Téllez, A. (1996). Marco jurídico del sistema progresivo. ¡Todos merecemos otra oportunidad. Seamos partícipes de este compromiso! *Memorias del I Seminario Internacional sobre Sistema Progresivo*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

——— (1998). *Los sistemas penitenciarios y sus prisiones*. Madrid: Edisofer, SL. editorial.

Thomé, Henrique Inácio. (2004). *Victimización y cultura de la seguridad ciudadana en Europa* (tesis doctoral). Barcelona: Universidad de Barcelona.

Recuperado de

<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2866/TOL356.pdf;jsessionid=21C6EA8205B1AD79CA853B46F2835121.tdx1?sequence=1>, consulta: 22 de enero de 2016.

Tinedo F. Gladys (1989). La peligrosidad social en el discurso positivista. *Capítulo Criminológico*, (17), pp. 39-55.

Tocqueville, Alexis y De Beaumont, Gustave (2005). *Del Sistema Penitenciario en Estados Unidos y su Aplicación en Francia. Estudio Preliminar*, trad. y notas. De Ros, Juan Manuel y Sauquillo, Julian. Madrid: Editorial Tecnos.

Toro, María Cecilia (2013). La Pena De Prisión En Busca De Sentido. El Fin De La Pena Privativa De Libertad En Los Albores Del Siglo XXI, *La pena de prisión en busca de sentido. El fin de la pena privativa de libertad en los albores del siglo XXI*.

(Tesis Ddoctoral), . Facultad De Derecho. Universidad Dde Salamanca. , Salamanca, España.

Turner, Bryan S. (1997). *La religión y la teoría social. Una perspectiva materialista*. México: Fondo de Cultura Económica.

Unesco e Instituto de Educación de la Unesco, (UIE). [1994]. *La educación básica en los establecimientos penitenciarios*, ed. Peter Sutton. Recuperado de <http://www.unesco.org/education/uie/online/prisp/prisptit.html>, consulta: 15 de abril de 2015.

Universidad Nacional De Colombia e INPEC (2012) *Estados de arte de los procesos de evaluación y caracterización de la población interna*. Bogotá (s.e).

Valverde Pujante, Pedro (2016). Vínculos Actuales Entre Penas Privativas De Libertad Y Medidas De Seguridad, Al Amparo De Naciones Unidas Y El Artículo 25.2 De La C.E. *Vínculos actuales entre penas privativas de libertad y medidas de seguridad, al amparo de Naciones Unidas y el artículo 25.2 de la C.E.* (Tesis Ddoctoral). Escuela Internacional De Doctorado, Programa De Doctorado En Abogacía Y Práctica Jurídica, suprimir Universidad Católica Dde Murcia. , Murcia, España.

Vega Higuera, Martha Patricia (2010). *Cartilla manual para trámite de beneficios administrativos y judiciales, ejecución de condena, minutas y modelos*. Boyacá: Defensoría del Pueblo.

Velásquez Valenzuela, Javier E. (2014, julio). El origen del paradigma de riesgo, *Política criminal*, 9 (17), pp. 58-117.

Recuperado de http://www.politicacriminal.cl/Vol_09/n_17/Vol9N17A3.pdf

Villareal Castillo, Marta (2006). Método penitenciario de la Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados. *I Congreso de Justicia Restaurativa*. San José, Costa Rica: Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).

Von, B. (2002). *Esquema de Derecho Penal*. Buenos Aires, Argentina: Editorial El Foro.

Von, F. (1914). *Tratado de Derecho Penal*, t. 1, 18ª ed., alemana, trad. Quintiliano Saldaña, Madrid, España: Editorial Hijos de Reus.

_____ (1917). *Tratado de Derecho Penal*, t. 3, 20ª ed., alemana, trads. Luis Jiménez de Asúa y Quintiliano Saldaña, Madrid, España: Editorial Hijos de Reus,

_____ (1989). *Tratado de Derecho Penal*, 14ª ed., alemana, trads. Eugenio Raúl Zaffaroni e Irma Hagemeyer, Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi S.R.L.

Wacquant, Loic. (2000). *Las cárceles de la miseria*. Madrid: Alianza.

Entrevista a suprimir Wacquant, Loïc (2002). La Pprisión es una Iinstitución Ffuera de la Lley. Entrevista. Traducción de: Trad. María Victoria Leonardi. Tomado de la revista: Delito y sociedad: *Delito y Sociedad*. vol. 1, Núm. 17 (2002 Págs. 91 – 98. I(17), pp. 91-98.

_____ (Enero-junio, 2006). Castigar a los Pparias Uurbanos. Tomado de la revista: suprimir ANT Í P ODA, *Antípoda* N ° (2), | Enero – Junio, 2006. suprimir Págs. pp. 59 – 66.

_____ (2010). Castigar a los Pobres. El Gobierno Neoliberal de la Inseguridad Social *Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social*. Traducción: Trad. Margarita Polo, . Barcelona: Editorial Gedisa,

_____ (2010). Las Dos Caras de un Gueto: Ensayos Sobre Marginalización y Penalización *Las dos caras de un gueto: Ensayos sobre marginalización y penalización*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Welzel, H. (1970). *Derecho Penal alemán. Parte General*, 11ª ed., Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez. Chile: Editorial Jurídica de Chile.

Young, Jock (2001). Canibalismo Y Bulimia: Patrones De Control Social En La Modernidad Tardía. Publicado En La Revista Delito Y Sociedad, Vol. 1, Núm. 15 – 16.

Zaffaroni, Eugenio Raúl (2005). Las “clases peligrosas”: el fracaso de un discurso policial prepositivista. *Seqüência*, 26 (51), 141-168.

———, Alagia, A. y Slokar A. (2000). *Derecho Penal. Parte general*. Buenos Aires: Ediar

Zaffaroni Eugenio Raul, Alejandro Alagia Y Alejandro Slokar Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro (2000). Derecho Penal, Parte General. *Derecho penal. Parte general*. 1º Edición, suprimir Editorial EDIAR, Buenos Aires, Argentina Buenos Aires: Ediar.

Zipf, H. (1979). *Introducción a la política criminal*. Trad. Miguel Izquierdo Macías-Picavea. Madrid, España: Edersa.

Zysman Quirós, Diego. (2005). La crisis del welfare y sus repercusiones en la cultura política anglosajona. En I. Rivera. (Coord.), *Política criminal y sistema penal viejas y nuevas racionalidades punitivas*, pp.255-286. Barcelona: Anthropos.

——— (2006). ¿Nada funciona (Nothing Works) en el sistema penal? Recuerdos y reflexiones sobre el histórico artículo de Robert Martinson. En I. Rivera. (Coord.), *Contornos y pliegues del derecho: homenaje a Roberto Bergalli*, pp. 429-435. Barcelona: Anthropos.

JURISPRUDENCIA

Corte Constitucional (27 de noviembre de 1997). Sentencia de constitucionalidad.

Sentencia C- 616 de 1997. [M.P. Vladimiro Naranjo Mesa].

Corte Constitucional (28 de abril de 1998). Sentencia de tutela. Sentencia T- 153 de 1998.

[M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz].

Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad (30 de abril de 2002). Sentencia C – 312 de 2002. [M.P. Rodrigo Escobar Gil].

Corte Constitucional. Sentencia de Tutela. (20 de enero de 2005) Sentencia T-026 de 2005,

[M. P. Humberto Antonio Sierra Porto].

Corte Constitucional. Sentencia de tutela (28 de junio de 2013) Sentencia T – 388 de 2013.

[M.P. María Victoria Calle Correa].

Corte Constitucional. Sentencia de Tutela. (16 de diciembre de 2015) Sentencia T-762 de 2015, [M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado].

NORMATIVA

Constitución.

Constitución Política de Colombia (2009). Editores Palma Q. Novena Edición. Bogotá.

Instrumentos Jurídicos Internacionales.

Organización de las Naciones Unidas [ONU], (1955). *Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos*. Recuperado de

<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisoners.aspx>

Códigos.

Código Penitenciario y Carcelario [Código]. (1993). Legis

Leyes.

Congreso de Colombia (26 de mayo de 1994). Ley 133 de 1994. DO: 41.369. Recuperado de

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0133_1994.html

Congreso de Colombia, (29 de diciembre de 2001). Ley 720 de 2001. DO: 44.661.

Recuperado de

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0720_2001.html

CONPES.

CONPES 3277 de 2004.

CONPES 3412 de 2006

CONPES 3575 de 2009.

Decretos.

Decreto Ley 1405 de 1934.

Decreto Ley 1817 del 17 de julio de 1964.

Decreto 232 de 1998.

Decreto 1519 de 1998.

Resoluciones.

Resoluciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Resolución 7302 de 2005.

Resolución 8131 de 2010.

Resolución 2668 de 2010.

Resolución 001797 de 2011.

Convenios.

Convenio N° 003 del 17 de noviembre del 2011